

(RE)CONFIGURACIÓN DEL CAMPO POLÍTICO EN BOLIVIA

Balance y horizontes del ciclo electoral 2020-2021



Jan Souverein • José Luis Exeni Rodríguez (Coords.)

(Re)configuración del campo político en Bolivia

Balance y horizontes del ciclo electoral
2020-2021

**(Re)configuración
del campo político en Bolivia**
Balance y horizontes del ciclo electoral
2020-2021

Jan Souverein
José Luis Exeni Rodríguez (Coords.)

**FRIEDRICH
EBERT 
STIFTUNG**

Souverein, Jan y Exeni Rodríguez, José Luis (coords.)

(Re)configuración del campo político en Bolivia: Balance y horizontes del ciclo electoral 2020-2021; introducción por Jan Souverein y José Luis Exeni Rodríguez – La Paz: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Bolivia, 2022.

xx; 418 p. il.; 23 cm – (FES Bolivia)

ISBN 978-9917-605-32-4 (edición impresa)

1. Ciencias políticas - Bolivia; 2. Ciclo electoral 2020-2021 - Bolivia; 3. Ensayos I. Souverein, Jan y José Luis Exeni Rodríguez (coords.) II. Souverein, Jan y José Luis Exeni Rodríguez, introducción III. Salazar, Alejandro, ilustraciones IV. FES Bolivia, ed.

1ª edición, La Paz: FES Bolivia, enero de 2022
500 ejemplares

© FES-Bolivia

Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia (FES Bolivia)
Av. Hernando Siles, n° 5998, esq. calle 14, Obrajes
Teléfonos: (591-2) 2750005, Fax: (591-2) 2750090
Casilla 12960, La Paz, Bolivia
<https://bolivia.fes.de/>

Edición y gestión editorial: Víctor Orduna Sánchez

Diagramación: Marco Alberto Guerra

Readecuación de gráficos: Óscar Claros Troche

Ilustración de cubierta: Alejandro Salazar

Depósito legal: 4-1-6039-2021

Impresión: Plural editores

Impreso en el Estado Plurinacional de Bolivia

Las opiniones contenidas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de las y los autores y no necesariamente representan la postura institucional de la FES.

Este libro se publica bajo licencia Creative Commons:

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Esta licencia permite a otros descargar y compartir esta obra con otros siempre y cuando se atribuya la autoría y fuente de manera adecuada. No se permite, sin embargo, cambiar de forma alguna los contenidos ni crear obras derivadas o hacer un uso comercial.



Índice

Presentación	XI
Introducción: Andamios de la reconfiguración <i>Jan Souverein y José Luis Exeni Rodríguez</i>	XIII
i. El ciclo 2020-2021 desde la geografía electoral: Complejidad territorial y diversidad del voto <i>Armando Ortuño Yáñez</i>	1
ii. Nuevo espacio político en Bolivia: Entre lo nacional popular y lo oligárquico liberal <i>Fernando Mayorga</i>	47
iii. Cambios y situación del sistema de representación política en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas <i>María Teresa Zegada y Marcelo Arequipa Azurduy</i>	77
iv. Bolivia 2019-2021: De la épica ordinaria y el regreso al (¿nuevo?) orden <i>Manuel Canelas</i>	123
v. Análisis de la nueva configuración del campo político en Bolivia <i>Ricardo V. Paz Ballivián</i>	163
vi. Lo nacional popular y Santa Cruz: Perspectivas sobre el 7M <i>Manuel Suárez Ávila</i>	205

vii. La pirámide que tiembla, el muro que no termina de caerse: Realineamiento de los factores de poder y reconfiguración política en Tarija <i>Rodrigo Ayala Bluske</i>	239
viii. Cochabamba, voto dirigido y militante luego de la dramática crisis política estatal de 2019 y dos elecciones sucesivas: Ciclo electoral 2020-2021 <i>José De La Fuente Jeria</i> <i>y José Andrés De La Fuente Bernal</i>	289
ix. Lo indio, indígena y comunitario en la recomposición del campo político en Bolivia tras el ciclo electoral 2020-2021 <i>Elizabeth Huanca Coila</i>	335
Sobre las y los autores	413

Índice de cuadros, tablas, gráficos y mapas

i. El ciclo 2020-2021 desde la geografía electoral: Complejidad territorial y diversidad del voto

Gráfico 1	Padrón electoral 2020: Distribución según tipo de localidad	5
Gráfico 2	Votación según tipo de localidad (2020)	14
Gráfico 3	Composición del voto de partidos por tipo de localidad (2020)	18
Gráfico 4	Ciudades: Porcentaje de recintos según nivel de votación por el MAS (2020)	20
Gráfico 5	Elecciones nacionales y subnacionales (2009-2021): Porcentaje voto válido	27
Gráfico 6	Porcentaje de habitantes que cada partido gobernará desde algún Gobierno Municipal Autónomo (2021)	36
Gráfico 7	Número de alcaldías ganadas según porcentaje de votos obtenido por el partido vencedor (2010-2021)	39
Gráfico 8	Porcentaje de municipios según la cantidad de partidos con un nivel de votación competitivo para el puesto de alcalde	40
Gráfico 9	Cantidad de ciudadanos que eligieron un candidato a gobernador del MAS pero a un opositor para alcalde (2021)	41
Tabla 1	Número de circunscripciones uninominales (2005-2020)	25
Tabla 2	Las elecciones subnacionales en cifras (2010, 2015, 2021)	29
Tabla 3	Votación de elecciones para gobernador (2010-2021)	43
Mapa 1	Voto por municipio 2005	8
Mapa 2	Voto por municipio 2009	10
Mapa 3	Voto por municipio 2014	12
Mapa 4	Voto por municipio 2020	13

Mapa 5	Distribución territorial del voto por el MAS (2020)	15
Mapa 6	Distribución del voto por las fuerzas contrarias al MAS en 2020	16
Mapa 7	Voto por recintos en el área metropolitana de La Paz	22
Mapa 8	Voto por recintos en el área metropolitana de Cochabamba	22
Mapa 9	Voto por recintos en el área metropolitana de Santa Cruz	23
Mapa 10	Partidos ganadores de alcaldías, 2021	30
Mapa 11	Partido ganador en las elecciones de alcaldes 2010 (% de votación)	33
Mapa 12	Partido ganador en las elecciones de alcaldes 2015 (% de votación)	34
Mapa 13	Partido ganador en las elecciones de alcaldes 2021 (% de votación)	35

ii. Nuevo espacio político en Bolivia: Entre lo nacional popular y lo oligárquico liberal

Cuadro 1	Resultados de las elecciones generales 2020	58
Cuadro 2	Resultados de las elecciones generales 2005	74
Cuadro 3	Resultados de las elecciones generales 2009	75
Cuadro 4	Resultados de las elecciones generales 2014	75

iii. Cambios y situación del sistema de representación política en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas

Gráfico 1	Desempeño electoral de la primera, segunda y tercera organizaciones políticas entre elecciones generales, 2014-2020 (en %)	80
Gráfico 2	Desempeño electoral del bloque de oposición entre elecciones subnacionales (2015-2021) (%)	83
Tabla 1	Desempeño electoral del MAS-IPSP para la elección de Gobernador entre elecciones (2015-2021)	82

Índice		IX
Tabla 2	Relación entre padrón electoral e inscritos a las organizaciones políticas por departamento	88
Tabla 3	Militantes inscritos por organización política (2018)	89
Tabla 4	Resultados nacionales de participación por organización política en las primarias	91
vii. La pirámide que tiembla, el muro que no termina de caerse: Realineamiento de los factores de poder y reconfiguración política en Tarija		
Cuadro 1	Resultado de las elecciones para la Gobernación de Tarija, 2010	255
Cuadro 2	Resultado de las elecciones para la Gobernación de Tarija, 2015	257
Cuadro 3	Resultado de las elecciones para la Gobernación de Tarija, 2021	259
viii. Cochabamba, voto dirigido y militante luego de la dramática crisis política estatal de 2019 y dos elecciones sucesivas: Ciclo electoral 2020-2021		
Tabla 1	Elecciones generales 2019: Resultado nacional y Cochabamba	293
Tabla 2	Elecciones generales 2019: Resultados por departamento	295
Tabla 3	Elecciones generales 2020: Resultados nacionales	296
Tabla 4	Elecciones generales 2020: Resumen por departamento	298
Tabla 5	Participación en elecciones generales 2019 y 2020: Detalle por departamento	299
Tabla 6	Elecciones generales 2020: Resumen por región	302
Tabla 7	Elecciones generales 2020: Resultados en la Región Metropolitana de Cochabamba	305
Tabla 8	Elecciones generales 2020: Resultados por circunscripción uninominal (Cochabamba)	307

Tabla 9	Elecciones generales 2019 y 2020: Resultados por circunscripción uninominal (MAS y CC)	308
Tabla 10	Resultados elecciones para la Gobernación de Cochabamba (2021)	310
Tabla 11	Resultados elecciones para la Gobernación de Cochabamba: Resumen por región (2021)	311
Tabla 12	Elecciones para la Gobernación de Cochabamba (2021): Rendimiento electoral del MAS por región	313
Tabla 13	Elecciones municipales Cochabamba (2021): Rendimiento electoral del MAS por región	314
Tabla 14	Elecciones municipales Cochabamba (2021): Participación, votos válidos, blancos y nulos	315
Tabla 15	Elecciones municipales Cochabamba (2021): Resultados en municipios de la Región Metropolitana	317
Anexo	Elecciones municipales Cochabamba (2021): Resultados por regiones y municipios	331
ix. Lo indio, indígena y comunitario en la recomposición del campo político en Bolivia tras el ciclo electoral 2020-2021		
Cuadro 1	Lista de asambleístas electxs por circunscripción especial indígena (2021)	383

Presentación

En el período 2020-2021, Bolivia afrontó un complejo ciclo con dos procesos electorales que renovaron la legitimidad de autoridades y representantes electos en los niveles nacional, departamental, regional y municipal. Además de complejo, el ciclo fue prolongado: en rigor, se inició en octubre de 2018 con la convocatoria a elecciones primarias para binomios presidenciales y tuvo una coyuntura crítica con las fallidas elecciones generales del 2019. El antecedente es el referendo constitucional de febrero de 2016.

Los comicios presidenciales y legislativos del 2020 se realizaron en un contexto de crisis, polarización e incertidumbre. A la crisis político-institucional se sumó una inesperada y severa crisis sanitaria por efecto de la pandemia del Covid-19. La normal disputa de proyectos políticos se atizó con polarización no solo política, sino también social. El panorama era incierto, empezando por la postergación en la fecha de las elecciones. En ese contexto, las y los bolivianos concurrieron masivamente a las urnas y eligieron en democracia.

Apenas cinco meses después, en marzo del 2021, 122 organizaciones políticas y alianzas –nada menos– compitieron en las elecciones departamentales, regionales y municipales. Hubo también amplia participación y, en general, la ciudadanía decidió en un proceso plural, transparente y competitivo (con segunda vuelta para gobernadores en cuatro departamentos). Algunos estudios muestran una importante complejidad territorial y diversidad del voto. Se cerró así el ciclo electoral con mandatos para un nuevo período constitucional.

Más allá de los comicios en sí mismos y sus resultados, cuya legitimidad descansa también en el trabajo técnico e imparcial del Órgano Electoral, ¿cuál es el balance del ciclo electoral? ¿Y sus perspectivas? ¿Estamos ante la reconfiguración del campo político en Bolivia? ¿Con qué alcance? ¿Hacia qué rumbo? Estas y otras preguntas son abordadas en este libro colectivo por 11 autoras y autores que, desde diferentes miradas (incluidas tres regionales), analizan datos, hacen recuento, proponen interpretaciones, en fin, ensayan hipótesis. El resultado plural, de conjunto, es sustantivo, de referencia.

Como se señala en la introducción, esta obra continúa la reflexión iniciada en el libro *Nuevo mapa de actores en Bolivia: Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020)*, publicado por la FES a fines del 2020. En este sentido, el centro de esta nueva publicación no está en los actores, sino en los procesos, en el campo político como arena en disputa. Estamos seguros de que se trata de una importante contribución para seguir alentando la necesaria conversación pública en democracia. Queda en sus manos, pues, lectoras y lectores.

FES Bolivia

Introducción

Andamios de la reconfiguración

*Jan Souverein y José Luis Exeni Rodríguez*¹

En los años 2018 al 2021, Bolivia afrontó un largo y complejo ciclo electoral. El resultado puede valorarse de varias maneras. Sin duda, la evaluación más relevante es que, una vez más, la ciudadanía resolvió en las urnas, sin violencia y con alta participación, la disputa por el poder político luego de una inesperada coyuntura crítica. Otro aspecto de evaluación tiene que ver con la persistente disputa de sentidos –y relatos– en torno a la democracia. Destaca también el análisis del modo en que dicho ciclo electoral, cuyos antecedentes y resultados están en debate, incidió en la (re)configuración del campo político en el país. De esto último, con diferentes miradas, se ocupa este libro.

Si bien las elecciones de referencia corresponden al período 2020-2021, el ciclo se inició, en rigor, en octubre del 2018 con la convocatoria a unas inéditas y no competitivas elecciones primarias para binomios presidenciales (en todos los casos hubo candidaturas únicas), en el marco de la flamante Ley de Organizaciones Políticas. Luego vinieron los comicios generales de octubre del 2019, a la postre declarados “sin efecto legal”. Todo ello muy marcado por la activa contienda sobre la reelección del binomio presidencial

1 Director y coordinador de proyectos de la FES Bolivia, respectivamente.

del MAS-IPSP, que se remonta al referendo constitucional de febrero de 2016 cuyo resultado vinculante fue desconocido por el oficialismo con un polémico atajo constitucional (una sentencia, también vinculante). El desenlace fue la coyuntura crítica del 2019, que derivó en el derrocamiento y salida del país del expresidente Morales y la conformación de un gobierno transitorio.

En ese contexto de crisis, polarización e incertidumbre, un renovado Tribunal Supremo Electoral (TSE), con arreglo a una ley concertada por los principales actores políticos, convocó, en enero de 2020, a nuevas elecciones generales para presidente y vicepresidente del Estado, y para representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La jornada electoral debió ser el 3 de mayo. A medio camino, la crisis político-institucional se agravó con la pandemia del Covid-19, que generó una crisis sanitaria en el país con temprana declaratoria de cuarentena rígida. Así, en medio de una creciente polarización política y de una elevada incertidumbre, la votación se postergó primero para agosto y luego para septiembre, hasta que, finalmente, bajo presión popular, se realizó en octubre.

El resultado inequívoco de los comicios, con victoria del MAS-IPSP y su binomio Luis Arce y David Choquehuanca por mayoría absoluta y 27 puntos porcentuales por encima del segundo, otorgó al nuevo Gobierno un alto nivel de legitimidad. Un año después de la renuncia de Evo Morales, el MAS regresó a la Casa Grande del Pueblo y obtuvo la mayoría absoluta de los escaños en ambas cámaras legislativas, pero perdió la mayoría de dos tercios que tenía hasta ese momento. Por su parte, la oposición política quedó relegada a bancadas minoritarias de las dos alianzas que compitieron en el proceso electoral: Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Los otros dos partidos en competencia (Frente para la Victoria y PAN-BOL) no lograron ningún escaño y las dos fuerzas políticas que habían tenido presencia en la anterior legislatura, Movimiento Demócrata Social y Unidad Nacional, salieron de escena.

Con la posesión del binomio gobernante y de las y los asambleístas por un nuevo período constitucional, se habilitó la convocatoria inmediata, por parte del TSE, a las elecciones departamentales, regionales y municipales. La votación se realizó en marzo del 2021, con segundas vueltas en abril. A diferencia de los comicios nacionales, en los que finalmente compitieron solo cinco fuerzas políticas, en las elecciones subnacionales se registraron 122 organizaciones –nada menos–, entre partidos, agrupaciones ciudadanas, alianzas y organizaciones de naciones y pueblos indígena originario campesinos. La elección y sus resultados mostraron la complejidad territorial del voto, así como la diversidad y fragmentación de la representación política.

Hay varias lecturas e interpretaciones sobre los resultados de las elecciones generales y de las subnacionales y respecto a su horizonte en términos de continuidades y reconfiguraciones del campo político. En general, pese a la prolongada polarización política y a una todavía persistente crisis institucional, se valora la fortaleza del mecanismo electoral, asentada, en especial, en muy altos niveles de participación ciudadana (87% el 2020, 85% el 2021, en un contexto de pandemia). Con una concurrencia pacífica y ordenada, la vocación democrática del electorado boliviano reafirmó que el mandato de las urnas, al menos parcial y temporalmente, resuelve disputas de legitimidad, aunque no necesariamente conflictos de calle.

El ciclo electoral 2020-2021, uno de los más complejos de nuestra historia democrática, demuestra también la importancia estratégica de contar con una institucionalidad electoral fuerte, autónoma y con capacidad técnica para organizar y administrar elecciones, incluida la resolución de difíciles asuntos jurisdiccionales. Este blindaje institucional alcanza también al propio sistema electoral: es fundamental que los actores relevantes asuman, de manera inequívoca, la equidistancia del organismo electoral respecto a los contendientes políticos, así como el principio de “certeza

en las reglas”. Esto genera certidumbre acerca del proceso y contribuye a garantizar el reconocimiento del resultado de la votación, cualquiera que sea.

En ese marco, la culminación de un ciclo electoral, siempre intenso, marca un tiempo de balance: de las reglas de juego, de las organizaciones políticas, de la ciudadanía, de otros actores relevantes (como medios de comunicación y empresas encuestadoras), así como de las misiones de acompañamiento y observación electoral. Y en cuanto a sus efectos, nos permite preguntarnos por el estado de salud de la democracia, en general, de la representación política, en particular, y del sistema de partidos, en especial. Todo ello tiene que ver con cuestiones como la fortaleza/debilidad de los sujetos políticos, la renovación de liderazgos, la diversidad y el pluralismo, el debate público. Se espera, en definitiva, que los procesos democráticos, más aún si implican afrontar situaciones de crisis, deriven en aprendizajes, ejercicios deliberativos y, si acaso, reformas.

Un campo, nueve miradas

Esta obra da continuidad a la reflexión del *Nuevo mapa de actores en Bolivia: Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020)*, publicado por la FES a fines del año 2020. En ese libro, también colectivo, un grupo plural de estudiosos del proceso político boliviano ensayó miradas sobre el posicionamiento, desempeño y reconfiguración de nueve actores estratégicos en el marco de la coyuntura crítica de fines del 2019. Así, se trazó un paisaje con el análisis del MAS-IPSP, la oposición partidaria y no partidaria, las élites económicas, el campo mediático, la Policía, actores y factores externos, las iglesias y el espacio político en Internet. En este nuevo libro transitamos del mapa de actores a la (re)configuración del campo político como arena en disputa.

¿Cómo se desarrolló el ciclo electoral 2020-2021 en el marco de la crisis múltiple que se produjo tras los fallidos comicios de 2019? ¿Cuál fue el desempeño y rendimiento

de las organizaciones políticas y alianzas? ¿Qué lecturas de geografía y de comportamiento electoral pueden hacerse? ¿Cómo se ha reconfigurado, si acaso, el campo político en Bolivia como efecto de este complejo y prolongado ciclo? ¿Qué ha cambiado en la representación política y en el sistema de partidos? ¿Cómo se observa este proceso en y desde las regiones? Y, ¿qué implica para la participación de organizaciones y liderazgos indígena originario campesinos? Todas estas cuestiones, en clave de ensayos con análisis y datos, se abordan en la presente publicación.

Además de esta introducción, el libro contiene nueve capítulos que se construyen desde varias miradas, distintas regiones del país y diferentes afinidades políticas que expresan la vitalidad del análisis crítico, fundamentado y plural. Claro que, por su alcance y naturaleza, estos textos se sitúan en el contexto de procesos políticos en movimiento y disputa. Así, el análisis del ciclo que culmina contiene señales sobre el porvenir y anticipa, si acaso, el ciclo que vendrá.

En el primer capítulo, Armando Ortuño describe cambios y continuidades en el voto de las y los bolivianos, principalmente desde una perspectiva territorial, utilizando instrumentos propios de los estudios de geografía electoral, pero también considerando algunos rasgos de la sociología de los votantes. Este artículo se divide en dos partes: en la primera se analizan los resultados de las elecciones presidenciales 2020 y en la segunda se trata el comportamiento electoral en los comicios subnacionales 2021. El énfasis se pone en el análisis de los diversos escenarios territoriales del voto, así como en su complejidad, heterogeneidad y diversidad.

En el capítulo dos, Fernando Mayorga analiza la reconfiguración del campo político con la premisa de que, si bien se disiparon los riesgos de una crisis en el sistema de representación política, se han producido una serie de mutaciones en el lazo representativo, provocando una reconfiguración del espacio político debido a las transformaciones en el campo nacional popular y en aquel

campo que el autor denomina “oligárquico liberal”. Esto, no obstante, sin menoscabo de la democracia, en palabras del autor. Asimismo, este ensayo aborda y destaca la modificación en las relaciones entre oficialismo y oposición, las cuales transitan de una relación bipolar a una lógica multipolar, como efecto de una segmentación más compleja del espacio político.

En el tercer capítulo, elaborado de manera conjunta por María Teresa Zegada y Marcelo Arequipa, se realiza un balance sobre los cambios, continuidades y situación del sistema de representación política en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, así como del intenso y conflictivo proceso político-electoral del período 2019-2021. El texto analiza el desempeño de las principales fuerzas políticas durante el ciclo electoral y, en particular, traza un amplio recorrido comparativo en torno a la estructura orgánica, toma de decisiones y dirigencias de los partidos políticos, empezando con las elecciones primarias del 2019, a fin de identificar su funcionamiento, problemas y rumbos.

Los capítulos cuarto y quinto expresan miradas partidarias, desde el MAS-IPSP y CC –las dos fuerzas políticas más votadas en las elecciones generales de 2020– y permiten contrastar balances a cargo de dos protagonistas del ciclo electoral.

En el capítulo cuatro, luego de una reflexión sobre las interrupciones no democráticas de mandatos presidenciales en la región (incluidas las denuncias de fraude como recurso) y de la sucesión como desafío del ciclo progresista, Manuel Canelas propone un análisis de la crisis del 2019, del proceso electoral 2020 y de las elecciones subnacionales 2021, a partir del contexto y del desempeño e interacciones entre los actores relevantes: el MAS-IPSP y las oposiciones. Su mirada interpela la épica y problematiza el regreso al (nuevo) orden. Sobre esa base, plantea algunos “indicios del porvenir” en tanto tendencias y desafíos del nuevo escenario político.

En el capítulo cinco, por otra parte, Ricardo Paz expone la situación del sistema de representación política en Bolivia

luego del ciclo electoral y cómo se está recomponiendo el sistema de partidos políticos. Analiza también las relaciones entre el oficialismo y las oposiciones a nivel nacional y el panorama del sistema de representación política a nivel departamental y municipal (lo nuevo, lo viejo, los “jubilados”), en especial en torno a las agrupaciones ciudadanas y sus liderazgos. El texto reflexiona, asimismo, acerca de lo sucedido entre 2019 y 2020 y propone hallazgos, similitudes y diferencias en un análisis comparado del comportamiento electoral de los comicios de 2020 y 2021.

Los capítulos seis al ocho plantean miradas regionales (desde Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, respectivamente) y nos brindan valiosos elementos de análisis y sentires que suelen perderse en la mirada más bien nacional.

El sexto capítulo, a cargo de Manuel Suárez, postula seis hipótesis sobre lo nacional popular y Santa Cruz, así como algunas perspectivas en torno a las elecciones departamentales, regionales y municipales 2021 y la configuración del campo político cruceño. Su hipótesis principal es que se ratifica la correlación de fuerzas prevaleciente en Bolivia desde 2005: un empate polarizador (no estructural) entre las fuerzas del MAS y la Bolivia opositora, básicamente asentada en Santa Cruz. Suárez argumenta que la tradición nacional popular es una base y escenario suficiente para buscar un entendimiento estable entre las dos fuerzas polarizadas del escenario boliviano.

En el capítulo siete, Rodrigo Ayala se ocupa en detalle del realineamiento de los factores de poder y la reconfiguración política en Tarija. Recurre, para ello, a dos metáforas: la pirámide –que describe la manera en que se ordena la estructura de poder tradicional en el departamento– y el muro, que ilustra el discurso político utilizado por la élite local como herramienta para legitimar y defender dicha estructura en los últimos 20 años. En ese marco, considerando factores estructurales e institucionales, Ayala analiza la evolución de los principales actores políticos en Tarija, así como la

forma en que estos se han (re)posicionado a la luz del ciclo electoral 2019-2021.

En el octavo capítulo, escrito a cuatro manos entre José De La Fuente Jeria y José Andrés De La Fuente Bernal, se expone, con amplio despliegue de datos, el desempeño de las organizaciones políticas y el comportamiento de los votantes en Cochabamba en las elecciones generales 2020 y en las elecciones subnacionales 2021. Partiendo de la crisis político-institucional de fines del 2019, el análisis muestra la especificidad de la (re)configuración del campo político departamental en el marco del contexto nacional. Sobre esa base, los autores presentan insumos para la agenda política en Cochabamba considerando algunas perspectivas y alternativas postcrisis.

Por último, el capítulo nueve, escrito por Elizabeth Huanca, traza un valioso recorrido en torno a lo indio, indígena y comunitario en la recomposición del campo político boliviano tras el ciclo electoral 2020-2021. El texto parte de un recuento del proceso de constitución y restitución del sujeto político indígena originario campesino (IOC) en la vida democrática del país, y su situación en el Estado Plurinacional. A continuación, analiza la participación de organizaciones y de liderazgos indios e indígenas en los recientes procesos electorales, y concluye con una reflexión sobre el sujeto IOC y el campo político en disputa, considerando una historia larga y con agravios.

Queda entonces a su disposición y consideración este libro colectivo en torno a la (re)configuración y rumbo del campo político en Bolivia. Estamos seguros de que cada uno de los textos y el conjunto de ellos serán un valioso insumo para alentar el debate plural y la conversación pública en democracia.

Noviembre de 2021

El ciclo 2020-2021 desde la geografía electoral: Complejidad territorial y diversidad del voto

Armando Ortuño Yáñez

El ciclo electoral 2020-2021 ha sido uno de los más interesantes y complejos de la reciente historia política boliviana. Las elecciones presidenciales de octubre de 2020 y los comicios subnacionales de abril de 2021 se produjeron en medio de un país en crisis y con grandes expectativas sobre los resultados. Después de más de un decenio de predominio electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), existían elementos del contexto que sugerían que podía producirse un realineamiento significativo de las preferencias de los electores.

Como en otros momentos de la historia del país, el voto de los ciudadanos fue dilucidando varios de los nudos del agudo conflicto político que se desató a fines del 2019. Como se verá más adelante, el comportamiento de los electores en estos procesos reflejó la persistencia de algunas significativas continuidades, pero también definió algunas rupturas no menores. No fue un tiempo de un gran realineamiento electoral y político, como el que sucedió entre 2003 y 2006, pero se consolidaron algunos factores de cambio que hay que seguir observando.

El presente texto intenta describir esos procesos de cambio y continuidad en el voto de las y los bolivianos principalmente desde una perspectiva territorial, utilizando instrumentos de los estudios de geografía electoral, pero, igualmente, describiendo algunos rasgos de la sociología de los votantes.

En la primera parte, se analizan los resultados de las elecciones presidenciales de octubre de 2020, enfatizando los diversos escenarios territoriales del voto. Este es, posiblemente, el ámbito en el cual hay mayores continuidades: el MAS sigue siendo predominante, aunque algo erosionado con relación a las dos anteriores elecciones de ese tipo, sostenido por votaciones elevadas en las zonas rurales y populares urbanas del país.

Los cambios en el comportamiento electoral aparecieron en los comicios subnacionales de abril de 2021, en los que se evidenció un escenario de mayor competencia entre el MAS y las diversas y noveles fuerzas políticas alternativas que se organizaron para ese proceso, así como una elevada fragmentación de las preferencias y una gran autonomía de los electores con relación a sus lealtades partidarias tradicionales.

Si hay una idea que deja este panorama postelectoral es la necesidad de entender la gran heterogeneidad de escenarios electorales que existen en el territorio y la tendencia hacia una creciente autonomía de los votantes. Con todos sus problemas, el voto sigue siendo la clave de la gobernabilidad del país; un momento de ejercicio de derechos y autonomía de los ciudadanos y un espacio privilegiado de la diversidad y la pluralidad. No hay que olvidarlo.

I. LAS ELECCIONES GENERALES 2020 DESDE LA GEOGRAFÍA ELECTORAL

El voto se ejerce siempre en un determinado territorio, en el cual usualmente el elector realiza sus principales actividades y desarrolla su proyecto de vida. Su barrio, su comunidad o el lugar en el que vive tienen mucha relación con sus condiciones socioeconómicas, cultura, estilo de vida y, por supuesto, con sus opiniones e identidad política.

Así pues, los comportamientos y preferencias electorales se asocian a diferentes territorialidades. Estudiando la

concentración o dispersión geográfica del voto se obtiene un panorama más completo de la diversidad de opiniones y adhesiones políticas que coexisten en el país. De esa manera, es posible también relacionar esas distribuciones de las preferencias electorales con los rasgos socioeconómicos y culturales de los territorios.

Esta perspectiva puede, de igual manera, ayudar a entender mejor los cambios y evoluciones de los comportamientos políticos, observando las variaciones en el tiempo de la distribución geográfica del voto por diferentes fuerzas políticas y explorando su vínculo con otras transformaciones sociales y demográficas que poco a poco van reconfigurando los territorios.

En Bolivia, la referencia ineludible de esta aproximación son los estudios de Salvador Romero Ballivián¹ que describieron las evoluciones de la geografía electoral desde el retorno de la democracia hasta inicios del siglo XXI. En esos trabajos se proponen hipótesis interesantes sobre ciertas grandes continuidades en la manera como se reparten las preferencias electorales de los bolivianos en el territorio, pero, de igual manera, nos ilustran acerca de los fuertes cambios que experimentaron en ese periodo.

Las elecciones del 18 de octubre de 2020 son interesantes porque completan un largo ciclo iniciado con los comicios de 2005, en los que triunfó Evo Morales, el candidato del MAS, con el más elevado nivel de votación del periodo democrático, hasta ese momento. En estos casi 16 años transcurridos hay muchas tendencias electorales que no han variado y otras que se han ido modificando. Explorar esos cambios y continuidades es el objetivo de este ensayo.

1 Romero Ballivián publicó *Geografía electoral de Bolivia* (La Paz: Fundemos-Hans Seidel Stiftung, 1998), que fue la primera investigación profunda en Bolivia sobre el comportamiento electoral a partir de una metodología basada en la geografía electoral y la sociología política.

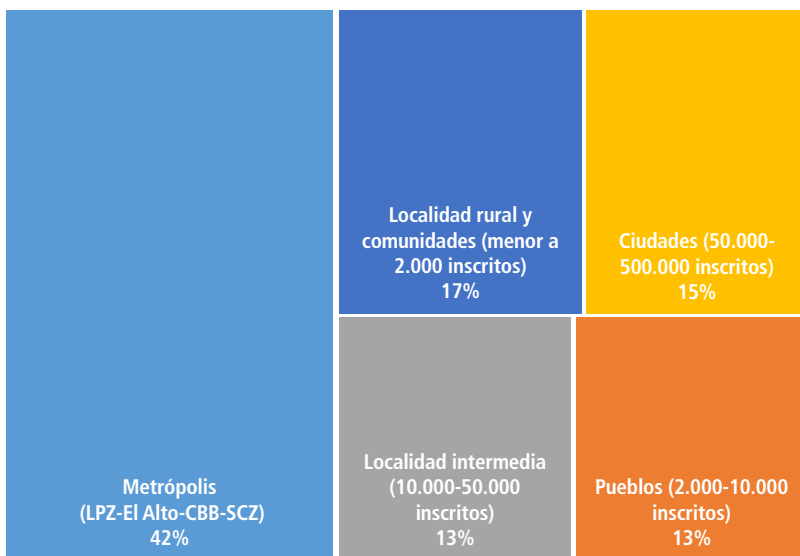
Más allá de la polaridad urbano-rural: la complejidad territorial del voto

Las opiniones políticas de los ciudadanos no están desconectadas de estos cambios urbanísticos y sociales; interactúan entre sí constantemente, al punto que los rasgos de ciertos contextos locales terminan siendo determinantes para entender el sentido del voto de las personas que los habitan. Desde los primeros estudios de geografía electoral, las variaciones en las opciones electorales de los bolivianos y bolivianas han estado asociadas a dos grandes grupos de factores geográficos:

- El grado de urbanización de los territorios y localidades, proceso que se ha ido complejizando en los últimos dos decenios a medida que las fronteras entre ciudades capitales y zonas rurales se fueron diluyendo. Hoy en día, el territorio boliviano está compuesto por una diversidad de tipos de aglomeraciones de población y de formas de ocupación sociocultural en las que se combinan, de forma ecléctica, lógicas propias de la cultura urbana tradicional con otras más bien de origen rural.
- La pertenencia a ciertas regiones sociolingüísticas o con culturas regionales fuertes que tienen una larga historia de ocupación territorial y que han sido protagonistas de conflictos por su predominancia política o económica en la nación. Es el caso, por ejemplo, de todas las territorialidades indígenas que le han aportado una identidad muy específica a Bolivia y que tienen una historia de luchas y reivindicaciones por sus derechos y de participación en la construcción estatal. De igual manera, son importantes las particularidades de ciertas regiones, como Santa Cruz, la Amazonía o el Chaco, en las que se han desarrollado identidades regionales muy fuertes que han motivado reclamos y reivindicaciones por mayor autonomía frente al centro estatal.

Como se verá más adelante, estas especificidades ligadas al grado de urbanización o a la pertenencia a ciertas regiones van a estar muy correlacionadas con ciertos comportamientos políticos particulares de las poblaciones que las habitan.

Gráfico 1 Padrón electoral 2020: Distribución según tipo de localidad



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Desde inicios del siglo XXI, Bolivia ha experimentado importantes transformaciones tanto en el grado de urbanización como en la adscripción regional. *Grosso modo*, el país se ha ido urbanizando y las migraciones internas han aumentado significativamente el peso demográfico de las regiones del este del país.

Es evidente que la proporción de electores inscritos en el padrón que viven en las tres áreas metropolitanas y en las seis otras grandes ciudades capitales ha aumentado en esos 20 años, pero el panorama en el resto del territorio se ha complejizado. Las localidades intermedias son las que más se han expandido, albergando al 17% de la población

en edad de votar. Tampoco se puede subvalorar el peso demográfico –y, por tanto, electoral– que aún conservan las aglomeraciones más pequeñas (pueblos) y las comunidades rurales dispersas: siguen concentrando el 30% del padrón electoral (gráfico 1).

Por otra parte –y a diferencia de otros países latinoamericanos– Bolivia presenta la particularidad de no tener una sola gran metrópoli que concentre la mayor parte de su población urbana, de los recursos económicos y del poder político; cuenta, sin embargo, con tres grandes aglomeraciones urbanas (el denominado “eje central”) que son, cada una de ellas, cabeza de las grandes regiones ecológicas del país: el complejo urbano La Paz-El Alto en el altiplano, el área metropolitana de Cochabamba en los valles interandinos y el conglomerado alrededor de Santa Cruz de la Sierra en los llanos tropicales. En síntesis, se trata de un panorama territorial bastante complejo y diversificado.

Una visión municipal: cambios y continuidades en la geografía del voto (2005-2020)

La historia de las dinámicas territoriales del comportamiento electoral en Bolivia entre 2005 y 2020 ha estado muy influida por la expansión y contracción del voto por el MAS en las diferentes coyunturas políticas de este periodo. Los mapas municipales expresan, en buena medida, la capacidad de esa fuerza política para ampliar su espacio político e intentar construir una hegemonía en los territorios, pero también expresan las frustraciones y retrocesos que ha experimentado en ese trajín.

Esas dinámicas han tenido lugar sobre la base de una geografía electoral previa, cuyos principales rasgos ya fueron identificados por Romero Ballivián.² Este autor

2 Salvador Romero Ballivián, *Geografía electoral de Bolivia*, La Paz: Fundemos - Hans Seidel Stiftung, 1998.

había advertido una clara diferenciación a lo largo de los años 80 y 90 del siglo XX entre dos grandes orientaciones político-electorales que se disputaban al apoyo de los votantes: aquellas que expresaban “el orden” y las que reivindicaban “la protesta”.

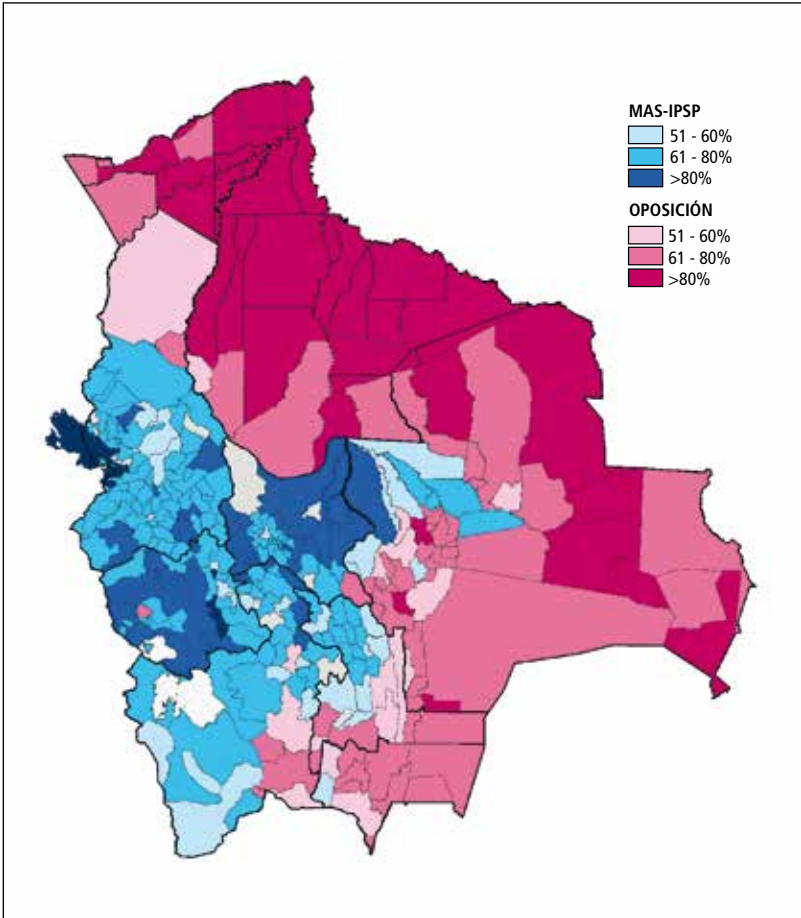
Hay que precisar que estas corrientes no se correspondían con alguna fuerza política en particular; estaban, más bien, asociadas a diversos partidos y movimientos políticos que conformaron un sistema político altamente pluralista y fragmentado característico de ese periodo. Incluso, algunos de esos partidos fueron evolucionando en sus posiciones, pasando de ser, por ejemplo, representantes del “voto de protesta” a defender el *statu quo* varios años después.

De manera esquemática, a fines del siglo XX, el “voto del orden” se concentraba en los partidos de derecha y centro que conformaron las coaliciones que gobernaron Bolivia entre 1985 y 2005: MNR, ADN, MIR y otras pequeñas organizaciones de centro y derecha. El “voto de protesta” se canalizaba en las listas de izquierda tradicional (PCB, PS-1 o IU), en los partidos neopopulistas, como Condepa y UCS, y en los nuevos movimientos de izquierda que aparecieron en esos años (MIP y MAS).

Romero encontró que el “voto del orden” tenía una presencia geográfica dominante y bastante consolidada en el norte amazónico, el este y el sur del país, específicamente en las ciudades grandes y zonas rurales de Santa Cruz, Beni y Pando, en el área urbana de Tarija, en el Chaco y en algunas regiones rurales del sur (en torno al valle tarijeño, en los Cintis chuquisaqueños y el sur potosino) y municipios del occidente del Oruro.

En cambio, el voto de protesta se concentraba en las zonas rurales aymaras del altiplano paceño y quechuas de los valles interandinos cochabambinos, potosinos y chuquisaqueños, en las localidades mineras de Oruro y el Norte de Potosí, y en las regiones tropicales con alta migración interna en Cochabamba (Chapare) y La Paz (Yungas).

Mapa 1 Voto por municipio 2005



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El resto de los territorios, principalmente las grandes ciudades del oeste altiplánico y de los valles, y las restantes zonas rurales eran lugares de fuerte competición entre esas dos tendencias.

En las elecciones de 2005, que fueron ganadas sorpresivamente por Evo Morales, se produjeron dos quiebres en las tendencias anteriormente descritas: la gran mayoría del “voto de protesta” se concentró en el MAS,

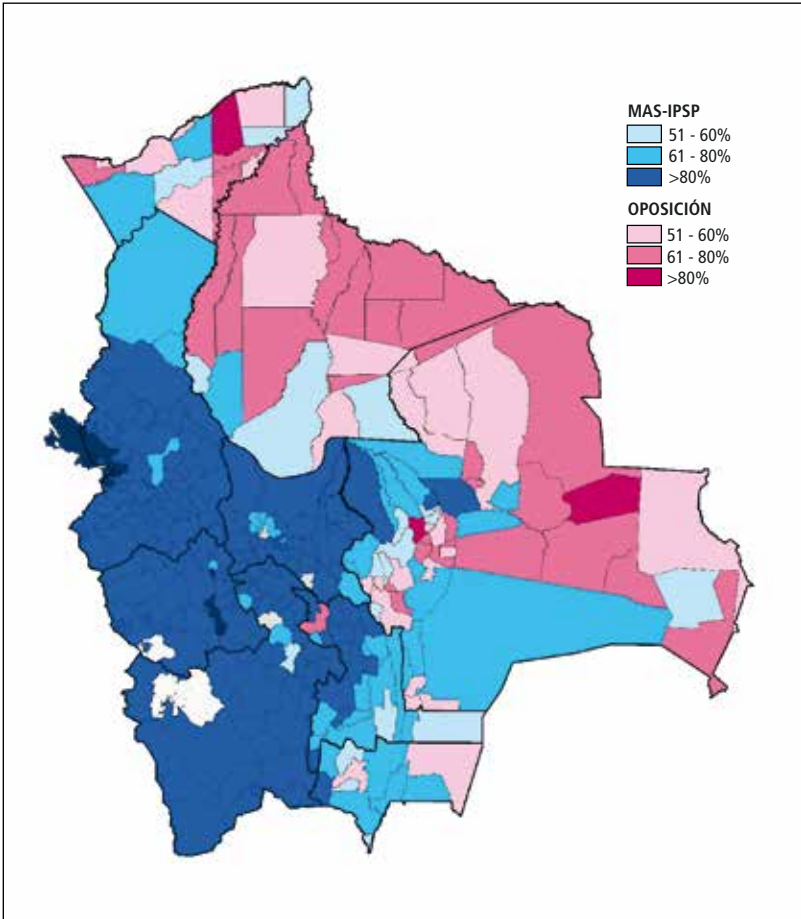
mientras que el “voto del orden” siguió dividido en nuevas fuerzas políticas (Podemos y Unidad Nacional), mientras que los partidos tradicionales desaparecían u obtenían resultados marginales.

Desde la perspectiva geográfica, las preferencias masistas se desplegaron en los territorios que tenían ya una larga historia de voto por posiciones críticas y de protesta al orden político establecido: las regiones altiplánicas, los valles y las zonas de expansión agrícola del oriente (Chapare, Yungas y Norte de Santa Cruz), aunque con intensidades variables: muy fuerte en el Chapare y en algunas zonas aymaras de La Paz y Oruro, más débil en el resto de las áreas rurales. Es también interesante notar que ese partido consiguió, además, triunfos importantes en la mayoría de las ciudades del occidente y de los valles interandinos; en ese aspecto, mejoró el desempeño que solían conseguir los partidos contestatarios que le antecedieron (mapa 1).

Por su parte, las fuerzas de defensa del *statu quo* (Podemos y UN) lograron resultados muy positivos en los lugares donde históricamente habían sido siempre fuertes: las zonas urbanas y rurales del norte amazónico y Santa Cruz, el Chaco, la ciudad de Tarija y sus alrededores, y algunos municipios rurales del sur de Potosí y Chuquisaca, como los Cintis (mapa 1).

En 2009, la transformación del mapa electoral municipal iniciada en 2005 se fue completando: el MAS consolidó su presencia mayoritaria e intensa en casi todas las zonas rurales del occidente y del sur del país, y fue aumentando su presencia en territorios campesinos del oriente y el norte amazónico. Las oposiciones a esa fuerza consiguieron mayorías únicamente en algunos municipios del Chaco y en los tradicionales bastiones opositores urbanos y rurales en Santa Cruz y Beni. La única variación a esas tendencias gruesas fue la transformación de la ciudad de Sucre en una plaza fuerte opositora (mapa 2).

Mapa 2 Voto por municipio 2009



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En 2014, las tendencias que habían ido apareciendo cinco años atrás terminaron por consolidarse con gran intensidad y ratificaron rupturas importantes con la geografía electoral prevaleciente a inicios del siglo XXI: se registró una notable expansión del voto por el MAS en casi todas las regiones rurales de Santa Cruz, el Chaco, Beni y Pando, obteniendo esa fuerza mayorías claras en varias de ellas, después de muchos decenios de predominio de los partidos conservadores

en esas tierras. En la gran mayoría de territorios donde el MAS se había convertido, ya desde el 2005, en el heredero de una larga tradición de preferencias por la izquierda y las reivindicaciones populares, simplemente se consolidó esa tendencia.

Los de 2014 fueron unos comicios en los que la hegemonía electoral del masismo alcanzó su apogeo, no solo por el nivel de votación que obtuvo (61,36%, algo menor al 64,22% del 2009), sino porque consiguió ser mayoritario en todos los departamentos, acumulando un enorme poder y presencia territorial. Quizás el único matiz a este logro histórico fue cierta disminución de su votación con relación a 2009 en algunas zonas rurales del altiplano y los valles, específicamente en el oeste de Oruro, en el norte altiplánico de La Paz y en el este de Chuquisaca, donde pasó de obtener niveles de votación superiores al 80% a promedios cercanos al 60% (mapa 3).

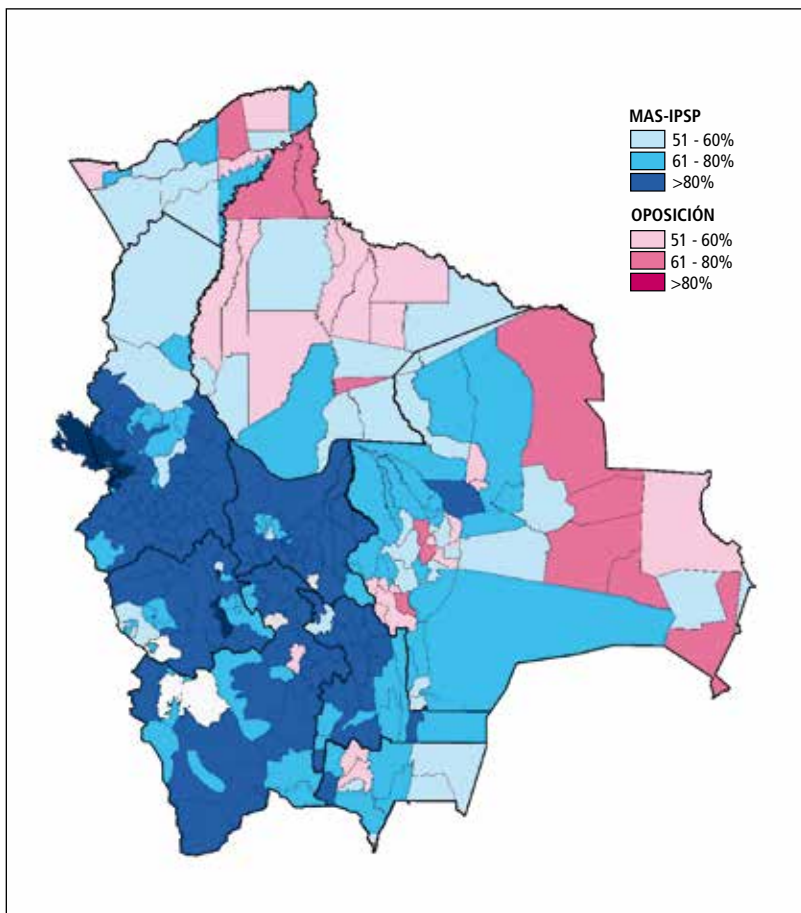
Frente a ese panorama de predominio azul, las representaciones de las oposiciones, que seguían participando divididas, se atrincheraron en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Potosí y Tarija, y en algunas aglomeraciones urbanas intermedias del este y del norte amazónico, mientras que su presencia en el resto del país urbano menguaba y, particularmente, se reducía de manera alarmante en casi todas las zonas rurales, al punto de resultar marginal incluso en lugares en los que históricamente siempre tuvieron influencia.

Las elecciones del 2020 pueden ser calificadas de transitorias a la vista de la evolución de la geografía electoral a partir del 2005, ya que reflejan tendencias que ratifican algunas continuidades, pero también empiezan a mostrar algunos cambios relevantes.

Por una parte, el núcleo histórico de electores del MAS en los municipios rurales altiplánicos, de los valles andinos y de las áreas de expansión agrícola en tierras bajas ratificaron masivamente sus preferencias por ese partido, al igual que

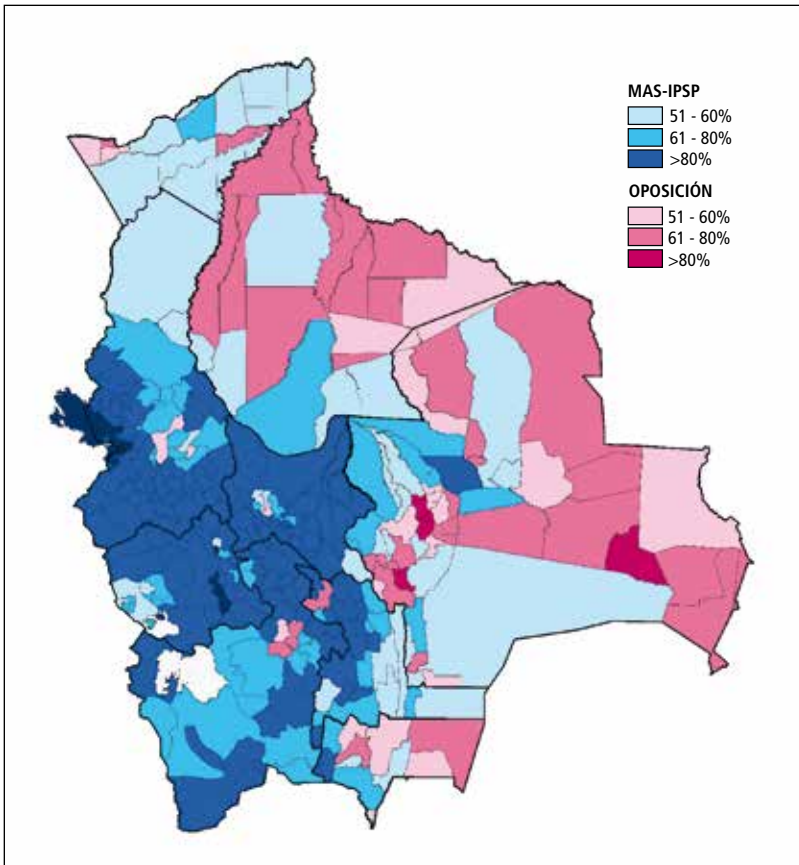
los votantes de las ciudades de El Alto, Oruro y Cochabamba. En esos territorios está el corazón del electorado del actual oficialismo. Por otra parte, ese partido ha preservado mayorías modestas en muchas otras regiones hacia las que había logrado expandirse en los comicios de 2009 y 2014, pero sin atraer a nuevos electores. Eso ha sucedido, por ejemplo, en el norte amazónico y en algunos municipios rurales de Santa Cruz.

Mapa 3 Voto por municipio 2014



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Mapa 4 Voto por municipio 2020



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para las fuerzas opositoras al MAS, el 2020 fue un año en el que lograron consolidar sus plazas fuertes urbanas en el oriente y el sur del país, obteniendo adicionalmente una victoria significativa en el municipio de La Paz, la primera en la historia de los comicios nacionales en esa emblemática circunscripción, y un casi empate en la ciudad de Cochabamba. Han logrado, de igual manera, detener el crecimiento electoral del MAS en muchos municipios rurales cruceños, benianos, tarijeños y chaqueños, pero sin lograr aún recuperarlos a su favor (mapa 4).

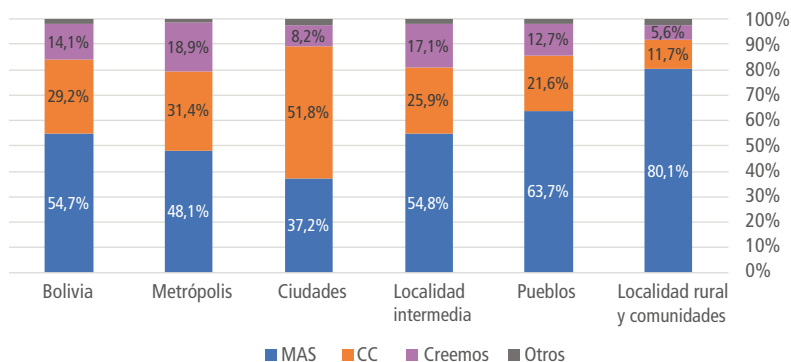
Como puede verse, esta perspectiva histórica del voto a nivel municipal plantea incógnitas para el futuro. El fuerte crecimiento electoral del MAS en todos los territorios parece haber cesado, pero sin que eso haya estado acompañado de un debilitamiento en sus zonas de hegemonía ni de un retroceso significativo en los lugares en los que logró expandirse en 2009 y 2014. Su mayor problema parece ser la aparición de un voto urbano que le está resultando muy reacto desde hace ya varias elecciones, sobre todo en el sur y el oriente del país.

Los opositores, por su parte, parecen estar logrando consolidar espacios, principalmente urbanos y metropolitanos, con votantes bastante fieles y motivados, que se constituyen en su base electoral más sólida. No obstante, la oposición continúa adoleciendo de una débil presencia territorial en seis departamentos que concentran a la mayoría de la población y es marginal en la gran mayoría de municipios rurales del país.

El voto por el MAS en el 2020

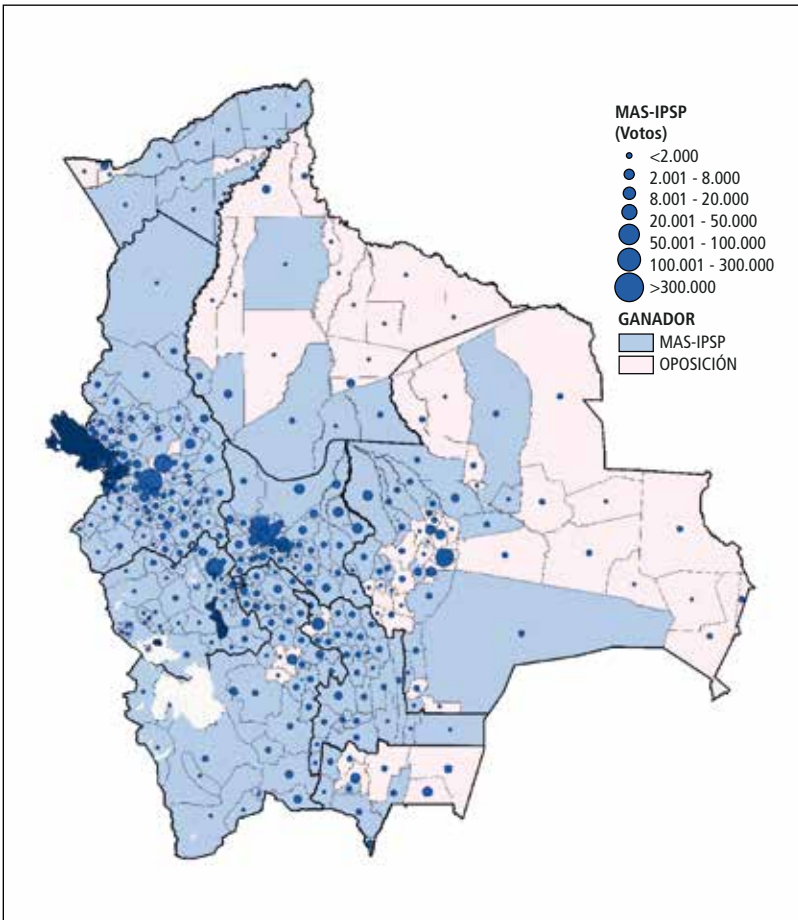
Con frecuencia se simplifica el comportamiento electoral de las y los bolivianos a partir del contraste entre ciudades capitales y zonas rurales; las primeras supuestamente afines a las oposiciones y las otras al MAS. Sin embargo, la distribución territorial de las preferencias electorales por al actual oficialismo es mucho más compleja que esa simplificación.

Gráfico 2 Votación según tipo de localidad (2020)



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Mapa 5 Distribución territorial del voto por el MAS (2020)

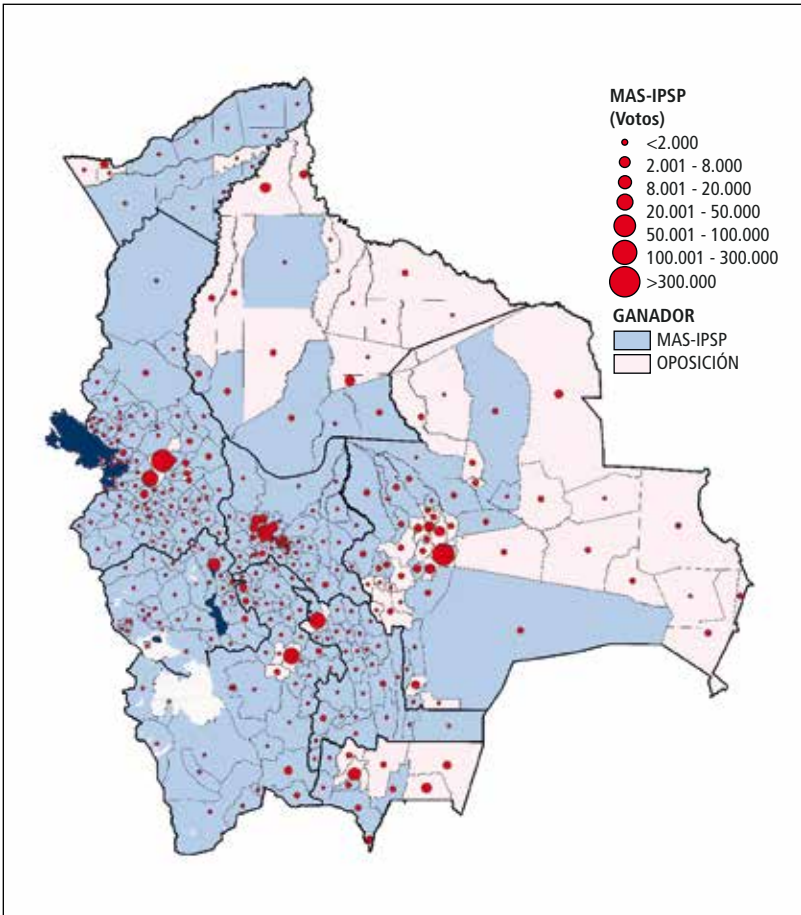


Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El voto por el MAS presenta intensidades diferentes según los diversos tipos de aglomeración y ocupación territorial que componen la geografía del país. Se pueden observar dos situaciones extremas: las localidades rurales más pequeñas y dispersas en las que esa sigla obtiene contundentes victorias (80% del total) y, en el otro extremo, las ciudades capitales

que no pertenecen al “eje metropolitano”,³ en las que logra un 37% de apoyo (gráfico 2).

Mapa 6 Distribución del voto por las fuerzas contrarias al MAS en 2020



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

3 Conformado por las ciudades de La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

En medio de esos extremos, las metrópolis del eje y las ciudades intermedias aparecen bastante disputadas: si se ubican en el sur o el oriente tienden a favorecer a las oposiciones, mientras que más hacia el occidente suelen apoyar con más fuerza al MAS.

Ciertamente, la geografía electoral del MAS tiene uno de sus pilares en su significativa presencia territorial en casi todos los municipios y en un nivel de apoyo muy elevado en las zonas rurales dispersas y en los pueblos pequeños, pero no podría lograr sus mayorías nacionales sin el importante aporte electoral de los centros urbanos metropolitanos y de las localidades intermedias, principalmente en el occidente y los valles. En las ciudades del sur y en la gran metrópoli cruceña es donde tiene mayor debilidad (mapas 5 y 6).

El voto por las oposiciones al MAS en el 2020

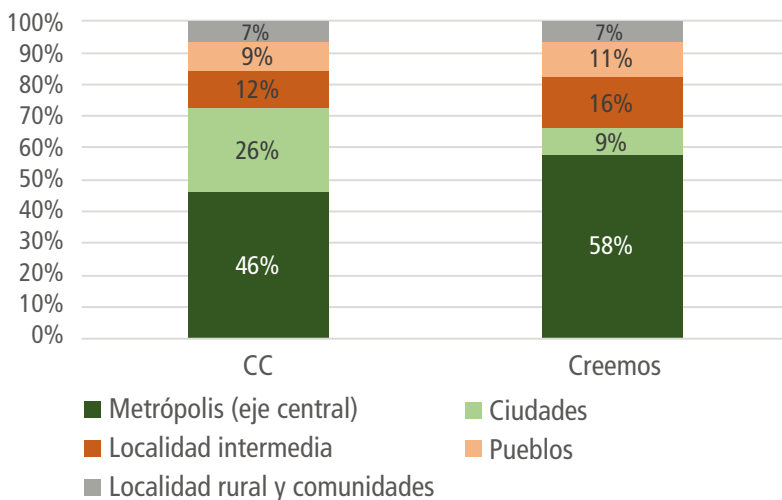
Pese a la victoria de Luis Arce en los recientes comicios, el desempeño agregado de los partidos contrarios al MAS ha sido el mejor desde el 2005, con el 45% de la preferencia a nivel nacional. Ese resultado se obtiene sumando los votos de Comunidad Ciudadana, Creemos y otras fuerzas menores. Esta es una de las particularidades de estas fuerzas: desde el 2005 se han presentado siempre divididas y con siglas y coaliciones que varían en cada elección.

Como se dijo anteriormente, los lugares en los que los opositores tienen mayor presencia son aquellos en los que históricamente las corrientes conservadoras han sido fuertes: el arco territorial que se inicia en las localidades del norte amazónico, continúa por las llanuras del Beni y Santa Cruz, y termina en el Chaco y los valles tarijeños. Sin embargo, esta fortaleza se ha visto erosionada, sobre todo, en las áreas rurales de esa medialuna, debido a una mayor presencia electoral del MAS, la cual pareciera estar siendo favorecida por el crecimiento demográfico de esas localidades por efecto de las migraciones internas.

Desde la perspectiva del tipo de aglomeración, estas fuerzas logran su mejor desempeño en las ciudades capitales fuera del eje (63% de votos) y en las tres metrópolis (52%). Al contrario, sus resultados son mediocres en las localidades intermedias y pueblos, y marginales en las rurales y comunidades (20%) (gráfico 2).

Eso hace que, numéricamente, los electores de esas corrientes sean predominantemente urbanos (70% del total de sus votos se obtienen en los diez municipios capital), como se puede observar en el mapa 6. Su presencia es muy minoritaria en casi todos los territorios rurales y apenas aparecen con algo más de fuerza en varias localidades intermedias y pueblos del sur, el oriente y el norte amazónico.

Gráfico 3 Composición del voto de partidos por tipo de localidad (2020)



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Hay también notables diferencias en la concentración geográfica de los electores de los varios partidos que componen este bloque: Creemos ha obtenido el 91% de su apoyo en los departamentos de Santa Cruz y Beni, y el 67% de sus electores vive en ciudades grandes. Mientras tanto, Comunidad

Ciudadana tiene una presencia bastante más equilibrada en todo el territorio, habiendo logrado una votación nada desdeñable en Santa Cruz (16%). Este partido es también una fuerza muy citadina en su composición electoral (72% de sus votos son urbanos) (gráfico 3).

El gran reto de este bloque pareciera ser la ampliación de su presencia en todo el territorio, bastante limitada, actualmente, en los municipios y localidades menos urbanizadas. Asimismo, este bloque precisa ver la manera de ensamblar a los diversos electorados que coexisten en su seno, considerando las sensibilidades regionales de unos y otros la cuales, aparentemente, son muy relevantes para el sector.

El voto al interior de las metrópolis

Las grandes aglomeraciones metropolitanas y las ciudades, en conjunto, representan el 57% del padrón electoral. En su interior conviven poblaciones con niveles socioeconómicos, prácticas culturales y estilos de vida diversos. Son lugares con desigualdades espaciales y situaciones de segregación y fragmentación social. Esas diferencias, como se verá más adelante, suelen ser determinantes a la hora de definir la orientación política de sus habitantes.

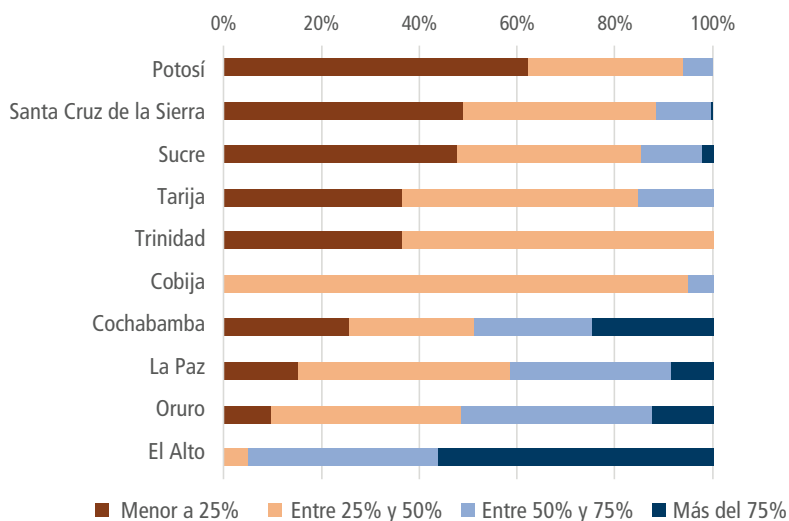
En 2005, en su primera victoria electoral, el MAS logró el 51% de los votos en los diez municipios que albergan las nueve ciudades capitales del país, además de El Alto. Ese porcentaje creció en el 2009 hasta el 56% y luego se fue reduciendo hasta llegar al 45% el pasado 18 de octubre de 2020: su peor desempeño en 15 años. Pese a este resultado, las ciudades siguen siendo cruciales para ese partido, pues casi la mitad (46%) de sus votos provienen de las mismas.

En cambio, para los adversarios del MAS, las urbes se han vuelto terreno de conquista electoral: en esos espacios han conseguido sus victorias más emblemáticas. En los últimos comicios, el 67% de la preferencia por listas rivales al MAS provino de los diez municipios más urbanizados del país.

Sin embargo, el comportamiento electoral de las grandes aglomeraciones urbanas no es homogéneo; hay notables diferencias que se explican por la región en la que se ubican, por su composición sociodemográfica y por las desigualdades socioeconómicas que existen en su interior. En este sentido, se perfilan, al menos, tres tipos de orientaciones de acuerdo con su mayor o menor rechazo al MAS:

- Ciudades polarizadas, como es el caso de Cochabamba, La Paz, Oruro y Cobija, en las que existe un equilibrio electoral entre los dos bloques y en las que hay proporciones similares de recintos bastante favorables al MAS, por una parte, y otros en los que sus adversarios obtienen también mayorías sólidas (ver gráfico 4).

Gráfico 4 Ciudades: Porcentaje de recintos según nivel de votación por el MAS (2020)



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

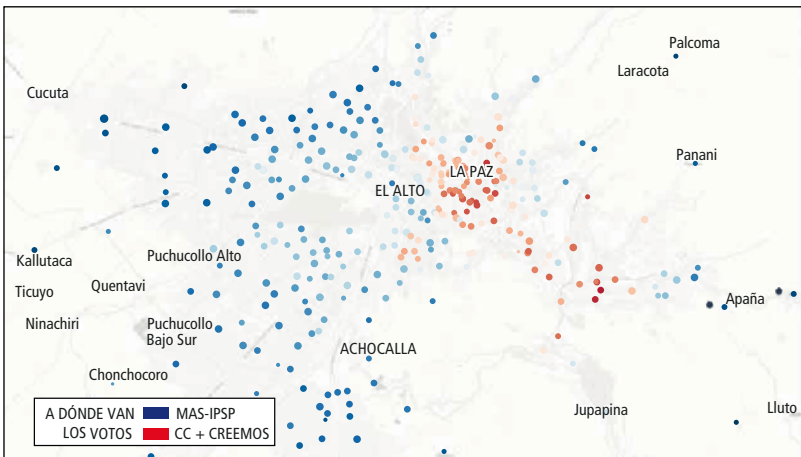
- Ciudades donde las fuerzas opositoras al MAS son predominantes o incluso hegemónicas. Es el caso de Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Tarija y Trinidad. En esas ciudades la oposición logró mayorías superiores al 75% en 62% de los recintos de votación (Potosí), 48% en Santa Cruz de la Sierra y 47% en Sucre.
- En una sola ciudad, El Alto, el actual partido gobernante es claramente preponderante: en el 56% de recintos de esa urbe el MAS obtuvo más del 75% de la votación.

Explorando con mayor detalle el comportamiento electoral dentro de las manchas urbanas de las tres metrópolis (eje central), el análisis de las desigualdades se hace aún más interesante:

- *En la aglomeración conformada por La Paz, El Alto y las localidades aledañas* se observa una importante concentración de votos contrarios al MAS en los barrios del centro de la ciudad, Sopocachi, Miraflores, el corazón de la zona sur y en algunos recintos en Ciudad Satélite, en El Alto. En esos lugares, hay numerosos recintos en los que las oposiciones obtienen resultados abrumadores. A medida que el análisis se desplaza hacia centros de votación en las laderas del valle paceño, la extendida ciudad de El Alto y las periferias metropolitanas, el apoyo al partido azul crece y se hace cada vez más intenso. La polarización política, que coincide con las desigualdades socioeconómicas de esta urbe, se hace visible en la cartografía electoral (mapa 7).
- *En la metrópoli cochabambina* se aprecia un comportamiento polarizado similar al de la urbe paceña: las oposiciones son muy fuertes en recintos del centro y del norte de la ciudad de Cochabamba y moderadamente mayoritarias en las urbanizaciones situadas en los alrededores de la carretera a Quillacollo y Sacaba. Sin embargo, alrededor de esas concentraciones se

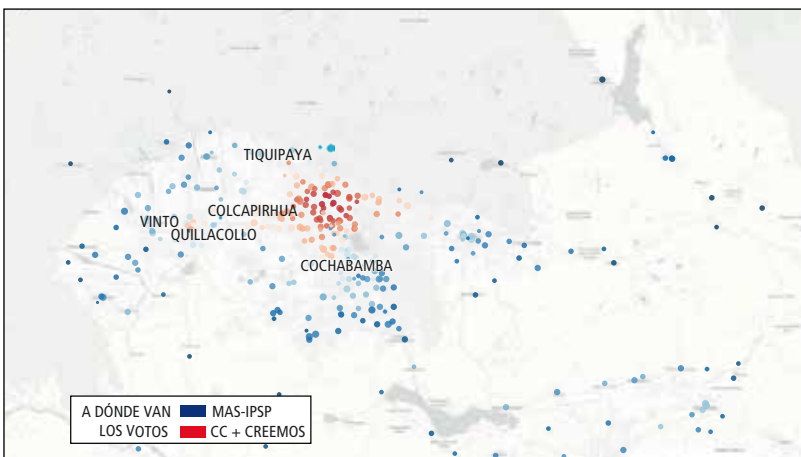
despliega un mapa azul, donde el MAS es mayoritario, que abarca los barrios de la zona sur de la ciudad de Cochabamba, las áreas periurbanas de la aglomeración y las conurbaciones semirrurales que se ubican más allá de Quillacollo y de Sacaba (mapa 8).

Mapa 7 Voto por recintos en el área metropolitana de La Paz



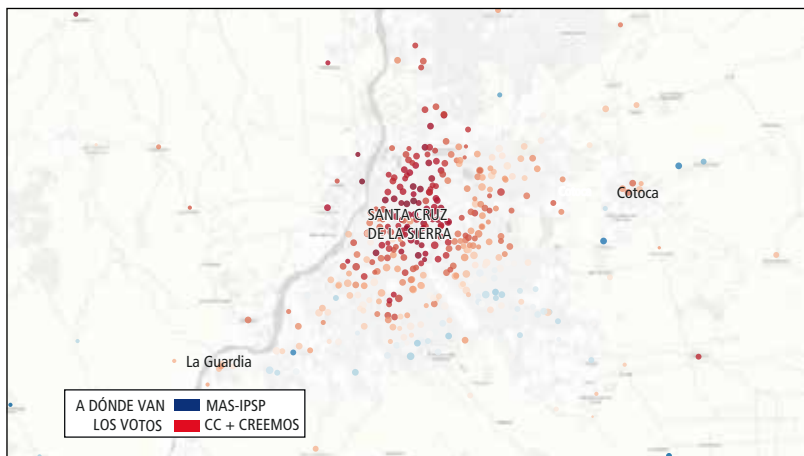
Fuente: Elaborado por Mauricio Foronda.

Mapa 8 Voto por recintos en el área metropolitana de Cochabamba



Fuente: Elaborado por Mauricio Foronda.

Mapa 9 Voto por recintos en el área metropolitana de Santa Cruz



Fuente: Elaborado por Mauricio Foronda.

- *El área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra es predominantemente desfavorable al MAS. Hay muy fuertes e intensas concentraciones de electorados opositores al actual gobierno hasta el cuarto anillo de la ciudad y hacia el norte de la urbe. Aunque sin lograr revertir la mayoría, el voto por el masismo se va incrementando paulatinamente en las periferias y zonas semirrurales de la ciudad de los anillos, particularmente hacia el sur y este de la aglomeración, alcanzando, en muchos recintos niveles de votación entre 30% y 40%. Los escasos recintos en los que el MAS logra superar el 50% se ubican en los barrios y comunidades más alejados del centro de la urbe.*

En las tres aglomeraciones se ha identificado una notable polarización entre el comportamiento electoral de los electores de barrios de clases media-altas –en los que los opositores al MAS ganan, en promedio, por más del 70%– y el prevaleciente en las zonas pobres suburbanas, en las que el actual oficialismo supera también los dos tercios de las preferencias.

Entre esos dos extremos hay situaciones más heterogéneas: lugares en los que ambos bloques superan el 40%, compitiendo arduamente en cada elección por obtener la mayoría. Es el caso, por ejemplo, de la gran cantidad de electores populares en las laderas paceñas o en el sur cochabambino que prefirieron a rivales del MAS y, viceversa, en ciertos barrios de clase media donde aparecen, de igual manera, apreciables porcentajes de votación masista.

Las circunscripciones uninominales y las inercias del sistema mayoritario

El sistema electoral boliviano ha establecido las circunscripciones uninominales con el objetivo de promover la elección directa de representantes legislativos por un determinado territorio, buscando de esa manera cualificar el vínculo entre el asambleísta electo y sus votantes. Para ello, se ha definido elegirlos por voto mayoritario en cada circunscripción, diseño que favorece, obviamente, a las fuerzas políticas con mayor despliegue territorial.

Se debe precisar que los desequilibrios que genera este diseño mayoritario son corregidos con la figura de los diputados plurinominales, los cuales completan las listas de representantes para garantizar proporcionalidad en la representación parlamentaria.

Desde el 2005, el MAS ha ganado la gran mayoría de las circunscripciones uninominales (64% de ellas en 2005, 70% en 2009, 79% en 2014 y 70% en 2020) debido a que es la única fuerza con un despliegue territorial nacional y, además, gracias a la importante votación que suele favorecerle en ciudades intermedias, pueblos y localidades rurales. Esta es una demostración de su capacidad de construir redes políticas con fuerte base territorial, de las que carecen sus oponentes.

En todo este periodo, las fuerzas no masistas han conquistado, sobre todo, circunscripciones uninominales urbanas. En 2020 ratificaron su predominancia histórica en casi todas las circunscripciones de la metrópoli cruceña, en

la zona norte de la ciudad de Cochabamba y en las ciudades del sur (Sucre, Tarija). La principal novedad en este ámbito ha sido la victoria de Comunidad Ciudadana en tres de las cuatro circunscripciones uninominales de la ciudad de La Paz.

Tabla 1 Número de circunscripciones uninominales (2005-2020)

	2005		2009		2014*		2020*	
	MAS	Oposiciones	MAS	Oposiciones	MAS	Oposiciones	MAS	Oposiciones
CHQ	5	1	4	2	4	1	3	2
LPZ	15	0	15	0	15	0	12	3
CBB	9	1	8	2	9	1	9	1
ORU	3	2	5	0	4	1	5	0
PTS	7	1	7	1	6	1	5	2
TJA	1	4	2	3	3	2	3	2
SCZ	5	8	6	7	9	6	7	8
BNI	0	5	1	4	2	3	2	3
PND	0	3	1	2	3	0	3	0
Total	45	25	49	21	55	15	49	21

(*) Desde el 2014 considera circunscripciones especiales indígenas y los cambios en la distribución de curules (2 para Santa Cruz y 1 menos para Potosí y Chuquisaca).

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

II. ELECCIONES SUBNACIONALES 2021: DIVERSIDAD, FRAGMENTACIÓN Y AUTONOMÍA

Las elecciones subnacionales del 14 de marzo de 2021 han sido las terceras desde la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado en 2009. Se trata de comicios de gran envergadura, en los que se han elegido 583 autoridades departamentales, 4.325 municipales y 27 regionales para desempeñar responsabilidades ejecutivas y legislativas.

Aunque las identidades y conflictos políticos de ámbito nacional influyen en la decisión de los votantes, se trata, en realidad, de cientos de disputas políticas que se producen al mismo tiempo, cada una con sus propias especificidades. Por otra parte, son comicios que se suelen caracterizar, en Bolivia y en otros países, por la fragmentación de la oferta partidaria y la

emergencia de opciones políticas alternativas a las nacionales. En este tipo de elecciones la cercanía de los candidatos con la ciudadanía importa mucho y las singularidades y diversidades sociales de cada localidad son determinantes.

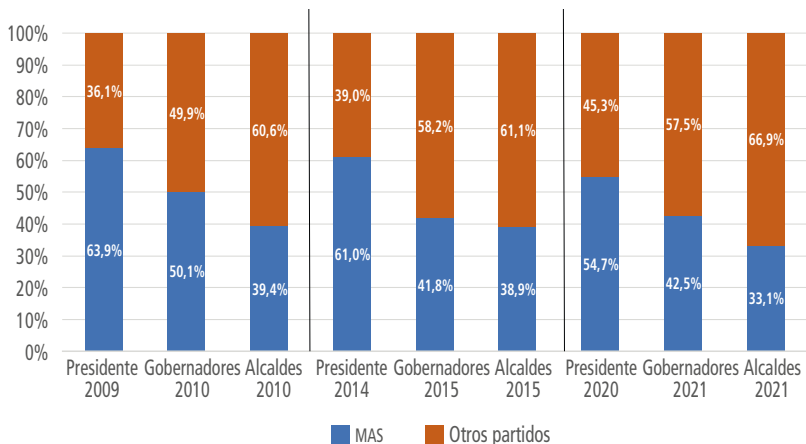
Por esas razones, los resultados de este tipo de elecciones admiten diferentes lecturas e interpretaciones dependiendo de los parámetros de análisis y comparación que se elijan. En este ensayo se busca, justamente, indagar en esas complejidades del voto: ¿Cuál fue el comportamiento electoral de los bolivianos y bolivianas en los comicios subnacionales 2021? ¿Qué pasó en las contiendas de alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas departamentales? ¿Cuáles son las dinámicas territoriales del voto del MAS-IPSP y de las diversas oposiciones?

Elecciones subnacionales: victorias relativas, erosión del MAS y diversificación opositora

Los comicios de 2021 han ratificado varias tendencias que ya se habían visto en las elecciones subnacionales de 2010 y 2015: una notable reducción de la votación del MAS con relación a sus resultados en las elecciones presidenciales, un crecimiento de las oposiciones que, sin embargo, se produce en medio de una gran fragmentación de la oferta partidaria local, y la aparición de nuevos liderazgos y fuerzas alternativas al sistema de partidos nacional (gráfico 5).

En 2021, el desempeño electoral del MAS ha sido nuevamente mediocre a nivel subnacional con relación a sus logros en las elecciones presidenciales, como ha venido sucediendo desde hace más de 15 años. Su votación se ha mantenido estable en las disputas por las gobernaciones (41,8% en 2015 y 42,5% en 2021) pero ha retrocedido significativamente en el nivel municipal (38,9% en 2015 y 33,1% en 2021). En contraste, las fuerzas no oficialistas han ganado bastante espacio político pero divididas en una gran cantidad de coaliciones y partidos, la mayoría de ellos de alcance solamente local.

**Gráfico 5 Elecciones nacionales y subnacionales (2009-2021):
Porcentaje voto válido**



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pero este primer panorama, basado en información agregada, es insuficiente para entender la complejidad de los resultados de estas contiendas. Hay varios indicadores que podrían ser utilizados para esa evaluación, los cuales aportan distintas perspectivas, no siempre coincidentes, sobre el comportamiento de los electores y los equilibrios políticos territoriales. Esa diversidad de miradas ratifica la naturaleza caleidoscópica y compleja de este evento de participación democrática que hace muy difícil proclamar vencedores y derrotados absolutos.

Esta situación se complica aún más por la aplicación de diferentes reglas para repartir cargos o elegir autoridades, elemento que contribuye a generar situaciones paradójicas como la obtención, por parte del MAS, de más alcaldes en 2021 que en 2015, a pesar de haber obtenido menos votos en los últimos comicios o, al contrario, el buen resultado agregado, en votación, en las elecciones de gobernador de ese partido, similar a la que logró en 2015, lo que no ha permitido, sin embargo, que obtenga más de tres gobernaciones, la mitad de las que ganó hace seis años.

En el primer caso, la explicación es la aplicación de la regla de mayoría simple para definir al alcalde, norma que favorece al MAS: el único partido que tiene un nivel de votación estable de alrededor del 30% en todo el territorio frente a contrincantes divididos en muchas opciones. Por otra parte, en las gobernaciones, la “derrota” azul tiene que ver, fundamentalmente, con el efecto polarizador de las segundas vueltas, esta vez más numerosas que en 2015 y en las que “moros y cristianos” suelen tener incentivos para unirse coyunturalmente a fin de derrotar al oficialismo.

La tabla 2 resume diversos indicadores sobre los resultados de las varias contiendas (municipales y para gobernaciones) que se realizan simultáneamente. De manera general, se observa que el MAS tiene, a su favor, una indudable presencia en todos los territorios, urbanos y rurales. Es el único partido que ha competido en casi todas las disputas locales a lo largo y ancho del país. Eso le ha permitido acumular la mayoría de los cargos legislativos en autonomías departamentales y municipales, y contar con una amplia red de alcaldes y alcaldesas en todas las regiones, favorecido, en esto último, por la regla de mayoría simple que rige la elección de esas autoridades.

Asimismo, el masismo ha mantenido sus posiciones en los legislativos departamentales sin muchas variaciones: actualmente controla seis asambleas de las nueve existentes y se acerca a la mayoría en las tres restantes. Su erosión más significativa se ha producido, no obstante, en el ámbito municipal y, principalmente, en los 20 municipios más grandes, urbanizados y ricos, en los que viene retrocediendo, sistemáticamente, en votos y cargos electos desde el 2010.

Por su parte, las fuerzas opositoras al MAS han obtenido mejores resultados en las elecciones subnacionales de 2010 y 2015 que en los comicios presidenciales. Este año, en conjunto, han obtenido casi el 58% de la preferencia a nivel de gobernaciones y han logrado un 67% de los votos en la elección de alcaldes. Este último es el porcentaje más alto desde el 2010. Una proporción importante de esos votos, no

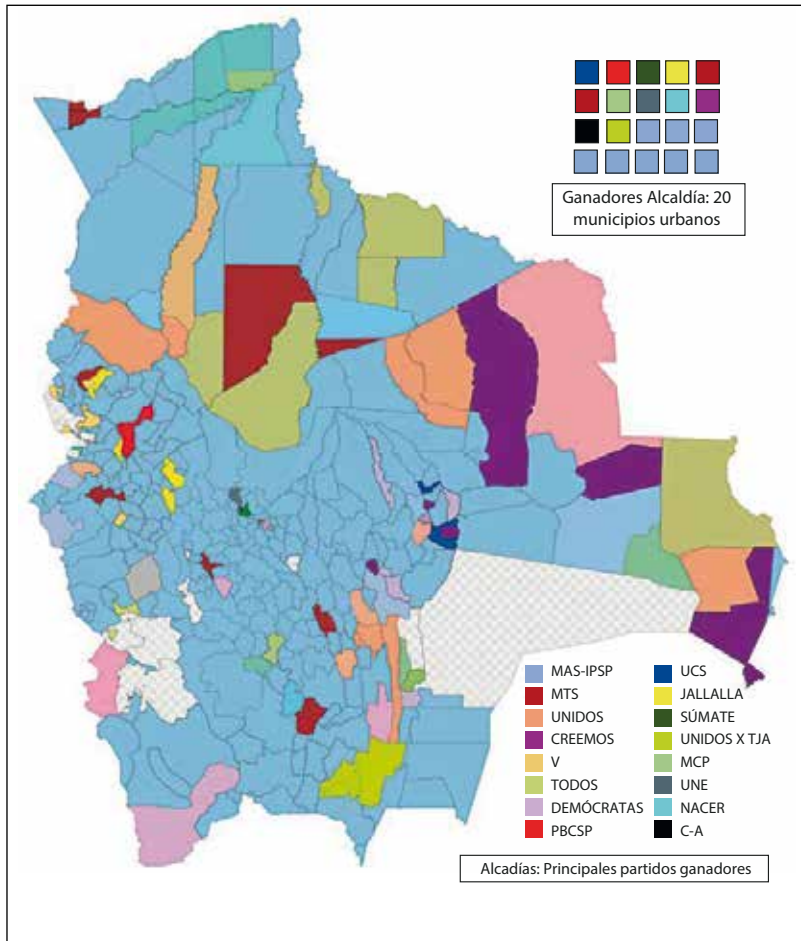
obstante, proviene de electores que residen en los municipios más urbanizados. A nivel del control de los poderes ejecutivos municipales, su desempeño en número de alcaldes electos ha sido irregular: han aumentado de 11 a 12 en las 20 ciudades más grandes y se han reducido de 101 a 85 en los otros municipios. Su mayor éxito ha sido, en todo caso, la conquista de seis gobernaciones, cuatro de ellas en segunda vuelta.

Tabla 2 Las elecciones subnacionales en cifras
(2010, 2015, 2021)

Elecciones Gobiernos Autónomos Departamentales	2010	2015	2021
Voto gobernadores - 1ra. vuelta - MAS (% total nac.)	50,1%	41,7%	42,5%
Voto gobernadores - 1ra. vuelta - Otros partidos (% total nac.)	49,9%	58,3%	57,5%
Número gobernadores:			
MAS	6	6	3
Otros partidos	3	3	6
Número segundas vueltas:	0	2	4
Número asambleístas:			
MAS	--	165	163
Otros partidos	--	81	84
Indígenas	--	25	25
Asambleas Legislativas:			
Con mayoría del MAS	--	7	6
Con mayoría "otro partido"	--	1	0
Sin mayoría	--	1	3
Elecciones Gobiernos Autónomos Municipales			
Voto alcaldes - MAS (% total nacional)	39,4%	38,9%	33,1%
Voto alcaldes - Otros partidos (% total nacional)	60,6%	61,1%	66,9%
Número alcaldes:			
MAS	228	227	239
Otros partidos	109	112	97
Número concejales:			
MAS	1.002	1.141	1.070
Otros partidos	806	877	936
Elecciones Gobiernos Autónomos Municipales (20 ciudades más grandes - 65% inscritos)			
Voto alcaldes- MAS (% total urbano)	34,7%	33,6%	26,1%
Voto alcaldes - Otros partidos (% total urbano)	65,3%	66,4%	73,9%
Número alcaldes:			
MAS	9	9	8
Otros partidos	11	11	12
Número concejales:			
MAS	78	88	77
Otros partidos	119	128	139

Fuente: Elecciones 2010 y 2015 con base en Atlas Municipal OEP (datos oficiales); elecciones 2021 con base en Recuento Preliminar OEP, información prensa y sistematización del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) (datos preliminares).

Mapa 10 Partidos ganadores de alcaldías, 2021



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En 2021 se ha ratificado, además, la creciente fragmentación y diversidad de la oferta partidaria no masista a nivel subnacional. No solo se están presentando cada vez más partidos en cada una de las contiendas locales, sino que prácticamente ya no hay fuerzas de alcance nacional, con la excepción del MAS, que logren ganar en más de una decena de elecciones municipales. Además de la mayoritaria presencia del MAS en casi todo el país, el mapa 10 muestra

la gran diversidad de partidos y movimientos que obtuvieron triunfos municipales en las pasadas elecciones.

En este contexto, cada vez más se observa la aparición de coaliciones creadas para apoyar a algún líder local o a movimientos políticos alternativos que no desean identificarse ni con el oficialismo ni con las oposiciones tradicionales. Varias de esas opciones han sido las que han cosechado mayores éxitos en este año tanto a nivel municipal como departamental: el partido Jallalla en el departamento de La Paz, la agrupación Chuquisaca Somos Todos o el Movimiento Tercer Sistema (MTS) en Beni y Pando.

En síntesis, las elecciones subnacionales están enriqueciendo y diversificando el sistema político boliviano, mostrando el dinamismo de la oferta partidaria y la notable autonomía de los votantes que tienden a diferenciar sus preferencias dependiendo del contexto y el tipo de autoridad que tienen que elegir.

La geografía del voto por alcaldes: predominancia limitada, competencia y diversidad regional

La distribución de la votación para alcaldes en la geografía nacional se parece en algunos aspectos a las tendencias gruesas observadas en los comicios nacionales, pero tiene particularidades que no se pueden obviar y que son relevantes para el desempeño futuro del campo político boliviano.

En líneas generales, la votación por el oficialismo se concentra en las grandes regiones tradicionalmente afines a esa fuerza: el occidente altiplánico, los valles andinos y las zonas tropicales de expansión agrícola del este y el norte. Mientras tanto, las oposiciones suelen ser mayoritarias en las grandes aglomeraciones urbanas y en algunas zonas rurales del este amazónico y el sur del país. Es perceptible también la paulatina consolidación de la presencia electoral del MAS en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, con relación a la situación prevaleciente en 2010.

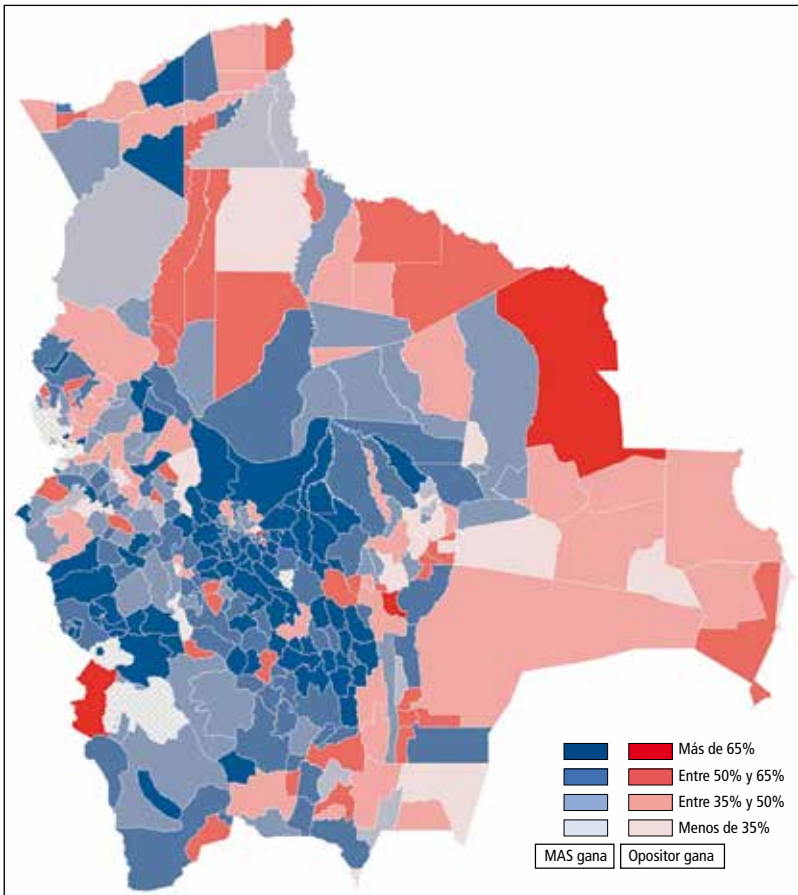
Hasta ahí las similitudes con los escenarios electorales nacionales, pero hay, al menos, tres rasgos específicos que introducen interesantes matices en ese escenario (ver mapas 11, 12 y 13).

En primer lugar, la evidente disminución de la intensidad del voto del MAS en todos los territorios con relación a los resultados que suele lograr en los comicios nacionales. Este partido solo está logrando votaciones superiores al 50% en las zonas rurales del departamento de Cochabamba, el norte de Potosí y en los valles andinos chuquisaqueños. Eso viene sucediendo desde el 2010, sugiriéndonos que estos serían los espacios geográficos con el voto más sólido y permanente por esa fuerza, tanto en procesos electorales nacionales como subnacionales.

En el resto de la geografía nacional, incluyendo gran parte del altiplano occidental y otras zonas rurales, el MAS sigue siendo preponderante, pero con porcentajes de votación más modestos para sus candidatos municipales y en contextos de creciente competencia con otras fuerzas. Por ejemplo, la emergencia de alternativas que podían derrotar a los candidatos del partido azul ya era notoria en varias zonas rurales de La Paz desde el 2010, en torno a la región lacustre y tropical del departamento; tendencia que se repitió el 7 de marzo 2021. Hasta ahora, este ha sido un fenómeno que se ha producido solamente en las elecciones subnacionales; en el futuro habrá que evaluar si se replica en otro tipo de comicios.

Otro rasgo interesante es la gran volatilidad de los triunfos y derrotas en los municipios donde hay mayor competencia o en los que el MAS se está expandiendo, como sucede en varias regiones del este y del norte amazónico. En esos lugares, en cada elección se producen cambios en el signo partidario de los alcaldes electos. Ninguna fuerza parece poder consolidarse permanentemente. La razón de esa gran variabilidad es que el porcentaje mínimo para ganar una Alcaldía ha ido disminuyendo a medida que hay más fragmentación en el voto: en muchos lugares, con un tercio de la votación (mayoría simple) se puede aspirar a ganar el sillón edil.

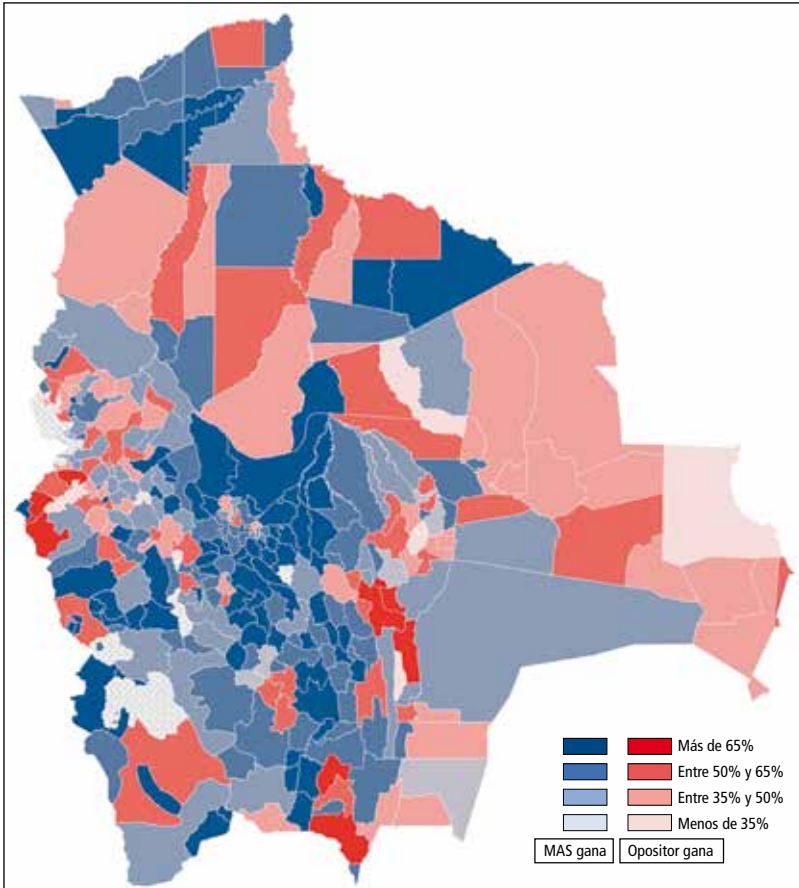
Mapa 11 Partido ganador en las elecciones de alcaldes 2010
(% de votación)



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El aumento del nivel de la competencia local está también afectando a los partidos opositores tradicionales, que casi ya no tienen territorios donde gocen de hegemonía total. En 2010, todavía había sólidas mayorías opositoras y una presencia marginal del MAS en buena parte de municipios de Santa Cruz y Beni. Once años después, la presencia de candidaturas masistas locales competitivas se ha vuelto la norma casi en todas las regiones rurales del país.

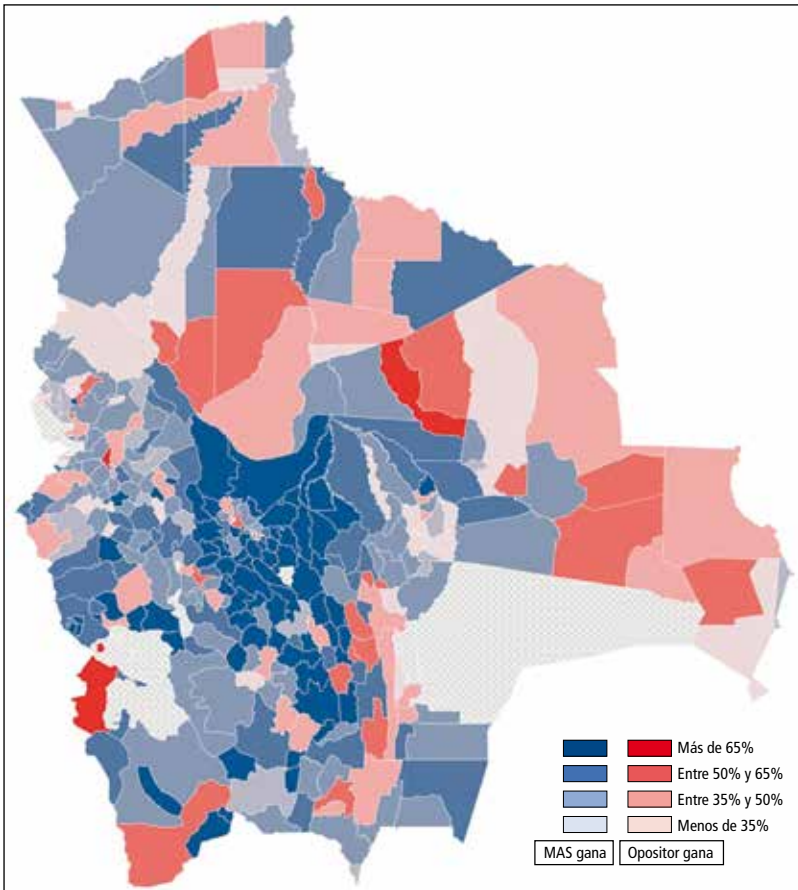
Mapa 12 Partido ganador en las elecciones de alcaldes 2015
(% de votación)



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En resumen, las confrontaciones electorales municipales son cada vez más intensas en todos los lugares, los electores tienen una mayor oferta partidaria de donde elegir y el voto tiende a fragmentarse. El MAS es preponderante en casi todas las zonas rurales y localidades pequeñas, pero sus triunfos son cada vez más estrechos y sus competidores se están multiplicando y diversificando.

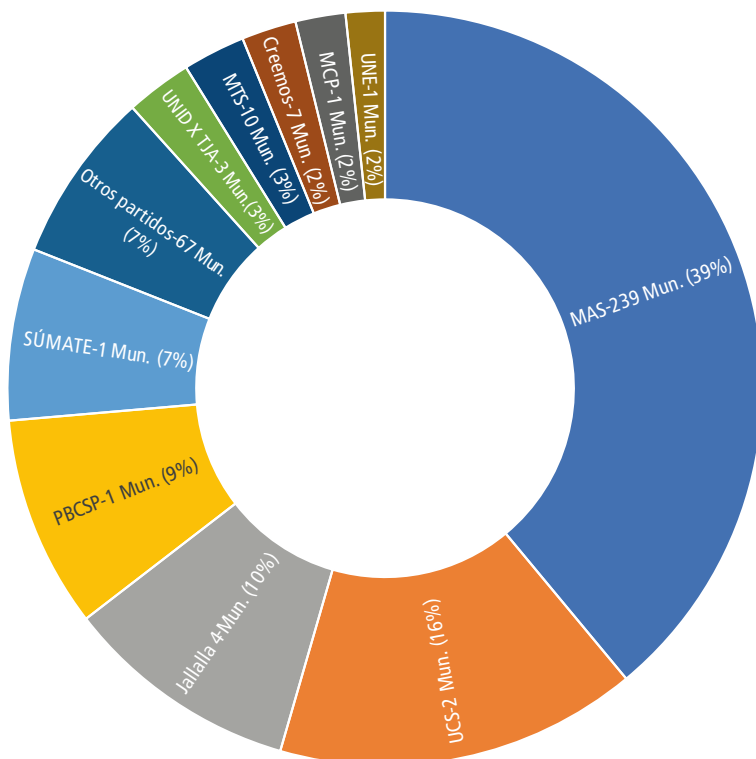
Mapa 13 Partido ganador en las elecciones de alcaldes 2021
(% de votación)



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Este panorama, ya de por sí complejo, debe ser complementado con una visión no únicamente territorial de la correlación de fuerzas electorales municipales, sino también con una perspectiva poblacional. Es decir, no basta con gobernar y ser políticamente dominante en la mayor parte del territorio, sino también es necesario ser competitivo en las zonas que concentran la mayor parte de la población.

Gráfico 6 Porcentaje de habitantes que cada partido gobernará desde algún Gobierno Municipal Autónomo (2021)



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Es en esta dimensión donde el oficialismo actual está encontrando cada vez más problemas: las votaciones por sus candidatos a alcaldes en las 20 aglomeraciones urbanas más grandes del país se han reducido sistemáticamente desde 2010. En marzo pasado, el MAS obtuvo el peor resultado de su historia en este ámbito: 26% de votación y solo ocho victorias.

Este retroceso, casi ya permanente, es relevante pues en esos municipios reside el 65% de la población. Gracias a esos triunfos, diversos candidatos opositores gobernarán a la mayoría de los bolivianos desde alcaldías políticamente

autónomas (ver gráfico 6). Entretanto, el MAS administrará únicamente al 39% de la población del país desde los 239 municipios en los que se impuso. El partido azul parece sufrir de un problema casi estructural que arrastra desde hace más de una década: le resulta difícil presentar opciones competitivas y capaces de conectar con las necesidades de los votantes municipales urbanos.

Este panorama no estaría completo sin una referencia a la naturaleza de “las oposiciones” que, como hemos visto, tienen en los comicios subnacionales su escenario más favorable. Aunque, en conjunto, gobernarán a la mayoría de la población del país (60%) desde las alcaldías y gobernaciones en las que ganaron (gráfico 2), no se trata, en absoluto, de un bloque compacto o unificado.

Actualmente, “las oposiciones” son un conglomerado compuesto por 43 fuerzas de diversa ideología y naturaleza política, frecuentemente articuladas por un líder local. Algunas de ellas se adscriben más o menos a fuerzas opositoras tradicionales, como el recién electo alcalde de La Paz, Iván Arias (PBCSP) o Manfred Reyes Villa (Súmate) en Cochabamba, mientras otras intentan situarse por fuera de los parámetros usuales de la polarización nacional, como en el caso de Jallalla, UCS o el MTS.

Este balance de la geografía de las elecciones de alcaldes nos sugiere que se está consolidando un sistema político subnacional con características propias, en el que el MAS sigue teniendo cierta preponderancia, la cual, sin embargo, está siendo puesta en cuestión por la diversificación de la oferta política a nivel local y por el debilitamiento de las lealtades partidarias en este tipo de comicios. Se va perfilando así un contexto más competitivo, plural, vinculado a preferencias por liderazgos y ofertas programáticas regionales y relativamente menos afectado por las lógicas de polarización prevalecientes en las contiendas políticas nacionales.

La complejidad del voto: fragmentación y “voto cruzado”

Ya se ha visto que las elecciones subnacionales son bastante complejas por su diseño, eligiéndose varios tipos de autoridades locales en listas separadas y cada una con reglas diferentes.

Por otra parte, como se ha mencionado, la oferta partidaria en cada municipio y departamento tiende a aumentar, ocasionando un incremento en la dispersión del voto y, por tanto, la posibilidad de ganar con menor porcentaje, por mayoría simple o, como sucede en el caso de los gobernadores, forzar “segundas vueltas”, en virtud de la regla que establece que la autoridad debe ser elegida por mayoría absoluta.

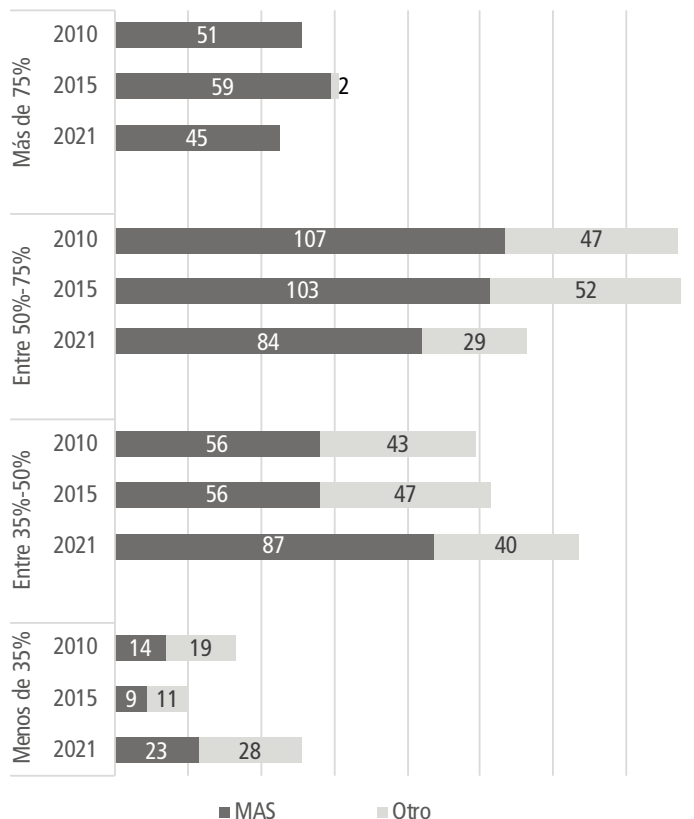
Por otra parte, las elecciones subnacionales implican, al menos, cinco sufragios diferentes, mediante los que el votante debe elegir al alcalde y concejales de su municipio; y, por otra parte, al gobernador, al asambleísta territorial y al asambleísta por población de su Gobierno Autónomo Departamental. Esos cinco votos son contabilizados independientemente y el elector puede optar por candidatos de partidos diferentes para cada cargo.

La fragmentación de las preferencias y el denominado “voto cruzado” son dos fenómenos que muestran cómo se está complejizando el comportamiento de los electores. Su análisis enriquece nuestra comprensión de los cambios en la manera como los ciudadanos deciden y eligen en estos tiempos.

Hay varios indicadores que muestran que el grado de fragmentación del voto se ha incrementado significativamente en las elecciones de este año. Tradicionalmente, en estos comicios siempre había una mayor oferta partidaria, pero, de todas maneras, alrededor del 65% de alcaldías eran ganadas con más del 50% de preferencias y solo un porcentaje marginal (6%) se obtenían con una mayoría igual o inferior al 35%. Pese a la multiplicación de los partidos, había una tendencia hacia la concentración del voto en uno o dos partidos. En las pasadas elecciones subnacionales del 7 de marzo, ese

panorama cambió significativamente: solo un 47% de alcaldes se impusieron con más del 50% (158 alcaldías) y un 15% lo hicieron con menos del 35% (51 alcaldías) (gráfico 7).

Gráfico 7 Número de alcaldías ganadas según porcentaje de votos obtenido por el partido vencedor (2010-2021)

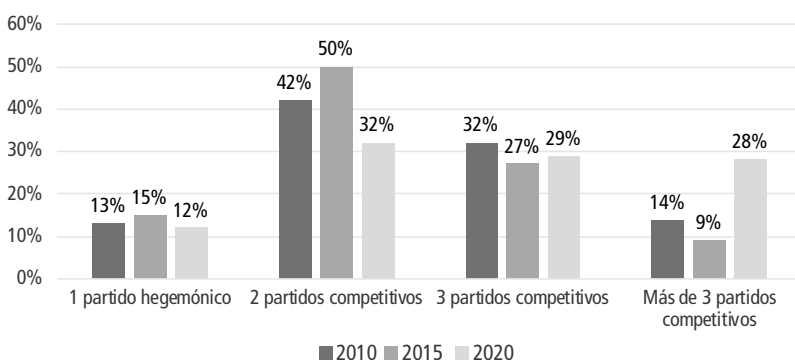


Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ese panorama se ratifica si se analiza la cantidad de fuerzas en competencia que participaron en las diversas contiendas municipales: En 2015, en el 65% de todos los municipios de Bolivia uno o dos partidos se disputaron efectivamente los sillones edilicios; ese porcentaje bajó a 44% en 2021. En consecuencia, en el 29% de municipios

se produjeron contiendas en las que tres fuerzas políticas lograron niveles de votación significativos y en el 28% de los municipios se generaron confrontaciones entre más de tres partidos con resultados estrechos y, por lo tanto, más inciertos (gráfico 8).

Gráfico 8 Porcentaje de municipios según la cantidad de partidos con un nivel de votación competitivo para el puesto de alcalde



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Algo similar ha pasado también en las primeras vueltas de los comicios para gobernadores. En promedio, el número de partidos que efectivamente han logrado votaciones importantes para gobernador ha aumentado de 2,5 a 3,2 entre 2010 y 2015. La fragmentación del voto ha sido particularmente importante en el caso de la lucha por las gobernaciones del Beni, Potosí, Oruro y La Paz, en las que cuatro fuerzas han logrado votaciones relevantes. La clásica polarización entre dos fuerzas solo se ha producido en Santa Cruz, Cochabamba y, en cierta medida, en Chuquisaca.

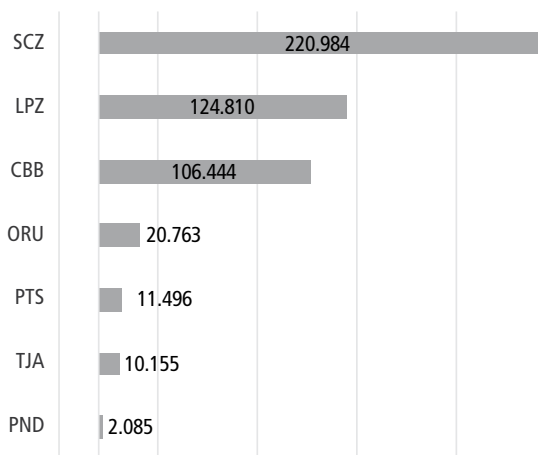
Estos indicadores muestran que el sistema político local ha acelerado su tendencia hacia una mayor fragmentación en las elecciones subnacionales de este año. Si eso persiste y se amplifica a otros procesos, podría desencadenar cambios relevantes en la estructura del sistema político en su conjunto.

Otro fenómeno llamativo que se ha observado es el crecimiento del “voto cruzado”, que consiste en la tendencia de los votantes a elegir a candidatos de partidos diferentes para alcalde, gobernador, concejal o asambleísta departamental. Este suele ser un indicador de una mayor autonomía de los electores y del debilitamiento de las lealtades partidarias rígidas.

Este tipo de comportamiento se refleja, por ejemplo, en la cantidad de votos que ha obtenido algún candidato del oficialismo para gobernador comparado con lo que acumularon todos sus postulantes a alcaldes en el departamento. A nivel nacional, esa diferencia llega a 473.426 votos en el caso del MAS, cifra muy elevada que muestra la enorme relevancia que ha tenido el “voto cruzado” en el desempeño que ha logrado el oficialismo en los comicios de este año.

Esas particularidades fueron significativas en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, regiones en las que cientos de miles de votantes inclinaron su voto por un gobernador del MAS y, a la vez, por candidatos a alcaldes de otros partidos (gráfico 9): 220.984 en Santa Cruz, 124.810 en La Paz y 106.444 en Cochabamba.

Gráfico 9 Cantidad de ciudadanos que eligieron un candidato a gobernador del MAS pero a un opositor para alcalde (2021)



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Aunque las estimaciones a un nivel más desagregado son imprecisas, hay evidencias que este “cruce” de preferencias no solo se ha producido entre fuerzas ideológicamente cercanas –como, por ejemplo, entre candidatos del MAS y de Jallalla en La Paz– sino también entre opciones que se creían, *a priori*, incompatibles, como ha sucedido, en Cochabamba, con quienes votaron por Humberto Sánchez, candidato del MAS a la Gobernación y, al mismo tiempo, por Manfred Reyes Villa para alcalde.

Las gobernaciones: mayor dispersión y segundas vueltas










El sistema de elección de gobernadores obliga a realizar una segunda vuelta si ningún candidato obtiene el 50% más uno de los votos en la primera vuelta (mayoría absoluta) o, al menos, un 40% con una diferencia de más del 10% con relación al segundo más votado.

En las elecciones de 2010 y 2015 (ver tabla 3), en siete departamentos alguna de las fuerzas en competencia obtuvo cómodas mayorías en primera vuelta. El MAS era claramente una fuerza predominante en Cochabamba, Potosí, Oruro, Pando y Chuquisaca. Del mismo modo, en Santa Cruz, Demócratas se impuso con mayoría absoluta. En La Paz, por otra parte, el MAS ganó la Gobernación en 2010 y SOL. bo en 2015, a la cabeza de Félix Patzi.

También en 2010, las gobernaciones de Tarija y Beni eran las más disputadas, al punto que en esas dos regiones se realizaron las primeras “segundas vueltas” de la historia electoral boliviana, imponiéndose finalmente la oposición, con amplio margen, en el caso de Tarija, y el MAS, por una estrecha diferencia, en el Beni.

En 2021, sin embargo, el panorama ha cambiado significativamente. Solamente han ganado con contundencia el MAS en Cochabamba y la agrupación opositora Creemos en Santa Cruz. En los otros siete departamentos, las fuerzas más votadas obtuvieron, aproximadamente, entre el 40% y el

Tabla 3 Votación de elecciones para gobernador (2010-2021)

		2010	2015		2021	
		Primera vuelta	Primera vuelta	Segunda vuelta	Primera vuelta	Segunda vuelta
 Chuquisaca	MAS	54%	51%		39%	43%
	Opos. 1	36%	44%		46%	57%
	Otros	10%	5%		15%	
 La Paz	MAS	50%	31%		39%	45%
	Opos. 1	23%	50%		26%	55%
	Otros	27%	19%		15%	
 Cochabamba	MAS	62%	62%		57%	
	Opos. 1	26%	23%		25%	
	Otros	14%	15%		18%	
 Oruro	MAS	60%	58%		46%	
	Opos. 1	29%	14%		16%	
	Otros	11%	28%		38%	
 Potosí	MAS	67%	62%		44%	
	Opos. 1	13%	20%		22%	
	Otros	20%	18%		34%	
 Pando	MAS	50%	66%		41%	45%
	Opos. 1	48%	28%		30%	55%
	Otros	2%	6%		29%	
 Tarija	Opos. 1	49%	45%	61%	38%	54%
	MAS	44%	36%	39%	38%	46%
	Otros	7%	19%		24%	
 Santa Cruz	Opos. 1	53%	59%		56%	
	MAS	38%	32%		38%	
	Otros	9%	9%		6%	
 Beni	Opos. 1	43%	31%	50%	42%	
	MAS	40%	41%	50%	22%	
	Otros	17%	28%		36%	

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE.

45% de la preferencia electoral. En tres departamentos (Oruro, Potosí y Beni) se evitó la segunda vuelta debido a la elevada fragmentación del voto de las fuerzas que llegaron en segundo, tercer y cuarto lugar y en los cuatro departamentos restantes (Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando) se tuvo que dirimir al gobernador mediante el balotaje. En última instancia, en las segundas vueltas se produjo un fenómeno de polarización que favoreció a las candidaturas no masistas, aunque en todos los casos los candidatos del MAS obtuvieron resultados próximos a un 45%.

Estos resultados indican que se está transitando, posiblemente, hacia un contexto de mayor dispersión del voto caracterizado por la dificultad para ganar en primera vuelta, lo que implica la necesidad de enfrentar complejos balotajes en los que se debe convocar a los votantes de tres o más fuerzas para definir quién será el gobernador. Son, en definitiva, contextos de mayor nivel de competitividad que marcan, al parecer, el fin la época de las mayorías hegemónicas a nivel de Gobiernos Departamentales.

Algunas conclusiones: diversidad, fragmentación y emergencia de un sistema político local

En este ensayo se han presentado evidencias que muestran como las elecciones subnacionales están diversificando el sistema político boliviano, en su conjunto. El MAS sigue teniendo cierta preponderancia, pero se va perfilando un contexto electoral más competitivo, plural y en el que los votantes son cada vez más imprevisibles, libres en sus decisiones e incluso desleales en relación a sus afinidades políticas tradicionales.

Por otra parte, hay indicadores que señalan que se ha acelerado la tendencia hacia una mayor fragmentación del voto, tanto en los comicios municipales como en los departamentales. Igualmente, se ha intensificado el fenómeno del “voto cruzado”, que consiste en la tendencia de los votantes

a elegir a candidatos de distintos partidos para alcalde, concejales, gobernador y asambleístas departamentales.

Se estaría conformando, de esta manera, un sistema político local con características y dinámicas diferentes al que ha prevalecido en el nivel nacional, caracterizado por un mayor dinamismo de la oferta partidaria, más pluralidad y mucha autonomía de los electores que diferencian sus preferencias dependiendo del contexto y del tipo de autoridad que tienen que elegir.

Si esas tendencias de cambio persisten y se replican en otros ámbitos, podrían desencadenarse cambios relevantes en la estructura de todo el sistema político. Aunque no parece que hayamos llegado aún a ese momento, existen señales que no se deben subestimar. Todo esto muestra que los análisis simplificados y binarios del comportamiento electoral de los bolivianos y las bolivianas son insuficientes para explicar la realidad.

En síntesis, cabe señalar que estas transformaciones no son necesariamente negativas, pues enriquecen la democracia, ampliando la pluralidad y las opciones políticas disponibles para la ciudadanía. Sin embargo, podrían ser también señales de la fatiga e insatisfacción de los ciudadanos frente al sistema de partidos tradicional y a la oferta programática y de liderazgos propuestas por las grandes fuerzas hegemónicas en el campo político hasta hoy.

Nuevo espacio político en Bolivia: Entre lo nacional popular y lo oligárquico liberal

Fernando Mayorga

Introducción

Después de las elecciones generales de 2020 y de los comicios subnacionales de 2021, el espacio político se ha reconfigurado, aunque se mantiene el protagonismo del MAS. Este ciclo electoral estuvo precedido de una intensa polarización política que derivó en un golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019 y en la decisión de dejar sin efecto los comicios realizados el 18 de octubre. El gobierno interino de Jeanine Áñez impulsó esa polarización durante un año desplegando acciones represivas –con saldos trágicos en las masacres de Senkata y Huayllani– y judiciales –con acusaciones de sedición y terrorismo– dirigidas a debilitar al MAS con miras a las elecciones generales que, finalmente y después de tres postergaciones, se llevaron a cabo el 18 de octubre de 2020.

Este panorama hacía suponer que el sistema democrático estaba en la antesala de una crisis de representación política, sin embargo, lo que se puso de manifiesto en los comicios fue, simplemente, una serie de mutaciones en la lógica representativa sin menoscabo de la democracia. Otro aspecto destacable es la modificación en las relaciones entre oficialismo y oposición, que transitan de una relación bipolar a una lógica multipolar como efecto de una segmentación

más compleja del espacio político entre campo nacional popular y campo oligárquico liberal, los cuales han sufrido importantes modificaciones en su composición.

Mutaciones en la representación política

El comportamiento electoral en octubre de 2020 y en marzo de 2021 demuestra que se han producido mutaciones en la representación política y no una crisis de representatividad. En general, la crisis se vincula al deterioro de la legitimidad y eficacia de las mediaciones partidistas y se expresa en el predominio de percepciones negativas en la opinión pública acerca de la política y las instituciones democráticas. Así, si los partidos son reprobados en las encuestas, se supone que la representación política está en crisis y la democracia en riesgo. Sin embargo, uno de los datos que se debe tomar en cuenta para evaluar el grado de rechazo o aceptación de los actores políticos y los partidos –y, por ende, de la democracia– es el porcentaje de asistencia a las urnas y la distribución de la votación. Es decir, la desafección ciudadana contra el sistema político tendría que traducirse en una elevada abstención, en un nítido rechazo a los partidos políticos mediante votos blancos y nulos o en la dispersión de las preferencias electorales en múltiples siglas. Nada de esto sucedió en el reciente ciclo electoral.

La participación ciudadana en las elecciones generales de octubre de 2020 superó el 88% de votantes habilitados y fue mayor al 85% en los comicios subnacionales de marzo de 2021. Estos datos ponen en entredicho la idea de una crisis de representación política y resaltan aún más la convicción democrática de la sociedad porque las elecciones se llevaron a cabo en un contexto hostil a la participación electoral debido a la pandemia del coronavirus. También los porcentajes de votos en blanco (1,41%) y nulo (3,60%) en las elecciones generales de 2020 confirman esta aseveración. Es evidente que estos guarismos caracterizan a la democracia boliviana desde hace 20 años, sin embargo, se mantuvieron en este

ciclo electoral a pesar de la polarización ideológica y la conflictividad social desatada entre 2019 y 2020 y el actual contexto de crisis sanitaria.

En ese sentido, es importante poner atención a la distribución de la votación para auscultar los cambios en las preferencias electorales de la sociedad y sus efectos en la representación política. Con mayor razón si la orientación del voto varía entre elecciones generales y comicios subnacionales. Esta conducta se refuerza porque las elecciones generales y subnacionales no son concurrentes y esa distancia temporal permite un mayor protagonismo de fuerzas y líderes locales afectando la capacidad de mediación de los partidos; las únicas organizaciones de carácter nacional. Por eso, desde el establecimiento de la elección popular de autoridades departamentales en 2005, la votación muestra variaciones entre uno y otro evento. Además, varía el número de organizaciones que participan en las contiendas; así, en las últimas elecciones generales participaron cinco partidos o frentes políticos; en cambio, en los comicios subnacionales se presentaron 122 organizaciones y alianzas.

Es preciso destacar que, desde la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas en septiembre de 2018, solamente los partidos políticos están habilitados para competir en elecciones generales; en cambio, en comicios departamentales y municipales pueden participar agrupaciones ciudadanas y organizaciones de los pueblos indígenas. Esta distinción incentiva la formación de candidaturas locales independientes de los partidos políticos, los cuales, excepto el MAS, no tienen presencia en todas las regiones.

Las elecciones generales definen la distribución horizontal del poder –esto es, las relaciones entre los órganos Ejecutivo y Legislativo– y, por ende, el formato del sistema de partidos; por su parte, los comicios subnacionales definen la distribución vertical del poder –es decir, los vínculos entre el gobierno central y los gobiernos autónomos departamentales y municipales– y pueden afectar las relaciones generales

entre oficialismo y oposición. Los resultados de las elecciones generales, aparte de la ratificación del MAS como partido predominante, provocaron una aguda recomposición en las filas de la oposición parlamentaria. Por su parte, los resultados de los comicios subnacionales pusieron en evidencia una mayor fragmentación y diversificación en las filas de la oposición tradicional, así como la emergencia de nuevas fuerzas y liderazgos locales que vencieron al MAS disputándole la representación –antaoño exclusiva– del campo nacional popular.

En suma, se disiparon los riesgos de una crisis en el sistema de representación política pero se produjo una metamorfosis en el lazo representativo provocando una reconfiguración del espacio político por las transformaciones en el campo nacional popular y en el campo oligárquico liberal.

Lo nacional popular y lo oligárquico liberal

El proceso político acaece en un espacio que está conformado por campos de fuerzas o tendencias que disputan el poder estatal y la dirección moral intelectual de la sociedad. Los campos de fuerzas o tendencias contienen actores cuyas intervenciones modifican el estado de cada campo e inciden en la configuración del espacio político.¹ Para delimitar el análisis del espacio político boliviano se definen dos campos: el nacional popular y el oligárquico liberal. Antes de delimitarlos y analizar su composición es conveniente establecer algunas consideraciones acerca de *lo nacional popular y lo oligárquico liberal*.

Lo nacional popular es una categoría que está presente en la discursividad política boliviana desde la revolución de 1952, que inauguró el protagonismo político de obreros, fabriles,

1 Las tendencias entran en disputa en el espacio político que en este texto es definido, siguiendo a Bourdieu, como “un campo de fuerzas y un campo de luchas para transformar las relaciones de fuerzas” (Pierre Bourdieu, *El campo político*, La Paz: Plural, 2001, p. 17).

artesanos y campesinos. Esa noción tiene antecedentes en el pensamiento político posterior a la guerra del Chaco y está vinculada a la configuración del discurso del nacionalismo revolucionario que forma parte del proceso de la “revolución nacional”. En 1944, Carlos Montenegro, autor de *Nacionalismo y coloniaje*, se refiere a la “*tendencia nacional popular* alentada por Belzu” en su interpretación de la historia como una pugna entre dos tendencias –nacional y antinacional– que se encarnan en el pueblo y la oligarquía.² Ese vocablo aparece de manera aislada en *Nacionalismo y coloniaje* y puede considerarse un hecho fortuito pero resulta sugerente puesto que se trata de una obra escrita con anterioridad a la revolución de 1952 y cuatro décadas antes del debate marxista en América Latina que, bajo influencia del pensamiento de Antonio Gramsci, recuperó el concepto de *lo nacional popular* para interpretar, desde otra perspectiva, los procesos y regímenes políticos de la primera mitad del siglo XX que eran definidos como “populistas”, así como para reflexionar en torno a las relaciones entre revolución y democracia.

La obra de René Zavaleta Mercado se sitúa en ese debate latinoamericano –que tuvo su epicentro en la ciudad de México en los años ochenta del siglo pasado– pero se concentra en la interpretación del proceso revolucionario que forjó el Estado del 52, sus antecedentes, y, sobre todo, su derrotero. Así, enfoca su atención en la democracia, tema central de sus últimos escritos: “Cuatro conceptos de la democracia” (1981), “Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia” (1982) y “Las masas en noviembre” (1983) que pueden considerarse el complemento o la parte final de una investigación que quedó inconclusa y fue publicada de manera póstuma en 1986 con el sugerente título de *Lo nacional-popular en Bolivia*. Su título original era “Elementos para una historia de lo nacional popular en Bolivia: 1879-1980” y su objetivo investigar “la formación de lo nacional

2 Carlos Montenegro, *Nacionalismo y coloniaje*, La Paz: Universo, 1994, p. 57. Cursivas nuestras.

popular, es decir, la conexión entre... la democratización social y la forma estatal... Las pautas de socialización... y sus índices de poder, así como los llamados proyectos de masa”.³ En ese libro continúa la veta interpretativa inaugurada por Carlos Montenegro pero su reflexión se sitúa en el debate latinoamericano, respecto a populismo y democracia, desde una perspectiva marxista de raigambre gramsciana que rescataba la distinción entre lo nacional estatal y lo nacional popular para referirse a la disputa por la construcción de la nación entre el Estado –al servicio de las clases dominantes– y el pueblo, concebido como voluntad colectiva, precisamente, nacional popular.⁴

Entonces, *lo nacional popular* se refiere a la presencia y accionar de actores populares –obreros, campesinos, indígenas– en la disputa hegemónica para definir la orientación de un proyecto de nación con soberanía estatal y justicia social. Esa tendencia tuvo dos momentos de victoria política con efecto estatal: la “revolución nacional” en el siglo XX bajo el mando del Movimiento Nacionalista (MNR) y el “proceso de cambio” en el siglo XXI bajo la conducción del MAS, que se caracterizan por la ampliación de la democracia con la inclusión y participación de sectores subalternos y por el establecimiento de una mayor autonomía relativa del Estado respecto a las clases dominantes y los intereses foráneos.⁵

-
- 3 Los textos están publicados en René Zavaleta Mercado, *Obra completa. Tomo II: Ensayos 1975-1984*, La Paz: Plural, 2013, p. 147.
- 4 “Lo nacional... no era el dato inicial que conjunta un territorio determinado con identidades establecidas, sino el campo problemático... del proyecto hegemónico [...] Lo popular, a su vez, representaba no solo lo plebeyo, sino también la posibilidad de tender lazos entre las clases subalternas, para acumular fuerzas y comandar la construcción de la nación” (Nora Rabotnikof y Julio Aibar, “El lugar de lo público en lo nacional popular. ¿Una nueva experimentación democrática?”, en *Revista Nueva Sociedad*, núm. 240, Buenos Aires, 2012, p. 58).
- 5 “...el Estado puede, en rigor, tener una determinación más nacional popular o si se quiere más societaria, enfrentando a

En esa medida, *lo nacional popular* no se refiere a un sujeto sino a la acción de una voluntad colectiva que encarna una tendencia política (intelectual, moral y cultural), la cual disputa el poder a las clases y élites dominantes en pugna con la tendencia *oligárquico liberal*. En el pasado, a la usanza de Carlos Montenegro y René Zavaleta Mercado, esa tendencia era definida como antinacional y señorial; en los últimos años, la democracia fue incorporada en el repertorio discursivo de la oposición tradicional al MAS y, por eso, es posible definirla como una fuerza *oligárquico liberal* que reproduce elementos señoriales y antinacionales, y que se nutre, además, de ingredientes ultraconservadores de talante religioso.

En la primera gestión de Evo Morales (2006-2009), la fuerza oligárquico liberal se expresó en la conformación de una coalición opositora entre prefectos opositores, comités cívicos y bancadas parlamentarias que promovió las autonomías departamentales como alternativa al modelo de Estado Plurinacional impulsado por el oficialismo. Esta coalición tuvo un rostro institucional en el Consejo Nacional Democrático (Conalde) bajo la conducción política del movimiento cívico cruceño. La identidad regional fue enarbolada como antítesis de la identidad indígena y las protestas opositoras adquirieron un carácter racista durante el proceso constituyente, denotando el carácter señorial de la tendencia oligárquico liberal. La demanda autonomista se combinó con una defensa del neoliberalismo porque la oposición rechazó la nacionalización de los hidrocarburos ya que ampliaba el rol del Estado en la economía y reforzaba el centralismo gubernamental. La demanda regionalista perdió capacidad de convocatoria después de la aprobación de la CPE (enero de 2009), que incluyó el régimen de autonomías

sectores menos democráticos de la sociedad (y, en los hechos, el Estado ha estado más de una vez por delante de la sociedad)", René Zavaleta Mercado, "Lo nacional-popular en Bolivia" [1984], en *Obra completa. Tomo II: Ensayos 1975-1984*, La Paz: Plural, 2013, p. 190.

territoriales en el modelo de Estado Plurinacional, y el modelo económico y el proyecto estatal del MAS se consolidaron con la victoria de Evo Morales en las elecciones de diciembre de 2009. La oposición tradicional se afincó en el regionalismo y el neoliberalismo, así como en el rechazo al proyecto campesino e indígena que se plasmó en el Estado Plurinacional.

El campo oligárquico liberal renovó fuerzas a partir de la victoria del “No” en el referendo constitucional realizado en febrero de 2016. Esa consulta tenía como objetivo la habilitación de Evo Morales para su postulación a una tercera reelección presidencial y, ante su derrota, el MAS optó por otras vías legales para lograr su propósito.⁶ Así, en torno al respeto del resultado del referendo y al rechazo a la reelección de Evo Morales como “defensa de la democracia”, se formó una coalición opositora entre partidos, grupos de activistas ciudadanos agrupados como “plataformas ciudadanas”, organizaciones no gubernamentales y gremios profesionales y, más adelante, seguidores de la Iglesia católica y evangelistas. Como aconteció entre 2006 y 2009, el movimiento cívico asumió un rol protagónico bajo el liderazgo del Comité Cívico Pro Santa Cruz que comandó las acciones dirigidas al derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019.

Un factor que amplió la capacidad de convocatoria de esta tendencia oligárquica, marcada por lo señorial, fue la articulación de una concepción liberal de la democracia como eje discursivo de las protestas opositoras. Esta visión liberal se enfoca en la reivindicación de la ciudadanía como ejercicio de derechos individuales en contraste con los rasgos comunitarios y colectivos que caracterizan la participación política de los sectores populares. En esta concepción liberal, el ciudadano individual es “el único soporte y sujeto de la cosa pública [y] los actores colectivos [son] peligros corporativos y enemigos

6 El MAS recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual, mediante una sentencia constitucional emitida en noviembre del 2017, interpretando el art. 23 (derechos políticos) del Pacto de San José, habilitó la reelección continua.

de la democracia”.⁷ Esa concepción liberal de la democracia fue reforzada con una reivindicación de la República como antítesis del Estado Plurinacional que, supuestamente, implicaba un desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Lo republicano y ciudadano fueron esgrimidos por la oposición tradicional como principios civilizatorios y valores modernos en contraste con lo campesino, indígena y popular estigmatizados como corporativos, premodernos y antidemocráticos. Esa apelación a lo liberal le permitió a esta tendencia disputar el sentido de la democracia al MAS.

Desde la derrota del MAS en el referendo constitucional de 2016 se inició una disputa por el sentido de la democracia. A partir de entonces, la oposición enarboló la consigna de “respeto al referendo” como expresión de valores democráticos, tales como alternancia, pluralismo y vigencia del Estado de derecho. Por su parte, el MAS invocaba principios como inclusión social, participación popular, paridad de género e interculturalidad como expresiones de una “ampliación de la democracia” y resaltaba la equivalencia entre democracia y justicia social. En suma, para el MAS el objetivo de la democracia era la igualdad y esa apelación se sostuvo en el clivaje Estado/mercado; en cambio, para el discurso opositor, la meta era la libertad y para ese fin esgrimió la antinomia dictadura/democracia. De esta manera, en torno a la disputa por el sentido de la democracia, la tendencia *oligárquico liberal* dispuso de capacidad para interpelar a sectores de clase media urbana que, además, asumieron elementos discursivos de lo señorial –racista– con aditamentos religiosos, ecologistas y ultraconservadores en derechos humanos. Esta tendencia promovió un golpe de Estado en noviembre de 2019 e impulsó

7 Así, “la sociedad civil como ámbito y actor del espacio de lo público no se identificó con la dimensión popular, con el sujeto pueblo, ni con los actores sociales (...) sino exclusivamente con el individuo que ejerce sus derechos y cumple con sus obligaciones” (Rabotnikof y Aibar, *op. cit.*, p. 63).

un proyecto de restauración oligárquica⁸ que se manifestó en el retorno al poder de algunos de los actores políticos y sociales desplazados del control del Estado en 2006 por dirigentes sindicales, autoridades originarias y mujeres campesinas.

La fuerza oligárquico liberal consiguió una insospechada victoria política en noviembre de 2019 y dirigió un gobierno interino e ilegítimo durante un año, pero no logró forjar una coalición para las elecciones generales de 2020. Fue derrotada por el MAS que resistió los embates de sus adversarios enarbolando la demanda de “recuperación de la democracia”. Esta consigna le permitió articular el sentido liberal de la democracia y conseguir el apoyo del votante medio para vencer, con mayoría absoluta, reforzando el apoyo de una base electoral leal movilizadora por las organizaciones del Pacto de Unidad. De esta manera, *lo nacional popular se impuso a lo oligárquico liberal* provocando una recomposición del espacio político y las relaciones entre oficialismo y oposición.

Espacio político y lógicas de oposición

Un rasgo sobresaliente de la reconfiguración del espacio político es la modificación en las relaciones entre oficialismo y oposición que transita de una nítida lógica binaria a una incipiente multipolaridad. La lógica bipolar se mantiene en el ámbito legislativo (masismo/antimasismo) pero adquiere otros matices en el nivel subnacional con la presencia de actores políticos que no se encuadran en la polarización entre el MAS y la oposición tradicional de raigambre oligárquico liberal. Para caracterizar los rasgos del nuevo espacio político evaluamos los resultados de los procesos electorales de 2020 y 2021.

8 Fernando Mayorga (coord.), *Crisis y cambio político en Bolivia. Octubre y noviembre de 2019: la democracia en una encrucijada*, La Paz: Oxfam/CESU-UMSS, 2020.

Elecciones generales de 2020

Los resultados del 18 de octubre confirmaron la supremacía electoral del MAS con la victoria, por mayoría absoluta, del binomio Luis Arce y David Choquehuanca, y con el mantenimiento del control de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la mayoría absoluta, tanto en el Senado como en Diputados. Los cambios se produjeron en las filas de la oposición porque los dos partidos con más trayectoria y consistencia organizativa (Unidad Nacional y Demócratas) fueron remplazados por organizaciones de reciente creación. La alianza Comunidad Ciudadana obtuvo un distante segundo lugar, seguida de Creemos con una limitada presencia territorial.⁹

Se repitió el esquema de los últimos 15 años caracterizado por un partido oficialista fuerte y una oposición débil y fragmentada pero, ahora, renovada de manera absoluta. En esa medida, se trata de una nueva fase en la historia del sistema de partidos que se define, entre otras cosas, por el número de organizaciones políticas, la distribución de escaños y el modo de interacciones entre sus componentes. Desde 1985, las interacciones partidistas se ordenaron bajo dos modalidades: por una parte, un esquema multipartidista basado en coaliciones mayoritarias con tendencia centripeta (1985-2003) y, por otra, un sistema de partido predominante

9 “Creemos es un partido que ha obtenido el 91% de su apoyo en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Mientras que Comunidad Ciudadana tiene una presencia más equilibrada en todo el territorio particularmente en las ciudades de occidente y del sur” (...). Territorialmente, es una votación predominantemente urbana: alrededor del 70% de los votantes de las dos principales fuerzas del sector (opositor) viene en las metrópolis o las ciudades capitales. Apenas un 15% de ese caudal proviene de los pueblos y áreas rurales dispersas” (*La complejidad territorial del voto en Bolivia. Geografía electoral 2020*, FES y *La Razón*, separata periodística, 13 de diciembre de 2020, La Paz, p. 4). Esta distribución del voto muestra que la base electoral de *lo oligárquico liberal* está afincada en las zonas urbanas.

en contexto de polarización (2005-2019). En ambos períodos prevalecieron mayorías parlamentarias –en general, calificadas de dos tercios– en respaldo al (partido del) presidente.

Cuadro 1 Resultados de las elecciones generales 2020

Agrupación política	Votos	%	Representación parlamentaria	
			Diputados	Senadores
Movimiento al Socialismo (MAS)	3.394.052	55,11%	75	21
Comunidad Ciudadana (CC)	1.775.953	28,83%	39	11
Creemos	862.186	14,00%	16	4
FPV	95.255	1,55%	--	--
PAN-BOL	31.765	0,52%	--	--
Inscritos	7.332.926	--	--	--
Votos válidos	6.159.211	94,99%	130	36
Votos nulos	233.378	3,60%	--	--
Votos en blanco	91.419	1,41%	--	--
Participación	6.484.008	88,42%	--	--

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral.

El modelo de gobernabilidad vigente entre 1985 y 2003 con la formación de cuatro coaliciones de gobierno concluyó con un par de interregnos: los gobiernos interinos de Carlos Mesa (2003-2004) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2004-2006) que estuvieron sometidos a una figura de *gobierno dividido*, situación que se produce cuando el presidente carece de apoyo mayoritario en una o ambas cámaras del Órgano Legislativo.

Desde enero de 2006 prevalece un *sistema de partido predominante* puesto que el MAS obtuvo mayoría de escaños en 2005, 2009, 2014 y 2020. Este modelo se caracteriza porque un partido domina el ámbito legislativo durante un

periodo de tiempo prolongado, es decir, existe competencia electoral pero las fuerzas de oposición no son competitivas (ver cuadros 2, 3 y 4). El proceso electoral de 2020 fue inédito porque se dejaron sin efecto legal los comicios realizados en octubre de 2019. Eso fue resultado de una ruptura del orden constitucional en noviembre de 2019 cuando Jeanine Áñez asumió la presidencia –en un vacío legal, sin aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y mediante un acto de autoproclamación– y se puso al mando de la coalición de fuerzas opositoras que impulsaron el derrocamiento de Evo Morales. Al mando de ese gobierno interino, los rivales del MAS desplegaron una serie de acciones dirigidas a debilitarlo, inclusive intentaron su proscripción. Sin embargo, un año después, el sistema de partidos volvió a tener como pivote al MAS denotando la fortaleza organizativa y arraigo electoral de este partido.¹⁰

Por otra parte, el número de partidos políticos fue decreciendo. Entre 1982 y 2002, el Congreso tuvo más de cinco fuerzas relevantes, ninguna mayoritaria. Después de los comicios de 2005 y 2009, cuatro partidos o alianzas formaron parte del Órgano Legislativo; cantidad que se redujo a tres organizaciones políticas en 2014 y 2020. El MAS es la única organización política con presencia constante en el ámbito legislativo desde 2002. En cambio, las fuerzas opositoras fueron coyunturales: los frentes Podemos (2005-2009) y Plan Progreso para Bolivia (2009-2014) desaparecieron prontamente. Los partidos con presencia entre 2014 y 2019, Unidad Nacional (UN) y Movimiento Demócrata Social

10 En la primera gestión de Evo Morales (2006-2009) se dio una figura de *gobierno dividido* puesto que, a partir del segundo año, la oposición hizo prevalecer su mayoría en el Senado convirtiéndose en un actor con capacidad de veto. En las gestiones 2009-2014 y 2015-2019, el MAS dispuso de mayoría calificada (dos tercios) en Diputados y Senadores. Para la actual gestión, el MAS controla las dos cámaras, pero sin mayoría calificada; una situación que, en algunos temas, permite cierto control multipartidista, es decir, una incidencia de la oposición.

(Demócratas), ya no forman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).¹¹ Para los comicios generales de 2020, Demócratas y UN conformaron un frente para impulsar la candidatura de Jeanine Áñez, empero un mes antes de las elecciones ella declinó y ambas fuerzas se retiraron de la contienda. De esta manera, los partidos opositores con mayor trayectoria quedaron marginados del espacio político.

Ahora bien, Comunidad Ciudadana y Creemos, las fuerzas políticas que sustituyeron a Demócratas y UN en la ALP, son organizaciones de reciente creación que carecen de institucionalidad partidista y que forjaron alianzas circunstanciales en el proceso electoral de 2020 (aunque Comunidad Ciudadana se creó un año antes para impulsar la candidatura de Carlos Mesa). Creemos fue un frente electoral que contó con la participación de partidos –como Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Partido Demócrata Cristiano (PDC)–, y agrupaciones –Seguridad, Orden y Libertad; Libertad y Democracia Renovadora; Movimiento de Organización Popular; y Columna de Integración–. Esa alianza fue contingente y, por ese motivo, para los comicios subnacionales de 2021, Creemos se inscribió como agrupación ciudadana para participar en las elecciones de gobernador en Santa Cruz. En otras regiones, como Beni y Pando, formó frentes electorales con otras organizaciones denotando sus limitaciones institucionales y territoriales.

11 UN tuvo representación parlamentaria durante tres gestiones consecutivas y entre 2014-2019 formó un frente con Demócratas. Es el partido opositor con más trayectoria puesto que se fundó en 2003. Por su parte, Demócratas se forjó en 2006 bajo la figura de agrupación ciudadana, y luego, como partido político nacional a partir de su peso electoral en Santa Cruz y el manejo de la Gobernación durante 15 años. En los comicios anulados de 2019, Demócratas y UN formaron una alianza (Bolivia Dice No) que obtuvo una ínfima votación. Su candidato presidencial fue Oscar Ortiz, quien presidió el Senado (2007-2009) como parte de la bancada de Podemos denotando ciertas continuidades en las filas de la oposición a pesar del cambio de siglas y la desaparición de fuerzas políticas.

Por su parte, Comunidad Ciudadana se inscribió en 2019 como una alianza electoral formada por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Soberanía y Libertad (SOL.bo), Agrupación Ciudadana Jesús Lara, Primero la Gente y Somos Todos. En general, en los comicios de 2019 y 2020, Comunidad Ciudadana optó por la debilidad orgánica e institucional evitando suscribir pactos con fuerzas partidistas desdeñando lazos con sectores sociales y, por ende, presencia territorial, interpelando a una “ciudadanía” en abstracto, mediante redes sociales y medios de comunicación, y articulando a “plataformas ciudadanas” que fluctúan entre la política institucional y el activismo apartidista. En los comicios subnacionales se subordinó a fuerzas locales y no presentó candidatos en la mayoría de gobernaciones y alcaldías.

En suma, los resultados de los comicios generales del 18 de octubre de 2020 inauguraron una nueva fase en el sistema de partidos. Aunque el MAS se mantiene como partido predominante, sin embargo, se produjo una radical recomposición en las filas de la oposición. Estos rasgos se reafirmaron con los resultados de las elecciones subnacionales de marzo-abril de 2021 que se caracterizaron por la victoria de fuerzas rivales del MAS que no forman parte de la oposición tradicional y denotan, más bien, una diversificación en el campo nacional popular el cual, hasta entonces, estaba ocupado de manera excluyente por el MAS. Este partido, por su parte, está inmerso en un proceso de reacomodo institucional y enfrentó conflictos internos durante el proceso electoral de 2021.

Elecciones municipales y departamentales de 2021

En los comicios de marzo de 2021, con segunda vuelta en abril para gobernadores en cuatro departamentos, se repitió el comportamiento electoral de los anteriores ciclos electorales. El MAS venció con mayoría absoluta de votos en las elecciones generales de 2005, 2009 y 2014; en cambio, en las contiendas

subnacionales de 2005, 2010 y 2015, no superó el 50% de votos, a nivel general, y varias gobernaciones y alcaldías importantes fueron ocupadas por diversas fuerzas de oposición, en la mayoría de los casos sin vínculo con los partidos con representación parlamentaria. Un aspecto destacable del reciente ciclo electoral es que –en la distribución horizontal del poder– se produjo una sustitución de organizaciones políticas en las filas de la oposición parlamentaria que mantienen una postura antimasista bajo una lógica binaria; en cambio, en la distribución vertical del poder se produjo una diversificación de las fuerzas rivales del MAS con la irrupción y victoria de candidatas/os que, en el pasado, estaban ligadas/os al partido de gobierno. Excepto el caso de Creemos, la mayoría de las autoridades subnacionales de signo opositor no tiene vínculo con los partidos parlamentarios.

Por otra parte, Comunidad Ciudadana perdió la oportunidad de constituirse en una organización con presencia nacional puesto que optó por una estrategia de subordinación a las relaciones de fuerza locales en vez de consolidar su base de apoyo electoral. Sin candidatos propios en la mayoría de las alcaldías importantes y gobernaciones no pudo traducir la fuerza electoral que obtuvo en los comicios generales en capacidad para articular a las fuerzas opositoras al MAS.

La estrategia de Creemos, por su parte, fue más certera porque optó por consolidar su fuerza electoral en Santa Cruz con la postulación de Luis Fernando Camacho como gobernador. Este es un cambio sustantivo en el mapa político cruceño que expresa un recambio en el liderazgo regional. A diferencia de Comunidad Ciudadana, Creemos tiene mayores posibilidades de desarrollar acciones para consolidarse institucionalmente puesto que esta organización política está al mando del Gobierno Departamental de Santa Cruz –un importante recurso de poder institucional– y Luis Fernando Camacho tiene el incentivo de una posible candidatura presidencial.

En la elección de gobernadores, los resultados fueron desfavorables para el MAS porque fue derrotado en primera

vuelta en Santa Cruz y en Beni, perdió en segunda vuelta en La Paz, Pando, Chuquisaca y Tarija y solo venció en Cochabamba, Potosí y Oruro. Ahora bien, únicamente dos gobernadores forman parte de la oposición tradicional –Unidos para Renovar (UNIR) en Tarija y Creemos en Santa Cruz–; en cambio, las autoridades electas en La Paz, Chuquisaca, Pando y Beni se alinean en posturas ideológicas cercanas al MAS o, en todo caso, sus candidatos militaron en filas masistas. Este es un dato sobresaliente porque denota una modificación en el campo nacional popular, cuyos rasgos analizamos en el siguiente acápite.

A nivel municipal, el MAS venció en 240 alcaldías pero perdió en siete ciudades capitales de departamento y en El Alto. Al mismo tiempo, sus rivales vencieron en casi un centenar de municipios pero distribuyéndose en casi 50 frentes locales y regionales. Las fuerzas con mayor presencia son el Movimiento Tercer Sistema (MTS) con diez municipios, Unidos con ocho, Venceremos y Creemos con siete, y Demócratas con cinco alcaldías.

En los municipios más importantes se repitieron los resultados de los comicios de 2015 puesto que las alcaldías de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y El Alto continúan en manos de rivales del MAS aunque con novedades importantes puesto que los vencedores no responden a las fuerzas de oposición tradicional.¹² Un hecho destacable fue la contundente victoria de Eva Copa en El Alto en contienda contra el MAS, que la marginó de sus listas. Su victoria marca un hito porque se trata de la emergencia de un liderazgo que proviene de las filas del MAS, que tuvo un importante desempeño como presidenta interina del Senado

12 Antes de asumir sus cargos, Iván Arias (La Paz), Manfred Reyes Villa (Cochabamba) y Jhonny Fernández (Santa Cruz de la Sierra) desistieron de asistir a una reunión convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz que pretendía articular una coalición opositora tradicional con gobernadores y alcaldes opositores a la usanza del pasado.

y que dispone de capacidad para interpelar al oficialismo desde posturas distintas a la oposición tradicional, así como de legitimidad para disputar la orientación del “proceso de cambio”. Su contundente victoria y su presencia como alcaldesa expresan la emergencia de nuevos actores que diversifican el campo nacional popular puesto que este ya no está ocupado y representado de manera casi exclusiva por el MAS. Esta posición de disidencia –o sin vínculo con la oposición tradicional– se repitió con las victorias de candidatos a gobernadores que estuvieron en las filas del MAS o que tienen afinidad ideológica con su proyecto, como es el caso de Santos Quispe de Juntos al Llamado de los Pueblos (Jallalla) en La Paz; Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST) en Chuquisaca; y Regis Richter del Movimiento Tercer Sistema (MTS) en Pando.

En suma, de una relación estrictamente bipolar entre oposición y oficialismo que caracterizó la disputa política entre 2006 y 2019 se transita a una relación más compleja de carácter multipolar entre oficialismo y oposición como resultado de modificaciones en el campo oligárquico liberal y, sobre todo, en el campo nacional popular.

Campo nacional popular

El campo nacional popular se ha diversificado con la presencia de nuevos actores, alcaldesas y gobernadores, la mayoría vinculados al MAS en el pasado. Sobresale la personalización en la representación política puesto que las organizaciones son secundarias (MTS, Jallalla y CST).

Para evaluar estos cambios es preciso mencionar tres fases en el accionar de *lo nacional popular* desde la incursión política del movimiento campesino e indígena a fines de los años noventa del siglo pasado que coincide con el inicio de la crisis de la democracia pactada y del neoliberalismo.

En primer lugar, el ciclo de protestas inaugurado en abril de 2000 con la “guerra del agua” en Cochabamba y concluido en octubre de 2003 en El Alto con la “guerra

del gas”, que tuvo como protagonistas a los sindicatos campesinos, cocaleros, mineros, fabriles y juntas vecinales. Esas movilizaciones fueron comandadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las federaciones de cocaleros del trópico cochabambino y las juntas vecinales de El Alto. Esa poderosa red organizativa se complementó con la incursión del MAS, concebido como “instrumento político” de las organizaciones sindicales, en la arena legislativa y municipal desde 1999. En las elecciones generales de 2002, el MAS y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) lograron representación parlamentaria. El MAS tuvo como candidato a Evo Morales, principal dirigente de los cocaleros, y el MIP a Felipe Quispe, que estuvo al mando de la CSUTCB. En ese período, las organizaciones campesinas e indígenas conformaron el Pacto de Unidad y realizaron marchas exigiendo una Asamblea Constituyente, demanda que había sido planteada en la Marcha por la Dignidad y el Territorio realizada por los pueblos indígenas de tierras bajas en 1990; esta propuesta se articuló con la demanda de nacionalización de los hidrocarburos. Así nació la “agenda de octubre” como el programa de *lo nacional popular*. Si en 1952, la consigna fue “tierra a los indios, minas al Estado”, en 2003 era “Asamblea Constituyente y nacionalización de los hidrocarburos”.

En segundo lugar, la victoria de Evo Morales con mayoría absoluta en 2005 convirtió al MAS en la principal fuerza política. Esa mayoría se ratificó en las dos siguientes elecciones con victorias contundentes bajo el liderazgo de Evo Morales y sin rivales en el campo popular, puesto que el MIP no se presentó a las elecciones generales de 2005 y los partidos de izquierda o vinculados a organizaciones populares –como Alianza Social (AS), el Movimiento Sin Miedo (MSM) y el Partido Verde de Bolivia (PVB)– lograron exiguas votaciones en 2009 y 2014. Entre 2006 y 2019, el MAS dominó el campo nacional popular con características peculiares porque era

parte de una coalición flexible conformada entre el gobierno y las organizaciones populares cuyas relaciones dependían de los temas de coyuntura política y de las respuestas a sus demandas. En la Asamblea Constituyente *lo nacional popular* estuvo liderado por campesinos e indígenas puesto que la bancada oficialista actuó bajo el mando del Pacto de Unidad conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas Bartolina Sisa (CNMIOC-BS), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).

En 2007, se conformó la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para enfrentar a Conalde, una poderosa coalición opositora. Esta entidad incluyó, además del Pacto de Unidad, a fabriles, gremiales, transportistas, trabajadores mineros asalariados, cooperativistas mineros, universitarios y jubilados. En algunas coyunturas, la Central Obrera Bolivia (COB) participó en dicha coalición en respaldo al gobierno.

En tercer lugar, después del golpe de Estado, en un ampliado del MAS realizado en diciembre de 2019, se decidió la extinción de Conalcam y el Pacto de Unidad asumió la tarea de encarar la resistencia al gobierno de Añez y trazar la estrategia electoral del MAS. Las confederaciones campesinas y las federaciones de cocaleros del trópico cochabambino se convirtieron en las instancias decisorias de las protestas antigubernamentales y la movilización electoral en coordinación con Evo Morales, presidente del MAS, que estaba exiliado en Argentina.

La rearticulación de *lo nacional popular* también se produjo de manera espontánea y al margen de las directrices partidistas y sindicales. Un hecho decisivo fue la masiva reacción popular de repudio a la quema y destrucción de wiphalas durante el golpe de Estado. Su defensa como bandera

nacional, deslindada del MAS, fortaleció la identificación e identidad indígena. Ese símbolo patrio se convirtió en un referente para las protestas contra el gobierno interino.¹³ Durante la gestión gubernamental de Jeanine Áñez, que se extendió debido a la pandemia del coronavirus obligando a postergar las elecciones generales, algunos sectores populares periurbanos, sobre todo en Cochabamba y El Alto, se organizaron bajo la modalidad de “autoconvocados” para realizar protestas sin mediación partidista ni sindical. Por su parte, a pesar de las persecuciones judiciales y las acciones represivas, las federaciones de cocaleros del trópico cochabambino organizaron caravanas de solidaridad para proveer de alimentos a comunidades, pueblos intermedios y barrios marginales bajo la consigna de “Solo el pueblo salva al pueblo”.

La centralidad de lo campesino indígena se manifestó en el debate para definir el binomio del MAS porque, inicialmente, un ampliado del Pacto de Unidad, realizado en Huanuni, eligió a David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez. Esa decisión, sin embargo, fue reconsiderada en una reunión entre la dirigencia del MAS y los representantes sindicales que se llevó a cabo en Buenos Aires, bajo la dirección de Evo Morales, en la que se eligió el binomio conformado por Luis Arce y David Choquehuanca; decisión que, finalmente, tuvo ser ratificada en otro ampliado del Pacto de Unidad, realizado en El Alto, en aras de la unidad entre el MAS y las organizaciones populares.

Debido a la pandemia, las elecciones, inicialmente previstas para mayo de 2020, se pospusieron tres veces. En agosto, ante una decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para postergar los comicios hasta el 18 de octubre,

13 Al respecto, véase Pablo Mamani Ramírez (coord.), *Wiphalas, luchas y la nueva nación. Relatos, análisis y memorias de octubre-noviembre de 2019 desde El Alto, Cochabamba y Santa Cruz*, La Paz: FES, Círculo de Estudios Estratégicos de El Alto, Nina Katari, Revista Willka, 2020.

la COB, sindicatos mineros y organizaciones campesinas convocaron a un bloqueo de caminos exigiendo la realización de los comicios en el primer domingo de septiembre, fecha que había sido consensuada entre el TSE y los partidos políticos. A la protesta se sumaron varios actores sin vínculo con el MAS ni el Pacto de Unidad, entre ellos se destacó Felipe Quispe “el Mallku”, exdirigente de la CSUTCB y rival de Evo Morales en el pasado. La amplitud de la movilización expresaba la fuerza que adquirió la consigna de “recuperación de la democracia” en el campo nacional popular que ya no se circunscribía al MAS. Esos días, varios dirigentes cuestionaron a la bancada del MAS por aprobar la ley que ratificó la fecha de elecciones para el 18 de octubre de 2020 y algunos sectores movilizados asumieron posiciones radicales pidiendo la renuncia de Áñez.

Las movilizaciones de agosto fueron las primeras señales de una diversificación de *lo nacional popular* que, sin embargo, en los comicios generales de 2020 actuó de manera compacta en apoyo al binomio del MAS otorgándole la victoria con mayoría absoluta. Un triunfo asentado en “su significativa presencia territorial en casi todos los municipios y en un nivel de apoyo muy elevado en las zonas rurales dispersas y en los pueblos pequeños... y el importante aporte electoral de los centros urbanos metropolitanos y de las localidades intermedias, principalmente en el occidente”.¹⁴ Sin duda, el voto campesino e indígena, sobre todo aymara y quechua, fue la base de las victorias electorales del MAS entre 2005 y 2020 y le permitió convertirse en la fuerza política con presencia exclusiva en el campo nacional popular. Este panorama sufrirá algunas modificaciones con los resultados de las elecciones subnacionales de 2021.

En las elecciones departamentales, el MAS venció en tres gobernaciones: Cochabamba, Oruro y Potosí. En los

14 *La complejidad territorial del voto en Bolivia. Geografía electoral 2020*, FES y *La Razón*, separata periodística, 13 de diciembre de 2020, La Paz, p. 2.

dos primeros casos se enfrentó a candidatos de fuerzas de la oposición tradicional (Súmate y Sol para Oruro), en cambio, en Potosí se enfrentó a un candidato postulado por Alianza Social (AS), que recibió el apoyo de una fracción del MAS la cual cuestionó la designación de Johnny Mamani como candidato propuesto por Evo Morales.¹⁵ Estas divergencias internas se repitieron en cuatro departamentos en los cuales el MAS fue derrotado: Beni, Pando, La Paz y Chuquisaca. En Beni, el vencedor fue Alejandro Unzueta, un candidato independiente que fue invitado por el MTS¹⁶ y que ganó en primera vuelta con más de diez puntos de diferencia a su rival del MAS.¹⁷

En Pando, Regis Richter también postuló por el MTS a la Gobernación y venció en segunda vuelta al candidato del MAS. Esa derrota se explica como una reacción de las bases a una decisión de la dirección nacional del MAS que desconoció las resoluciones de un ampliado del Pacto de

-
- 15 En un ampliado se eligió como candidato a Johnny Mamani, presidente de la Asociación de Municipalidades de Potosí, quien fue ratificado por la dirigencia del MAS. Empero, cuando Evo Morales se retiró del acto, un grupo de delegados se volvió a reunir y eligió a Edilberto Chambi. La dirección del MAS ratificó la candidatura de Mamani y Chambi terminó como candidato por Alianza Social (AS). También en Cochabamba cuestionaron la designación del candidato a gobernador pero no se presentó una candidatura disidente.
- 16 El vencedor, sin vínculo partidista previo, marcó una postura ajena a la oposición tradicional: “En ningún momento yo voy a ser opositor del Movimiento al Socialismo. Luis Arce Catacora es nuestro presidente, entonces vamos más bien a ponernos a disposición para hacer proyectos concurrentes para mi región” (Edwin Condori, “Alejandro Unzueta, gobernador electo del Beni: ‘En ningún momento voy a ser opositor del MAS’”, *La Razón*, 11 de marzo de 2021, en: <https://www.la-razon.com/nacional/2021/03/11/alejandro-unzueta-en-ningun-momento-voy-a-ser-opositor-del-mas/>).
- 17 Los conflictos internos ocurrieron en Trinidad para designar al candidato a alcalde por el MAS. Los delegados no se pusieron de acuerdo y los participantes se insultaron y arrojaron sillas.

Unidad en el que, previamente, se había elegido a Richter como candidato.¹⁸

La victoria del MTS en Beni se explica por el prestigio personal del candidato y en Pando por el apoyo de las bases del MAS a un disidente. Ambos fueron invitados por el MTS, un partido afincado en La Paz y organizado en torno a Félix Patzi, ministro en el primer gobierno de Evo Morales.¹⁹ Al respecto, Patzi declaró: “Hemos saltado de los Andes a la Amazonia... El desafío ahora es consolidar el partido mediante la ideologización y mejor estructura en toda Bolivia con miras al 2025”. Destaca el accionar del MTS en La Paz puesto que en el balotaje apoyó al candidato del MAS. En suma, es una fuerza política que nace como resultado del alejamiento de su principal dirigente de las filas del MAS y tiene como base programática el comunismo que se sustenta en las prácticas económicas y políticas de la población indígena. En esa medida forma parte del campo nacional popular y rivaliza con el MAS en términos programáticos.

-
- 18 Evo Morales había publicado el siguiente tuit: “El Vpdte. del MAS, Gerardo García y dos miembros de la Dirección Nacional nos informan que se eligió a nuestros candidatos por el departamento de #Pando. El hermano Miguel ‘Chiquitín’ Becerra es nuestro candidato a gobernador”. Este mensaje causó malestar en las filas del partido puesto que el Pacto de Unidad y la dirigencia departamental del MAS habían elegido a Regis Richter como candidato en un ampliado con la presencia de más de ochenta organizaciones sociales.
- 19 Patzi optó por fundar el MTS debido a la cancelación de su candidatura a gobernador por el MAS en 2010, a raíz de un escándalo público. En 2015 fue electo como gobernador de La Paz como candidato por Soberanía y Libertad (SOL.bo), fuerza opositora al MAS. En noviembre de 2016, el MTS consigue su personería jurídica y más adelante cuestiona la repostulación de Evo Morales. En las elecciones generales de 2019, con Patzi como candidato presidencial, el MTS obtuvo una votación mínima. En 2020, el MTS no presentó candidatos y sus militantes anunciaron su respaldo al binomio del MAS porque consideraban que era el único partido que representaba a los indígenas.

Los casos de Chuquisaca y La Paz tienen otro rasgo puesto que el MAS fue derrotado por fuerzas locales articuladas en torno a candidatos con trayectorias disímiles: Damián Condori por el CST y Santos Quispe por Jallalla.

Damián Condori venció al candidato del MAS en balotaje. Es una revancha personal puesto que, en 2015, en las elecciones para gobernador se enfrentó al MAS como disidente, pero perdió debido a una decisión arbitraria del Tribunal Electoral Departamental. Su trayectoria lo sitúa en el campo nacional popular puesto que, como dirigente sindical, estuvo en las filas del MAS.²⁰

En el caso de La Paz, Santos Quispe venció a Franklin Flores del MAS en balotaje. Su candidatura fue inesperada porque suplió a su padre, Felipe Quispe, fallecido unos meses antes de la contienda. “El Mallku” era favorito en las elecciones porque tuvo un notable protagonismo en los bloqueos de agosto y apoyó al binomio del MAS en las elecciones generales. Años antes fundó Adelante Pueblo Unido (APU) pero, como carecía de personería jurídica, firmó un acuerdo con Jallalla para candidatear como gobernador.²¹

20 En 2015, fue seleccionado por la Federación Departamental de Campesinos como candidato a gobernador a Chuquisaca pero la Dirección Nacional del MAS optó por otra persona. La respuesta de Condori fue fundar Chuquisaca Somos Todos (CST) para enfrentar al MAS. En 2015, alcanzó el segundo lugar y cuando se esperaba la realización del balotaje, el Órgano Electoral anuló los votos a favor de un partido cuyo candidato se había retirado de la contienda. Esa decisión disminuyó el total de votos válidos y aumentó el porcentaje del candidato del MAS, con lo que logró superar la barrera del 50% para ser elegido en primera vuelta.

21 Jallalla fue fundado el 2 de octubre del 2019 por Leopoldo Chui a raíz de su ruptura con un partido que lo desconoció como candidato a la Vicepresidencia en 2019. En los comicios de 2020, Chui tuvo otro intento fallido de candidatear como vicepresidente de otra fuerza política. Para las elecciones subnacionales, Jallalla entabló conversaciones con varias personalidades a fin de que sean candidatos a gobernadores y alcaldes en el departamento de La Paz, entre los que sobresalieron Felipe Quispe, para gobernador de La Paz, y Eva Copa para alcaldesa de El Alto.

A nivel municipal destacan dos casos de mujeres disidentes del MAS: Ana Lucia Reis, electa alcaldesa en Cobija como candidata por el MTS y Eva Copa, quien se impuso en El Alto por Jallalla.

Ana Lucia Reis fue diputada plurinominal por el MAS y, en 2010, ganó la elección municipal en Cobija. En 2015 intentó ser reelecta pero fue derrotada. Con miras a los comicios de 2021, Reis pretendió postular otra vez por el MAS, sin embargo, la dirección nacional descartó su candidatura porque, supuestamente, no tenía apoyo de las organizaciones sociales.

Eva Copa fue senadora por el MAS y asumió la presidencia de la Cámara Alta después del golpe de Estado de noviembre de 2019. Tuvo un destacado desempeño en una difícil coyuntura y adquirió mucho prestigio político. Era candidata favorita para vencer en El Alto pero la dirección del MAS optó por otro militante desoyendo el apoyo de las organizaciones de base. Eva Copa decidió participar con la sigla de Jallalla para enfrentar al MAS y venció obteniendo el 67% de la votación. Después de las elecciones, Copa rompió con Jallalla para impulsar la formación de RenuEva, una fuerza política propia.

En suma, la diversificación del campo nacional popular es resultado de múltiples circunstancias entre las que destaca el peso de los liderazgos personales y la debilidad de las organizaciones políticas que los postularon. En la mayoría de los casos se trata de un acuerdo instrumental de mutuo beneficio, excepto en Chuquisaca donde actúa una fuerza local.

Al margen de estas características, lo que interesa resaltar es que *lo nacional popular* puede manifestarse de manera diversa y plural en términos electorales y sin depender de la mediación partidista del MAS. Es necesario destacar, sin embargo, que esta renovación en el campo nacional popular se explica, en

Después de su elección como gobernador, Santos Quispe –hijo de Felipe Quispe que reemplazó a su padre en la candidatura poco después de que este falleciera, repentinamente, el 19 de enero de 2021– rompió con Jallala y retomó la sigla política de su padre, APU.

cierta medida, por los conflictos internos en el MAS los cuales tienen su origen en la búsqueda de un modelo de toma de decisiones capaz de sustituir el esquema vigente entre 2006 y 2019. Durante ese período, el proceso decisional funcionó en torno a Evo Morales que, como presidente del Estado, del partido y de Conalcam, concentraba el proceso decisional, aunque en una lógica de consulta con las organizaciones sociales. Ese modelo se desarmó el 10 de noviembre de 2019 y, desde entonces, el MAS se encuentra en la búsqueda contingente de una modalidad decisional sustituta entre el gobierno –al mando de Luis Arce–, el partido –bajo la jefatura de Evo Morales– y las organizaciones del Pacto de Unidad.

Un efecto de esta búsqueda contingente fue el surgimiento de conflictos en la definición de las candidaturas para los comicios subnacionales. Estos conflictos fueron la consecuencia del incumplimiento de las resoluciones de un ampliado del MAS realizado en diciembre de 2020 que había resuelto que la definición de las candidaturas debía seguir dos criterios: renovación de cuadros y elección de candidatos y candidatas en las asambleas de las organizaciones. Ese incumplimiento se explica por la existencia de una contradicción, antes inexistente, entre las organizaciones sociales, agrupadas en el Pacto de Unidad, y el partido. En varios distritos no se respetó la decisión orgánica de las asambleas y la dirigencia del partido impuso candidatos, es decir, se produjo una disyunción que derivó en el marginamiento o la disidencia de importantes dirigentes del partido que decidieron enfrentar al MAS como candidatos de otras fuerzas políticas. En varios casos, los reclamos por las derrotas electorales se enfocaron en Evo Morales quien, desde su retorno al país, ejerce la presidencia del partido –su único recurso de poder– y, paradójicamente, impulsa el fortalecimiento del MAS como aparato institucional; una acción que puede ir en desmedro del funcionamiento convencional del “instrumento político” desde su fundación. En la medida en que el MAS no resuelva sus contradicciones

internas y las desavenencias entre las organizaciones populares y el partido, seguirán presentes las condiciones que permitan la presencia de nuevos actores en el campo nacional popular, ya sea como fruto de disidencias o divisiones en su seno.

En todo caso, la diversificación del campo nacional popular es un hecho que fortalece la representación política y, por ende, la democracia, aunque, por ahora, se circunscribe al ámbito subnacional. Sin duda, su impacto en el decurso del proceso político con miras a las próximas elecciones generales es una incógnita puesto que depende del desempeño de los actores estratégicos, en particular de las fuerzas con representación parlamentaria. Es evidente que el desenlace de las pugnas internas en el MAS definirá la composición del campo nacional popular. En cambio, en el campo oligárquico liberal es previsible una disputa por la conducción hegemónica entre Comunidad Ciudadana y Creemos, en torno a la forja de un proyecto político alternativo que les permita articular una coalición con aptitud para competir exitosamente en las urnas con el MAS.

Cuadro 2 Resultados de las elecciones generales 2005

Agrupación política	Votos	%	Representación parlamentaria	
			Diputados	Senadores
Movimiento al Socialismo (MAS)	1.544.374	53,74%	72	12
Poder Democrático Social (Podemos)	821.745	28,59%	43	13
Unidad Nacional (UN)	224.090	7,79%	8	1
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)	185.859	6,47%	7	1
Otras agrupaciones	97.733	3,40%	--	--
Inscritos	3.671.152	--	--	--
Votos válidos	3.102.417	84,5%	130	27

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral.

Cuadro 3 Resultados de las elecciones generales 2009

Agrupación política	Votos	%	Representación parlamentaria	
			Diputados	Senadores
Movimiento al Socialismo (MAS)	2.943.209	64,22%	88	26
Convergencia Nacional (CN)	1.212.795	26,46%	37	10
Unidad Nacional (UN)	258.971	5,65%	3	--
Alianza Social (AS)	106.027	2,31%	2	--
Otras fuerzas	97.733	1,35%	--	--
Inscritos	5.088.924	--	--	--
Votos válidos	4.582.785	90%	130	36

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral.

Cuadro 4 Resultados de las elecciones generales 2014

Agrupación política	Votos	%	Representación parlamentaria	
			Diputados	Senadores
Movimiento al Socialismo (MAS)	3.053.846	61,04%	86	25
Unidad Demócrata (UD)	1.225.095	24,49%	33	9
Partido Demócrata Cristiano (PDC)	453.647	9,07%	11	2
Movimiento Sin Miedo (MSM)	135.885	2,72%	--	--
Partido Verde de Bolivia (PVB)	134.792	2,69%	--	--
Inscritos	5.973.901	--	--	--
Votos válidos	5.003.265	84%	130	36

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral.

III

Cambios y situación del sistema de representación política en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas

*María Teresa Zegada y
Marcelo Arequipa Azurduy*

Introducción

El presente texto nació de la inquietud compartida por comprender los cambios y continuidades en las organizaciones políticas a partir de la aprobación de la nueva Ley de Organizaciones Políticas (LOP) –Ley 1096, del 1 de septiembre de 2018– y del intenso proceso político vivido en 2019 y 2021, marcado por escenarios electorales y de conflictividad social y política: elecciones primarias inéditas, elecciones generales (una sin efecto legal y otra válida) y, por último, un proceso electoral subnacional; todo ello en medio de movilizaciones sociales y conflictos permanentes.

Pensamos que, con el tiempo transcurrido y tras el variado ejercicio político electoral, el contexto que vivimos nos obliga a pensar en los alcances de la Ley 1096 y en la dinámica instalada a partir de la competencia político-electoral, de cara a los siguientes procesos electorales de 2025 y 2026. Con ese objetivo, en lo que sigue, desarrollaremos este planteamiento. El documento está estructurado en dos partes: en la primera, se propone un balance político-electoral del desempeño de las principales organizaciones políticas entre 2020 y 2021; y, en la segunda, se presenta un análisis comparado de las organizaciones políticas en el que se incluye un recorrido

pormenorizado de las elecciones primarias del 2019, de las relaciones internas y sus dificultades en los partidos políticos relevantes del sistema, referidas sobre todo al rol de sus dirigencias, a la toma de decisiones y a los mecanismos de reclutamiento y selección de candidatos; asimismo, se incluye un análisis de las relaciones de las organizaciones políticas con la sociedad y los electores y, en particular, con las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, pretendemos establecer los rasgos de la relación con los otros partidos del sistema y sus interacciones, buscando identificar las características actuales de funcionamiento de las organizaciones políticas, sus problemas principales y sus derroteros, a través de una relación dinámica con el contexto político y social.

Se concluye con un análisis de los aspectos relevantes de la LOP por parte de las propias organizaciones, un balance de su aplicación y las visiones generales respecto de algunos aspectos considerados problemáticos o positivos de la norma. En el mismo sentido, se establecen algunas recomendaciones que fueron emergiendo en el transcurso del trabajo desarrollado y de las entrevistas que realizamos a varios actores clave vinculados con las organizaciones políticas más relevantes sobre todo a nivel nacional, sin descuidar una mirada también regional.¹

I. EL DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES DE 2020 Y 2021

A la hora de analizar el desempeño de las distintas organizaciones políticas entre el 2020 y el 2021 no se puede soslayar una variable fundamental referida al diferente tipo de procesos electorales que se han llevado a cabo: elecciones

1 Se han realizado un total de nueve entrevistas a representantes de los principales partidos y agrupaciones ciudadanas con presencia territorial. Se mantiene en reserva la identidad de los entrevistados.

generales, en el primer caso, y elecciones subnacionales (departamentales y municipales) en el segundo.

Por tanto, lo que se hará a continuación es separar los procesos electorales según el tipo de elección, aprovechando de comparar los resultados con procesos electorales anteriores similares, es decir tanto nacionales como departamentales y municipales.

Procesos electorales generales 2014 y 2020

Una constante en relación con los partidos es el hecho de que el MAS compite, desde 1997, de manera ininterrumpida en procesos electorales (Zuazo, 2009). En este caso, no sucede algo diferente. Sin embargo, el bloque de partidos que compiten contra el MAS no registra la misma constante en el tiempo. Por lo que la revisión de los resultados de las elecciones generales 2014 y 2020 se divide en tres grupos asignados según las principales fuerzas políticas que recibieron apoyo electoral. El primer grupo está compuesto por el mismo MAS; el segundo por las alianzas Unidad Demócrata (UD) y Comunidad Ciudadana (CC); y el tercero por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Creemos.

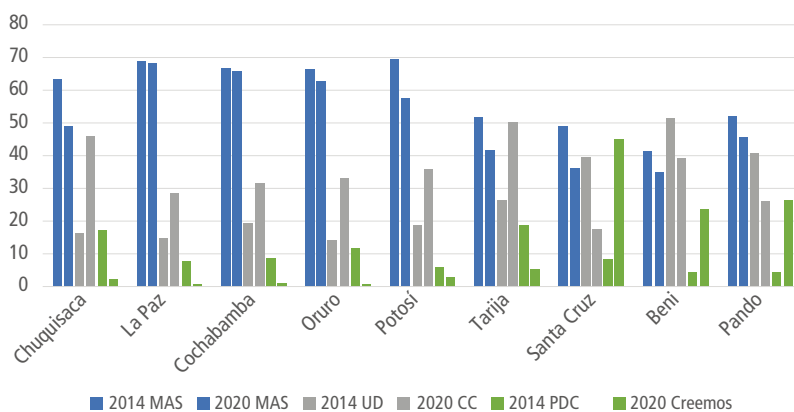
Si se observa en el gráfico 1, el desempeño del MAS entre 2014 y 2020 mantiene un apoyo electoral similar en los departamentos de La Paz y Cochabamba (con 68 y 66 puntos porcentuales, respectivamente), desciende levemente en Oruro y Pando; y presenta menores niveles de apoyo entre elecciones en los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Santa Cruz. Pero, a pesar de haber descendido un poco en votación, el predominio que tiene como primera fuerza política votada en cinco de nueve departamentos es notorio respecto de su inmediato competidor; lo que le permite contar con una hegemonía en occidente y en el valle, como un dato determinante, lo cual invita a realizar una lectura más profunda sobre sus consecutivas victorias electorales.

En el caso del bloque de oposición política, se observa que las segundas fuerzas políticas en ambos procesos electorales

varían en su presencia regional. UD, en 2014, tiene un claro predominio en los departamentos del oriente boliviano (Santa Cruz, Beni y Pando), mientras que CC, el 2020, logra un mejor desempeño en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí y Tarija.

Mientras tanto, la tercera fuerza política entre elecciones varía. El PDC, el 2014, presenta un desempeño que destaca solamente en Tarija y Chuquisaca. Luego, en 2020, Creemos mantiene una importante votación en Santa Cruz, Beni y Pando. Los desempeños observados nos hacen pensar que la oposición al MAS mantiene un comportamiento distinto en función a las candidaturas y organizaciones políticas que compiten en los distintos procesos electorales, y que pudieran tener un correlato con la imposibilidad de proyectar una propuesta a nivel nacional.

Gráfico 1 Desempeño electoral de la primera, segunda y tercera organizaciones políticas entre elecciones generales, 2014-2020 (en %)



Fuente: Elaboración propia en base a resultados oficiales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Un dato curioso, tanto el 2014 como el 2020, es la participación electoral de cinco organizaciones políticas; el 2020 hubo tres más, pero poco antes de las elecciones

decidieron abandonar el proceso electoral (Libre 21, ADN y Juntos).

Elecciones departamentales y municipales 2015-2021

El caso de las elecciones para la máxima autoridad departamental (Gobernador) tiene algunos matices importantes en relación con el desempeño electoral de las organizaciones políticas. En la elección del 2015 participaron 24 organizaciones políticas entre agrupaciones ciudadanas y partidos políticos; mientras que para 2021 fueron un total de 48 organizaciones políticas las que compitieron. Por tanto, hubo una proliferación importante de opciones en la competencia electoral debido a la búsqueda, por un lado, de nuevas opciones en el seno del MAS, y por otro, la insatisfacción con las tradicionales ofertas de la oposición.

Respecto al balance de los resultados electorales, en relación con la primera fuerza política que compite a nivel nacional y departamental (el MAS), se observa (tabla 1) que su desempeño a nivel nacional, en cifras generales, no descendió y que, al contrario, registra un incremento de voto del 0,71%. En aquellos departamentos en los que se reduce significativamente su caudal de votos entre elecciones es, justamente, en los que surgen candidaturas disidentes del mismo partido, como Pando, Beni y Chuquisaca. Por otra parte, en Potosí y Oruro, a pesar de haber reducido su votación entre 2015 y 2021, el MAS mantiene la preferencia electoral y el control de las gobernaciones. No obstante, donde pierde las elecciones, no obstante haber registrado un desempeño positivo es en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Tarija (cabe señalar que, en Santa Cruz y Tarija, el MAS competía contra una oposición efectiva).

Revisando el desempeño electoral del bloque de partidos de oposición (gráfico 2) y concentrando la mirada en las segundas y terceras fuerzas políticas en ambos procesos electorales, lo que se observa, en primer lugar, es que la segunda fuerza no es la misma entre elecciones; en segundo lugar, cabe

señalar que, a diferencia de Creemos, que compite el 2021 solamente en el departamento de Santa Cruz, Demócratas compitió en cuatro departamentos (Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Oruro); es decir, su trabajo político era más extendido. En el caso de los terceros lugares, el 2015 SOL.bo logra una Gobernación (La Paz), mientras que el Movimiento Tercer Sistema (MTS) triunfa en dos gobernaciones (Beni y Pando) el 2021 y obtiene, a nivel nacional, casi cinco puntos porcentuales.

Tabla 1 Desempeño electoral del MAS-IPSP para la elección de Gobernador entre elecciones (2015-2021)

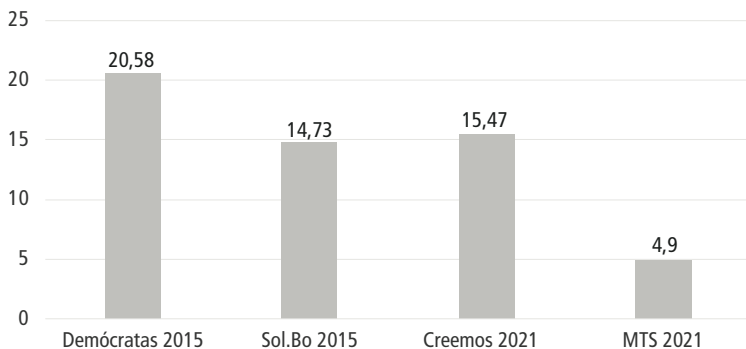
Departamento	2015		2021		Diferencia (%)
	MAS-IPSP (votos)	MAS-IPSP %	MAS-IPSP (votos)	MAS-IPSP %	
Chuquisaca	116.536	48,91	106.250	39,12	-9,79
La Paz	412.385	30,68	618.221	39,70	9,02
Cochabamba	528.922	61,61	609.973	57,44	-4,17
Oruro	121.850	57,65	119.683	46,31	-11,34
Potosí	162.494	62,21	140.275	44,05	-18,16
Tarija	83.891	36,17	111.391	38,17	2,00
Santa Cruz	387.841	31,80	589.978	38,17	6,37
Beni	64.376	40,75	44.494	22,21	-18,54
Pando	31.019	65,73	22.155	41,08	-24,65
Total	1.909.314	41,78	2.362.420	42,49	0,71

Fuente: Elaboración propia en base a resultados oficiales del OEP.

En lo que se refiere a las elecciones para los Gobiernos Municipales, considerando las nueve capitales de departamento más El Alto, los datos acerca de la votación del MAS muestran que el mejor desempeño electoral fue en el 2021, en la ciudad de Oruro, donde se registró un crecimiento del 9,6% (del 20 al 29,6%) con respecto al 2015, obteniendo este partido esa

Alcaldía que antes no estaba en sus manos. El segundo mejor desempeño fue en Tarija, donde el MAS subió en 4% (del 21 al 25%), aunque no logró ganar ese Gobierno Municipal.

Gráfico 2 Desempeño electoral del bloque de oposición entre elecciones subnacionales (2015-2021) (%)



Fuente: Elaboración propia en base a resultados oficiales del OEP.

Entre los peores desempeños del MAS encontramos, primero, el municipio de Potosí, donde bajó un 20,5% (del 31,7 al 11,2%), perdiendo una Alcaldía que había ganado en 2015. Sigue Trinidad con un descenso de 18,6%, Cobija con -14,4%, y El Alto con -13,2%. Estas tres alcaldías mencionadas tienen como común denominador que los contendientes que derrotaron al MAS provienen de su propia disidencia interna: dos del MTS (Trinidad y Cobija) y uno de Jallalla (El Alto). Luego se sitúan Sucre (-11,7%), Santa Cruz (-7,7%), Cochabamba (-6,7%), y La Paz (-1,5%). Analizando estos resultados se puede concluir que el peor enemigo del MAS fue su misma dirigencia, por no saber articular y negociar con sus propias bases.

Entre las alcaldías perdidas por el MAS se puede mencionar a los municipios cochabambinos de Tacachi, Villa Rivero y Colcapirhua, entre otros. Estos espacios están controlados ahora por otras organizaciones políticas que, en su mayoría, son cercanas al ámbito masista pues pertenecen

a disidentes del MAS que, pese a competir con otras siglas, nunca cruzaron el límite ideológico del antimasismo. Lo mismo sucede en Beni y Pando donde el MAS perdió 6 y 5 alcaldías, respectivamente, las cuales pasaron a ser gobernadas por partidos o agrupaciones locales: 6 alcaldías para CID (3) y Todos (3), y 5 alcaldías para Somos (1), NACER (1), PASO (1), Unidos (1) y MTS (1).²

En perspectiva comparada, ni ahora ni en el 2015 existió una única oposición que demostrara capacidad para anteponerse al MAS; se puede hablar, en todo caso, de oposiciones, en plural, con identidades diversas. En las elecciones municipales de 2021, a nivel nacional, el MAS obtiene el 33% de votos válidos, a nivel nacional, registrando un descenso de seis puntos con respecto a los comicios municipales de 2015 (39%). Pero como se ve en los datos, el MAS no pierde votos, necesariamente, en función de un bloque de oposición efectiva.

Finalmente, a diferencia de las elecciones para gobernadores, en el caso de los comicios municipales la cantidad de organizaciones políticas presentes no se incrementó significativamente entre elecciones: el 2015 compitieron 119 organizaciones políticas; mientras que el 2021 fueron 121. Cabe puntualizar que, en los comicios de 2021, el MAS es el único partido que presentó candidaturas en los 336 municipios.

2 Comunidad de Integración Democrática (CID); Nacionalidades Autónomas por el Cambio y el Empoderamiento Revolucionario (NACER); Poder Amazónico Social (PASO); Movimiento Tercer Sistema (MTS); TODOS (desagregado en tres distintas agrupaciones ciudadanas); Todos Unidos por el Beni; San Javier Somos Todos; Unidos Todos por Rurrenabaque.

II. BALANCE Y ANÁLISIS COMPARADO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

A continuación, se presenta un balance del comportamiento de las organizaciones políticas en el marco de la aprobación e implementación inicial de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), así como la identificación de aspectos críticos de dicha norma. Para tal efecto, hacemos un recorrido por distintos lugares: las elecciones primarias, que nos permiten conocer el estado de situación de los partidos en relación con la militancia, los tipos de relaciones internas en los momentos críticos como la renovación de la dirigencia, y el reclutamiento y selección de candidaturas; y, finalmente, las relaciones de las organizaciones políticas con el contexto social y en relación con las otras organizaciones y liderazgos políticos del sistema.

Primarias de 2019: una experiencia inédita y única en Bolivia

Cabe aclarar que, en la propuesta de LOP original elaborada por el OEP, la redacción del artículo y de la disposición transitoria sobre las elecciones primarias para candidaturas a binomios presidenciales³ era distinta a la que se aprobó

3 Existen varios tipos de primarias y combinaciones dependiendo de las dimensiones y alcances de su aplicación. Siguiendo los criterios de Alcántara (2002) y otros autores, las primarias varían según los siguientes criterios: el régimen político o cargo electivo (sistemas electorales y cargos que se ofertan); el calendario electoral (a voluntad de cada organización en un lapso determinado o simultáneas); el tipo de participantes (abiertas, cerradas o semicerradas); la base normativa (obligadas, opcionales, reguladas y tuteladas por la máxima autoridad electoral o por un organismo de control del propio partido, con o sin financiación pública); según el tipo de voto (listas cerradas o personalizadas); y, finalmente, de acuerdo a las distintas combinaciones. En el caso de la LOP, el mandato son primarias obligatorias, simultáneas, cerradas a las militancias y administradas por el Órgano Electoral, con carácter vinculante a las elecciones generales.

en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de manera apresurada. Una comparación de las dos versiones de la LOP muestra algunas incongruencias que resultaron cuestionadas por los partidos de oposición y sectores de la opinión pública.

En el proyecto de ley elaborado por el TSE no se establecían plazos para las primarias pues, en general –y como creemos que corresponde en estos casos–, las disposiciones específicas son objeto de la reglamentación y no del cuerpo de la ley. En la versión aprobada, sin embargo, hay plazos muy ajustados a los que debían someterse las organizaciones políticas que pretendían habilitarse para las elecciones generales de octubre de 2019. Más aún, en los artículos transitorios se introducían, directamente, candados con fechas fijas.

Incluso se perciben contradicciones entre los distintos apartados de la ley. Por ejemplo, el art. 23 señala que “cada organización adoptará sus *propias instancias y mecanismos de toma de decisiones* como máxima expresión de su democracia interna...”,⁴ mientras que el art. 28, en la misma línea, señala que “los procedimientos democráticos y paritarios *en la nominación de candidaturas para la elección de autoridades y representantes en los diferentes niveles del Estado serán señalados en el Estatuto Orgánico*”.⁵ De ello, se infiere que los mecanismos referidos pueden ser diversos, de acuerdo con la decisión de cada organización política. En cambio, el art. 29 de la misma ley establece las primarias como procedimiento único y homogéneo obligado y simultáneo para todas las organizaciones políticas. Por otra parte, el inc. XII del art. 29 representa una disposición forzada pues establece que los resultados de las primarias son vinculantes a la elección general: “Los resultados de la elección de candidaturas de binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos o alianzas y para las elecciones generales. Las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de

4 Cursivas propias.

5 Cursivas propias.

estos resultados son la *muerte o una enfermedad gravísima* sobreviniente debidamente comprobada de alguna o alguno de los miembros del binomio elegido”.⁶

Así, el 26 de septiembre de 2018 el TSE aprobó el Reglamento Específico “Elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales para las elecciones generales de 2019” y se inició la carrera electoral. Uno de los problemas graves surgió a la hora de habilitar a las organizaciones políticas mediante la actualización de sus registros, pues el plazo era excesivamente corto, generando dos tipos de problemas: el primero tuvo que ver con la dificultad de realizar los trámites correspondientes para habilitar a nuevos partidos por el acortamiento de plazos;⁷ mientras que el segundo derivó del proceso apresurado de registro de militantes, lo que condujo a acciones irregulares. En general, se evidenció un hecho recurrente: las organizaciones políticas tenían registros de militantes “falsos” e inconsultos, incurriendo en la generación de libros “inflados” o en errores en el proceso de registro, lo cual provocó una elevada cantidad de denuncias y un posterior proceso de depuración.⁸

6 Cursivas propias.

7 De acuerdo con la prensa, fue el caso de Bolivia Somos Todos (BST), Calidad País (PCP), Compromiso Ciudadano (CC), Comunidad Política (NAYRA), Dignidad Boliviana (DIBOL), Frente Bolivia Unidad (FBU), Fuerza Alternativa Boliviana (FAB), Fuerza de Innovación Nacional (POR FIN), Gran Alianza Nacional por Bolivia (GANa), Movimiento Cristiano Bolivia (MCB), Movimiento Cristiano Patria Grande (MCP-G), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Partido Liberal (PL), Patria Soberana (PS), Patriotas Para la Transformación (PPT), Pueblo Unido (PUN), Revolución Cristiana de Bolivia (RCB) y Soberanía y Libertad (SOL.bo), entre otros.

8 PAN-BOL entregó 127 mil firmas, el FRI dejó 818 libros con 45.500 militantes y el MNR había presentado 120 mil inscritos; UCS depositó 27 libros con 1.600 militantes, el MAS-IPSP entregó alrededor de 1.080.000 militantes inscritos; sin embargo, muchos de los registros fueron desechados en la depuración y otros fueron objeto de denuncias de ciudadanos.

Al culminar el proceso, un total de siete partidos políticos y dos alianzas resultaron habilitados: Movimiento al Socialismo (MAS), Frente para la Victoria (FPV), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) –lanzado como Comunidad Ciudadana (CC) en alianza con varias plataformas ciudadanas–, Movimiento Demócrata Social (Demócratas) –a través de la alianza Bolivia Dice No (21F) (BDN)– Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Partido de la Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Movimiento Tercer Sistema (MTS).

En la tabla 2 podemos apreciar el porcentaje de militantes por departamento con relación al total de empadronados en el país (6.463.256 personas), donde se percibe que el 26,5% pertenece o está registrado en alguna organización política. Por otra parte, en la tabla 3 se presenta el detalle de los militantes inscritos por organización política.

Tabla 2 Relación entre padrón electoral e inscritos a las organizaciones políticas por departamento

Departamento	Padrón electoral	Militantes o inscritos	Porcentaje (%)
La Paz	1.791.734	443.211	24,7
Oruro	315.269	86.643	27,5
Potosí	430.777	126.617	29,4
Cochabamba	1.217.821	311.597	25,6
Chuquisaca	353.006	99.231	28,1
Tarija	356.242	103.990	29,2
Pando	67.583	25.411	37,6
Beni	242.483	86.554	35,7
Santa Cruz	1.688.341	432.626	25,6
Total	6.463.256	1.715.880	26,5

Fuente: Elaboración propia con base en datos del OEP.

Tabla 3 Militantes inscritos por organización política (2018)

Organizaciones políticas	Militantes	Porcentaje
PDC	28.717	1,7
FPV	31.060	1,8
UCS	38.421	2,2
MNR	58.377	3,4
CC	88.122	5,2
PAN-BOL	92.210	5,4
MTS	95.391	5,6
Bolivia Dice No (21F)	292.490	17,0
MAS-IPSP	991.092	57,7
Total	1.715.880	100,0

Fuente: Elaboración propia con base en datos del OEP.

Una evaluación de la militancia por organización política evidencia que el MAS acapara la mayoría de la militancia inscrita a nivel nacional, ya que cuenta con el 57,7%, seguido por la alianza Bolivia Dice No (Movimiento Demócrata Social) con el 17% de los militantes, frente a los demás que no superan el 6% de los militantes/inscritos.

Es interesante observar estos datos de manera más detallada por municipios, pues en ellos se confirma la gran presencia del MAS en municipios pequeños (rurales) seguidos de las ciudades capitales y, muy por debajo, en centros urbanos intermedios. Asimismo, su militancia se concentra en El Alto y algunas ciudades intermedias medianas y pequeñas como Villa Tunari, Sacaba y Montero y, sobre todo, en municipios rurales. FPV es un caso particular pues tiene una militancia muy reducida y concentrada en tres municipios pequeños. En el resto de las organizaciones políticas, la militancia se encuentra concentrada en ciudades capitales y, en algunos casos, también en ciudades intermedias medianas.

Si observamos territorialmente a los otros partidos, Bolivia Dice No (21F) cuenta con importante militancia en ciudades (básicamente en Santa Cruz de la Sierra, Warnes y Montero, aunque también en El Alto), así como en centros urbanos intermedios grandes y, en menor proporción, en centros urbanos más reducidos. La presencia de CC también está concentrada en centros urbanos mayores y grandes (en particular en El Alto) y muy disminuida en centros urbanos de menor tamaño; mientras el MNR tiene su militancia sobre todo en centros urbanos intermedios de tamaño grande, en especial poblaciones del Beni como Riberalta, Guayaramerín o San Borja. FPV concentra a su partidarios en centros urbanos pequeños y municipios rurales como Aiquile, Uriondo y Yacuiba.⁹

Las primarias se realizaron el 27 de enero de 2019. Al existir solo un binomio participando en cada organización política, el sufragio se reducía a consolidar la opción existente por simple mayoría de votos y, por tanto, no hubo verdaderamente una competencia entre dos o más candidaturas; esto refleja la debilidad de las organizaciones políticas y la fuerte cultura política personalista. Esto también mostró la apatía e incluso la sensación de inutilidad de estos comicios, que fueron

9 Los datos confirman una fuerte crisis de militancia política en el país, percibido en un estudio anterior: “En el momento actual, las organizaciones políticas son simples vehículos para el acceso al poder de un personaje, una ideología o un interés particular o general que tienen un rasgo común: la ausencia del ‘militante’, en unos casos sustituido por bases sindicales, en otros por la presencia circunstancial y volátil de adherentes sin un compromiso orgánico e ideológico, en esas condiciones ¿cómo se espera reglamentar las prácticas políticas internas con patrones institucionales homogéneos? [...] hoy la política discurre por distintos senderos, el activismo político callejero y virtual, la movilización social, las organizaciones sindicales, vecinales, ciudadanas, y la acción política articulada más que a una sigla o pertenencia a una organización, a ideas concretas, demandas, reacciones, defensa de intereses o derechos, a la indignación, en consecuencia las organizaciones políticas han dejado de ser los canales únicos para representarlos en el ámbito institucional de la política” (Zegada, 2017).

vistos por muchos líderes de opinión y, en particular, por los partidos opositores como un “gasto inútil de recursos”. A tal punto fue resistida esta elección por los partidos, que instaron a sus propias militancias a no acudir a las urnas, salvo el caso del MAS y del MTS que convocaron a sus respectivas militancias a votar pues, como aclararon los representantes del TSE, no era necesario más que un voto para consolidar el binomio para las elecciones generales de 2019, y el voto no era obligatorio para los militantes.

Si se toma en cuenta el promedio general, la participación fue del 28,9%, registrándose poco más de un 70% de ausentismo respecto de los habilitados para votar. Descontando al MAS, el promedio de participación de las otras organizaciones fue de alrededor del 6%. Esto, como dijimos, se debe al instructivo explícito en las organizaciones políticas opositoras al MAS a sus respectivas militancias de no acudir a votar. Los resultados, sin duda, restan legitimidad a esta primera experiencia de elecciones primarias e incluso se puede afirmar que mostraron su inutilidad.

Tabla 4 Resultados nacionales de participación por organización política en las primarias

Organizaciones políticas	Votos emitidos	Habilitados por OP	% de votos sobre habilitados
Bolivia Dice No (21F)	18.778	292.490	6,4
CC	4.964	88.122	5,6
FPV	2.033	31.060	6,5
MAS-IPSP	451.026	991.092	45,5
MNR	4.871	58.377	8,3
MTS	6.970	95.391	7,3
PAN-BOL	3.480	92.210	3,8
PDC	1.308	28.717	4,6
UCS	1.915	38.421	5,0
Total	495.345	1.715.880	28,9

Fuente: Elaboración propia con base en datos del OEP.

Relaciones internas en las organizaciones políticas

La dinámica interna de cada organización política, en particular, será abordada en este apartado en dos dimensiones: los mecanismos de renovación de las dirigencias partidarias, y el reclutamiento y selección de candidatos para los distintos procesos electorales a los que asiste la organización política. Para realizar el análisis respectivo, nos basamos fundamentalmente en las entrevistas realizadas a los actores vinculados a las organizaciones políticas.

Se hizo este ejercicio de indagación directa porque el interés más relevante no es hacer una revisión institucional formal de las organizaciones políticas analizando sus estructuras formales y sus documentos constitutivos –pensamos que ese nivel de trabajo no da cuenta a cabalidad la compleja realidad política en que se encuentran actualmente–. Más bien, vimos necesario centrar la atención en la dinámica real interna de las organizaciones, en la relación de la dirigencia con la militancia y con los simpatizantes o adherentes, donde se encuentran muchas de las explicaciones del estado actual de las organizaciones políticas y su posible proyección, que luego puede verse a la luz de las reformas normativas.

El análisis de las relaciones internas responde a una razón: develar su funcionamiento y establecer lo que la ciencia política denomina “cohesión interna del partido”. Y también porque la dinámica que se va a estudiar nos sirve para identificar quién o quiénes constituyen los verdaderos núcleos de poder dentro de las organizaciones políticas.

La renovación de las dirigencias

Un elemento ineludible cuando se habla de este tema es la carga personalista de las organizaciones políticas, situación que afecta enormemente a todas ellas. Aquí es muy notorio que vivimos en dos tiempos políticos distintos en lo que respecta a esta dinámica. En el caso del MAS, debido a que llevan en el juego electoral de manera ininterrumpida

más de una década –y se ha revelado una crisis interna que deviene del contexto de la elección general de 2019– habría llegado el momento de encarar el asunto de la renovación de su principal dirigencia. En el caso de las demás fuerzas políticas, las temporalidades son distintas pues muchas de ellas nacieron hace poco a la vida política.

En el MAS, concretamente, han venido sucediendo procesos de renovación de dirigencias intermedias y en las organizaciones de base, pues un aspecto que se reconoce de entrada es la importancia del peso organizacional basado en la dinámica la renovación que intenta construirse de abajo hacia arriba y se produce una alta rotación. No obstante, la dirigencia nacional se ratificó en el tiempo y se ha renovado escasamente. A pesar de ello, y debido a la persistencia de su jefatura nacional, esta organización política se sitúa en el rango de aquellas predominantemente personalistas. El intenso conflicto que vivió este partido el 2019 –cuando aún se encontraba en funciones de poder– no ha sido debidamente encarado y no se ha resuelto el fondo de esta cuestión; por el contrario, lejos de realizar una autocrítica, se encuentran dedicados a repartir culpas de su herida histórica del año mencionado.

En cambio, en las experiencias de los partidos opositores se observan algunos matices. Por ejemplo, la alianza CC, según los entrevistados, no tiene, por ahora, mecanismos establecidos de renovación de dirigentes, sino que más bien se encuentran en un momento de “transición constructiva” (como ellos mismos denominan), que los llevará a salir del liderazgo personalista y pasar a la conformación de una estructura partidaria.

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) es un partido que ha logrado alcance nacional y que, por su presencia en las últimas elecciones subnacionales, cobró un inusitado interés; sin embargo, aquí lo que se observa, a nivel interno, es que no tienen un entorno elitista, sino más bien familiar, alrededor de su máximo dirigente, Félix Patzi.

Por tanto, luego de observar el comportamiento de las dos organizaciones políticas nacionales más importantes de la oposición en los últimos comicios, CC y el MTS, constatamos que se trata básicamente de maquinarias electorales, es decir, nacen muy ligadas a los procesos electorales con el objetivo de derrotar al MAS, para luego, una vez pasadas las elecciones, ponerse a pensar en la forma de estructuración que tendrán. Además de todo lo mencionado hasta aquí, se reconoce que el marco normativo vigente juega como un desincentivo, puesto que la excesiva reglamentación normativa impide mejorar los mecanismos de renovación y consolidación de las organizaciones políticas en la relación entre sus dirigencias y militancias.

En el mundo de las agrupaciones ciudadanas, especialmente del sur del país (como es el caso de Comunidad de Todos, que es el caso analizado), se percibe un proceso de rearticulación permanente, lo cual les permite persistir en las distintas elecciones. En ella se repiten las prácticas personalistas de los partidos políticos nacionales; es decir, es una élite la que maneja y decide frente al resto.

El reclutamiento y selección de candidatos

Otro tema importante –y complejo al mismo tiempo– en el marco de las relaciones internas de las organizaciones políticas es el del reclutamiento y selección de las candidaturas. El escenario político partidario respecto a este tema nos permite diferenciar al MAS del resto de organizaciones políticas, pues mientras el MAS muestra un comportamiento relativamente constante, el resto obedece a distintas dinámicas que van cambiando a lo largo de su historia. No se debe olvidar que la selección de candidatos es un proceso muy importante para la vida institucional de los partidos, porque de ella dependen las posibilidades de acceder al poder y las decisiones hacia el futuro.

Un elemento que predomina en casi todas las organizaciones políticas opositoras es que la lista de candidaturas es

elaborada y presentada ante el Órgano Electoral a partir de una decisión de la dirigencia del partido hacia las bases; es decir, un proceso de arriba hacia abajo. Si bien es cierto que en varios casos intentaron respetar las estructuras de decisión local (Comunidad Ciudadana y Demócratas, por ejemplo), al final, la última palabra la tiene la máxima dirigencia.

Otra lógica instrumental que se puede identificar en relación con este aspecto se observa en las agrupaciones ciudadanas locales; porque, al parecer, estas se crean con el objetivo de competir de la mano de partidos grandes o mediante alianzas con siglas partidarias, para formar una alianza más amplia y así tener posibilidades de conseguir más candidaturas. Por eso existen organizaciones que se van formando con la idea de consolidarse como un medio de subsistencia para quienes las componen.

El caso del MAS refleja una dinámica algo matizada respecto a las anteriores, pues las decisiones se producen de arriba-abajo y viceversa, dada la naturaleza de la composición y de la estructura de esa organización política. El MAS es una sumatoria variada y diversa de organizaciones sociales que emiten hacia la dirigencia nacional los perfiles de las candidaturas que les corresponde en cada caso particular, según el contexto territorial al que se refiera. Por supuesto, esto no impide que, en realidad, el que toma la decisión final sea un reducido grupo, al igual que en el resto de las organizaciones políticas. Es decir, la actividad política sobre la elección de dirigentes y el reclutamiento y selección de candidatos está medida en función de la fórmula de Duverger (2012 [1951]: 163) referida a cuánto pueden aparentar ser democráticas las organizaciones políticas, teniendo en cuenta que su realidad es oligárquica.

Vistos los datos sobre la realidad de las relaciones internas que existen en las organizaciones políticas más relevantes del sistema estudiadas aquí, en general estas cuentan con estructuras que albergan élites políticas la cuales acumulan distintos tipos de capitales según la naturaleza del partido.

No se puede negar el hecho de que estas élites tienen que actuar en consonancia con los vínculos partidistas que los unen a su militancia pues; de lo contrario, se convierten en organizaciones políticas que aparecen como tiendas comerciales dispuestas a vender cualquier tipo de producto, según la temporada.

Analizar esta realidad organizativa predominante permite evidenciar hasta qué punto es importante llevar adelante una reforma normativa que apunte a mejorar los niveles de democracia interna en las organizaciones políticas, partiendo de sus propias dinámicas internas y considerando el peligro del fraccionalismo. Además, no hay que olvidar que existen ejemplos similares en otros países de la región donde, el intentar embarcar a las organizaciones políticas en el camino de una democratización ideal interna formal, lejos de ayudarlos, hizo trastabillar el sistema de partidos.

Por otra parte, lógicamente, no se pueden establecer generalizaciones sobre estas dinámicas porque cada organización política se administra de forma independiente. Por tanto, las valoraciones específicas son más importantes que las generalizaciones para establecer un balance de la naturaleza misma de las organizaciones políticas en base a la dinámica de renovación de dirigencias y de sus procesos de nominación de candidaturas. También es preciso identificar la naturaleza de las organizaciones políticas, lo cual puede servir para develar los problemas recurrentes en el sistema político.

No obstante, se pueden hacer algunas generalizaciones, de acuerdo con la información recogida respecto a estas dos dinámicas internas, un dato importante y común a todas ellas es que el peso más relevante descansa en el líder del partido y en un grupo de dirigentes de su entorno que no necesariamente son líderes electos producto de un ejercicio de democracia interna en la organización política, sino de una conformación fáctica. Por tanto, en última instancia estamos frente a una constatación de la realidad oligárquica de los partidos políticos.

También podemos constatar que existen, al menos, dos tipos de métodos de selección de candidaturas que buscan ser representativas y captar el voto ciudadano. El primero consiste en aplicar un mecanismo territorial considerando criterios de peso local que provengan ya sea desde adentro o desde afuera del partido. El segundo método se basa en la idea de la funcionalidad, que tiene que ver específicamente con la selección de representantes o actores sociales con peso desde el campo multiorganizacional (por ejemplo, sindicatos, movimientos sociales, cívicos, mujeres) para poder garantizar el éxito electoral.

En este contexto, la organización política se hace acreedora de una multiplicidad de demandas sociales porque los candidatos que emergen a partir de este criterio territorial o funcional llevan puestas sus propias agendas particulares o de gremio que incluso logran imponerse a la propuesta programática del partido.

Un logro importante, en particular, en la selección de candidaturas, que proviene de la aplicación de la normativa a lo largo de las últimas dos décadas, es el cumplimiento del mandato de la paridad y alternancia de género, aunque esto conlleva serias dificultades en la conformación y aprobación de las listas de candidatos.

Las organizaciones políticas por afuera

Otra de las claves para comprender la naturaleza y razón de ser de los partidos reside, precisamente, en su relación con la sociedad civil, con las contradicciones socioeconómicas y culturales de la sociedad y la capacidad de representarlas en el mundo de la política.

En ese sentido, existen diversas formas de articulación: desde partidos como el MAS, cuyos vínculos son orgánicos y consustanciales a los tejidos sindicales por su propia naturaleza, hasta organizaciones como CC que prefieren interpelar de manera más general y amplia a la categoría de “ciudadanos”, pasando por otras formas matizadas de

búsqueda de vínculos con la sociedad y los electores. No obstante, en cualquiera de los casos, el resultado de la interpelación tiene que ver con la eficacia del discurso y la voluntad política, pero también con las condiciones del contexto y la coyuntura inmediata.

Para comenzar, resulta interesante introducir una diferenciación relacionada con dos estados distintos de existencia de las organizaciones políticas. En primer lugar, cuando estas se encuentran fuera del poder, desde donde ejercen la actividad política ya sea en etapas electorales o no electorales; y en otro, cuando la organización política forma parte de la gestión pública a través de autoridades electas y estas buscan formas de conectarse con sectores sociales, mediados por el acercamiento a problemáticas determinadas.

Por otra parte, cabe hacer notar que, en la relación de las organizaciones políticas con la sociedad y los electores, también se percibe este fuerte cariz personalista, es decir, la relación se produce a través de un vínculo directo entre las autoridades ejecutivas o los legisladores nacionales o subnacionales con el electorado: de manera habitual esto sucede en el caso de los uninominales que se ve impelidos a cumplir con sus electores o bases sociales para reproducir su propia legitimidad. Este perfil personalista también es frecuente en asambleístas que fueron “candidatos invitados” por el partido, que carecen de militancia o vínculo orgánico con la organización política y logran acceder a cargos públicos, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal. En estos casos, su legitimidad está asentada en los sectores sociales o territoriales a los que representan y a su trayectoria personal. Por esta razón, una vez que acceden al cargo actúan de manera autónoma y, ocasionalmente, en concertación con la organización política que los promovió. En cualquier caso, estos personajes priorizan la relación con sus propias bases, territorios o, en general, sus propios electores.

La relación con el contexto desnuda la naturaleza de la organización y revela su origen. Comunidad Ciudadana, por

ejemplo, carece de bases sociales originarias u orgánicas vinculadas directamente a la organización. Se define como una organización abierta que representa a la ciudadanía, de manera que su acercamiento es irrestricto y amplio e interpela indistintamente a sectores sociales ya sean estos cívicos, vecinos, gremios u otros (sobre todo a ciudadanos que no se sienten representados por el MAS o por los partidos conservadores). De hecho, su enfoque y alcance está orientado a las zonas urbanas más que a las rurales y, en particular, ha cobrado presencia en las ciudades capitales, en concurrencia con los territorios en los que esta organización cuenta con mayor cantidad de militantes inscritos.

El origen de CC estuvo marcado por el rechazo a la vulneración del voto popular en el Referéndum del 21 de febrero de 2016, por parte del partido de gobierno, y a la insistente repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Esta tienda política surge en congruencia con la emergencia de sectores ciudadanos entre los que se podrían identificar a las denominadas “plataformas”, varias de las cuales pasaron a formar parte de esta organización con el propósito común de defender la institucionalidad democrática. No obstante, como señala uno de nuestros entrevistados, la vinculación de CC con sectores sociales o territoriales se produce en el momento en que sus diputados y senadores comienzan a ejercer la función de representación política.

Por tanto, en el caso de esta alianza, la principal instancia articuladora de la organización con sectores sociales reside hoy en su bancada parlamentaria. De alguna manera, se pretende construir organización desde esa instancia, generando –o, en su caso, reactivando– conexiones con la sociedad civil. Así, la forma de reproducción política no sucede a través de bases sociales leales y permanentes de militantes, sino de su vinculación posterior a la elección con los territorios mediante acuerdos entre los diputados en ejercicio de sus funciones. En otros casos, esta relación

está mediada por problemáticas de interés común con determinados sectores, por ejemplo, junto al sector salud a raíz de los conflictos por la escasez de recursos y condiciones para enfrentar el Covid-19, o con el sector de jubilados respecto a las demandas vinculadas a los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), o con sectores afectados por ciertas políticas o leyes aprobadas por la mayoría oficialista, es decir, mediante la representación de problemas críticos que están presentes en la coyuntura y permiten tender estos lazos.

La orientación de los temas de la gestión legislativa también tiene que ver con el perfil de los asambleístas y/o sus vínculos previos con la sociedad, como en el caso de algunos diputados que provienen, por ejemplo, de ONG ligadas a temas ambientales o a la defensa derechos sociales, así como aquellos asambleístas vinculados con los pueblos indígenas. De hecho, “el capital político de CC está en el Legislativo”, señala uno de los entrevistados.

Otro de los partidos analizados en su relación con el contexto social es el Movimiento Demócrata Social (MDS), que fue una de las organizaciones políticas más prometedoras de oposición durante la última década, debido a su presencia sostenida en la Gobernación de Santa Cruz y en varios municipios de ese departamento, así como su intento de abarcar otros espacios en el ámbito nacional. No obstante, esta agrupación cayó en las elecciones fallidas de 2019 por su escasa votación como alianza Bolivia Dice No (21F). Por otra parte, en 2020, desistió, a último momento, de participar en los comicios nacionales con su candidata y entonces presidenta transitoria, Jeanine Áñez. Finalmente, se precipitó una ruptura interna en Santa Cruz entre sus altos dirigentes durante el proceso de negociación para las elecciones subnacionales de 2021, debido al giro del Comité Ejecutivo Departamental respecto a su postura inicial de apoyar a un candidato interno para la Gobernación, definiendo, al fin, su acercamiento y respaldo a Luis Fernando Camacho, de Creemos. De todas

maneras, en dichos comicios logra ganar en cinco alcaldías pequeñas, obtiene algunas concejalías en Santa Cruz y una presencia atenuada en el Beni y Potosí.

Por sus orígenes, vinculados a intereses de tipo territorial y en consonancia con la noción de descentralización y autonomías, Demócratas no tenía tanto el objetivo de establecer vínculos con organizaciones sectoriales o corporaciones –que pertenecen a una cultura política más bien de occidente, como señaló un entrevistado– sino con factores territoriales, priorizando una estructura municipalista, propiciando acuerdos con líderes o agrupaciones locales y “respetando la autonomía de cada departamento”, apuntó.

Es interesante tomar en cuenta el caso de Unidad Nacional (UN) dado que es un partido que, desde su fundación (2004), cumple a cabalidad con todos los requisitos normativos buscando acercarse al ideal organizativo en cuanto a estructura y funciones, y ha estado presente en los distintos comicios convocados durante casi dos décadas. Sin embargo, este partido no ha podido trascender el 8% de los votos, salvo mediante coaliciones.

UN se ha relacionado, históricamente, con sectores gremialistas. Por ejemplo, se estrecharon vínculos con transportistas, carniceros y pequeños productores. Su presidente, Samuel Doria Medina, impulsó proyectos como Anatina Toys para apoyar a los pequeños emprendedores o, en su momento, la creación de los Centros de Innovación Tecnológica (CITES) para el apoyo a las pequeñas empresas, lo cual le permitió acercarse de manera efectiva a gremialistas, diseñadores, organizaciones como “las luchadoras” de El Alto, líderes de los artesanos como María Calcina, entre muchos otros. “Las CITES fueron colchones para atraer a esos sectores”, afirma una entrevistada. Sin embargo, por lo que se pudo constatar, se trató de acercamientos coyunturales, mediados por la actividad económica compartida y por los beneficios que esta les reportaba, pero no se consolidaron orgánicamente.

Otra de las organizaciones que sentó presencia en diversas regiones en las elecciones subnacionales de 2021 fue el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que surgió en el departamento de La Paz y, más adelante, logró una irradiación a otros departamentos. Desde el inicio, de acuerdo con uno de los entrevistados, en dicha organización no hubo una relación previa con sindicatos ni comunidades, “no se trabajó lo suficiente”, por lo tanto, no se habría logrado consolidar una base social propia. La presencia del partido se circunscribe al liderazgo de Félix Patzi, sobre todo antes y durante su gestión como gobernador de La Paz, por lo que, orgánicamente, esta agrupación no ha logrado trascender la frontera departamental. En este sentido, el hecho de haber participado y accedido a cargos subnacionales como sigla no implica su expansión organizativa territorial, pues su relación con la sociedad fue y es casi inexistente.

Esta organización política, a pesar de que logró habilitar su sigla a nivel nacional para las elecciones generales de 2019 y presentó la candidatura de su líder Félix Patzi, no alcanzó ni el 2% de los votos y desistió de participar en las elecciones generales de 2020. No obstante, para las elecciones departamentales y municipales de 2021, este partido realizó varios acuerdos con candidatos locales, facilitándoles la sigla política en distintos lugares y alcanzando importantes triunfos en las gobernaciones de Pando y Beni; sin embargo, se trata de candidaturas ajenas a la organización política, en un abierto intercambio o “préstamo” de mutua conveniencia.

Un tema que no suele ser considerado por las organizaciones políticas opositoras, pero que explica en gran medida sus deficiencias, es su escasa capacidad de aproximación a los sectores populares, campesinos e indígenas –grupos sociales hoy prácticamente monopolizados por el MAS– y cuyo apoyo y relación política no ha variado en las distintas contiendas electorales desde el giro que se produjo a partir de la votación de 2005 en adelante. Una visión autocrítica, planteada por

uno de los entrevistados de los partidos opositores, revela que no se escucha a los sectores sociales, inclusive percibe rasgos de racismo en los partidos de oposición; por ejemplo, en el trato de los dirigentes con respecto a los militantes de base, más aún cuando se acercan a sectores populares externos a la organización o con quienes no mantienen un vínculo orgánico.

El caso del MAS en la relación con la sociedad tiene un doble registro: por una parte, en razón de sus características distintas al resto de los partidos existe una imbricación con los sectores sindicales, fundamentalmente campesinos e indígenas, en su estructura. Como se ha señalado anteriormente, se trata de una combinación entre partido y sindicato y, hasta cierto punto, de un partido montado sobre una estructura sindical. Por tanto, como instrumento político de las organizaciones indígenas y campesinas del país, el MAS tiene garantizado el apoyo popular de estas organizaciones. “Ese es nuestro fuerte”, sostiene uno de los entrevistados. Esta misma lógica ha permitido que otro tipo de organizaciones, como los cooperativistas mineros, la COB y algunos sectores gremiales, entre otros, también participen del instrumento, lazos que se han afianzado mucho cuando este partido ha llegado al gobierno, pues desde el poder tiene muchas más posibilidades de distribuir incentivos tanto de tipo material como obras, proyectos, bonos, etc., o bien de tipo colectivo o simbólico por la identificación de sectores antes excluidos con el líder de la organización (“Evo es como yo”) refiriéndose a la deuda histórica de exclusión sociocultural, plasmada más adelante en la frase “ahora nos toca”.

Por las razones anotadas, el MAS cuenta con una sólida base popular extendida en el territorio nacional: “Existe una afinidad básica entre clases, territorios y sectores sociales, todos se sienten afines al partido”, sostiene uno de los dirigentes de esa organización, entrevistado para este trabajo.

No obstante, este partido ha tenido que experimentar una gran capacidad de adaptación a cada contexto territorial. Si bien en el occidente del país opera con mucha eficacia el tejido organizacional sindical, tanto para convocar a los sectores, lograr un voto disciplinado y generar mecanismos de redistribución; no sucede lo mismo en el oriente y el sur del país, donde no existe un sindicalismo campesino tan arraigado y dominante. Por lo tanto, los dirigentes buscan formas renovadas de conectarse con sus electorados o con los ciudadanos, en particular de clases medias o empresariales, para captar la votación. De ahí que ensayan estrategias distintas para acercarse a la población tratando de acceder a sus intereses. Es lo que sucede, por ejemplo, en las campañas desplegadas en ciertas zonas urbanas en las que tienen que acercarse a la cultura local y a los intereses juveniles organizando concursos de reinas de belleza, habilitando centros de belleza o participando en eventos como la feria exposición anual de Santa Cruz, entre otros.

El otro registro del MAS en su relación con la sociedad es más bien abiertamente excluyente, respecto a muchos sectores de la ciudadanía que no pertenecen a las bases sociales del MAS, no se sienten representados por su proyecto y son críticos a sus actuaciones. Estos perciben una actitud hostil por parte de dirigentes y militantes del MAS. Esta grieta se agravó con los conflictos de 2019 y 2020 a raíz de la aparición de las plataformas ciudadanas y las protestas que cuestionaron la vulneración a la Constitución y el irrespeto a los resultados del Referéndum 2016, detrás del lema “Bolivia dijo No” y con la denominada “revolución de las pititas” en la coyuntura postelectoral de 2019.

Sin embargo, existe un antes y un después en el MAS respecto a sus relaciones con la sociedad como consecuencia de con la crisis mencionada, no solo por las tensiones internas, sino también por el agrandamiento de la distancia entre el MAS y los sectores críticos de la población boliviana. Aquí se pueden identificar al menos tres grupos: los ciudadanos que se

recluyeron fuera de la política y adoptan una actitud antipolítica y antipartidaria; aquellos que asumieron posiciones públicas abiertamente contrarias al MAS y fueron o son perseguidos judicialmente por su participación en los sucesos de 2019; y, finalmente, otra parte de la sociedad alejada y crítica al MAS que, después de los sucesos del gobierno transitorio y de la pandemia de 2020, volvió a apostar a este partido ante la ausencia de opciones alternativas que los representen. Para estos últimos, la diferencia radica, quizá, en que ya no se trata de una apuesta incondicional, sino sujeta a las expectativas respecto del cumplimiento de las promesas electorales y el anhelado el retorno a la estabilidad, la inclusión social y la bonanza económica percibida durante el anterior gobierno.¹⁰

En el caso de las agrupaciones ciudadanas es interesante notar que tienen una dinámica y dificultades más o menos comunes o parecidas a los partidos nacionales. Su relación con la sociedad se activa solamente en etapas electorales, a menos que ocupen cargos públicos y reproduzcan su relación desde el poder. En ese sentido, recogen las demandas y hacen contacto con las organizaciones sociales locales ya sean estas sindicales, vecinales o de otro tipo, con las que construyen alianzas o invitan a sus representantes como candidatos para obtener apoyo electoral y generar movilización social. No obstante, cada coyuntura es objeto de una rearticulación de aliados y liderazgos, por lo que no se trata de organizaciones estáticas.

Por ejemplo, una de las agrupaciones ciudadanas con más representatividad en Tarija es Camino al Cambio, que se constituyó en 2005 mediante la conformación de un frente para las elecciones prefecturales entre el MNR, el FRI y

10 Varias encuestas de opinión de la etapa preelectoral y análisis publicados dan cuenta de las razones por las cuales sectores de la ciudadanía apostaron nuevamente por el MAS (véase, entre otros, “¿Por qué volvió a ganar el MAS? Lecturas de las elecciones bolivianas”, *Nueva Sociedad*, octubre de 2020, Buenos Aires, FES, en: <https://nuso.org/articulo/Bolivia-Luis-Arce-Evo-Morales/>).

sectores independientes. Luego asumió la forma de agrupación ciudadana en la región recreándose en cada periodo electoral, y modificando sus siglas, justamente por su capacidad de hacer distintas alianzas entre grupos políticos departamentales y municipales, así como con sectores gremiales clave como el transporte o, en su caso, con comunidades campesinas alrededor de preocupaciones concretas. Esta opción política estuvo largos años liderizada por Adrián Oliva. Algo parecido sucede, en Tarija, con la trayectoria de UNIR, del líder regional Oscar Montes. “Los ires y venires de la gente y sus liderazgos”, describe la entrevistada, y lamenta que la política hoy no está sostenida sobre ideologías o principios sino por acuerdos de mutuo interés y como medios de subsistencia que se articulan con el fin de acceder el poder, conformándose alianzas para tener mejores opciones. En algunos casos esta relación se produce de manera más personalizada con líderes locales que son persuadidos de participar en política y articulan un grupo alrededor suyo que luego busca la manera de habilitar su candidatura. El dilema aquí es el siguiente: ¿Hasta dónde preservar la autonomía de las organizaciones respecto de la política partidaria para evitar que se contaminen los intereses o hasta dónde es conveniente hacerlo como la única manera de lograr beneficios o apoyo a las grandes necesidades sociales? ¿En qué medida las agrupaciones ciudadanas acercan la política a los electores o son otra forma de agudizar su propio desprestigio? ¿Fortalecen la representación política o la debilitan aún más?

Lo cierto es que las agrupaciones ciudadanas, en general, son aún más volátiles e inestables que los partidos, se activan para ganar elecciones y, en su caso, para acompañar la gestión de autoridades de turno y luego se diluyen o desactivan, a menos que se sostengan en la gestión pública. Por otra parte, con absoluta certeza, a nivel subnacional antes que los debates ideológico-políticos, prima la necesidad de dar respuesta a las grandes demandas y expectativas de la población local.

Relaciones interpartidarias

Para analizar las relaciones entre las organizaciones políticas del sistema, se puede partir de diferenciar al menos tres circuitos de interacción, como se detalla a continuación.

Primer circuito

Es el más amplio y está marcado por la polarización MAS-anti MAS. En este espacio se genera un encuentro casi indiscriminado entre organizaciones opositoras, en el cual se tejen alianzas, migran candidatos y siglas, se establecen estrategias para hacer frente al partido de gobierno.

Este circuito está activo desde hace casi dos décadas y unificó a los opositores en una lucha común que, sin embargo, no operó a nivel electoral, donde se presentan siglas y candidatos por separado o en alianzas conflictivas.

Esta polarización ha marcado la política desde la llegada del MAS en 2006. Si bien han existido momentos más atenuados, la situación se volvió a agravar durante los últimos años del gobierno de Evo Morales y alcanzó su punto más crítico durante la crisis postelectoral de 2019. En dicha elección también se ha reflejado en los resultados –no oficializados– pues fue en ese momento cuando el segundo partido logró un mayor acercamiento en cifras al MAS, dejando solo una distancia de alrededor del 10%. No obstante, los acontecimientos que sucedieron durante el gobierno transitorio de Ñez incidieron en un escenario electoral favorable al MAS.

Esta polarización, con algunos matices, también se repite en las elecciones subnacionales, donde la oposición siempre ha tenido mejores opciones de posicionamiento. Esto se ha manifestado, en particular, en las elecciones de 2021, en las que la oposición ganó en seis departamentos y en ocho de las diez ciudades principales del país, mientras el MAS mantiene su electorado en la mayoría de los municipios de ciudades intermedias y, sobre todo, en municipios rurales. Esto podría conducir a un escenario de confrontación.

Segundo circuito

Debido a que el MAS no ha mantenido acuerdos o alianzas con otras organizaciones políticas (salvo en su primer gobierno, con el Movimiento Sin Miedo, de Juan del Granado), en ese circuito se ubican los acuerdos interpartidarios entre opositores y sus alianzas. Los acercamientos se producen en momentos preelectorales, en algunos casos entre partidos políticos, lo cual implica distribuirse espacios entre las candidaturas; lo mismo sucede en los acuerdos que se producen para elecciones regionales o locales entre partidos y agrupaciones ciudadanas o, dado el caso, entre agrupaciones ciudadanas.

Por otra parte, también se producen acuerdos en momentos postelectorales entre quienes acceden a espacios de poder, en especial en el nivel subnacional; es decir, una vez que se conforman los gobiernos, los acuerdos entre partidos o entre partidos y agrupaciones ciudadanas sirven para facilitar la gobernabilidad durante la gestión de gobierno. Por otra parte, las necesidades apremiantes o las preocupaciones y objetivos comunes conducen a la generación de acuerdos intergubernamentales por parte de partidos o agrupaciones con distinto signo político, que inician sus gestiones bajo la figura de gobierno dividido¹¹ pero que, luego, son forzados a generar acuerdos para responder a las necesidades sociales. Es el caso de la emergencia social y sanitaria reciente, la cual ha logrado aproximar posiciones polarizadas para generar estrategias consensuadas. En Cochabamba, por ejemplo, se ha producido un acercamiento entre dos autoridades recientemente electas que pertenecen a líneas políticas opuestas: el alcalde Manfred Reyes Villa, por un lado y el gobernador Humberto Sánchez, por otro; el primero de la agrupación ciudadana Súmate y el segundo del MAS. Acercamiento calificado por uno de los entrevistados del MAS como “acuerdo pragmático”.

11 Concepto acuñado por el teórico de la ciencia política Josep Colomer (2001).

Desde hace casi dos décadas los acuerdos políticos nacionales entre opositores han estado marcados, precisamente, por el elemento común de hacer frente, con mayor éxito, al partido de gobierno. De hecho, en las elecciones 2005, 2009, 2014, 2019 y 2020 se ha conformado siempre un bloque opositor más potente que los demás que ha ocupado un segundo lugar con una votación cercana al 25% o 30%. Aunque los candidatos y las siglas varían, los votantes han ido favoreciendo con su voto mayoritario a este bloque dominante entre los opositores.

De hecho, algunos partidos solo han logrado espacios relevantes a través de alianzas, es el caso, por ejemplo, de UN que accedió al segundo lugar en una representación parlamentaria compartida con Demócratas en 2014, resultado que favoreció a ambas organizaciones. Más adelante, esta alianza se disgregó y se generaron distanciamientos en plena función parlamentaria entre representantes de ambas tiendas políticas.

Al comparar la dinámica de acuerdos en el último ciclo electoral 2019-2020, se puede percibir la volatilidad de los mismos: Creemos, en 2020, conforma una alianza sostenida por el Partido Demócrata Cristiano (PDC); Unión Cívica Solidaridad (UCS) y una agrupación ciudadana denominada Camino Democrático para el Cambio de Tarija, que para las elecciones de un año antes había conformado otras alianzas con candidaturas independientes. Del mismo modo, UCS apoyó en ese momento a la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas, mientras que el PDC postuló al candidato Chi Hyun Chung. Algo parecido sucedió con la alianza Juntos que se conformó para las elecciones de 2020 alrededor de la entonces presidenta Jeanine Áñez. Esta alianza estuvo conformada por el MDS, UN¹² y por las agrupaciones ciudadanas, Unidos para Renovar y Todos, y SOL.bo. Cabe

12 Si bien no llegaron a consolidar la alianza formalmente ante el OEP, Doria Medina fue candidato a la presidencia con todo el apoyo político y logístico de su partido.

hacer notar que, para las elecciones de 2019, en cambio, SOL.bo y UN habían apoyado la candidatura de Carlos Mesa y CC, sin embargo, en 2020 le retiran su apoyo y deciden apostar por Áñez.

Por su parte, CC concurrió en ambos comicios en alianza con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), pero junto a agrupaciones ciudadanas distintas, en este último caso con Chuquisaca Somos Todos y Primero la Gente (Tarija).

También ocurre que, en plena gestión de gobierno suelen existir desplazamientos en los acuerdos interpartidarios, sobre todo a nivel subnacional, así como rupturas o cambios y la migración de algunas autoridades a otros frentes políticos. Es el caso de varios candidatos opositores a la ALP o a las alcaldías quienes, durante el ejercicio de sus mandatos, se trasladaron a las filas del MAS.

A nivel local, los acuerdos se activan en etapas electorales buscando mejorar el desempeño en las urnas. Hay que añadir que los partidos políticos nacionales suelen buscar alianzas con agrupaciones ciudadanas locales para facilitar su presencia a nivel territorial y acceder al poder, independientemente de las identidades ideológicas. La única línea que no suele franquearse, aunque también esto es relativo, es la frontera MAS-anti MAS.

Es deseable, según la entrevistada de una agrupación ciudadana, que a nivel local se pueda trascender el electoralismo y pensar en la construcción de alianzas más estables. Esta reflexión es importante porque la forma política “alianza” podría convertirse en pieza clave de un sistema partidario más estable en el futuro.

Tercer circuito

El circuito más corto, casi personalizado, de la interacción política, opera justamente entre organizaciones políticas y personalidades, en la mayoría de los casos externos o ajenos a la organización. Este hecho, que es destacado en todas las entrevistas, adquiere relevancia porque forma parte de

un aspecto central de la cultura partidaria: la mediación personal de la política. Es el caso habitual de la invitación por parte de los dirigentes de las organizaciones políticas a candidaturas independientes para participar como candidatos en contiendas electorales o, también, lo que sucede durante la gestión de estos candidatos “invitados” una vez que asumen el cargo y optan por una gestión autónoma.

El acuerdo consiste básicamente en el préstamo o alquiler de la sigla partidaria a candidatos *outsiders* que buscan habilitarse para participar en elecciones o a líderes políticos con trayectoria previa, como Carlos Mesa, Tuto Quiroga o Víctor Hugo Cárdenas, quienes participan en elecciones a través de siglas políticas ajenas a sus historias políticas personales.

Estas negociaciones muestran la debilidad de las organizaciones políticas reducidas al valor de la “denominación” o la sigla, pues en muchas ocasiones se producen sin imponer ninguna condición. Un caso representativo de esta práctica política, aunque por supuesto no el único, es el del MTS en los comicios subnacionales de 2021. La presencia de esta organización en varios lugares del territorio nacional sorprendió y sumó a las estadísticas electorales, aunque no se basaba en una implantación territorial real. En otras palabras, el MTS surgió y circunscribió su actividad política inicialmente al departamento de La Paz, donde se consolidó su presencia en las elecciones para gobernadores de 2015 con el triunfo de su líder principal, Félix Patzi. En las siguientes elecciones subnacionales de 2021, el MTS puso a disposición su sigla en varios departamentos y municipios del país. Así logró una importante cantidad de votos pero que no significan una presencia orgánica del partido. En realidad, se trata del triunfo de personalidades conocidas localmente con trayectorias propias totalmente ajenas a esta organización política. El MTS participó con candidaturas en casi 60 municipios, en la mayoría sin éxito porque, de acuerdo con un entrevistado de esta organización, no hubo suficiente trabajo con las

organizaciones locales. En cambio, triunfó en lugares donde logró acuerdos con personajes totalmente ajenos y sin ningún condicionamiento o exigencia. Es el caso de los candidatos a las gobernaciones de Pando y Beni. En el primer caso, se trata de Regis Richter, un dirigente antes cercano al MAS que no resultó elegido como candidato por ese partido y decidió competir por cuenta propia recurriendo a la sigla del MTS con la que derrotó a Miguel Becerra, candidato del MAS. En el Beni sucedió algo parecido con la candidatura de Alejandro Unzueta, un médico *outsider* sin trayectoria política previa, cuyo liderazgo se gestó en la lucha contra el Covid-19 en esa región con la entrega de *kits* de medicamentos de forma gratuita a la población. Unzueta también fue desechado por el MAS en primera instancia, y optó por la sigla del MTS, imponiéndose en los comicios para la Gobernación. En ambos casos, se conoce públicamente que hubo un acuerdo con el MTS para habilitar sus candidaturas, pero sin ningún tipo de acercamiento orgánico a esta sigla pues apenas habían conocido al líder principal del partido. Una vez en el cargo, estas autoridades operan prácticamente por cuenta propia, y no consultan ni siguen los lineamientos del partido; de hecho, el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, hizo declaraciones personales sobre cómo iban a ser sus vínculos políticos durante la gestión de manera autónoma.

También se pueden percibir las dificultades de este tipo de alianzas personalistas durante las gestiones parlamentarias, que como se ha señalado en páginas anteriores, en muchas ocasiones y para lograr un mejor vínculo con los sectores sociales o la ciudadanía sobre todo de los territorios a que representan, las organizaciones políticas optan por candidatos invitados externos, pero cuando estos asumen funciones legislativas, se apartan de la organización y asumen vuelo propio con sus propias proyecciones y puntos de vista, apuntando a reproducir su legitimidad personal con los electores, al margen del partido u organización que los promovió.

Estas alianzas con personajes no orgánicos también han perjudicado al MAS, como en los casos de Jorge Dockweiler, candidato a alcalde en La Paz y Mario Cronembold, aspirante a gobernador en Santa Cruz, entre otros, quienes parecían prometer triunfos incontrastables por sus éxitos personales, pero que, al final, fueron derrotados por Iván Arias y Luis Fernando Camacho, respectivamente.

En definitiva, las alianzas volátiles —ya sea con otros partidos, agrupaciones ciudadanas o más aún, con liderazgos personalistas externos a la organización— debilitan aún más las ya precarias estructuras organizativas, a diferencia de lo que podrían significar alianzas programáticas y sostenibles en el tiempo.

Visiones sobre la normativa, limitaciones y recomendaciones

Desde que se logra instalar la democracia boliviana en 1982, el tema de la legislación para regular la actividad de los partidos fue motivo de discusiones y propuestas. Durante las primeras dos décadas el funcionamiento de los partidos era normado junto con las leyes electorales. Recién en 1999 se aprobó la Ley de Partidos, una norma específica que significó un paso fundamental para su regulación porque se consideraba, por primera vez de manera extensa, los distintos aspectos de la vida partidaria: requisitos para habilitar su participación en elecciones, características de la estructura y funcionamiento interno, derechos y deberes de los militantes, políticas de alianzas y sanciones, entre los aspectos más importantes.

No obstante, las dificultades de los partidos en la tarea de representar a la sociedad, condujeron, primero, a la aprobación de las diputaciones uninominales (en la reforma constitucional de 1994) para acercar el representante al representado y, más adelante, se dio lugar a la apertura de la representación a otros formatos organizativos para la competencia electoral, como las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, a través de la Ley 2771 de 2004, en

conurrencia con la Ley de Participación Popular (1995), que había extendido el escenario de representación a más de 300 municipios urbanos y rurales.

La nueva Constitución Política del Estado de 2009 determinó el fin del monopolio partidista de la representación política estableciendo tres formatos: partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de pueblos indígena originario campesinos. El cambio constitucional, por supuesto, requería de una urgente adecuación de las leyes de Partidos Políticos y de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas; sin embargo, esto recién sucedió en 2018, cuando se logró aprobar una nueva ley concurrente con la CPE.

Esta ley tuvo su origen en el Proyecto de Ley de Organizaciones Políticas N.º 245/2018-2019 originado en el OEP que luego pasó a la Asamblea Legislativa para su consideración, donde fue sorprendentemente aprobada sin consultar con el OEP y con varias modificaciones particularmente referidas a la realización inmediata de elecciones primarias. De esta manera, el 1 de septiembre de 2018 se promulgó la referida ley. Al parecer, la intención de los asambleístas del MAS fue aprobar la LOP con el fin de consolidar definitivamente la candidatura cuestionada de Morales y García Linera, a través de la inmediata realización de elecciones primarias, pues en dicha norma se establecía con claridad el carácter vinculante de dichas elecciones con los comicios generales de octubre de 2019, clausurando cualquier posibilidad de modificación en las listas de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia.

Ahora bien, en su parte sustancial, esta nueva ley repite, en gran medida, las disposiciones establecidas en la Ley de Partidos de 1999, por tanto, no es innovadora. Sin embargo, varios de esos aspectos resultan positivos para el ordenamiento de las organizaciones políticas. Incluso la elección primaria para la selección de candidaturas, por la forma en que fue aplicada en 2019 –es decir, de manera apresurada y sin una

verdadera competencia entre candidatos– tuvo efectos poco o nada relevantes para la democratización de las organizaciones. De hecho, es uno de los temas que precisa ser sometido a un debate y los ajustes correspondientes sobre su pertinencia.

De las entrevistas realizadas a algunos integrantes de las organizaciones políticas para el actual estudio, se pueden inferir algunos problemas relevantes que las propias organizaciones han identificado.

En general, existe la percepción de que esta normativa fue concebida para beneficiar al partido de gobierno, por tanto, estaría parcializada. Se percibe en ese sentido una “obsesión” por el control estatal a la vida interna de las organizaciones políticas. Manifiestan que existe una sobrerregulación que resulta, en palabras de una de nuestras entrevistadas, asfixiante y dificulta las posibilidades de crear nuevas organizaciones o renovar las existentes. Entre los aspectos críticos mencionados por varios de los entrevistados cabe mencionar los siguientes: el exceso de requisitos para constituir las organizaciones políticas, la burocratización de los informes administrativos y de rendición de cuentas, el control a los *spots* publicitarios antes de difundirlos en campaña, entre otras.

La falta de recursos económicos también se convierte en una dificultad. La totalidad de los opositores consultados consideran necesario consolidar el financiamiento público a las organizaciones políticas y que este sea extensible a las agrupaciones ciudadanas y a las organizaciones de pueblos indígena originario campesinas.

También se cuestionó la realización de primarias pues estas no cumplieron el objetivo de favorecer a la democratización interna. Pensamos que esto se debe, como dijimos antes, a su forzada aplicación, pero también a que los partidos son estructuralmente muy débiles y tienen un tamaño reducido y una escasa vida orgánica, además de obedecer a un solo liderazgo y a su entorno, quienes deciden los destinos de la organización y de las candidaturas.

En general, las organizaciones políticas no están preparadas para la aplicación de este tipo de mecanismos, pues ni siquiera logran consolidar candidaturas internas alternativas a la presidencia.

También se ha destacado que hay una confusión en la ley actual entre partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, pues la única diferencia sería que unos son solo de alcance nacional y los otros departamental, lo cual es cierto. En suma, la diferencia solo reside en su alcance territorial por lo que bien podrían llamarse partidos nacionales y partidos departamentales o municipales. En las entrevistas se llamó la atención sobre el rol de las agrupaciones ciudadanas las cuales, al parecer, habrían contribuido a la atomización de la política, debilitando aún más la representación política.

Del mismo modo, uno de los entrevistados llamó la atención sobre las alianzas, pues considera que deben regularse de mejor manera para evitar alianzas a veces indiscriminadas y pasajeras que no incentivan el fortalecimiento de la representación y conspiran contra los proyectos nacionales y sostenibles en el tiempo. Se sugirió, por ejemplo, poner como condición un mínimo de dos años de persistencia de una alianza.

Por otra parte, en términos de estructura y funcionamiento, la LOP no reporta cambios relevantes. Las sugerencias, en ese sentido, resultan innovadoras. Por ejemplo, el entrevistado de una de las organizaciones, retomando la matriz indígena que predomina en determinados territorios del país sugiere que, por ejemplo, el sistema de elección de autoridades se podría producir por rotación, emulando las formas comunitarias de elección de autoridades o, también, por turnos, según territorio, incorporando en esa lógica a unidades territoriales mayores, como departamentos o regiones del país. Del mismo modo, se recomienda activar las reuniones o cabildos para la toma de decisiones, así como para la definición de ternas a los distintos cargos, es decir, que estos vayan ascendiendo de las más pequeñas

unidades territoriales a las más grandes, en un proceso real de abajo hacia arriba para acercar a la sociedad a la dinámica de las organizaciones políticas. En todo caso, sugerimos abrir los formatos actuales otorgando mayor flexibilidad y amplitud para que cada organización defina cómo operar internamente, por supuesto en conocimiento del TSE y congruente con la Constitución y las leyes.

Respecto a las agrupaciones ciudadanas, se percibe la necesidad de que estas reciban un tratamiento más flexible que los partidos y no se conviertan en simples partidos de corte regional o local. Uno de los entrevistados destacó la necesidad de que las agrupaciones ciudadanas respeten a las organizaciones sociales y no se genere una cooptación. “Debe haber independencia sindical, vecina o cívica y no desnaturalizar a las organizaciones sociales como de hecho sucede”, señaló un entrevistado.

En síntesis, los problemas de la actual normativa electoral son los siguientes: clarificar la distinción entre partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, establecer una mayor flexibilidad en la normativa y propender a un control menos rígido por parte del OEP para permitir la reinención de las organizaciones políticas sin tantas trabas (por ejemplo, permitir formas propias de selección de dirigentes y su funcionamiento interno), evitar la excesiva burocratización de los trámites administrativos sin descuidar las tareas de fiscalización, extender el financiamiento público directo de manera efectiva a agrupaciones ciudadanas y organizaciones indígenas, reabrir el debate sobre las elecciones primarias para establecer su pertinencia y, en su caso, introducir los ajustes necesarios para su próxima aplicación. Finalmente, debido a que las alianzas se han convertido en una estrategia para facilitar o mejorar las condiciones de acceso al poder, se plantea la pertinencia de reglamentarla –limitándolas, de ser necesario– o, más bien, de dar curso a este nuevo formato de participación política de manera más amplia y flexible, cuidando su sostenibilidad en el tiempo.

Desde el MAS, de acuerdo a los entrevistados, se constata que su estatuto no está acorde modelo de la LOP, por lo que trabajarán en su adecuación. En general, no están de acuerdo con el financiamiento público y uno de los entrevistados pide que el régimen de alianzas debe ajustarse. Respecto de las primarias, les parece que estas son útiles pero que deben regularse mejor, porque el partido debe presentar, al menos, dos candidatos para la competencia interna. Finalmente, se señala la necesidad de “evitar el mercado de siglas” y de exigir a las organizaciones políticas condiciones básicas para su institucionalización. Uno de los entrevistados, haciendo una autocrítica, mencionó que esto evitaría también en el MAS (haciendo una autocrítica) sillazos,¹³ dedazos y otro tipo de anomalías. “La ley debe ser pensada para ayudar a la totalidad de las organizaciones políticas y no al revés”, afirma un entrevistado.

Consideramos que todos estos elementos deben conducir a la discusión sobre los espacios o mecanismos que aseguren una mejor convivencia política y contribuyan a cerrar la brecha entre la representación formal de las organizaciones políticas y la dinámica informal, que es la que en realidad opera en las mismas, ligada a las estructuras del campo multiorganizacional en Bolivia. Porque, al final de cuentas, de manera general, la democracia y la construcción partidaria son procesos inseparables ya que “los partidos crearon la democracia, o, mejor dicho, la democracia moderna es un producto de la lucha de los partidos” (Schattschneider, 1964: 26). La tarea, entonces, consiste en asegurar que además de tener un sistema de partidos, este se una a un sistema de representación acorde con nuestra realidad.

13 En alusión al lanzamiento de sillas contra el presidente del MAS, Evo Morales, y otros dirigentes, por parte de militantes disconformes con el proceso de designación de candidatos para las elecciones subnacionales, durante una asamblea realizada en Lauca Ñ (Chapare), el 15 de diciembre de 2020.

Conclusiones

La reciente crisis política de 2019-2020 ha puesto al descubierto una vez más las grandes debilidades del sistema de partidos boliviano, en dos dimensiones específicas: la falta de representatividad y las formas de conducción política cuestionadas. En el caso de los opositores al MAS, los ciudadanos han cuestionado a los partidos como interlocutores válidos para la política y han optado por acciones directas; en el caso del MAS, cuyo rasgo puede ser extendido a otras organizaciones políticas, por el cuestionamiento desde las bases a las formas verticalistas de conducción partidaria.

Ante este escenario, consideramos que la alternativa para recuperar la confianza e interés en estas entidades imprescindibles para el funcionamiento de la democracia es adecuar la actual Ley de Organizaciones Políticas a una realidad que exige otras formas de operar de la política.

Primero, en lugar de insistir en el sometimiento a preceptos normativos del “deber ser” de una organización, la ley tiene que convertirse en un instrumento útil, abierto a posibilidades organizativas flexibles y más representativas de la diversidad y heterogeneidad social. En otras palabras, una ley no puede pretender homogenizar a las organizaciones políticas y subyugarlas mediante reglas y sanciones ejercidas por el OEP; esta opción no parece resultar útil para otorgar nuevas oportunidades a la representación de cara a las elecciones 2025 y 2026.

Segundo, el siglo XXI ha traído cambios en la sociabilidad e interacción ciudadana que se sobreponen a las históricas fracturas sociales estructurales no resueltas y agravadas por la pandemia, la crisis económica y la confrontación política. Esta realidad requiere, con urgencia, ser representada en el ámbito dialogal de la política y acercar las instituciones a la sociedad. En la historia reciente se han incorporado varias reformas para propiciar este acercamiento, sin embargo, se requiere una lectura más acuciosa de la realidad de manera

que la LOP no continúe atrapada en la misma lógica anterior, limitando el horizonte trazado en la CPE.

En ese sentido, es preciso abrir el debate sobre una reforma de la Ley de Organizaciones Políticas como punto de partida para eliminar la excesiva regulación que se evidencia y empezar a repensar los mecanismos de representación política estrictamente formales anidados en las distintas organizaciones políticas, para combinarlos con el multiverso de formas de representación informal basadas en el componente organizacional que tenemos los bolivianos, en el sentido amplio de la palabra.

Esta apertura de la agenda a reformas normativas abriría la posibilidad de trabajar en la recuperación de la confianza institucional en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), luego de su crítica actuación durante el proceso electoral de 2019; por esto mismo, está claro que las tareas cruciales deben llevarse adelante en tiempos no electorales y garantizando que el OEP sea sujeto protagónico de este cambio.

Lógicamente, la ruta de la eliminación de la excesiva regulación normativa sobre las organizaciones políticas debe respetar parámetros mínimos; estos pueden encontrarse con absoluta claridad en la Constitución Política del Estado y, a partir de ahí, comenzar a construir un edificio flexible que se adapte a la realidad heterogénea de la democracia boliviana.

Bibliografía

- Alcántara Sáez, Manuel (2002). “Experimentos de democracia interna: Las primarias de partidos en América Latina”, Kellogg Institute, Working Paper N.º 293, abril. Disponible en: https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/293_0.pdf
- Colomer, Josep M. (2001). *Instituciones políticas*. Barcelona: Ariel.
- Duverger, Maurice (2012). *Los partidos políticos*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica (FCE).

Schattschneider, Elmer Eric (1964). *Régimen de partidos*. Madrid: Tecnos.

Zegada, María Teresa (2017). “Las organizaciones políticas sin militancia, los nuevos derroteros de la democracia interna”, *Revista Andamios*, N.º 9-16, La Paz: Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Zuazo, Moira (2009). *¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia*. La Paz: FES-Bolivia.

IV

Bolivia 2019-2021: De la épica ordinaria y el regreso al (¿nuevo?) orden

Manuel Canelas

América Latina: interrupciones no democráticas y denuncias de fraude como recurso

En no pocas ocasiones, los análisis políticos patrios suelen explicar todo lo que ocurre desde la especificidad boliviana, pero si bien el país es mediterráneo, esto no significa que sea una isla política y que lo que sucede aquí no tenga algunas causas, lecturas, vínculos y ecos internacionales. Lo que ha ocurrido en la política nacional estos últimos años –y, en particular, los dos últimos– puede, y debe, también ser explicado entendiendo ciertas corrientes de fondo que atraviesan buena parte del continente.

En la región latinoamericana, durante las últimas dos décadas, algunas fuerzas políticas han incorporado progresivamente a la disputa político-electoral instrumentos y acciones alejados de la democracia. En particular, queremos destacar dos que, con el paso del tiempo, han ido combinándose: las interrupciones no democráticas de los órdenes constitucionales –con distintas formas, desde algunas que incluyen la participación de elementos de las instituciones armadas hasta los llamados “golpes parlamentarios”– y las denuncias de fraude electoral cuando el escenario no resulta favorable para determinados intereses. Cada vez más, estas denuncias no se quedan en meras declaraciones y son el

eje de una estrategia de desestabilización y deslegitimación temprana de los recién electos. Venezuela fue el primer caso en lo que llevamos de siglo: el golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, en abril de 2002, inauguró esta línea de acción. Recordemos que, de manera breve, el entonces presidente de la patronal, Pedro Carmona, asumió de manera ilegal la jefatura de Estado mientras el presidente constitucional era retenido con el concurso activo de algunos militares. Carmona derogó muchas normas, entre ellas la Constitución de 1999. El 2009 llegó el desalojo de Manuel Zelaya en Honduras. Zelaya pretendió realizar una consulta popular sobre el cambio de la Constitución; esto le costó su derrocamiento por parte de los militares y buena parte de la clase política tradicional. Es cierto que, entonces, esta acción recibió una fuerte crítica y el repudio internacional, ocasionando desde la suspensión del país en la OEA hasta el retiro de varios embajadores. Sin embargo, el paso del tiempo, las alianzas que se forman y la repetición de la práctica en otras latitudes parecen haber vuelto “más tolerable” este tipo de acciones a ojos de varios de los llamados países desarrollados, de importantes medios de comunicación e incluso de algunos organismos internacionales como la OEA –marcada negativamente estos años por la clara e irresponsable extralimitación en su función de su actual secretario general, Luis Almagro. Por supuesto, los cuatro años de gobierno de Donald Trump han sido fundamentales para apuntalar esta poco democrática tendencia. Algunos países desarrollados parecen haber desplazado el mantra económico neoliberal del “dejar hacer” al ámbito democrático y miran para otro lado las semanas o meses que hagan falta cuando cosas de este tipo ocurren.

En 2012, Fernando Lugo, quien había logrado, con su victoria presidencial, romper varias décadas de absoluto dominio del Partido Colorado en el Paraguay, fue destituido por la Cámara de Diputados de manera aceleradísima. Además de la fragilidad de la acusación en su contra, todo el proceso (ni más ni menos que la destitución de un jefe

de Estado electo en las urnas) duró apenas dos días. Hubo crítica internacional, pero fue menos contundente que en el caso de Honduras y, del mismo modo que sucedió allí, los que llevaron adelante la operación contaron con suficientes aliados para resistir y consumir así el derrocamiento de Lugo. En 2016 le llegó el turno a Brasil con el *impeachment* a Dilma Rousseff por las llamadas “pedaladas fiscales”. No es que en los casos anteriores se hayan cuidado mucho las justificaciones, pero en este caso, el argumento era tan precario que dejaba en evidencia, desde el inicio, la intención política de lograr, mediante mecanismos parlamentarios viciados, lo que no se había logrado en las urnas. Tanto es así, que Luis Almagro criticó con dureza la determinación en distintas oportunidades y llevó este tema incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –es cierto que, entonces, la correlación de fuerzas en la OEA era distinta a la actual. En un comunicado, la Secretaría General de la OEA sostuvo que:

Nuestra Organización ha hecho un detallado análisis sobre el juicio político iniciado contra Dilma, y ha concluido que no se encuadra dentro de las normas que sustentan dicho procedimiento. No existe una acusación de carácter penal contra la Presidente, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas en 2014. Esta es en todo caso una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución. Este análisis nos genera unas dudas que hemos visto reflejadas, por otra parte, también en la sociedad brasileña e incluso dentro del propio sistema de acusación pública, como se señaló en una carta firmada por 130 miembros del Ministerio Público de Brasil. (...) Además, es necesario resaltar que un régimen presidencial como el brasileño –y la gran mayoría de los de nuestro hemisferio, salvo el Caribe anglófono–, no puede operar de buenas a primeras como si fuese un régimen parlamentario, intentando la destitución, en este caso de la primera mandataria, por un cambio en la correlación de fuerzas políticas en la coalición.

En el mismo comunicado se incluían partes de los pronunciamientos del Sistema de Naciones Unidas y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) muy críticos con la operación que se desarrollaba en el Parlamento de Brasil para destituir a la presidenta democráticamente electa. Nada de esto logró evitar que se consumara la destitución y durante el proceso –quedan en el registro las numerosas intervenciones parlamentarias donde no se mencionaron las supuestas causas que motivaban el proceso– no se disimuló en absoluto de lo que en el fondo se trataba: echar de la manera que fuera al Partido de los Trabajadores del poder.

Como luego de derrocar a Dilma eventualmente se abrirían las urnas y Lula figuraba como el favorito en las encuestas, la ofensiva no se podía frenar: era imposible permitir que Lula fuese candidato. La estrategia, como es lógico, no se queda a medias: sacaron a Zelaya del país durante largo tiempo; buscaron cerrar la posibilidad de un Lugo candidato nuevamente; y a Lula lo metieron en la cárcel por el “caso tríplex” (referido a un supuesto apartamento que el expresidente habría recibido como soborno), además de inhabilitarlo como candidato por varios años. El objetivo, por lo tanto, no era solo una figura política, por mucho que esta incomodase o representase una amenaza: se trataba de procurar sacar del juego a una organización política entera durante mucho tiempo. En el caso de Lula, el juez Sergio Moro, ahora caído en desgracia, contó con todos los apoyos políticos y mediáticos necesarios para vestirse de “superjuez” y sentenciar al expresidente justo a tiempo para evitar que compita en las elecciones. El ganador de esa justa sin Lula, Jair Bolsonaro, premió el trabajo de Moro dándole el Ministerio de Justicia. Fueron diferentes sectores de la derecha –a esas alturas la centroderecha se había subordinado ya al liderazgo de la derecha más radical– quienes participaron tanto del derrocamiento de Dilma como de los procesos montados contra Lula y es por esto que Bolsonaro supo repartir reconocimientos. Esto últimos meses esta historia ha

tenido giros notables: se ha comprobado que Moro fue todo menos justo en los procesos contra Lula; la justicia brasileña ha devuelto los derechos políticos a Lula quien, además, salió de prisión; Sergio Moro renunció como ministro y ha sufrido un hundimiento de su imagen pública; y la popularidad de Bolsonaro, luego de una de las peores gestiones conocidas de la pandemia, marca mínimos históricos con un 54% que lo califica de pésimo contra solo un 23% que dice que le parece bueno (*Exame*, encuesta del 1 de julio de 2021).

En fechas más recientes hemos conocido que una parte de la derecha ecuatoriana urdió planes muy peligrosos para la democracia ecuatoriana luego de la primera vuelta de las elecciones generales. Andrés Arauz, candidato del frente correísta, logró entonces el primer lugar con un 32,72%. El segundo lugar resultó muy ajustado entre el banquero Guillermo Lasso (19,74%) y el líder indígena Yaku Pérez (19,39%). Distintas encuestas y buena parte de las principales plataformas mediáticas aventuraban una segura derrota de Lasso en el balotaje; al contrario, Pérez tenía más opciones de batir a Arauz. Una parte de la derecha pensó que había que hacer todo lo posible por evitar un retorno al poder del correísmo. Primero, apostaron por las denuncias de fraude de Yaku Pérez. Se armó una fuerte campaña de denuncia de fraude sin mucha más evidencia que el propio reclamo. Esos días de febrero, Ecuador atravesó momentos de alta tensión. Llegaron a sentarse ambos candidatos, Lasso y Pérez, en el ente electoral, en una reunión íntegramente transmitida en vivo. Pero el acuerdo por una revisión parcial del conteo no convenció a Pérez quien, dos días después, retomó las denuncias de fraude con mayor fuerza y atacando directamente a Lasso. Cuando el organismo electoral decidió continuar con el proceso, de cara a una segunda vuelta, la tensión subió aún más, aumentaron las acusaciones contra sus miembros e, incluso desde otros poderes del Estado, se pretendió avanzar en procesos administrativos y judiciales contra ellos. Muchos de los que denunciaban fraude señalaban

a Correa como el gran cerebro detrás de lo sucedido. Nunca explicaron bien cómo el correísmo supuestamente había logrado influir o pactar nada menos que con un órgano electoral dirigido por personas afines a Yaku Pérez y a Lenin Moreno. Pero estas denuncias en realidad funcionan como creencias; importa poco la evidencia. Sin embargo, cuando el plan “fraude-recuento-Yaku a segunda vuelta” fracasa, algunos sectores barajan la alternativa de algo más radical: evitar por todos los medios la realización de la segunda vuelta entre Arauz y Lasso. Esto no lo cuentan izquierdistas ecuatorianos o del espectro del Foro de São Paulo, sino connotados representantes conservadores de la derecha ecuatoriana y regional.

Jaime Durán Barba es una figura muy importante en la derecha latinoamericana y, como tal, es poco sospechoso de inventar cosas que sirvan a los proyectos progresistas. A solo una semana de la victoria de Lasso en la segunda vuelta, el famoso consultor, en su columna del diario argentino *Perfil*, contaba: “Bastantes empresarios y políticos que respaldaron a Lasso en la primera vuelta se convencieron de que no había ninguna posibilidad de que gane en segunda vuelta. Formaron dos grupos: los que querían que dé un paso al costado para que pase a la segunda vuelta Yaku Pérez, que había quedado tercero por 30.000 votos, y otros, más temerosos, que auspiciaban un golpe de Estado a la boliviana que habría sido desastroso para la democracia”.¹ Hay que recordar, además, que Durán Barba se incorpora y dirige la campaña de Lasso para la segunda vuelta, la que lo lleva a la presidencia.

Un mes después, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil e histórica figura de la derecha ecuatoriana, daba algunos detalles más sobre esto en una entrevista. Decía Nebot que él no acompañó la estrategia de las denuncias falsas de Yaku

1 Jaime Durán Barba, “Transformación política en Ecuador”, 18 de abril de 2021, *Perfil*, en: <https://www.perfil.com/noticias/columnistas/transformacion-politica-en-ecuador-por-jaime-duran-barba.phtml>

Pérez para intentar pasar al balotaje en lugar de Lasso –plan que se apoyaba en la idea de “no importa quién tenga los votos sino quién le pueda ganar a Correa”– como tampoco el plan golpista: “[...] cuando no les salió ese numerito quisieron hacer un golpe de Estado, ya tenían hasta el que llamaban el [plan] Yeroví de Imbabura, [Pablo Celi] estaba en el plan, como muchos empresarios, como mucha gente y nosotros luchamos para que eso no suceda, defendiendo la democracia”.²

Apenas unas semanas antes de la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas, el mundo asistió al intento de toma del Capitolio, en Washington, por parte de los seguidores de Donald Trump, quien había agitado la idea de fraude electoral tras la victoria de Joe Biden. Denuncias sin evidencias, intoxicación en redes sociales, exigencias de revisiones electorales imposibles, especulaciones con la anulación de las elecciones, movilizaciones violentas, *fake news*... Un repertorio casi idéntico al de Keiko Fujimori y sus aliados desde la noche de la segunda vuelta electoral en el Perú el 6 de junio pasado. La misma noche electoral empezó la estrategia de desestabilización y no reconocimiento de la victoria de Castillo. Fujimori y sus voceros, desde Mario Vargas Llosa hasta Lourdes Flores, pasando por Alfredo Barnechea, pusieron en circulación todo tipo de sospechas e, incluso, propagaron llamados abiertos al golpe de Estado. La presión sobre las autoridades electorales se fue incrementando al punto de que uno de sus máximos ejecutivos, Piero Corvetto, fue agredido física y verbalmente en el Club de Regatas. La excandidata presidencial, y entusiasta vocera del supuesto fraude, Lourdes Flores, arrojó toda sombra de duda posible al sostener: “Yo estoy convencida que la señora Keiko

2 Esteban Chávez, “El plan Yerovi e Imbadura, de Pablo Celi, buscaba derrocar a Arauz si ganaba”, 19 de mayo de 2021, *El Espectador Chimborazo*, en: <https://elespectadorchimborazo.com/el-plan-yerovi-de-imbabura-de-pablo-celi-buscaba-derrocar-a-arauz-si-ganaba/>

Fujimori ha ganado las elecciones, que somos más del 50% los que hemos votado a favor de ella y que ha habido estas maniobras fraudulentas en mesa, en un puñado de ellas que han tergiversado el resultado electoral”.³ Durante toda esta campaña de desestabilización se ha señalado como prueba del fraude la existencia de mesas electorales, sobre todo de la región andina, donde Castillo obtiene votaciones por encima del 80%; se ha puesto la sospecha en que habrían existido papeletas fraguadas sabiendo que, por las características del sistema electoral peruano, lo relevante son las actas; y se han señalado algunas posibles irregularidades como contundente evidencia de planificado fraude.

Otro excandidato presidencial, Alfredo Barnechea, iba un paso más allá el 1 de julio pasado reclamando abiertamente un golpe de Estado que impida la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú: “Esta pelea no termina con la proclamación del Jurado [Nacional de Elecciones], ese Jurado es espurio y en su proclamación no termina la pelea. No vamos a aceptar a un presidente nulo. Vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude. La pelea no termina con la proclamación del Jurado (...). Las Fuerzas Armadas no son golpistas, son unas Fuerzas Armadas constitucionalistas, que salen ahora en defensa de derechos constitucionales. Acá se ha creado lo que no había hace algunos meses, acá hay una alianza invencible de civiles y militares. Me dirijo al jefe del Comando Conjunto, César Astudillo, para que les transmita a sus comandantes generales que la mayoría del Perú está con ellos. Para decirles que los civiles no nos vamos a rendir, y que esa alianza si se hace legítimamente, esa alianza militar civil será la que pondrá al Perú en el siglo XXI”.⁴

3 “Lourdes Flores: ‘Yo estoy convencida que Keiko Fujimori ha ganado las elecciones”, Canal N, en: <https://canaln.pe/actualidad/lourdes-flores-yo-estoy-convencida-que-keiko-fujimori-ha-ganado-elecciones-n436334>

4 “Barnechea: Alianza militar-civil es la que pondrá al Perú en el siglo XXI”, 2 de julio de 2021, en: <https://agendapais.com/politica/barnechea-alianza-militar-civil-es-la-que-pondra-al-peru-en-el-siglo-xxi/>

Como último ejemplo de la temeraria y poco democrática estrategia de la derecha peruana, la propia Keiko Fujimori no logra aportar prueba alguna de lo que denuncia, de hecho, reconoce que no las tiene: “Ya sabemos lo que hicieron para voltear la elección. Hoy necesitamos saber cómo lo hicieron. Si tienes algún testimonio o prueba de cómo Perú Libre hizo trampa en mesa, denúncialo en tus redes, llévala a un medio o envíala para que nosotros la hagamos pública”.⁵

La estrategia de la oposición boliviana durante octubre y noviembre de 2019 se inscribe, sin dificultad ni duda, en esta corriente regional: mismo guion, mismos aliados. Ya entraremos con más detalle sobre esto algo más adelante, pero las similitudes en las acciones y los discursos son elocuentes por mucho que les pese a algunos representantes de la oposición boliviana que ahora tienen prisa en salirse de la foto, de apariencia épica en ese momento de noviembre de 2019.

La sucesión como desafío del ciclo progresista

Uno de los motivos del relativo éxito de esta estrategia en la región ha sido el hecho de que los proyectos progresistas, con matices según los casos, no han sido capaces de resolver con éxito el tema de la fuerte dependencia de los grandes liderazgos carismáticos del ciclo. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, Rafael Correa, al no poder ser candidato de nuevo, tuvo que recurrir *in extremis* a la figura más popular de su espacio pero que, durante los últimos años, había tomado distancia de él y del proyecto: Lenin Moreno. Como la organización política que los cobijaba entonces, Alianza País, en realidad tenía poco peso, estructura y autonomía, al marcharse Correa del Ecuador, en el marco de un recrudescimiento del enfrentamiento con Moreno, fue sencillo

5 “Keiko Fujimori: ‘Ya sabemos lo que hicieron para voltear la elección’”, *Infórmate Perú*, 26 de junio de 2021, en: <https://informateperu.pe/politica/keiko-fujimori-ya-sabemos-lo-que-hicieron-para-voltrear-la-eleccion-video/>

para este, desde el Gobierno, acabar con ella, así como con las figuras que podían tener algo de entidad. La posterior inhabilitación de Correa y el exilio o cárcel de muchas de estas figuras, así como todos los obstáculos posibles puestos desde el Gobierno para lograr una sigla para las elecciones, llevaron a que, casi en el límite del tiempo, el correísmo pudiese presentar una alternativa pero que partía de un altísimo nivel de desconocimiento: Andrés Arauz. La receta para intentar corregir esto también llevó consigo un problema importante: la presencia de Correa durante la campaña de primera vuelta buscó hacer más conocido a su candidato, además de endosarle su todavía relevante popularidad, pero también permitió que se cohesione la fuerte antipatía que Correa despierta en grandes sectores y que –esto fue casi más negativo– le quite fuerza propia a la figura de Arauz.

Algo similar le sucedió a Cristina Fernández de cara a las elecciones de 2015 cuando escogió a Daniel Scioli como su sucesor en la boleta presidencial. Scioli estaba muy lejos de sectores importantes del bloque del Frente para la Victoria. De hecho, durante la campaña presidencial fueron notables los gestos de desaire de la propia Cristina Fernández, así como las duras críticas de sectores como La Cámpora o incluso de respetadas figuras intelectuales cercanas a esa órbita como Horacio González, promotor del espacio Carta Abierta contra Daniel Scioli. Esta no parecía la mejor estrategia si de lo que se trataba era de mantener el poder, pero enseñaba algo más que una incomodidad coyuntural con el candidato escogido y ponía sobre el tapete la dificultad de qué hacer cuando los proyectos tienen liderazgos tan fuertes que son imprescindibles, pero a veces también por esto mismo son temas no sencillos de resolver –Cristina había ganado las elecciones de 2011 con 54% en primera vuelta, pero no podía volver a ser candidata de inmediato. Precisamente con Durán Barba como jefe de campaña, Mauricio Macri ganó esas elecciones en segunda vuelta por un margen estrecho: 51,34% a 48,66% de Scioli. El kirchnerismo aceptó el resultado por

muy estrecho que fuera el cómputo final. Del mismo modo que lo hizo Andrés Arauz cuando perdió la segunda vuelta con Guillermo Lasso por menos de 5% o Daniel Martínez, que perdió con Luis Lacalle Pou por apenas 37.000 votos (menos del 1,5%) en las elecciones uruguayas de octubre de 2019.

Sin embargo, quizás por el fracaso de la experiencia con Scioli y por la conciencia de que su popularidad estaba ya algo resentida, Cristina Fernández pilotó su sucesión de manera distinta en 2019. Si bien había sectores que querían que ella liderase nuevamente la boleta, lo dicho por Alberto Fernández a inicios de 2018,⁶ pocas semanas después de sostener un encuentro de reconciliación con la expresidenta con quien llevaba diez años sin hablar, fue abriéndose paso en el peronismo. La propia Fernández llevó adelante la estrategia de reunificación del espacio y, además de Alberto Fernández, reestableció su relación con Sergio Massa –quien había competido en primera vuelta de 2015 por fuera del Frente para la Victoria– y se ubicó como candidata a la Vicepresidencia en las elecciones de octubre de 2019, dejando a Alberto Fernández la candidatura presidencial. Esta fórmula derrotó a Macri en la búsqueda de su reelección: 48,24% contra 40,28%, en primera vuelta.

En el caso boliviano, Evo Morales ha ganado todas las elecciones generales a las que se presentó con la excepción de la primera, de 2002. Si incluimos también las convocatorias a consultas ciudadanas donde su figura era la cuestión central, tenemos que su apoyo ha oscilado entre el 47,08% de las elecciones de octubre de 2019 –las cuales fueron dejadas sin efecto legal– al 67,43% del voto afirmativo que lo ratificó en el cargo en el referéndum revocatorio de agosto de 2008. Su peso político y centralidad durante los últimos 20 años están fuera de duda. Pero estos mismos números también han

6 “Alberto Fernández: ‘Con Cristina no alcanza, pero sin ella no se puede’”, *Diagonales*, 7 de febrero de 2018, en: <https://www.diagonales.com/contenido/alberto-fernandez-con-cristina-no-alcanza-pero-sin-ella-no-se-puede/7728>

vuelto su sucesión un tema difícil de solventar. El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que lidera Morales, ha sido el instrumento político más exitoso en la historia del país –alguien sostendrá, con algunas buenas razones, que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) todavía ostenta ese lugar. En cualquier caso, nos dice mucho sobre lo nacional popular, como tradición política dominante en el país, el hecho de que sean sus dos grandes exponentes desde mediados del siglo pasado, el MAS y el MNR, las dos organizaciones políticas más importantes de la historia de Bolivia. Es decir, en todo este tiempo no ha habido hegemonía posible por fuera de lo nacional popular. La característica flexible como organización del MAS y el liderazgo unificador de Morales lograron que el partido sea capaz de representar al grueso de los sectores populares, campesinos e indígenas del país. El MAS tiene algunos rasgos propios de un partido, pero carece de otros. Las organizaciones que lo conforman, de hecho, no pierden su entidad ni subordinan su entramado organizativo al partidario más que de manera intermitente. De hecho, durante los años no electorales, se suele hablar menos del –y desde– el MAS y algo más de –y desde– cada organización popular que es parte del mismo. Podemos decir que el MAS opera como una “lengua franca” entre distintos sectores y organizaciones y, en estas últimas dos décadas, el intérprete último de esta “lengua franca” ha sido Evo Morales, quien lograba finalmente la traducción de un cúmulo de demandas particulares en ciertas síntesis de interés general, siempre en un proceso conflictivo y donde nadie suele salir totalmente satisfecho ni tan profundamente molesto que encuentre más incentivos para competir por fuera que negociar desde adentro.

Estos fueron parte de los motivos que llevaron a pensar que sin Morales al frente del gobierno, el proyecto político del cambio desarrollado desde 2005 se ponía en serio peligro. Además, el riesgo de que el MAS se resquebraje era bastante real para varios de sus cuadros dirigenciales. Los liderazgos

exitosos no suelen ni improvisarse ni salir de la decisión de una reunión de cuatro horas entre expertos electorales. Pero los liderazgos también sufren desgastes y el de Evo Morales se expuso a esto cuando, a menos de un año de haber ganado las elecciones generales de 2014 (con un 61,3% contra un 24,23% del principal contendor, Samuel Doria Medina), se planteó el inicio de un proceso de referéndum de modificación de la Constitución para permitir que pueda ser nuevamente candidato. Este proceso terminó con la consulta del 21 de febrero de 2016 donde el “No” ganó por estrecho margen: 51,3% contra 48,7%. Entonces, los motivos y preocupaciones que habían llevado a la decisión de realizar la consulta cobraron una nueva dimensión ante la posibilidad cierta de que Evo Morales ya no liderase la candidatura en las siguientes elecciones. Se añadieron el temor a un eventual gobierno “pato cojo” o a que la lucha por la sucesión hiciera imposible mantener al bloque popular unido; todo esto llevó a buscar la vía legal para habilitar, de nuevo, a Morales como candidato. Entonces, se puso sobre la mesa de discusión la disputa entre la voluntad popular expresada en las urnas (no es relevante si, como efectivamente pasó, la campaña del “No” usó las *fake news* de manera intensa, pues el resultado fue el que fue) frente a una polémica ruta legal para buscar, de todas maneras, la habilitación. Esto supuso pagar una nueva factura a la imagen y popularidad de Evo Morales y elevó la tensión política por mucho tiempo. Desde que se planteó la consulta, empezamos a ver encuestas donde la diferencia entre aprobación de gestión –la cual se recuperaba cuanto más lejos estaba del primer lugar de la discusión pública la polémica en relación a la candidatura– e intención de voto se iban distanciando más que lo que usualmente sucedía. Es decir, en líneas generales se seguía aprobando la gestión –así como penalizando la labor de la oposición–, pero Evo lideraba la intención de voto con números más alejados de la valoración positiva de su gestión. El malestar en una parte decisiva de votantes estaba instalado y su recuperación no

parecía sencilla, aunque las elecciones de 2019 estuvieran, en ese momento, lejos.

Bolivia 2019

El MAS ha sido el actor político hegemónico estos últimos años; en este sentido, ha podido ordenar los ejes sobre lo que se debate y en qué términos se lo hace, y ha proyectado un horizonte compartido por una mayoría. Pero esto no quiere decir que no haya otros temas o valores que puedan disputar y ordenar de otro modo las lealtades políticas y las aspiraciones o deseos de partes importantes de la población. Las hegemonías también se debilitan y resienten. Dos de las más importantes paradojas que tiene que resolver de mejor manera el proyecto masista son las que representan el crecimiento significativo de las clases medias y el intenso proceso de urbanización que ha vivido el país durante la última década. Son los gobiernos de Evo Morales los que han implementado distintas políticas en varios frentes que han generado mejores condiciones para el desarrollo de estos dos fenómenos. Incluso en los recientes años noventa del siglo pasado, las élites políticas y mediáticas resumían Bolivia en el denominado “eje central” integrado por tres ciudades: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. El resto del país era descrito muchas veces, genéricamente, como “el interior”. Es difícil imaginar una expresión que pueda reflejar mejor la extrañeza y la falta de interés de las élites por buena parte del país. Pero el MAS, por su parte, no ha tenido una relación sencilla con parte de lo urbano y con cierta clase media (hay matices aquí: no es lo mismo la relación con El Alto que con Santa Cruz). Si bien ambos temas –el crecimiento de la clase media y la urbanización– se han reconocido, habitualmente, como importantes éxitos del proceso de cambio –es sencillo encontrar discursos de Evo, Álvaro García Linera o de Luis Arce en este sentido– la relación política con ambos fenómenos ha sido compleja. Cuando hablamos de clase media estamos, sin duda, ante

uno de los sujetos de más variada y compleja definición en la ciencia social. Hay quien pone el acento en cuestiones materiales, otros en temas identitarios y simbólicos, etc. Pero que su definición sea compleja no quiere decir que la relación con la clase media no sea central para cualquier proyecto progresista a nivel del país y de la región. Mucho más si sus políticas económicas y sociales son exitosas al provocar la ampliación de este sector social. No reviste mucha menor complejidad la definición de lo urbano: ¿Lo definimos solo por datos duros, es decir población o acceso a servicios, o atendemos a las aspiraciones o al comportamiento electoral para decir que alguien entra en la categoría urbano? Y si hablamos de la relación de lo indígena con ambos temas, se añaden tareas nada sencillas: ¿Ser clase media e indígena es incompatible? ¿Lo es ser indígena y vivir en el centro de una de las ciudades más grandes del país? La profunda democratización ocurrida esta última década y media ha sido causa de una sociedad más heterogénea y, en consecuencia, los actores políticos que buscan representarla tienen un reto; mucho mayor para quien lleva dirigiendo el Estado los últimos años.

En las elecciones de 2014, el MAS sumó 3.173.304 millones de votos, un 61,3%, y la participación fue del 87,85%. Poco más de un año después, el “Sí” en el referéndum obtuvo 2.546.135 de votos, un 48,7%, con una participación total del 84,45%; 627.169 votos menos, además de una caída en la participación de casi el 3,5%. Si bien se perdieron votos en todos los ámbitos, la caída fue más pronunciada en ciudades –no hablamos solo del viejo eje– y en los sectores medios, incluso algunos medio-bajos: la idea de la reelección no logró convencer. Es decir, gente que llevaba votando varias veces por el MAS y que valoraba positivamente a Evo y su gestión, en esta ocasión se guió por otras razones para decidir su voto. Algunos sectores de la política tienen por costumbre reprender al votante cuando este “vota mal”. Algunas veces se explica este voto por una falta de ideología en el votante.

Esta afirmación no está tan mal encaminada como la anterior pero habría que precisar dos cosas: todos los votantes tienen ideología –guste más o menos a unos políticos y a otros– y la solución para este “problema” no pasa por entender al ciudadano común como un militante a quien le hace falta ser parte de una escuela de cuadros; pasa, probablemente, por entender la hegemonía como un proceso de construcción y disputa que no solo nunca termina sino que debe ir, si quiere seguir siendo exitoso, modificando su guion en la medida que este va dando resultados. Además de no olvidar que las ideas y valores se irradian desde muchos más lugares que solamente desde el Gobierno. Hablamos también de la exigencia de estar con un pie en la gestión de lo existente y otro en la aspiración, en lo que se imagina como deseable.

El resultado del referéndum provocó en el MAS, como ya hemos apuntado, un repliegue. Es posible que existieran buenas razones políticas para ello, pero esta decisión limitaba el margen de ser escuchados a solo una mitad; con la otra mitad se ponía cuesta arriba. La oposición, sin embargo, no hizo una lectura mucho más fina. Entendieron la ajustada victoria del “No” como una victoria propia; como un “Sí” popular a los viejos representantes políticos que llevaban una década encadenando sonoras derrotas electorales y que habían sido protagonistas del denostado ciclo neoliberal anterior.

En 2016 hubo un mensaje de alternancia, pero a la oposición se le olvidó que la alternancia sin alternativa que la rellene es una fórmula hueca que no genera adhesión, ni convence, ni conlleva *per se* un rumbo, como luego se comprobaría durante 2020. En lugar de nuevas construcciones, ideas y horizontes optaron por repetir el mismo guion y los mismos actores, solo ubicados ligeramente distinto en el escenario. El cambio en al menos uno de estos dos componentes era imprescindible para construir una alternativa contemporánea que llenase esa alternancia. De cara a las elecciones de 2019, ofrecieron el enésimo discurso antimasista y un elenco clásico con Carlos

Mesa –de la misma generación y significado político que Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Leopoldo Fernández, etc.– a la cabeza. Para que una parte del electorado no atendiese a sus poco exitosas credenciales políticas –la gestión previa de Mesa estaba grabada como una de las peores para la mayoría, amén de su pasado compartido con Goni, en los hechos de febrero y octubre de 2003– y para restar todos los votos posibles a la candidatura de Oscar Ortiz, el mesismo y sus aliados políticos y mediáticos no tardaron en optar, lógicamente, por la polarización con el MAS. Sin embargo, esta estrategia no funcionó muy bien durante el primer semestre del 2019. Ellos buscaban generar un clima de excepción, de que era urgente sacar a Morales sin preguntarse muy bien qué vendría luego. Pero la mayoría de la gente, como mostraban distintas encuestas, estaba, primero, satisfecha con la gestión del Gobierno y, en particular, con su situación económica. En segundo lugar, Morales encabezaba, para julio-agosto, los sondeos electorales con buena distancia y Oscar Ortiz, tercero en las encuestas, iba recortando puntos al segundo. Es cierto que Evo no registraba los porcentajes que solía tener meses antes de otros comicios nacionales; el malestar con la habilitación se dejaba sentir. Sin embargo, era bastante más aguda la falta de entusiasmo que generaban Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana (CC). A mediados de agosto, la encuesta difundida por las cinco cadenas más importantes de televisión daba a Evo el primer lugar con 39,1%, a Mesa 22% y a Ortiz 9,5%. En los debates organizados después, donde se comentaban estos números, el candidato a vicepresidente por CC, Gustavo Pedraza, atacó a la encuestadora poniendo en duda “su rigor científico” y se negó a comentar los resultados. En esos días, varios analistas siempre muy críticos con el MAS reconocían que Mesa no solo no entusiasmaba, sino que, como apuntó entonces el conocido periodista cruceño Carlos Valverde, la estrategia escogida por su campaña de no declarar nada sobre las denuncias en relación a que en 2002 habría cobrado

por aceptar acompañar a Gonzalo Sánchez de Lozada como candidato a vicepresidente, le hacían mella.

Pero esta relativa debilidad de Mesa no se explicaba solo por motivos coyunturales o de táctica equivocada. Había, como hemos indicado, motivos de largo plazo: representar una idea de país caduca y estar orientados solo por el antimasismo. Razones de guion y de actores pertenecientes a otra época. El propio Pedraza había explicado, en una entrevista en el programa “No Mentirás” de la Red PAT, en calidad de analista, durante la campaña de 2014, por qué ninguna de las figuras políticas del ciclo previo a 2005 eran ya entonces la respuesta adecuada al MAS. Es cierto que Mesa no fue candidato entonces, pero la explicación de Pedraza calzaba, lógicamente, para quien fue vicepresidente del segundo Goni y para quien, además, fue protagonista del epílogo poco afortunado de ese ciclo. Desde la elección del nombre de su alianza hasta sus ideas y discursos principales nos decían mucho de la falta de contemporaneidad del proyecto mesista. Cabe recordar que muy pocos días antes de la presentación y registro de Comunidad Ciudadana, el primer nombre que se comunicó públicamente era solamente el de “Ciudadanos” y el color que lo caracterizaba era únicamente el naranja. Al parecer, hubo una corrección de último momento donde se añadió la palabra “Comunidad” por delante de “Ciudadana” y se incorporó, *in extremis* –pensando en “incluir” al Oriente–, el color verde. En realidad, este esfuerzo en el límite no fue sino otra impostura que revelaba más lo que pretendía camuflar: sabemos que Carlos Mesa y su entorno llevan mucho tiempo pontificando contra la idea de lo colectivo y reivindicando una idea, totalmente legítima, de la política algo más estrecha, con una clara y exclusiva primacía de lo individual. Cualquier lector de los textos, entrevistas y trabajos de José Antonio Quiroga, Ricardo Paz y del propio Mesa o de algunos de sus actuales parlamentarios puede encontrar con extrema facilidad ásperas críticas a lo gremial o a lo clientelar, mostrando que no logran comprender que estas dimensiones de lo colectivo son formas de organización muy frecuentes

para una mayoría de bolivianos. En su visión, este tipo de organización supone un obstáculo para lograr una mejor sociedad y debe ser modificada.

En nuestro país, como se ve cuando cualquiera reconoce al MAS y al MNR como los dos partidos más importantes de la historia, lo nacional popular es la tradición política dominante. Construir hegemonía por fuera de esta tradición es hoy imposible, hacer política por fuera de ella es difícil. La importancia que esta tiene y, a la vez, la dificultad por parte de los cuadros de CC de entenderla se nos revela cada cierto tiempo. Varias de las últimas entrevistas de su exlíder en el Senado, Andrea Barrientos, nos enseñan esto con particular elocuencia. Por citar solo dos: tanto la entrevista de noviembre de 2020 en *Página Siete* como el posterior intercambio con María Galindo en su programa radial “Barricada” (Radio Deseo), muestran que Barrientos intuye que lo nacional popular es importante, pero reconoce que no saben cómo abordarlo desde su partido. Sucede que CC es, a pesar del pasado compartido de su principal líder con el MNR, un peculiar heredero de algunas ideas un poco más antiguas, más propias del ciclo de la hegemonía liberal de las primeras décadas del siglo XX. Los liberales de entonces sostenían que los modos del ser indígena eran parte de las causas de por qué no avanzábamos como país; por supuesto, de la mano de las corrientes entonces dominantes a nivel internacional tenían una alta estima por cierto tipo de individuo y defendían que la centralidad política de las clases acomodadas de (y en) La Paz no podía estar en cuestión. Eran ellas y era allí donde se tenía que decidir el destino de la patria. Es lógico, por tanto, que, en un país cuya política está atravesada por lo nacional popular y en un momento de auge de la identidad indígena campesina (y chola) y de emergencia de la identidad camba, la idea de nación de CC está lejos de interpelar a las grandes mayorías. Para decirlo de manera esquemática: en un país de cholos y cambas un proyecto de nación casi decimonónico no tiene una ruta fácil si quiere construir hegemonía.

Hasta mediados de agosto de 2019, la candidatura de Mesa iba directa a cosechar un apoyo parecido al de los previos contendores de Morales. Es cierto que algunos medios aliados y distintos miembros de la sociedad civil de activa militancia antimasista –más que promesista– venían desarrollando, desde 2016, el marco del fraude inevitable y seguro en las próximas elecciones y que esta denuncia encontraba, según las encuestas difundidas, buena recepción en una parte importante de la población. Además, el TSE no aportaba a dar la certidumbre necesaria por la dificultad en explicar algunas de sus decisiones y la tardanza en tomar otras: consecuencias del malestar posreferéndum. Los antecedentes mostraban que el MAS había ganado todas las elecciones generales con tan amplio margen que las denuncias de fraude siempre carecieron de verosimilitud –como le contó Samuel Doria Medina en una entrevista a Fernando Molina a propósito de las elecciones de 2014 y a algunas marginales acusaciones de fraude.⁷ Además, hay que considerar el hecho de que se aceptó sin grandes polémicas el resultado del referéndum de febrero de 2016, con lo ajustado del mismo y lo trascendente de esa elección. Sin embargo, innumerables políticos y analistas de la órbita opositora durante años han querido encontrar una intención oscura en las declaraciones de Álvaro García Linera durante la noche electoral, quien, al conocer el conteo rápido de la encuestadora Equipos Mori –que adelantaba el triunfo del “No” (51%)– dijo que esos números podían cambiar y que, de momento, mostraban un empate técnico. Estos comentaristas olvidan señalar que, casi al mismo tiempo, el alcalde de La Paz, el líder opositor Luis Revilla, declaraba algo no tan diferente y pedía cautela en vista de lo ajustado de los resultados; añadía, además, una reflexión: que la foto

7 Véase Fernando Molina, “La oposición boliviana, entre la ‘política de la fe’ y la ‘política del escepticismo’”, *Nueva Sociedad*, n.º 254, noviembre-diciembre, 2014, disponible en: <https://nuso.org/articulo/la-oposicion-boliviana-entre-la-politica-de-la-fe-y-la-politica-del-escepticismo/>

mostraba un país partido por la mitad. Es curioso cómo muchas de esas plumas ahora dicen que el último resultado de las elecciones generales –Luis Arce (55,11%) contra el “resto” (44,89%), sumado este último con poco rigor– muestra un empate y un país dividido a partes iguales.

Y entonces llegaron los incendios de la Chiquitanía y, con ellos, el mesismo y sus aliados lograron el impulso que necesitaban para generar un clima de excepción, para organizar públicamente el malestar con el MAS, para llamar al voto útil y desdibujar a Ortiz; para, en definitiva, polarizar y simplificar su mensaje antimasista. El recorte de la distancia en las encuestas, además, volvió más verosímil para una buena parte de la población el fraude: “Luego de la Chiquitanía, solo pueden ganar con fraude”, parecía ser la consigna de la oposición. El MAS tenía una estrategia alejada de la polarización. Contra lo que algunos sostienen, la llamada “polarización” no es una fórmula mágica que siempre haga ganar. Al polarizar se suele concentrar los votos en dos opciones, y era evidente que al MAS le convenía una elección con más de un rival con opciones; además, la polarización electoral suele elevar la tensión y los ánimos, y eso iba a contramano de una elección ordinaria, no especialmente intensa, lo cual era lo más conveniente, según lo que mostraban las encuestas. Pero la crisis de la Chiquitanía cambió los ánimos y, por lo tanto, el tablero. Aquí la oposición tuvo un ensayo exitoso de su estrategia política y comunicacional de desestabilización; la misma que fue, posteriormente, mejor perfilada e implementada durante las tres semanas posteriores a las elecciones del 20 de octubre. Hay que recordar que, antes de la Chiquitanía, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) intentó paros que fracasaban a la hora de arrancar; sin embargo, luego de los incendios sobraban los recursos para organizar una o diez movilizaciones. Las *fake news*, los bulos por WhatsApp, el imaginativo uso de datos falsos, la presión sobre la prensa y el control del territorio fueron algunos de los elementos

de esta estrategia. Como anécdota, cuando, esos días, en un intercambio interrogué a un apreciado amigo –uno de los intelectuales más conocidos de Santa Cruz y honesto ambientalista– sobre por qué compartía fotos de animales afectados por el fuego que, en realidad, no existían en Bolivia como prueba del daño de “los decretos de Evo Morales”, su respuesta clasifica como una de las mejores definiciones de *fake news* conocidas: “Las uso como metáfora”, sostuvo. Hay que precisar que también había motivos genuinos para el malestar por los incendios y que gente y organizaciones que siempre han estado preocupados por estos temas estuvieron activos entonces. Sin embargo, en esta ocasión, a dos meses de unas elecciones generales, había algo mucho mayor y con un interés político, no ambiental, por encima. Este uso de las “metáforas” sería frecuente poco después con las denuncias de fraude, como las que se apoyaban en papeletas encontradas en maletas. Sabemos que las papeletas, como en el sistema electoral peruano, no son importantes y que el acta es el documento a preservar; pues bien, aun así, varios medios dieron cobertura, por ejemplo, a Marco Pumari, líder cívico potosino, “descubriendo las pruebas del fraude en miles de papeletas” encontradas en un inmueble. La realidad era que se trataba de material sobrante pero lo que importaba, de nuevo, era la “metáfora”: una prueba más del “fraude”. Dos de las cadenas de televisión más importantes del país tienen base en Santa Cruz. Durante esos días, varios de sus periodistas y las páginas de redes sociales de sus programas más exitosos sufrían un masivo acoso cuando, por ejemplo, se animaban a poner una imagen de la gran torre de piedra, ícono de Chochis, emblemática imagen de la Chiquitanía, no quemada, como falsamente circulaba, viralmente, en redes sociales. Este fue, como decimos, solamente un ensayo. Durante el paro, como pudo ver cualquier boliviano con televisión, Luis Fernando Camacho llegaría incluso a instruir que los jefes de prensa peregrinen a sus oficinas y, siendo grabados, se dejen explicar cómo debían “contar la lucha del pueblo”.

Esta crisis supuso, de hecho, un salto en el ya marcado ascenso del liderazgo de Camacho, entonces presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. Camacho, representante del bloque antagonista de Rubén Costas, buscaba asegurar su mando en el departamento y para ello, entre otras cosas, procuró que fracasara la candidatura presidencial de Oscar Ortiz. Por ello, durante la crisis de la Chiquitanía, amén de empezar a poner en marcha un férreo control del territorio, estableció una alianza con Carlos Mesa. Solo un liberal de inicios del siglo XX podía creer que él era el fuerte en esa alianza. Esto significaba no comprender el momento en el que se encuentra esta región y cuáles son las nuevas ambiciones nacionales de la Santa Cruz dominante, como actor político a quien ya no le basta la vieja cuota de representación en los distintos gobiernos (otra cosa es que tenga fuerza real para lograrlo, pero su ambición quedaba clara entonces). Ya durante la crisis posterior a las elecciones del 20 de octubre y, de manera mucho más aguda, en la campaña de 2020, se verá lo equivocados que estaban en CC al pensar que lo cambia se subordinaría, sin más, a su proyecto político. La diferencia de votación que logró CC entre octubre de 2019 y octubre de 2020 deja pocas dudas al respecto.

No hay que menospreciar la importancia y el daño al ecosistema que supusieron los incendios de 2019, pero sí hay que poner en evidencia, primero, que no fueron algo inédito ni, lamentablemente, muchísimo peor que lo que habitualmente sucede. Como se puede constatar en los reportes que año tras año elabora la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN),⁸ el 2019 está, efectivamente, entre los peores años de las dos últimas décadas, según el número de hectáreas quemadas; sin embargo, el 2010 fue peor, con mucha diferencia. Asimismo, los años 2004 y 2005, cuando Mesa gobernaba, igualan la situación de 2019. Por otra parte, aunque lo sucedido en 2016 y 2020, en términos ambientales,

8 Estos reportes están disponibles en la web: <https://bit.ly/3qjTvtL>, p. 8.

es solo algo inferior a lo ocurrido en 2019, no recordamos, por supuesto, que se haya desatado una situación de crisis política parecida.

En este sentido, hay que mostrar la burda –aunque efectiva– instrumentalización político-mediática que se hizo de esta situación, pues esta representó un paso importante y decisivo para que tuviera éxito el apoyo a la estrategia golpista posterior. Quizás el ejemplo más llamativo fue señalar el Decreto Supremo 3973 –aprobado apenas el mes antes de los incendios– como el gran responsable de la situación. Bautizado por algún medio como el “decreto incendiario”, su derogación se volvió, entonces, un reclamo y un desgaste importante. Sin embargo, al año siguiente, Jeanine Áñez no derogó este decreto hasta el 20 de septiembre, cuando la temporada de incendios estaba ya acabándose. No recuerdo nada parecido a la indignación de los sectores medioambientalistas y de los medios, tal cual ocurrió en 2019.

Crisis 2019: elecciones, golpe y épica

La noche electoral del 20 de octubre, cuando el TREP mostraba un resultado de 45,3% a favor de Evo Morales contra un 38,2% de Mesa faltando por transmitir, antes de su súbita interrupción, poco más del 15% de las actas, la cautela era la constante entre los analistas en distintos programas televisivos especiales. Expertos como Erika Brockmann o Marcelo Arequipa señalaban que, aunque parecía difícil que el MAS superase los 10 puntos porcentuales de distancia, esto no era imposible en razón del voto de los lugares más alejados y menos poblados, así como al voto en el exterior. Las encuestas pos Chiquitanía ya habían adelantado una elección muy reñida y que se ponía más difícil para el MAS lograr la ventaja que le permitiese ganar en primera vuelta. Sin embargo, los líderes opositores ya habían dejado meridianamente claro que no aceptarían, en ningún caso, una victoria de Evo Morales en primera vuelta. No la reconocerían porque “solo podía deberse al

fraude”. Esto no se quedó solo en declaraciones y, luego del exitoso ensayo de las semanas pasadas, había una estrategia de desestabilización y ruptura preparada para ejecutar inmediatamente. Del mismo modo que con Zelaya, Lugo y Dilma, ahora era Morales el objeto de una bien planificada estrategia de derrocamiento. Los supuestos argumentos, las falsas pruebas, la lluvia de *fake news* y mensajes que hemos visto, por ejemplo, en Perú, tuvieron una prueba exitosa en Bolivia. Sorprende ver la identidad entre estos dos casos. Cuando Luis Fernando Camacho, durante esas tres semanas de crisis, convocaba a militares y policías a desconocer el orden constitucional y sumarse a la lucha del pueblo, es sencillo encontrar una enorme semejanza con las palabras del político peruano Alfredo Barnechea cuando grita que hay una alianza invencible de civiles y militares que salvarían al Perú del populismo. En cualquier legislación penal, estos actos se quedan, al menos, a las puertas de ser considerados sedición. La diferencia entre un proceso de sedición que termine en un golpe de Estado y un proceso revolucionario que acabe alumbrando un nuevo Gobierno –en teoría más representativo de los deseos y la voluntad del pueblo– no son tantas como se podría pensar. Ambos son, además, procesos con distintos grados de violencia. La victoria o la derrota –y si existe o no una mayoría social que apoya o al menos acompaña el proceso y sus resultados– suelen ser dos de los termómetros para saber si lo que sucedió fue un golpe de Estado o una revolución. Carlos Mesa entendía esto muy bien cuando el 28 de octubre de 2019 gritó que su destino estaba en la cárcel o en la presidencia. La épica no solo les da un sentido distinto y heroico a las buenas acciones en el marco de estos procesos, sino también funciona como coartada para mirar a otro lado o buscar una causa mayor a las acciones delictivas o a los hechos de violencia que tienen lugar en estos procesos. Mesa sabía que esos días se llevaban a cabo acciones delictivas, pero pensaba que tendrían una justificación final si la victoria y

la mayoría terminaban de su lado. Mientras tanto, la épica permitía mirar hacia otro lado cuando la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) ejercía una violencia impune contra mujeres de clase popular o cuando vejaban, en vivo y durante horas, a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce; o cuando Camacho hacía listas públicas de traidores al pueblo cruceño –todo transmitido en cadena nacional a través de Red Uno y Unitel– y señalaba, de manera expresa, a los empresarios Fernando Hurtado, de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), y a Luis Barberly, de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); o cuando secuestraban, torturaban y agredían sexualmente al hermano del presidente de diputados, Víctor Borda, para así lograr su renuncia e ir dejando expedita la línea constitucional, como denunció en un video la propia víctima desde el hospital y, posteriormente, el exdiputado en varias entrevistas y en sede judicial.

Con el derrocamiento de Evo Morales, la oposición, como bloque, había logrado lo que nunca les dio las urnas los últimos 15 años. Del mismo modo que en Brasil no bastaba con sacar a Dilma, en Bolivia, como es lógico dentro de un supuesto proceso revolucionario, el objetivo a batir no era solo el individuo Evo Morales, sino todo lo que representaban él y su partido. Por eso la fiereza para lograr la renuncia de Borda; por eso el acoso y la orden de aprehensión expedita contra Adriana Salvatierra. Por si alguien no tenía esto claro, Carlos Mesa, a poco más de una hora de conocida la renuncia de Morales, dijo ante el país que nadie del MAS podía asumir la sucesión constitucional. Así lo contaron y registraron Unitel y *El Deber* (“Para Mesa nadie del MAS debe seguir en el proceso post Evo Morales”), por mencionar solo dos medios, ya que cabe recordar que Mesa dijo esto en una rueda de prensa masiva. Esto era tan inconstitucional, desde un punto de vista jurídico, como profundamente lógico, desde el punto de vista de quien cree que está haciendo una revolución. Dos horas después de esa declaración, de hecho, sabemos ya que en

una reunión privada sin ningún representante del MAS y sin ningún parlamentario del signo que fuese, se escogió quién gobernaría Bolivia. Jeanine Áñez contó en sede judicial que fue entonces cuando recibió una llamada de Ricardo Paz, jefe de campaña de Carlos Mesa. Tanto Waldo Albarracín como Juan Carlos Núñez, miembros del Conade, han contado que este encuentro efectivamente se produjo el día domingo 10 de noviembre al final de la tarde. Así, con el Gobierno de la oposición a la cabeza de Jeanine Áñez se dio la alternancia en el poder; sin embargo, no tardaría en verse que tanto por la manera de acceder al mismo como por el fondo del proyecto de país que tenían en la cabeza, la alternancia sin alternativa estaba prontamente destinada a un sonoro fracaso. Como hizo Jair Bolsonaro al triunfar en las elecciones sin Lula como rival, el Gobierno de Áñez entregó reconocimientos a los distintos líderes opositores. Todos jugaron un papel en el esquema. Ese era el primer tiempo todavía lleno de épica. Parecía que habían logrado la victoria y se convencieron de que tenían con ellos una amplia mayoría social; aquí se fraguó una de las ideas que luego les perjudicaría –y mucho– durante la campaña de 2020: el 70% no quiere al MAS. Luis Fernando Camacho acomodó ministros importantes y puso gente afín en otras dependencias; Carlos Mesa defendió tanto a su Gobierno que llegó a declarar dando verosimilitud a la denuncia rocambolesca del Gobierno contra diplomáticos españoles y mexicanos a finales de diciembre de 2019; Tuto Quiroga fue una suerte de canciller paralelo durante varias semanas.

Con la sensación de victoria y de mayoría, bautizaron al proceso como “Revolución de las Pititas”. El logo del canal estatal cambió unas semanas después y se volvió un homenaje a los pititas: mostraba una pita tricolor. El Gobierno emprendió una búsqueda pública de la “adolescente símbolo” pitita que había entonado el cántico más popular; la encontraron, le dieron un reconocimiento y se tomó fotos con Áñez; las caras visibles del colectivo Ríos de Pie, referentes pititas, no solo

compartieron agasajos con Ñez sino que viajaron a la OEA con Tuto Quiroga y obsequiaron a Luis Almagro con un símbolo de la “revolución”. Como en cualquier revolución exitosa y supuestamente respaldada por la mayoría, varios líderes quisieron exhibirse públicamente, contar acciones que bajo el anterior orden vigente hubieran sido delitos, pero que ahora se exhibían como una suerte de medallas. A finales de diciembre de 2019, Luis Fernando Camacho revelaba que fue su padre quien tuvo un papel decisivo al “cerrar” con policías y militares después de las elecciones del 20 de octubre: “Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan (...). Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas [de plazo]”.⁹ Incluso Álvaro Andrade, quien fue el auditor externo contratado por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones y uno de los que denunció con más entusiasmo el fraude, decidió reaparecer en público a inicios de enero de 2020 para dejar constancia no ya de su simpatía opositora sino de su admiración absoluta por Tuto Quiroga en una carta: “Solo me queda desearte el mejor de los éxitos, porque llevas el agradecimiento de todo un país, que vivimos y nos emocionamos con tus discursos y la pasión con la que defiendes Bolivia, con las clases de historia, economía y geopolítica que les das a todos los pseudo intelectuales del llamado ‘Socialismo XXI’ e inclusive a presidentes de otros estados, porque siempre llevas en alto y con orgullo el nombre y la imagen de Bolivia e irradias seguridad y capacidad cuando hablas. Estoy seguro que desde donde te encuentres, seguirás luchando por defender nuestro país y las causas justas que siempre has defendido y le pidó a nuestro Creador, que te proteja y que sea la Ley de Dios el sol que ilumine tu camino,

9 “Camacho revela que su padre ‘negoció’ con militares y policías para que se amotinaran”, *Correo del Sur*, 28 de diciembre de 2019, en: https://correodelsur.com/politica/20191228_camacho-revela-que-su-padre-negocio-con-militares-y-policias-para-que-se-amotinaran.html

para que sigamos escuchando grandes noticias del Tuto Quiroga que todos conocemos”.¹⁰

Poco antes, el mismo Quiroga había presumido en público que le tocó ser “agente de viajes” de Morales porque tuvo que dar instrucciones a los militares para que permitiesen que el avión de México que transportaba a Evo, García Linera y Gabriela Montañó saliese del país. Ahora Tuto Quiroga ha guardado silencio sobre esto, y el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, jefe entonces de la Fuerza Aérea, actualmente detenido, ha declarado no recordar si se comunicó o no con el expresidente Quiroga. En realidad, quiere decir que no recuerda si recibió y cumplió órdenes de un civil no autorizado para dárselas. El periodista Rubén Atahuichi, de *La Razón*, ha recuperado en algunas notas las declaraciones donde Quiroga contaba todo esto.¹¹

Mientras tanto festejo y tanta épica tenían lugar ocurrían las masacres de Sacaba y Senkata. Y el bloque opositor, en su conjunto, con distintas tonalidades y énfasis, entonces lo justificaron, como habían hecho con los episodios de violencia previos. El relato oficial de las masacres, debidamente acompañado por varios medios, fue el de que “se mataron entre ellos”, una frase absolutamente deudora de las ideas que sobre el indio tenía la élite liberal de inicios del siglo pasado. Siguió el discurso de “los salvajes que amenazan la democracia” y con ello nos ponemos, de manera calcada, en los argumentos de Bautista Saavedra durante el proceso de Mohoza (1901), hecho fundamental que inaugura la hegemonía liberal de entonces. Si se accede al poder por los votos, el orden procura desarrollar

10 “Lea la carta que el responsable de Ethical Hacking dedica a Tuto Quiroga”, *Página Siete*, 8 de enero de 2020, en: <https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/8/lea-la-carta-que-el-responsable-de-ethical-hacking-dedica-tuto-quiroya-242908.html>

11 “Tuto Quiroga: Permitir que Evo suba al avión era ‘dejación’ del cargo y ‘efectivizaba la sucesión’”, *La Razón*, 11 de julio de 2021, en: <https://www.la-razon.com/nacional/2021/07/11/tuto-quiroya-permitir-que-evo-suba-al-avion-era-dejacion-del-cargo-y-efectivizaba-la-sucesion/>

su legitimidad dentro de las fronteras de la legalidad; si se accede al poder por la fuerza, el orden se apresura en lograr la obediencia mediante el disciplinamiento; mediante la fuerza desnuda. Sin embargo, la épica no tardó en empezar a diluirse, las querellas internas fueron subiendo de volumen y mostrando, efectivamente, que dentro de esa alternancia había todo menos una alternativa de país y, cuando se abrieron nuevamente las urnas, se vio que nunca les acompañó una mayoría. Por supuesto, luego de constatado esto, en octubre de 2020, la revolución se diluyó, muchos salieron corriendo de las fotos de los momentos épicos y estos fueron dejando paso a una lista de delitos ordinarios que, como es lógico, quieren compartir bastantes menos actores.

Bolivia 2020

El anuncio de la candidatura presidencial de Jeanine Áñez provocó duras críticas de Camacho, Tuto y Mesa. El líder de CC llegó a sostener: "...pero hay algo más grave, lo que está en juego es la imagen internacional del país. Una candidatura de la presidenta desbarata su rol histórico y la credibilidad de la transición. No hace otra cosa que avalar las afirmaciones del expresidente huido y del coro que le hace eco, de que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado". En otra parte dice: "La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín". A pesar de que los problemas para la oposición solo iban en aumento –Mesa, Tuto, Áñez, Camacho, demasiadas candidaturas, muy lejos del frente único– la gestión del Gobierno era más que deficiente y, como resultaba obvio, la ciudadanía tomaba nota de cómo estaba el país gobernado por la oposición; la presión, acoso y violencia contra los sectores populares fue continua y compartida, por acción u omisión, por todo el arco opositor durante mucho tiempo. A pesar de esto, la parte mediática de la oposición insistía machaconamente con el

mantra de que “el 70% no quiere que vuelva el MAS”. No decían Evo, decían el MAS porque lógicamente ese era el objetivo. Uno no da un golpe de Estado para que diez meses después gane el mismo partido que fue desalojado del poder. Que esto suceda responde, como mínimo, a un mal cálculo. La oposición se creyó demasiado su propio relato. Se creyó a conocidos periodistas que el día que no estaban coqueteando, también ellos, con una candidatura presidencial, comentaban encuestas en la televisión donde aseguraban, como Andrés Gómez, sin más análisis que su deseo, que habría segunda vuelta: “Habrá segunda vuelta, podemos constatar que el MAS ha llegado a su techo. Carlos Mesa puede subir más, es el que más ha crecido, más que Arce y Camacho y todavía no ha llegado a su techo. Si se mantienen los datos, la segunda vuelta será entre Mesa y Arce”.¹² En Bolivia, por cuestiones de composición social, hábitos y medios, la diferencia entre opinión pública y opinión publicada es muy notable. De hecho, como primera reflexión pública luego de la contundente derrota de CC en las elecciones de octubre de 2020, su estrategia y jefe de campaña, Ricardo Paz, señaló, entre las causas de la misma, el haberse creído en exceso lo que contaban los medios amigos: “Adicionalmente, la mayoría de los medios de comunicación no ocultó su preferencia por las opciones alternativas al Movimiento al Socialismo, ayudando a crear así un clima adverso a esta fuerza política, lo que muy probablemente ayudó a su vez al ocultamiento de la intención de voto. Queda claro, una vez más, que la publicación de encuestas, el relato de los medios de comunicación, las opiniones transmitidas por las redes sociales tienen un valor relativo cuando los electores deciden su preferencia electoral”.¹³

12 Declaraciones del periodista Andrés Gómez en el programa “Así decidimos”, Unitel, 30 de septiembre de 2020, en: https://www.facebook.com/unitelbolivia/photos/a.10150533353981747/10157815996926747/?comment_id=10157816113021747

13 Ricardo Paz Ballivián, “El cisne negro que salió de las urnas”, 14 de diciembre de 2020, Cabildeo Digital, en: <http://www.cabildeo-digital.com/2020/12/el-cisne-negro-que-salio-de-las-urnas.html>

La campaña electoral de 2020, por tanto, fue un derrumbe en cámara lenta de la oposición, de esa oposición que había entendido el “Sí” del referéndum de 2016 como un “Sí” a ellos como protagonistas; de la oposición que había tomado el poder por asalto y luego no supo bien qué hacer con él. Creyendo que el MAS efectivamente era una minoría menguante, el pulso por ser candidato entre los opositores fue duro y los ataques fueron subiendo de tono. Mientras más se acercaba la fecha electoral, algunos comentaristas opositores empezaron a preguntarse en público qué pasaba si el MAS aprovechaba la división opositora y ganaba en primera vuelta superando el 40%; se articuló una fuerte presión político-mediática para que todos despejen el camino y apoyen a Carlos Mesa. Esto era nuevamente repetir no solo un actor ya amortizado sino –y esto fue lo peor– el viejo guion: no construir una propuesta, solo sumar al antimasismo. El error extra fue, además, que el antimasismo ya estaba en ejercicio de gobierno y no lo hacía precisamente bien. La presión fue relativamente efectiva –declinaron Áñez y Quiroga–, aunque como sabemos esto no incidiría en el resultado: Luis Arce y el MAS se impusieron por más del 55% de los votos en unas elecciones con la más alta participación en mucho tiempo: 88,42%. El MAS obtuvo 3.394.052 votos, prácticamente el doble que Carlos Mesa, quien en solo 11 meses había perdido 464.967 votos. Luis Fernando Camacho mantuvo su candidatura a pesar de las públicas y duras presiones; Santa Cruz no le dio la espalda y ratificó no solo su liderazgo allí sino el momento de fortaleza que vive la identidad cruceña de orientación más conservadora. El mesismo, agitando el temor al retorno del MAS y la apelación al voto útil, ejerció presión como si estuviera en la Bolivia de décadas atrás, sin entender el momento político de Santa Cruz. Por supuesto, la estrategia se les volvió un búmeran: Camacho los barrió en Santa Cruz tanto como Arce lo hizo en el país. La señal de mayor desorientación del mesismo fue que escogieron a Ronald MacLean Abaroa, exjefe de campaña de Camacho, para ser quien lidere la parte más dura de esta

ofensiva. Sería MacLean, el político más parecido a un Tejada Sorzano, quien le revele a los cruceños el engaño de Camacho. Cuatro días antes de las elecciones, contó en vivo, y con un tono de terror decimonónico, supuestos secretos acuerdos entre el MAS y Creemos –acuerdos que hasta ahora no parecen haberse honrado, ya que la senadora Centa Rek todavía no preside el Senado, como se dijo que se había pactado– para que Camacho no se retire y mantenga la división del voto opositor y así permita que el MAS gane pasando del 40%. Carlos Valverde le preguntó a MacLean, en una entrevista, si creía que Camacho sabía de esos acuerdos o si se los hacía a sus espaldas. El exjefe de campaña dijo que no estaba seguro, pero que quería creer que Luis Fernando no lo sabía. Es decir, el arma oculta para lograr el voto cruceño por Mesa y CC consistía en que un político paceño de pura cepa le explique a buena parte de los electores cruceños que su referente era o un traidor o alguien que no se enteraba de las cosas ni cuando ocurrían delante de sus narices.

La victoria del MAS no fue aceptada por varios actores opositores de distintos ámbitos; de hecho, algunos siguen sin aceptarla hoy en día. A pesar de la diferencia de votos existente entre el MAS (55,11%) y el segundo (28,83%), se organizaron manifestaciones denunciando el fraude, se golpearon las puertas de los cuarteles militares, se inventaron nuevamente pruebas y más pruebas falsas. Una vocal del TSE llegó incluso a enviarle una nota a Luis Almagro hablando de sistemas paralelos –recordemos todo lo que dio de sí el “servidor oculto” para el cómputo electoral en la acusación de fraude de 2019–, a pesar de haber acompañado todo el proceso electoral sin hacer conocer ninguna observación. Pareciera que lo que no le gustaba a esta vocal era el resultado. El jefe de campaña de CC antes citado tampoco se privó de arrojar dudas sobre el resultado, en una entrevista con el periodista Tuffi Aré en el programa Asuntos Centrales, disponible en las redes sociales, sostuvo: “Una cosa es que nosotros digamos, sí, nos han ganado la elección porque nos han ganado con

más del 10, evidente y real. Ahora, ¿nos han ganado por casi 27%? No, no nos han ganado con 27 puntos. Eso no es así. No podemos cuantificarlo exactamente...”. Suena demasiado parecido a cuando Keiko Fujimori dice: “Ya sabemos lo que hicieron (fraude) para voltear la elección. Hoy necesitamos saber cómo lo hicieron”. Mismo guion, distinta latitud. Pero no hay que olvidar que semanas antes de la elección, Mesa ya no solo hablaba del “fraude monumental” sino que sostenía, literalmente, que él le había ganado a Evo Morales. Es lógico, por tanto, que no le haya resultado sencillo aceptar que ni en 2020 ni en 2019 le había ganado al MAS.

Las elecciones locales de 2021: vigencia de lo nacional popular

Esta negativa a aceptar el resultado por una parte de la oposición y de sectores medios y altos no auguraba un escenario sencillo ni ayudaba a rebajar la tensión política. Aunque el 55% supuso una manifestación clara de la voluntad de los bolivianos –que el partido en el que habían confiado los últimos 14 años siguiera a cargo del Ejecutivo nacional– tampoco el MAS era el mismo de antes de la ruptura de noviembre de 2019 y dejaba entrever unos movimientos y pulsos en su interior poco frecuentes por su intensidad. El hecho de que poco después, el 7 de marzo de 2021, hubiese elecciones departamentales y municipales enrareció más el clima político: candidaturas, reacomodos, pugnas por espacios, alianzas, etc.

Está claro, y es fácilmente verificable, que el MAS en elecciones generales suele tener un buen desempeño en las ciudades. De otro modo, resultados como un 62%, un 55% o un 64% serían impensables. Aquí hay que recordar que las ciudades, en Bolivia, no son solo las tres del famoso eje central; simplificación que resumía lo urbano para las élites hace tres décadas. Esto no es incompatible con identificar también en algunas de las ciudades más importantes mayorías impermeables y reactivas al discurso masista. En todo caso,

en el escenario electoral subnacional el desafío para el MAS es mucho más explícito. Claro que son elecciones diferentes, donde la gente vota motivada por razones distintas. No es muy serio tratar ambas como si fueran la misma elección, pero tampoco suceden en dos países diferentes. Las sucesivas elecciones locales que han venido poco después de elecciones generales, en las que el MAS ganaba ampliamente, suelen mostrar una significativa reducción del acumulado de voto masista, así como su derrota en varias de las ciudades más pobladas del país. Las elecciones de marzo de 2021 ratificaron esta tendencia en líneas generales y presentaron algunas novedades de grado que, según vayan algunas gestiones locales, podrían significar algo más. Entre unos comicios generales y otros locales hemos visto la reducción de votos y de poder local del MAS; cómo la principal fuerza opositora lograba cada vez menos poder local; cómo aumentaban las disidencias en el MAS y cómo estas iban logrando progresivamente algunos espacios de poder.

El MAS se ha dejado entre 15% y 20% de votos en las pasadas elecciones locales con relación a las previas generales. A pesar de ello, con amplia diferencia, se ha ratificado como la primera fuerza política del país. Las capitales de departamento se le suelen resistir mucho más que la segunda y tercera decena de ciudades más pobladas donde el MAS ha gobernado, mayormente. En esta última ocasión no ocurrió nada muy diferente, sin embargo, sí es reseñable el caso de El Alto sobre el que diremos algo más. Su desempeño en los departamentos ha sido, este sí, notablemente peor a la hora de gobiernos obtenidos: pasó de seis, en 2015, a solo tres, ahora.

Analizando cómo le fue a la principal alianza opositora nacional en la elección local correspondiente, vemos que, además de reducir sensiblemente su apoyo electoral (la oposición suele fragmentarse de cara a esa cita), ha tenido que competir con fuerzas y liderazgos locales y, en el balance general, obtiene un modesto apoyo local. Comunidad

Ciudadana representa, en todo caso, una fuerte agudización de la tendencia señalada: obtuvo votaciones anecdóticas en lugares donde, en las generales, había ganado o pisado los talones al MAS. En Cochabamba capital su candidato se movió alrededor del 1%; su candidato al departamento de La Paz no logró más que unos pocos centenares de votos; en lugares clave, como el municipio de La Paz o el departamento de Santa Cruz, no estuvo ni en la papeleta.

Otras figuras de la oposición han logrado espacios más importantes, relegando así a CC. El caso de Manfred Reyes Villa en Cochabamba, donde este candidato superó con holgura el 50%, es un ejemplo interesante de reciclamiento electoral y de incapacidad del MAS para seducir a lo urbano –incluso a sectores, en principio, más afines–, sobre todo si se considera que, en la elección general previa, el MAS fue primera fuerza con cerca del 50% y que hasta 2015 gobernó la ciudad. Luis Fernando Camacho, por su parte, quien obtuvo 14% en octubre de 2020, decidió replegarse a su territorio donde su liderazgo carismático se muestra sólido. El MAS, sin embargo, consiguió, en marzo pasado, su mejor desempeño en una elección autonómica cruceña, con Mario Cronenbold como candidato a gobernador (con un resultado próximo al 40%, casi idéntico porcentaje al de Jerjes Justiniano en 2010, pero con mayor número de votos). Para la Gobernación de Tarija, hizo valer su peso otro líder carismático local, Oscar Montes, quien finalmente se impuso en la segunda vuelta, aunque el MAS logró ventaja en la primera vuelta y superó el 45% de los votos en el balotaje –ambos, resultados bastante notables a la cabeza de Álvaro Ruiz. Los resultados de Cronenbold y Ruiz en plazas complicadas pueden dar pistas del camino para un mejor entendimiento con el votante al tratarse de elecciones subnacionales. Tanto Ruiz como Cronenbold provienen de sectores medios, tienen predicamento en su región y fueron alcaldes de ciudades pobladas, pero no capitales, con un discurso que interpela no solamente a los simpatizantes más fieles y que llega a los

sectores organizados populares, pero también a personas menos dadas a la organización de corte gremial, a quienes interpelan desde lo cambia y lo chapaco.

Desde las primeras elecciones locales con el MAS en el Gobierno nacional, existieron algunas figuras y líderes que, al ver que no encontraban la candidatura a la que aspiraban dentro del partido, se marchaban y se presentaban por una sigla distinta. Al inicio, el éxito de estos era muy reducido. El MAS concentraba prácticamente todo el voto de los sectores populares, campesinos e indígenas. Sin embargo, esto pasó de ser anecdótico a ir adquiriendo una mayor relevancia. En las elecciones de 2015, el exministro del MAS, Félix Patzi, con su nueva sigla, Movimiento Tercer Sistema (MTS), ganó la Gobernación de La Paz en alianza con SOL.bo de Luis Revilla. En Chuquisaca, Damián Condori rompe con el MAS cuando Esteban Urquiza es elegido candidato a la Gobernación por este partido, compite contra este y se queda a las puertas de forzar una segunda vuelta –Condori, de hecho, denuncia la polémica decisión del Tribunal Departamental Electoral que impide la realización del balotaje. En las elecciones de 2020, esta tendencia avanza un paso más y se suma Eva Copa, quien al no lograr la candidatura dentro del que fue su partido, va por fuera y gana con una gran distancia la Alcaldía de El Alto. En Pando, Cobija y Trinidad ocurre lo mismo: candidatos que pugnaron por la candidatura dentro del MAS, al no conseguir la designación, compitieron por fuera y ganaron. En varios de estos casos, de hecho, estos candidatos eran incluso los favoritos de las bases, pero no de la decisión orgánica y por eso optaron por medirse, con éxito, en las urnas.

La oposición mediática más que la política se apresuró a hacer una lectura de estas elecciones locales como si se tratase de una suerte de segunda vuelta –la que sus editoriales y columnistas daban por segura en octubre de 2020– de las pasadas elecciones generales. Hubo, como sucedió en la campaña de 2020, más entusiasmo que análisis y se englobaba

como oposición a figuras como Eva Copa o Regis Richter, gobernador electo de Pando, olvidando no ya su reciente militancia masista, sino que las ideas generales que defendían y lo que representan son parte de la misma tradición donde el principal referente es el MAS: lo nacional popular. Esta prisa mediática permeó pronto en el liderazgo opositor tradicional y creyeron ver, nuevamente –como con el supuesto 70% que no quería que vuelva el MAS o el “No” en el referéndum– otra oportunidad para ellos y lo que representan. Eva Copa fue una tenaz y muy importante rival de Áñez durante 2020. De hecho, durante la crisis de agosto de 2020 tuvo un claro protagonismo no solo epistolar. El entusiasmo mediático antimasista provocaba que esto, tan denostado en su momento, se olvide rápidamente: Copa era la nueva líder opositora, el MAS estaba acabado. Sin embargo, Eva Copa, en diversas entrevistas y actos públicos, ha sostenido que lo ocurrido en noviembre de 2019 fue un golpe de Estado, que hubo violencia y acoso para despejar la sucesión constitucional, califica como masacres los hechos de Senkata y Sacaba, y exige que se juzgue a los responsables. Hay una frontera entre lo nacional popular y la derecha que no es tan sencilla de sortear como poner dos titulares imaginativos. El quiebre de noviembre de 2019 y el comportamiento, explícito e implícito, de toda la oposición entonces existente es el nombre de esa frontera. Es cierto que Copa, y con matices las otras figuras disidentes, tienen diferencias con el MAS, pero se mueven dentro de las mismas coordenadas ideológicas. Esto no lleva necesariamente a un acuerdo futuro, pues la competencia es siempre una posibilidad; sin embargo, las diferencias con la oposición de derecha son, por mucho tiempo en adelante, insalvables. Hay que ver cómo se desarrollan las gestiones locales, cómo se comporta el MAS con sus competidores locales, cómo estos se articulan y si lo hacen entre ellos. Patzi tuvo un muy modesto desempeño en su primera elección nacional en 2019. En parte por ese antecedente y en parte por la claridad del rival a batir, decidió no competir contra Luis Arce y David

Choquehuanca el 2020. De hecho, precisamente es el actual vicepresidente quien mantiene más puentes públicos con algunos de estos líderes locales exmasistas.

Indicios del porvenir

Si bien es usual que la oposición lea cualquier resultado favorable de una elección local en clave nacional, es menos común que un partido que gobierna la nación acepte esa lectura; suelen, por el contrario, hacer una lectura exclusivamente local de una elección local. Un indicador de que la vida al interior del MAS atraviesa un momento de especial intensidad y conflicto es que muchos dirigentes del partido salieron públicamente a hablar de los resultados de 2021 como derrota; de la necesidad de hacer un ajuste de cuentas y exigir responsabilidades; cada quien escogió el resultado que menos le gustaba para verter rotundas conclusiones nacionales: todo esto a pocos meses de la trascendental victoria del 55%. Este ruido e intensidad, al contrario de lo que escriben los columnistas del “70% no quiere al MAS”, enseña que esta es una organización viva y, por lo tanto, lógicamente conflictiva. El hecho de que le haya surgido competencia dentro de sus marcos de acción es tanto una amenaza como un incentivo, pero lo que está fuera de duda es que lo nacional popular sigue siendo el marco en el que se define el proyecto de país.

Queda mucho tiempo para las próximas elecciones generales, sin embargo, hay algunas cosas que van quedando claras del nuevo escenario político. La tradicional oposición conservadora vive más que sus horas de descuento: se lo han dicho las urnas claramente y su experimento de gobierno conjunto es un peso imposible de sobrellevar. Camacho ha sobrevivido al derrumbe que significó el Gobierno de Añez por contar con una fuerte base de lealtad territorial y por la efervescencia identitaria que vive buena parte de Santa Cruz, que lo tiene como referente. Sin embargo, proyectarse a toda Bolivia es difícil desde posiciones que marquen en exceso

lo cambia; esto, en todo caso, le asegura su hegemonía local a costa de un techo bajo en el ámbito nacional. El discurso religioso y alguna idea de renovación podrían permitirle cierta expansión. Lo nacional popular ha mostrado su fortaleza en las elecciones de octubre de 2020 y de marzo de 2021. La novedad es que son mayores en número y en fuerza los disidentes del MAS que han logrado poder local; un reto no menor que marcará parte de su viabilidad será el balance de sus administraciones. El MAS tendrá que resolver la estrategia para seguir siendo el espacio casi exclusivo de lo nacional popular en elecciones generales. Tendrá que decidir si compite, combate o incluye a estas alternativas. También importará –y mucho– la decisión que tome Evo Morales acerca de su rol en el futuro. Pero estas discusiones, acercamientos o disputas tendrán lugar dentro de las fronteras del campo de lo nacional popular. La violencia generada por el golpe de Estado de 2019 vuelve imposible una entente entre el bloque de disidentes del MAS con la derecha tradicional: Senkata y Sacaba son el nombre de esa frontera y, además, son una advertencia general de lo que le ocurre a los sectores populares cuando gobierna la extrema derecha y el campo popular se desmoviliza o divide.

Análisis de la nueva configuración del campo político en Bolivia

Ricardo V. Paz Ballivián

I. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA

¿Cuál es la situación del sistema de representación política en Bolivia luego del ciclo electoral 2018-2021?

Los rasgos particulares de nuestra cultura política

En propiedad, en Bolivia los sistemas de representación política siempre fueron precarios, frágiles y muy dependientes de las organizaciones corporativas y de los caudillos. Los partidos políticos casi siempre resultaron de la confluencia y asociación de intereses particulares de algunos gremios o de la aglomeración de personas y grupos alrededor de algún líder destacado en el momento. Partidos políticos, entendidos estos como agrupaciones de ciudadanos que tienen en común una ideología, un programa de gobierno y una institucionalidad democrática, existieron más como intención y proyecto, que como realidades logradas.

En el ciclo inaugural de la República, entre 1825 y 1880, aproximadamente, se sucedieron sistemas de representación política ligados a caudillos, correspondientes a la casi inexistente institucionalidad estatal del período. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un intento de formalizar un sistema de partidos a la usanza occidental, con la implementación del bipartidismo, liberales contra

conservadores, más en la superficie formal que con un impacto político real en la cultura y práctica política del país.

La guerra del Chaco abrió un ciclo histórico, el de la Revolución Nacional, en el que se instauró un sistema de partido hegemónico, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cuya característica era la agrupación de representantes de las más importantes corporaciones de entonces: trabajadores mineros, fabriles y campesinos, con el infaltable agregado del caudillo.

Entre 1964 y 1982 se sucedieron gobiernos de facto, con breves interregnos democráticos, durante los que la representación política estaba en la gran corporación que son las FF.AA. en Bolivia y, en algunos casos, en caudillos militares como Barrientos y Banzer. Los partidos o frentes políticos que se organizaron para la resistencia o para los fallidos procesos electorales no lograron tampoco, en ese tiempo, constituirse en instituciones.

El 10 de octubre de 1982, fecha que se suele aceptar como inicio de la era democrática moderna en Bolivia, también se inició un nuevo proceso de constitución de un sistema de partidos políticos. El MNR, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) fueron los ejes de este intento. A finales de la década de los años ochenta se incorporaron Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Conciencia de Patria (Condepa) y el Movimiento Bolivia Libre (MBL); un poco más tarde, Nueva Fuerza Republicana (NFR). Este sistema multipartidario, de pluralismo moderado, trató de superar los límites del corporativismo y del caudillismo, y avanzar hacia la institucionalización democrática, pero finalmente sucumbió ante estos dos rasgos tan potentes de la cultura política boliviana. La fase final de este proceso se produjo en el período 2002-2005, cuando la ceguera de Sánchez de Lozada ante las demandas de la gente, la prepotencia y corrupción de los partidos tradicionales, unidos a la poderosa acción de las organizaciones sociales en las calles y en el

campo, terminó con la etapa que suele denominarse como “democracia pactada”.

El proyecto de partido hegemónico

Entre 2002 y 2005 concluyó el intento multipartidario y se inauguró una nueva etapa de instauración de un partido predominante: el Movimiento al Socialismo (MAS) está en ello desde entonces y las fuerzas políticas que se le oponen, se organizan, principalmente, por negación. El MAS es el único “instrumento político” y se han sucedido para hacerle contrapeso, en época electoral y en el Parlamento: Podemos y Unidad Nacional (UN) en 2005, Convergencia Nacional (CN) y Unidad Nacional en 2009, Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en 2014, y, desde 2018, Comunidad Ciudadana (CC). En los gobiernos departamentales y municipales la oposición es más diversa, resultado de la emergencia y formalización de las llamadas Agrupaciones Ciudadanas, que en muchos casos pretenden ser una suerte de partidos políticos regionales.

El MAS es una especie de confederación de organizaciones sociales que agrupa campesinos, obreros, gremiales, mineros, cooperativistas, colonizadores, cocaleros, transportistas, etcétera, bajo el caudillaje de Evo Morales. Es decir que se trata de una organización que reproduce las dos características de nuestra cultura política a las que hemos hecho referencia. Si bien tiene formalmente un estatuto orgánico, una declaración de principios y un programa de gobierno, nadie podría decir, a ciencia cierta, cuál es propiamente su ideología o su filosofía política. Hay sectores indigenistas, marxistas, nacional-populistas, etcétera, todos bajo el manto generalista de “lo nacional popular”, “la izquierda” o “el antiimperialismo y la soberanía”.

Lo más reciente

Desde 2018, luego del decaimiento de UD –compuesta por el Movimiento Demócrata Social (MDS), con raigambre en el

oriente boliviano; Unidad Nacional (UN), una organización forjada en torno al empresario Samuel Doria Medina, y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que aupaba al expresidente Jorge Quiroga–, surgió Comunidad Ciudadana (CC), una alianza político electoral entre un antiguo y modesto partido sobreviviente del sistema político del siglo pasado –el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI)–, con una agrupación ciudadana de alcance departamental: Soberanía y Libertad (SOL.lp). Posteriormente se sumaron un significativo número de plataformas ciudadanas, cuya causa común era la defensa del voto popular que el 21 de febrero de 2016 negó a Evo Morales la postulación a un nuevo mandato de gobierno y la agrupación ciudadana de Tarija, Todos. Comunidad Ciudadana se formó para brindarle cobertura legal a la candidatura a la presidencia de Carlos Mesa, exvicepresidente y expresidente en el turbulento período de la transición de 2002 a 2005.

Entre 2018 y 2020, constituyeron el sistema de representación política en Bolivia el MAS, CC, UN, MDS y algunas siglas con personería jurídica que se conformaron o prestaron su membresía para la participación de algunos líderes emergentes como Chi Hyun Chung, en 2019, o Luis Fernando Camacho, en 2020.

En 2021, para las elecciones municipales y departamentales se repitió el fenómeno del préstamo de siglas a este nivel regional. Surgieron muchos liderazgos locales, que, como veremos más adelante, no son la expresión del surgimiento de organizaciones políticas, sino, más bien, la repetición conocida del fenómeno del corporativismo y el caudillismo en Bolivia.

CC, sorpresivamente para muchos, luego de su performance nacional –que la ubicó como representación de casi un tercio del electorado del país– participó de este proceso electoral muy escuetamente, con una sola candidatura notable a nivel nacional (para el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, donde obtuvo el segundo lugar a menos de un punto porcentual del ganador).

¿Cómo se está recomponiendo el sistema de partidos políticos?

Lo que se va

De 2014 a 2018, en pleno auge del proyecto de construcción de un sistema de partido predominante, los partidos que enfrentaron al MAS fueron Unidad Demócrata y el PDC de Jorge Quiroga.

Unidad Demócrata tuvo problemas desde un inicio y tanto el Movimiento Demócrata Social como Unidad Nacional actuaron casi siempre de manera separada y en algunas ocasiones hasta enfrentada. Adicionalmente, ambas fuerzas sufrieron defecciones y rupturas que disminuyeron sus posibilidades de presentar una oposición importante contra el MAS.

El PDC, sigla tradicional en préstamo para promover la candidatura de Jorge Quiroga, tampoco logró mayor incidencia y se tuvo que limitar a una oposición modesta y testimonial.

El Movimiento Demócrata Social obtuvo una significativa presencia y una apreciable organización luego de las elecciones municipales y departamentales de 2015, lo que le permitió pensar que se podía constituir en el eje de convergencia de la oposición al MAS en las elecciones nacionales de 2019. Una serie de errores tácticos y estratégicos, una campaña electoral fallida en 2019 y una participación protagónica en el desastroso gobierno de Jeanine Áñez, en 2020, dieron por tierra con las intenciones del MDS y, hoy, luego de las elecciones municipales y departamentales de 2021, esta sigla está prácticamente en vías de desaparición.

Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina, también parecía una fuerza política promisoría luego de haber logrado, conjuntamente al MDS, casi un cuarto del electorado nacional en las elecciones de 2014 y una impactante victoria en la alcaldía de la ciudad de El Alto, supuesto bastión electoral del MAS, en las elecciones de 2015. Sin embargo, al igual que

el MDS, un conjunto de yerros tácticos y estratégicos, una fallida y errática participación en la campaña electoral de 2019 y la forzada y malograda candidatura vicepresidencial de Doria Medina, en binomio con la entonces presidenta Jeanine Áñez en 2020, condujeron a esta fuerza política al borde de la extinción.

SOL.lp, de Luis Revilla, que nunca pudo lograr su tránsito de agrupación ciudadana departamental a partido político nacional, luego de haber administrado el Gobierno Municipal La Paz durante cinco años (aunque en estricta secuencia, SOL.lp resultó una extensión del Movimiento Sin Miedo, MSM, de Juan del Granado, que estuvo al mando de la comuna paceña desde 2000 hasta 2015), no consiguió cristalizar en organización política institucionalizada, debido, por un lado, a que no pudo superar el caudillismo de Luis Revilla y porque no pudo trascender los límites territoriales de su área de influencia. Es poco probable que esta fuerza política logre rearticularse para participar del nuevo ciclo político en Bolivia, ahora que no tiene el aparato de la Alcaldía de La Paz, que le sirvió de plataforma de acción.

El Movimiento Tercer Sistema (MTS), de Félix Patzi, un partido político de alcance nacional, aunque con verdadera raigambre en el departamento de La Paz, tampoco logró ir más allá del liderazgo de Patzi y del espacio del área rural de La Paz. En las elecciones de 2021, prestó su sigla a líderes locales en Beni y Pando que lograron importantes victorias electorales, como veremos más adelante. Dado el fracaso electoral de Patzi en las elecciones para gobernador del departamento de La Paz y la falta de institucionalidad orgánica, parece muy difícil que el MTS pueda sobrevivir.

El PDC promovió a Jorge Quiroga en 2014, a Jaime Paz Zamora, fugazmente, y a Chi Hyun Chung en 2019. El PDC es una sigla “a préstamo” por lo que no vale la pena una apreciación sobre la organización, sino sobre los liderazgos que la utilizaron.

Jorge Quiroga ya fue candidato presidencial en 2005, 2014 y 2020 y, si bien su voz y presencia es escuchada en varios círculos políticos y mediáticos, todo indica que su incidencia política será cada vez menor. Anticipadamente, las mediciones de sus fallidas candidaturas a la presidencia de Bolivia daban a Quiroga cifras que no iban más allá del 2 o 3 por ciento. Cada vez que se realiza una medición cuantitativa del apoyo popular que pudiera tener, se repite esta realidad.

Jaime Paz Zamora, expresidente (1989-1993), después de su última incursión electoral, en 2020, ha tenido esporádicas apariciones en el debate nacional y no parece que pueda ser un actor político importante en el próximo ciclo, tanto por razones de apoyo popular, igual que en el caso de Quiroga, como por razones de edad (Paz Zamora tiene 81 años).

Chi Hyun Chung, luego de una fulgurante y sorpresiva irrupción electoral en 2019, donde obtuvo casi el 9% de la votación, cayó estrepitosamente en 2020, con otra sigla “de préstamo”, el Frente Para la Victoria, a menos del 2%. Remató su fracaso político y su casi segura salida de la actividad política, con una penosa actuación como candidato marginal a la Gobernación de Santa Cruz, representando a Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

El Movimiento al Socialismo (MAS)

Parecía programado por los estrategas del MAS, y en especial por Evo Morales, que el año de consolidación del sistema político de partido hegemónico fuera el 2019. Desde 2005, esta organización había sorteado una serie de vicisitudes y desafíos políticos; rebeliones, campañas, movilizaciones y crisis políticas internas y externas. En febrero de 2016 había sufrido su derrota más sentida, cuando perdió el referendo convocado por el gobierno para modificar la Constitución Política del Estado y arreglar su reelección. Entre ese año y 2019 el MAS logró recuperar la iniciativa política y, luego de habilitar forzosamente a Evo Morales como candidato, se encaminaba a una batalla electoral decisiva.

Las elecciones de 2019 fueron dejadas sin efecto legal luego de que Evo Morales renunciara a la presidencia del Estado, fruto de una movilización ciudadana, un motín policial, las sugerencias de renuncia de la Central Obrera Boliviana (COB) y del comandante de las Fuerzas Armadas, de un ambiente de violencia focalizada y de que la Misión de Observación Electoral de la OEA estableciera que hubo serias irregularidades que incidieron en el resultado final de las elecciones.

La transición política, encabezada por Jeanine Áñez, resultó accidentada y agravada por la pandemia del coronavirus, que obligó a postergar varias veces la fecha de las nuevas elecciones, inicialmente convocadas para mayo de 2020.

En medio del desorden y la incertidumbre del momento, surgieron posturas radicales que planteaban la anulación de la personería jurídica del MAS, extremo que, felizmente para la salud del sistema político, no prosperó. Era una circunstancia en la que todo parecía indicar que el MAS se dirigía a su debacle.

Sin embargo, un conjunto de aciertos tácticos y estratégicos de la dirigencia del MAS que permaneció en Bolivia, además de los errores políticos, la ineptitud y la corrupción del gobierno de transición, permitieron el rápido y sorprendente reagrupamiento y fortalecimiento de esta organización política.

Un binomio complementario en varios sentidos, constituido por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, y una adecuada campaña electoral le permitieron al MAS ganar ampliamente las elecciones generales de 2020, obteniendo el 55% de la votación, lo que significó, además de la elección del presidente y del Vicepresidente, la obtención de 21 senadores y 75 diputados.

En las elecciones municipales y departamentales de 2021, el MAS consiguió ganar las gobernaciones de tres departamentos (Cochabamba, Potosí y Oruro) y dos alcaldías de capitales de

departamento (Oruro y Sucre). Ganó también en otras 239 alcaldías de ciudades intermedias y municipios pequeños.

Con estos resultados, el MAS ratificó su condición de partido dominante y restableció la posibilidad de la construcción de un sistema político de partido predominante.

Comunidad Ciudadana (CC)

En el campo de la oposición surgió la figura de Carlos Mesa como aglutinador, aunque con la resistencia abierta de los sectores más conservadores de la sociedad política boliviana, representados sobre todo por el MDS, el PDC (en sentido estricto, por Jorge Quiroga) y, en parte, por UN.

Se conformó así CC en torno a Carlos Mesa con la confluencia del FRI y varias Agrupaciones Ciudadanas, entre ellas la más significativa Soberanía y Libertad (SOL.lp), que gobernaba en el municipio de La Paz.

CC cambió entre 2018 y 2021 de composición partidaria, manteniendo al FRI como estructura legal principal y el liderazgo de Carlos Mesa como referente político real.

Actualmente, a nivel nacional, es la fuerza política más relevante de la oposición. Logró 50 asambleístas nacionales (11 senadores y 39 diputados), tiene senadores en ocho departamentos y diputados en los nueve. CC quedó a un senador del tercio de la Cámara Alta y a cinco diputados del tercio en la Cámara Baja. Además, obtuvo dos diputados supraestatales, que no son parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que actúan en los parlamentos regionales, latinoamericanos y mundiales. Por lo tanto, CC, a nivel parlamentario, quedó situada como la fuerza política más importante de Bolivia después del MAS.

En las elecciones municipales y departamentales, CC participó con candidatos propios en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro y, como parte de alianzas o acuerdos políticos, en La Paz, Tarija, Beni y Pando. Al margen del Gobierno Municipal de Santa Cruz y de otros gobiernos municipales de ciudades intermedias –donde

obtuvo resultados relevantes con candidatos propios– en el resto de los municipios su performance fue modesta o francamente débil. No obstante, en la ciudad de La Paz y en las segundas vueltas para las gobernaciones de Chuquisaca y Tarija, su aporte tuvo alguna relevancia. En general, la participación de CC en estas elecciones, contrariamente a lo que podía augurar su desempeño a nivel nacional, fue pobre y de escasa incidencia política.

Creemos

Otro actor importante, tanto en las elecciones generales de 2020 como en las municipales y departamentales de 2021, fue Creemos –primero, en calidad de alianza electoral nacional y, después, como agrupación ciudadana departamental–, bajo el liderazgo de Luis Fernando Camacho.

Creemos nació a la vida legal como resultado de una alianza electoral entre un partido político de alcance nacional –Unidad Cívica Solidaridad (UCS)– y las agrupaciones ciudadanas SOL.bo, LIDER, MOP y Columna de Integración. Así se presentó a las elecciones generales de 2020.

En esos comicios ocupó el tercer lugar y logró el 14% de la votación, lo que le significó una bancada de cuatro senadores y 16 diputados, todos ellos de la región oriental del país, principalmente de Santa Cruz.

Para las elecciones de 2021, Creemos se constituyó como agrupación ciudadana departamental en Santa Cruz. Participó, esta vez sin aliados, y ganó de manera contundente la Gobernación con el 55% de los votos; también triunfó en municipios menores (obteniendo alcaldes y concejales) en Santa Cruz y en el Beni.

Oposición y oposiciones

En política, por definición, “la oposición” no existe; existen oposiciones. En este sentido, no tienen mucho en común Eva Copa con Sánchez Berzaín, Carlos Mesa con Luis Fernando Camacho, Santos Quispe con Tuto Quiroga. Por consiguiente,

es un despropósito conceptual englobar con un mismo término a todas aquellas organizaciones o liderazgos que se oponen al MAS.

Hay oposiciones desde la misma matriz de acción política basada en el corporativismo, como es el caso de Eva Copa, Santos Quispe, Damián Condori, etc. (nótese que no hago referencia a organizaciones, sino a personalidades; es el rasgo dominante de nuestra cultura política, sin duda) y también hay oposiciones desde otras matrices, como la de Carlos Mesa y CC (que trata de ser ideológica) o la de Luis Fernando Camacho (regional).

Es muy importante, por tanto, cuando realizamos cualquier topología del campo político, diferenciar los distintos tipos de oposiciones existentes y no caer en la generalización de “la oposición”.

¿Cómo son las relaciones entre el oficialismo y las oposiciones?

Los discursos inaugurales del presidente Arce, del vicepresidente Choquehuanca y de otras autoridades, como la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, hacían suponer, a finales de 2020, que la constante beligerancia, confrontación y fuerte polarización que había caracterizado a la relación entre el oficialismo y las oposiciones durante el gobierno de Evo Morales, no se repetiría y que más bien estábamos a puertas de una etapa diferente de mayor apertura, diálogo y concertación política.

Inclusive, desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, a propuesta del ministro de Justicia, Iván Lima, se conformó una comisión plural de juristas con el objetivo de diseñar, de manera consensuada, una reforma del sistema judicial. Tanto CC como Creemos y decenas de personalidades del campo opositor y oficialista mostraron su adhesión a la propuesta y todo parecía encaminarse hacia un esquema inédito de colaboración y sinergia entre el oficialismo y las oposiciones bolivianas.

Sin embargo, duró muy poco la ilusión. En febrero, el ministro Lima dio marcha atrás y anunció una “pausa” en las labores de la comisión de juristas, con lo que la idea de un trabajo conjunto entre oposiciones y oficialismo, para la generación de una política de Estado, quedó frustrada y archivada.

Luego se desencadenó la campaña electoral rumbo a las elecciones municipales y departamentales realizadas el 7 de marzo del 2021, dejando muy poco espacio a cualquier posibilidad de diálogo y menos colaboración entre el oficialismo y las oposiciones. Se acentuaron las diferencias, los discursos volvieron a subir de tono y el clivaje MAS/anti-MAS se instaló otra vez como ordenador principal de la política.

El clímax llegó apenas concluido el proceso electoral, cuando todavía se contaban los votos de la primera vuelta y se atisbaban segundas vueltas en cuatro departamentos del país para definir la titularidad de las gobernaciones. El Órgano Judicial, con el brazo solícito y operativo del Ministerio Público, inició un proceso de persecución política judicial, principalmente en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores, pero también amenazando a otros líderes opositores como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

Una demanda de investigación por un supuesto “golpe de Estado” que habría llevado al gobierno a Jeanine Áñez, incoada por la exdiputada Lidia Patty, fue reactivada y en menos de 48 horas la expresidenta fue puesta en prisión “preventiva”, junto a dos de sus ministros. Varios otros dirigentes opositores y también ex altos jefes militares y policiales, acusados de participar del supuesto “golpe” y de las supuestas “masacres” ocurridas luego de este, también fueron encarcelados de manera expedita.

Naturalmente, el ambiente creado a partir de esta arremetida, ejecutada por el Órgano Judicial y el Ministerio Público, pero atribuida por las oposiciones al MAS,

devolvieron al país a una situación de extrema polarización y enfrentamiento.

Adicionalmente, el proceso de conformación de las directivas de los gobiernos municipales y departamentales, generaron un ambiente de antagonismo extremo y crispación, en el que el MAS se comportó sin cambios respecto a su actitud hegemónica de los últimos 15 años.

Así quedaron las relaciones entre el oficialismo y las oposiciones al concluir el proceso electoral de 2021: tensas, enfrentadas y sin que se avizore un esquema de convivencia democrática pacífica.

¿Cuál es el panorama del sistema de representación política a nivel departamental y municipal, en especial en torno a las agrupaciones ciudadanas?

Si bien en Bolivia, a nivel nacional, el sistema de representación política se reduce al MAS (partido predominante), CC y Creemos, dando la impresión de constituir un sistema restringido, en el ámbito municipal y departamental, aparentemente explota y se confirma la diversidad de agrupaciones ciudadanas y de organizaciones indígenas.

Para las elecciones municipales y departamentales de 2021, se habilitaron 122 organizaciones políticas y/o alianzas en los nueve departamentos de Bolivia, de acuerdo al siguiente detalle: Chuquisaca (16), La Paz (35), Cochabamba (17), Oruro (19), Potosí (20), Tarija (13), a Santa Cruz (34), Beni (14) y Pando (9). En total se registraron 20.337 candidaturas, 11.173 como titulares y 9.164 como suplentes.

No obstante que las 11 organizaciones políticas de alcance nacional, con personería jurídica, presentaron candidatos en algunas de las circunscripciones municipales y departamentales, solo el MAS postuló candidatos en la totalidad de circunscripciones del país. Por consiguiente, 110 organizaciones políticas (agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas) expresaron la supuesta diversidad y pluralidad del sistema político boliviano a nivel regional.

Sin embargo, este dato ilusorio de la realidad no debe llevarnos a equívocos. La inmensa mayoría de las Agrupaciones Ciudadanas no obedecen a formaciones orgánicas que pudieran ser clasificadas bajo el denominativo de partido u “organización política”, es decir, que congreguen a un conjunto de ciudadanos por afinidad ideológica, filosófica o de un programa de gobierno. Se trata, más bien, de aglomeraciones corporativas, representativas de los intereses particulares de algún o algunos sectores de la sociedad y, sobre todo, entornos de algún líder regional que necesita de este “requisito” legal para poder optar a competir por un cargo público de representación popular.

Como veremos más adelante, las agrupaciones ciudadanas y también las organizaciones políticas bajo el denominativo de pueblos indígenas suelen ser utilizadas simplemente como siglas “a préstamo”, al servicio del caudillo popular de turno.

O sea, que el sistema político multipartidario, diverso y plural que en apariencia muestra el nivel municipal y departamental en Bolivia esconde, en realidad, la reproducción, también a ese nivel, de las dos características estructurales del sistema político en Bolivia a las que hemos hecho referencia: corporativismo y caudillismo.

II. ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y ALIANZAS

¿Cuál es la situación de las principales organizaciones políticas y alianzas luego de las elecciones de 2020 y 2021?

La fotografía

Luego de las elecciones municipales y departamentales de 2021 están vigentes en Bolivia, formalmente, 12 organizaciones políticas de alcance nacional y más de 130 a nivel departamental y municipal.

Participaron de las elecciones municipales y departamentales 38 alianzas: 9 se presentaron ante Tribunales Electorales Departamentales (TED) y 29 ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El departamento con más acuerdos fue Beni y las organizaciones políticas que más pactaron fueron el MDS, UN y ADN. El MAS no hizo ninguna alianza en el país.

Creemos fue la única alianza que registró su pacto en todo el país y estuvo conformada por el PDC, el Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-B), y las Agrupaciones Ciudadanas Autonomía para Bolivia y Nuevo Poder Ciudadano.

La organización política que más alianzas estableció fue el MDS, que llevó a cabo ocho acuerdos en todo el país, dos de ellos en áreas rurales de Beni y uno en La Paz. Por otra parte, logró pactos con agrupaciones en Cochabamba, Pando, Beni, La Paz y Oruro.

Comunidad Ciudadana-Autonomías para Bolivia (C-A) participó con candidatos propios en Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí y Oruro. En Beni se alió con Creemos, en Tarija apoyó la reelección de Adrián Oliva y en Pando se unió a agrupaciones ciudadanas locales.

ADN registró ocho pactos, al igual que UN.

Los resultados, como era de esperar, depuraron en gran manera esa aparente multiplicidad de alternativas políticas. Quedó al descubierto que gran parte del sistema político formal, con personería jurídica en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), son solamente siglas, colocadas en un mostrador y dispuestas a ser alquiladas al mejor postor en época electoral.

En definitiva, en el ámbito nacional quedaron vigentes el MAS, CC y Creemos, y en el ámbito municipal y departamental, además del MAS, cuya presencia es mayoritaria, un conjunto de agrupaciones ciudadanas diversas, entre las que destacan las siguientes: Chuquisaca Somos Todos y República 2025 en Chuquisaca; Jallalla en La Paz; Súmate en Cochabamba; Movimiento Cívico Popular en Potosí; Unidos en Tarija; y

SOL Oruro en Oruro. En Beni y Pando alcanzó un sitial preponderante el partido político nacional Movimiento Tercer Sistema (MTS).

La realidad

La existencia de varias organizaciones políticas en Bolivia, sobre todo a nivel de municipios y departamentos, podría dar la falsa impresión de que se cuenta con un sistema de partidos multipartidario, diverso y plural. No es así. No solamente porque existe un partido dominante con afanes hegemónicos, mucho más fuerte, mejor organizado y con muchísima mayor presencia poblacional y territorial que el resto, sino porque las demás supuestas organizaciones políticas, en realidad son proyectos en fase de germinación o, francamente, cascarones legales para el desempeño electoral de caudillos con pequeños entornos.

En efecto, el MAS, que parecía haber concluido su existencia a finales del 2019, como fruto de la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado y su posterior huida al exterior del país, se encuentra, poco más de un año después, de nuevo en el gobierno y con su poderío orgánico y electoral un tanto disminuido, pero aun representando, de lejos, la organización política dominante en el país. No es motivo del presente ensayo escudriñar las causas y las razones para que se produjesen estas idas y venidas, baste con decir que la dirigencia del MAS que se quedó en Bolivia, principalmente en la ALP, no solo tuvo la capacidad para resistir la arremetida de un gobierno que se creía poderoso, pero que realmente era muy débil, sino que retomó, rápidamente y con lucidez, la iniciativa política, acertó en desligarse de Evo Morales, promovió la postulación de un nuevo binomio y desarrolló una campaña electoral muy eficiente. Por supuesto que colaboró mucho con el éxito del MAS la desastrosa gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, su inopinada y fatal postulación como candidata a la Presidencia del Estado y la corrupción generalizada que se desencadenó durante ese período.

El MAS tiene ahora la posibilidad de consolidar su transición de partido político constituido alrededor de su caudillo, Evo Morales, y de su carácter corporativo –que tiene como vanguardia y dirección al movimiento cocalero– hacia una estructura democrática e institucionalizada con liderazgos menos personalizados y con la definición de una ideología, una filosofía y un programa que abarquen al conjunto de la nación y trasciendan los intereses corporativos de las organizaciones sociales que lo constituyen.

Sin embargo, todas las señales que emite esta organización política se relacionan con reintentar la instauración de un sistema político de partido hegemónico el cual, aunque permite la existencia de otras fuerzas políticas menores, se garantiza para sí mismo un ejercicio omnímodo del poder, con férreo control de todos los órganos del Estado. Se trata, para ponerlo de manera eufemística, un esquema de “democracia restringida”, de rasgos autoritarios, aunque respetuosa de algún tipo de formalidad institucional: elecciones periódicas, funcionamiento del Parlamento, justicia aparentemente independiente y vigencia acotada de las libertades ciudadanas básicas.

Por otra parte, CC es un proyecto político en formación. Tiene una importante representación parlamentaria y alguna presencia en municipios y departamentos, pero su verdadera potencia y significado político está todavía concentrado en la figura de su principal líder, Carlos Mesa. Los próximos meses y años nos mostrarán si CC logra constituirse en una organización política institucionalizada y vigorosa o si naufraga en ese intento, tal como sucedió en el pasado con las otras fuerzas opositoras que lograron capitalizar el rechazo de un importante sector de la población boliviana al MAS.

Los principales desafíos para CC están en: 1) consolidar una identidad ideológica, filosófica y política coherente y diferenciada de otras visiones, al tiempo de constituir una organización moderna, democrática, participativa y con una institucionalidad fuerte; 2) construir una opción alternativa

que trascienda la simple negación y la propia definición política solamente por oposición al MAS; y 3) en lugar de persistir en la nociva práctica de nuestra cultura política, que hace una simbiosis entre el caudillo y la organización, aprovechar el liderazgo de Carlos Mesa para construir una institución para la democracia y no periclitarse en el repetido y atávico estancamiento en el personalismo.

Creemos es otro proyecto político en formación, por el momento de raigambre casi exclusiva en el departamento de Santa Cruz, que al igual que CC tiene el reto de trascender el caudillismo, en este caso alrededor de Luis Fernando Camacho. Adicionalmente, como es obvio, debe intentar ampliar su presencia orgánica y territorial al resto del país, para no correr la suerte del MDS y de otras fuerzas políticas del pasado, que se quedaron en la reivindicación regional, sin poder nunca ofrecer un proyecto nacional incluyente y abarcador.

Lo nuevo en las regiones

En el nivel regional, es decir municipal o regional, lo que destaca, más que la aparición de nuevas organizaciones políticas es la emergencia de nuevos liderazgos y el resurgimiento de otros. Veamos, uno por uno, los más notables.

Eva Copa Murga, expresidenta de la Cámara de Senadores a partir de la renuncia de Adriana Salvatierra en los convulsos días que siguieron a la salida de Evo Morales del gobierno y la asunción de Jeanine Áñez. Rápidamente se posicionó como la cabeza visible del MAS dentro de Bolivia durante todo el gobierno de transición. Actuó con gran habilidad política, reorganizando sus fuerzas, manteniendo la unidad de su bancada parlamentaria, viabilizando la realización de nuevas elecciones generales, logrando no solo la supervivencia de su organización política, sino su proyección victoriosa.

Luego de la victoria electoral del MAS en las elecciones generales de 2020, se ahondaron las diferencias entre Eva

Copa y la dirección política tradicional del MAS, encabezada por Evo Morales, al extremo de que este grupo dirigente trabó e impidió la postulación de Eva Copa a la Alcaldía de la ciudad de El Alto por ese partido. Copa decidió postularse, de todas maneras, y se presentó con la sigla Jallalla, una agrupación ciudadana menor. Su victoria resultó abrumadora y significó un grave revés político para el MAS y, especialmente, para la cúpula comandada por Evo Morales.

Eva Copa aparece en el firmamento político boliviano como uno de los liderazgos más potentes y con mayor proyección para la próxima etapa del país. Su alejamiento y ruptura con el MAS parecen definitivos o por lo menos difíciles de enmendar mientras Evo Morales mantenga el liderazgo de esa organización. El tiempo dirá si Eva Copa, a partir de su liderazgo y popularidad, logra trascender los límites regionales de la ciudad de El Alto y el occidente de Bolivia y si contribuye a construir una organización política democrática e institucionalizada. Su impronta, por el momento, hace prever un liderazgo caudillista tradicional con rasgos autoritarios, propio de nuestra cultura política.

Santos Quispe Quispe, hijo del connotado dirigente campesino aymara Felipe Quispe, el “Mallku”, es un médico graduado en Cuba que resultó electo gobernador del departamento de La Paz de manera inopinada, por la confluencia de dos factores azarosos: la muerte de su padre en plena campaña electoral –que obligó a la agrupación Jallalla a buscar un reemplazo de emergencia, encontrándose con la posibilidad del hijo– y, por otra, el impulso que le dio Eva Copa, también candidata de Jallalla, en la ciudad de El Alto, circunstancia que dividió la votación del MAS en esa populosa urbe aymara.

Santos Quispe es una verdadera incógnita. Sus pocas presentaciones públicas en entrevistas y en actos de campaña hacen presumir un ciudadano inexperto en las lides de la política y sin ideas muy claras, ni siquiera tributarias del indigenismo de su padre. Habrá que seguir sus actuaciones

al mando de la Gobernación de La Paz para hacernos una idea más cabal de este típico “heredero de sangre” de la política tradicional.

Vale la pena aquí dedicar unas líneas a la agrupación ciudadana Jallalla. Esta novel organización política departamental de La Paz está presidida por un personaje que, en muy poco tiempo ha adquirido notoriedad política, haciendo gala de pragmatismo y absoluta ausencia de principios ideológicos o filosóficos que lo guíen: Leopoldo Chui. Chui trató de ser candidato a vicepresidente en fórmula con Chi Hyun Chung y luego convenció a Eva Copa para ser candidata en El Alto, a Felipe Quispe para candidatear a la Gobernación del departamento de La Paz y al cantante de música popular, David Castro, para competir por la Alcaldía paceña. Esa tríada improbable, con muy pocas coincidencias entre ellos, basta como muestra de cómo la mayoría de las agrupaciones ciudadanas están motivadas, sobre todo, por el afán de lograr el poder por el poder o, simplemente, dinero, sin mayor objetivo ulterior.

Como era de prever, apenas Eva Copa y Santos Quispe recibieron sus credenciales como autoridades electas, rompieron relaciones con Leopoldo Chui y la organización Jallalla.

Iván Arias Durán resultó electo alcalde de La Paz por la alianza Por el Bien Común Somos Pueblo (PBCSP), integrada por las organizaciones políticas MDS y la agrupación ciudadana municipal Suma Escoma. Iván Arias es un experimentado municipalista que formó parte del equipo que diseñó e implementó la Ley de Participación Popular a partir de 1994, la cual significó la revalorización del espacio municipal, como sustento fundamental del entramado territorial institucional del Estado boliviano. Fue viceministro, candidato a diputado y, muchos años después, luego de una larga carrera como consultor independiente, ministro de Obras Públicas en el cuestionado gobierno de Jeanine Áñez. En el período del denominado “proceso de

cambio”, inaugurado por el MAS en 2005, Arias fue, desde sus inicios, crítico y contestatario. Se hizo conocido a través de los medios de comunicación, producto de sus atrevidos y punzantes análisis, caracterizados por una particular manera de ejemplificarlos, mediante muñecos y dibujos.

Arias se lanzó a la candidatura a la Alcaldía de La Paz ante la sorpresa de muchos, quienes consideraban que sus posibilidades, tras su paso por la desastrosa gestión de Áñez, eran mínimas. Adicionalmente, se rumoreaba que, en el ministerio a su cargo, sobre todo en las empresas públicas bajo su tuición –como Entel, BOA y ABC– las denuncias de malos manejos y corrupción harían naufragar cualquier intento de candidatura. Además, Iván Arias se lanzó prácticamente solo: convocó a sus allegados, consiguió una sigla y se negó a pactar con alguna de las fuerzas políticas opositoras, salvo el MDS, de presencia muy pobre en La Paz.

Su ascenso, campaña y victoria fueron sorprendidas. De nada sirvió la campaña negativa que intentó el MAS, sobre todo al final del proceso electoral. La única explicación posible de su exitoso performance es atribuible a su carisma y a la manera llana, directa y populista con que logró conectar al electorado.

Actualmente, Iván Arias ha tratado de darle a sus aprestos de gestión un carácter despolitizado, intentando alejarse de la polarización oficialismo/oposición, pero el MAS no parece que vaya a permitir aquello y ha preferido ejecutar una fuerte arremetida política que anuncia una confrontación dura en la ciudad sede de gobierno.

Humberto Sánchez Sánchez, ganador por mayoría absoluta y en primera vuelta de la Gobernación de Cochabamba por el MAS, ocupó el tercer lugar según los postulantes más votados en las elecciones municipales y departamentales de 2021. Se trata de un agricultor con vasta experiencia sindical y política que fue un exitoso y reconocido alcalde de la emergente ciudad de Sacaba, capital de la provincia Chapare, bastión político de Evo Morales.

Sánchez surge como uno de los liderazgos con mayor perspectiva de crecimiento dentro del MAS. Puede resultar una pieza clave para avanzar por la vía de la institucionalización y democratización de su organización política o, como muchos prevén, ser el pivote principal de apoyo de Evo Morales en su propósito de reconquista del MAS y del proyecto de partido hegemónico. El tiempo definirá cuál de esos dos caminos elige el nuevo gobernador de Cochabamba.

Jhonny Mamani Gutiérrez es otro ganador, por mayoría absoluta, en este caso de la Gobernación de Potosí, por el MAS. Es otro de los líderes emergentes del partido de gobierno. Exalcalde de una pequeña localidad rural, Tahua, Mamani es un militante orgánico, representativo de la línea dura encabezada por Evo Morales.

Sus actuaciones previas y la composición de su gabinete departamental permiten prever que Mamani no se alejará mucho de la vía personalista de respaldo a Evo Morales y de construcción del sistema de partido hegemónico.

Jhonny Llally Huata resultó electo alcalde de la ciudad de Potosí por el Movimiento Cívico Popular, una Agrupación Ciudadana creada a partir del vigoroso movimiento cívico de Potosí, a cuya cabeza estuvo Llally en diversas causas regionales que fueron cimentando su liderazgo local.

Fuertemente enfrentado al MAS cuando fungía como dirigente cívico, Llally asumió la Alcaldía de la ciudad de Potosí con la misma impronta. Logró capitalizar la mayoría del voto antimasista capitalino y su discurso de posesión, así como la composición de su equipo de colaboradores, muestra que seguirá esa línea.

El liderazgo de Llally no parece que vaya a trascender hacia la conformación de una organización política institucionalizada, democrática y vigorosa, aunque sea a nivel regional, y aún menos a una de proyección nacional, como en su momento intentó otro líder potosino de similar perfil: René Joaquino.

Habrà que observar con atención el desarrollo del desempeño político de este joven liderazgo político, para ver si se congrega con otros parecidos de otras regiones para ir conformando una estructura nacional o si, como ha sucedido ya en el pasado, este liderazgo se queda en otro evento episódico sin mayores proyecciones.

Damián Condori Herrera ganó la Gobernación de Chuquisaca con la Agrupación Ciudadana departamental Chuquisaca Somos Todos. Se trata de un experimentado dirigente social y político que ya fue candidato a gobernador en las elecciones de 2015, en las que adujo que el MAS le había “robado” la victoria, mediante una manipulación en el seno del TED.

Condori fue el máximo dirigente de los trabajadores campesinos de Bolivia, representando al MAS, pero, precisamente a raíz de que Evo Morales eligió a Esteban Urquizu como candidato a gobernador de Chuquisaca en 2015, se alejó de ese partido para formar el suyo propio.

En las elecciones de 2021 Damián Condori forzó la realización de una segunda vuelta y finalmente ganó las elecciones con un amplio margen, lo que le da notoriedad, no solamente regional, sino nacional. Es otro de los dirigentes que habrá que tener muy en cuenta en los próximos meses y años como protagonistas de la política boliviana.

Enrique Leña Palenque resultó electo alcalde de la ciudad de Sucre por el MAS, con una diferencia mínima de 300 votos respecto de su inmediato competidor. Obtuvo un tercio del electorado y se hizo con la victoria producto de la dispersión de fuerzas antimasistas, que sin duda son mayoritarias en la capital del Estado boliviano.

Sin duda que Leña, médico de profesión, pero con alguna experiencia en el ámbito municipal, tendrá una gestión difícil y trabada, dados los anuncios de las fuerzas opositoras mayoritarias en el Concejo edil.

Así y todo, habrá que seguir su desempeño, ya que es otro de los nuevos actores políticos de renovación dentro del MAS.

Horacio Poppe Inch, candidato a alcalde de Sucre por la Agrupación Ciudadana República-2025, perdió la Alcaldía por 300 votos, cuando las encuestas y las investigaciones le auguraban una cómoda victoria. Probablemente, su incapacidad para generar acuerdos con otras fuerzas opositoras haya sido el factor que le jugó esta mala pasada, ya que su desempeño como diputado uninominal en la gestión 2014-2020 fue descollante y le ganó un sitio de liderazgo local indiscutible.

A pesar de su derrota, lo anotamos como otro de los nuevos líderes emergentes que, seguramente, tendrán un accionar importante en el devenir de la representación política en Bolivia.

Johnny Vedia Rodríguez, otro médico de profesión, resultó elegido gobernador de Oruro por el MAS. Al igual que Jhonny Mamani, gobernador de Potosí, pertenece a la corriente más orgánica y leal al liderazgo de Evo Morales y, junto a Humberto Sánchez, gobernador de Cochabamba, constituyen la tríada de gobernadores del MAS que lograron ganar en las elecciones de 2021.

La composición de su gabinete de colaboradores y sus primeras declaraciones como autoridad en funciones muestran a Vedia con toda la disposición a seguir disciplinadamente la línea partidaria y eso hace pensar que será otro de los puntales del MAS en su declarada estrategia de convertirse en la fuerza hegemónica de la política boliviana.

Adhemar Wilcarani Morales, cuyo mérito principal parece haber sido su parentesco cercano con Evo Morales, ganó con pequeño margen la Alcaldía de Oruro para el MAS. Le favoreció, al igual que a Leña en Sucre, la dispersión de las fuerzas políticas opositoras.

Siendo sobrino de Evo Morales, lo que se espera de este joven ingeniero es una actitud de franco alineamiento con su tío, aunque también su propio despliegue y desarrollo como líder local, lo que sin duda dependerá del éxito o fracaso de su gestión como alcalde. Tiene en contra al Concejo Municipal

y a su favor a las organizaciones sociales más fuertes y combativas de la ciudad de Oruro.

Álvaro Ruiz García, candidato a la Gobernación de Tarija por el MAS, representaba la esperanza de ese partido para ganar por primera vez esa plaza tan difícil. Contó con el apoyo pleno de Evo Morales y también del presidente Luis Arce, que participaron varias veces de actos de campaña para apoyarlo. A pesar de los esfuerzos, finalmente, el MAS no pudo ganar en segunda vuelta y tuvo que resignar un objetivo central de su estrategia electoral general.

Sin embargo, es muy probable que Álvaro Ruiz continúe siendo el referente más importante que el MAS tiene en el sur del país y que, en los próximos meses y años, se convierta en una posibilidad real de renovación del liderazgo regional dentro de esa organización.

Alejandro Unzueta Chiriqui ganó la Gobernación del Beni por el Movimiento Tercer Sistema, en una segunda vuelta contra el candidato del MAS, la cual amenazaba con ser cerrada, pero que al final se definió con claridad a favor de este médico beniano.

Unzueta alcanzó notoriedad y popularidad a raíz de sus masivas campañas de prevención y atención a la pandemia del coronavirus en el departamento del Beni. En el momento más álgido de la crisis sanitaria, recorrió las ciudades y pueblos de la región repartiendo medicinas, vituallas y alimentos. En principio fue proclamado por organizaciones sociales afines al MAS, pero la dirección política de este partido, encabezada por Evo Morales, desechó la opción.

Alejandro Unzueta es otro liderazgo nuevo, emergente, que habrá que observar en su desempeño político y administrativo durante los próximos meses y años. Su relación con el MTS de Félix Patzi es meramente instrumental y no parece que aquello vaya a cambiar.

Cristhian Cámara Arratia fue electo alcalde de Trinidad por el MTS, al influjo de la candidatura de Alejandro Unzueta a la Gobernación. Exoficial de aviación, se constituye en un

político nuevo que surge inesperadamente en un ámbito donde la política tradicional y los cacicazgos políticos eran hasta ahora dominantes.

Al igual que Unzueta, su ligazón con el MTS es puramente formal y no representa un potenciamiento de esta organización política en el oriente boliviano. El futuro dirá si el liderazgo circunstancial de Cámara se consolida y proyecta o, por el contrario, si naufraga en esta su primera incursión política.

Gary Áñez Sánchez, periodista de amplia trayectoria en los medios de comunicación de la ciudad de Santa Cruz, estuvo a un tris de ganar la Alcaldía de esa ciudad. Disputó con Jhonny Fernández palmo a palmo el favor popular y finalmente perdió por unos pocos votos. A pesar de su derrota, es innegable que su figura se posicionó como uno de los más importantes líderes nuevos emergentes de esta contienda electoral subnacional de 2021 en Bolivia.

Gary Áñez representó a CC y se convirtió en su baza más fuerte y representativa en estas justas electorales. Sin embargo, la relación orgánica e institucional de este candidato con la alianza política opositora más importante del país todavía es indiciaria. Habrá que ver lo que suceda en el futuro inmediato para que esa relación y el propio devenir político de Áñez se vayan decantando. Mientras tanto, resulta evidente el potencial de Áñez como líder local.

Lo viejo en las regiones

Llamó mucho la atención en las elecciones municipales y departamentales de 2021 el resurgimiento o reaparición exitosa de algunos liderazgos antiguos que parecían haber cumplido su ciclo político hacía tiempo. Si bien es común en nuestro país que los políticos se resistan a jubilarse, no lo es tanto que tengan éxito en sus incursiones tardías. Normalmente lo que sucede es una penosa debacle que estas figuras se podían haber ahorrado. Pero, de tanto en tanto, se producen fenómenos inopinados en los que el retorno resulta exitoso.

Es el caso del excapitán de ejército *Manfred Reyes Villa Bacigalupi*, quien ganó la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Súmate, ¡28 años! después de ser alcalde por primera vez, en 1993. En su dilatada carrera política Reyes Villa fue prefecto (equivalente a lo que hoy es gobernador) de Cochabamba y dos veces candidato a la Presidencia del Estado. En su momento fulgurante, en 2002, estuvo a un paso de ganar las elecciones presidenciales y, en su circunstancia menos favorable, en 2008, fue revocado en su mandato de prefecto.

Luego de su derrota en las elecciones presidenciales de 2009, Reyes Villa se refugió en Estados Unidos hasta 2020, cuando regresó a participar activamente de la nueva coyuntura política que vivía el país, a raíz de la renuncia de Evo Morales y la asunción al gobierno de Jeanine Áñez.

Cuando anunció su postulación para competir por la Alcaldía cochabambina, en 2021, realmente muy pocos pensaban que llegaría a buen puerto. Pesaban sobre él varias acusaciones de corrupción, e inclusive se decía que algunos de los procesos judiciales que había enfrentado en los años anteriores estaban ejecutoriados y vigentes, por lo que, eventualmente, anularían su candidatura. Al final, ninguna de las múltiples impugnaciones que le hicieron prosperó y Reyes Villa ganó abrumadoramente la elección municipal.

La incógnita que se develará en los próximos meses y años es si este prometedor regreso de Reyes Villa al sistema de representación política de Bolivia supondrá también su retorno al primer plano de la política nacional. Con seguridad que esa es la intención de Reyes Villa y de su entorno, pero esto dependerá de su gestión y de la potencia que alcance la ola de renovación política en Bolivia para que tengan chance de hacerse realidad esos propósitos.

Si nos atenemos a la historia de este peculiar caudillo boliviano, se diría que todas las posibilidades están abiertas. Si bien es cierto que a Reyes Villa siempre le fue mejor localmente que nacionalmente, su desempeño en este último nivel tampoco fue desdeñable.

Jhonny Fernández Saucedo, ganador por estrechísimo margen de la Alcaldía de Santa Cruz en representación de Unidad Cívica Solidaridad, a diferencia de Reyes Villa, retorna a la silla edil de Santa Cruz sin haber abandonado la actividad política a nivel local. Fue alcalde por vez primera en 1996, hace 25 años, y desde entonces, salvo una incursión en la política nacional en 2002, cuando fue candidato a la presidencia y obtuvo el quinto lugar, estuvo prácticamente todo ese tiempo ligado a las actividades del municipio de Santa Cruz de la Sierra.

Fue elegido concejal en diversas ocasiones y, ahora, logra su ansiado y perseguido regreso al Ejecutivo municipal.

Jhonny Fernández es también un dirigente peculiar, que si bien inició su carrera pública como lo hace hoy Santos Quispe, es decir como una suerte heredero político tras la muerte de su padre, Max Fernández, supo labrarse, con mucho sacrificio y no poco pragmatismo, un espacio en la disputada y difícil vida política cruceña. Incluso, durante muchos años, tuvo la competencia y rivalidad abierta de su hermano, Roberto Fernández, que también fue concejal y alcalde de Santa Cruz.

Fernández estuvo a punto de perder la elección debido a la aparición fulgurante de Gary Áñez, pero, en esta oportunidad, la suerte le sonrió y ahora le brinda la oportunidad de relanzarse con todo en la política local y, eventualmente, también de proyectarse hacia un liderazgo nacional si encuentra condiciones propicias para ello en este nuevo ciclo de representación política que se abre en Bolivia.

Oscar Montes Barzón, experimentado político, fue un exitoso alcalde de la ciudad de Tarija desde el año 2000 hasta el 2015 y, luego de un paréntesis de seis años, regresó exitosamente al ruedo político ganando, en segunda vuelta, la Gobernación de Tarija contra una de las cartas más fuertes del MAS en el país, el expresidente de la Federación de Asociaciones Municipales, Álvaro Ruiz.

Es muy probable que Óscar Montes se convierta, como ya lo fue, en uno de los principales actores políticos de oposición

al MAS y, en general, de la política nacional. Sin embargo, tampoco en este caso se ve que Montes tenga alguna intención en participar de la construcción de alguna institución política ya sea a nivel regional o nacional. Su apuesta es, al parecer, consolidar su liderazgo personal, antes que contribuir a la formación de una organización política que lo trascienda.

Johnny Torres Terzo es otro político con mucha experiencia, hasta hace muy poco jefe nacional del otrora poderoso y gravitante MNR. Ganó con amplitud el Gobierno Municipal de Tarija por la alianza de Unidos por Tarija. Torres, en los años recientes, se fue consolidando como una figura local central en la política tarijeña y su victoria en las elecciones de 2021 estaba cantada.

A pesar de los esfuerzos de este dirigente, su figura no ha trascendido a nivel nacional y tampoco se lo ve en afanes de construcción de alguna organización política que vaya más allá de su actual liderazgo personal. Su posicionamiento inicial, como la de Óscar Montes, es de oposición al MAS, pero no deben descartarse futuros alineamientos con esta fuerza por razones pragmáticas.

Ana Lucia Reis Melena ya fue alcaldesa de Cobija por el MAS y, antes, diputada por ese mismo partido, así como, previamente, por el MNR. Ganó con suficiencia la Alcaldía de Cobija amparada en la sigla del MTS. Había sido proclamada por las bases del MAS, pero tampoco en este caso la dirección de Evo Morales respetó ese pedido.

Reis ha dado muestras de total pragmatismo en su manera de gestionar la política y no tiene mayor relación de tipo orgánico o ideológico con el MTS de Patzi. Su impronta es claramente personalista y, sin duda, es una líder local con gran personalidad y habilidad. Sin embargo, su presencia y reconocimiento a nivel nacional son limitados y probablemente le impidan ir más allá de los límites de su región.

Miguel Becerra Suárez, otrora allegado al cacicazgo político de Leopoldo Fernández y de ADN, se ligó en los últimos años al MAS, convirtiéndose, por recomendación de Juan

Ramón Quintana, en la ficha fundamental de Evo Morales en Pando. Fue impuesto por este último como candidato a la Gobernación de Pando por el MAS, donde finalmente perdió el balotaje.

Si bien, a partir de este último acontecimiento, el futuro político de Becerra no se ve promisorio, sin embargo, es bueno anotar que probablemente siga siendo en esa región un elemento central de la estrategia de captura territorial del MAS por parte de Evo Morales.

Los “jubilados” en el ámbito departamental y municipal

Varios liderazgos locales y regionales llegaron aparentemente a su fin, a raíz de las elecciones departamentales y municipales de 2021. Repasemos algunos de ellos.

Rubén Costas se mantuvo vigente en la política regional de Santa Cruz desde el año 2003, cuando fungía como presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, la poderosa institución corporativa de esa región. Resultó el primer prefecto del departamento de Santa Cruz elegido por el voto popular en 2005 y también fue el primer Gobernador de ese departamento (cabe señalar que, producto de una reforma política, el 18 de diciembre de 2005, por primera vez en la historia del país, se eligieron prefectos por voto popular; antes eran designados por el presidente). El líder del MDS, trató, infructuosamente, en varias oportunidades, que su organización se convierta en un referente nacional. Luego de las elecciones de 2021 y una vez entregado el mando del Gobierno Departamental a Luis Fernando Camacho, anunció su retiro definitivo de la actividad política. Costas se fue del liderazgo cruceño habiendo sido un bastión de resistencia al MAS durante todos los años del denominado “proceso de cambio”, aunque también fue duramente criticado por liderazgos contestatarios de su región, por una supuesta cohabitación consentida y hasta pactada con el MAS. Por supuesto no hay prueba de aquello, pero sus detractores lograron posicionar ciertas dudas, sobre todo a raíz de los luctuosos hechos del caso

denominado “Hotel Las Américas”, en el que el gobierno del MAS desbarató una supuesta banda terrorista, que implicó a varios líderes cruceños.

Percy Fernández es el político que más veces (seis, en total) ha sido alcalde de Santa Cruz, en las gestiones 1990-1991, 1992-1993, 1993-1994, 2005-2009, 2010-2014 y 2015-2020. Llegó al Ejecutivo edil con el MNR, luego con el Frente Amplio Juntos Para Todos y, finalmente, creó su propia tienda política: Santa Cruz Para Todos. Ninguna de esas organizaciones (a excepción obvia del MNR) tuvieron mayor pretensión que dar cobertura formal a las sucesivas candidaturas de Percy Fernández a nivel municipal. Este singular personaje de la política cruceña también ha anunciado su retiro definitivo de las actividades públicas, lo que, unido a su avanzada edad y a su condición de salud, permiten avizorar efectivamente el fin de su ciclo político.

III. COMPORTAMIENTO ELECTORAL

¿Cuáles son los principales hallazgos, similitudes y diferencias en el análisis comparado entre los comicios 2020 y 2021?

Analizar comparativamente elecciones generales, es decir, presidenciales y legislativas, con elecciones municipales y departamentales puede resultar inconducente, debido a la gran diferencia que existe entre unas y otras. En elecciones generales la gente suele votar motivada más por intereses generales y colectivos que involucran a la nación entera, mientras que, en los comicios regionales, la problemática que define la adscripción ciudadana está, como es natural, ligada sobre todo a factores locales y específicos de cada lugar.

De igual manera, la incidencia de los liderazgos nacionales, tanto orgánicos como personales, que se produce en elecciones generales no es la misma que en elecciones municipales y

departamentales, donde se visibilizan las organizaciones y los líderes locales.

En todo caso, valdrá la pena, unos acápites más adelante, proponer algunas referencias que puedan resultar útiles para el análisis. Mientras tanto, dada la singularidad de los hechos políticos que vivimos en Bolivia recientemente, es importante hacer notar algunos elementos clave para entender lo que nos sucedió y lo que puede pasar en adelante con el sistema político.

Una breve reflexión sobre lo sucedido entre 2019 y 2020

El 18 de octubre de 2020 se produjo en Bolivia un fenómeno denominado “cisne negro”. El resultado de las elecciones generales fue completamente sorpresivo y nadie, absolutamente nadie, lo había previsto. La victoria del MAS por 26,6 puntos porcentuales de ventaja respecto de su inmediato rival, CC, fue imprevista y constituyó un verdadero cataclismo político.

Un “cisne negro”, en el marco de las ciencias sociales, es un evento que cumple con, por lo menos, tres condiciones: es imprevisible, solo es posible comprenderlo y explicarlo con posterioridad, y genera consecuencias estructurales en su contexto.

Si bien las encuestas no tienen como propósito principal predecir los resultados de una elección, se sabe que las últimas mediciones en un proceso (la última semana), normalmente reflejan cierta similitud con los resultados finales. En ese sentido y con esa prevención, es un hecho objetivo que ninguna encuestadora, con objetivos de información pública, investigación partidaria o investigación académica, pudo prever el resultado. Las investigaciones que más se aproximaron erraron en, por lo menos, 15 puntos, mientras que las que más se equivocaron, lo hicieron por más de 26 puntos.

Muy a pesar de esa realidad, una vez producido el evento extraordinario, decenas de opinadores de toda laya y unos pocos analistas serios, se lanzaron a explicar por qué se

produjeron estos resultados. Entre los primeros, proliferaron los que “sabían” que ese resultado se iba a producir (aunque ninguno pudo argumentar por qué no lo dijo antes) y los que se dedicaron a buscar (y encontrar, por supuesto) “culpables” y artífices de lo sucedido. Entre los segundos, predominó la confesión de perplejidad por lo acontecido y el ensayo de unas primeras hipótesis para tratar de comprender lo que pasó.

Pasadas algunas semanas de los comicios, me animé a ensayar las siguientes explicaciones preliminares para tratar de entender lo que sucedió. Las consigno en esta investigación porque las sigo suscribiendo. Y repito ahora también que entiendo, claro está que, mi actuación como coordinador nacional de la campaña de Comunidad Ciudadana, con seguridad está sesgando mi análisis, pero igual me decido a testimoniar lo que me parece que es objetivamente comprobable, en relación a los factores que incidieron de manera definitiva en los resultados de las elecciones generales del 18 de octubre de 2020.

En el fondo, lo que se tratará de explicar a continuación es por qué variaron tanto los resultados de 2019 respecto de los de 2020.

¿Por qué “fallaron” las encuestas?

La primera diferencia que salta a la vista es que, en 2019, las encuestadoras dieron pronósticos más o menos cercanos a lo que sucedió en la votación, pero, en 2020, como ya se dijo, ninguna se acercó siquiera a la realidad, ¿por qué? En primer lugar, debido al “voto oculto” a favor del MAS. Una parte de la ciudadanía, especialmente en las áreas urbanas, seguramente atemorizada por el ambiente “anti-MAS”, prefirió declararse indecisa o manifestarse por otra opción “más correcta”. El ambiente electoral, sobre todo en las ciudades, era de un triunfalismo entusiasta a favor de las opciones diferentes al MAS. Las pocas personas que se animaban a expresar públicamente su adhesión al partido de Evo Morales sufrían el ataque y descalificación del entorno.

Adicionalmente, los medios de comunicación, en su mayoría, no ocultaron su preferencia por las opciones alternativas al MAS, creando así un clima adverso a esta fuerza política, que muy probablemente se expresó en el ocultamiento de la intención de voto. Queda claro, una vez más, que la publicación de encuestas, los medios de comunicación, las conversaciones de las redes sociales, etc., tienen un valor relativo a la hora en que los electores deciden su preferencia electoral. La segunda razón, de carácter más técnico, es que, a raíz de las dificultades logísticas derivadas de la pandemia, las encuestadoras no pudieron llegar a las áreas rurales dispersas y más distantes, donde, adicionalmente, la cobertura de telefonía móvil es todavía precaria. Debido a que la constante del voto por el MAS fue que su caudal crecía mientras más se alejaba de los principales centros urbanos, es razonable pensar que los escollos que impidieron el despliegue normal de los equipos presenciales de sondeo, no haya podido ser suplido de manera suficiente por la metodología CATI (llamadas telefónicas asistidas por computador), que utilizaron prácticamente todas las empresas de investigación. En todo caso, tampoco es completamente inusual que se hubiera dado este fenómeno con las indagaciones electorales en Bolivia, ya que los ejemplos del pasado reciente, en el mundo y la región, muestran situaciones similares, baste pensar en el Brexit en Gran Bretaña, el plebiscito por la paz en Colombia o las últimas elecciones en México, El Salvador o República Dominicana. Hay, sin duda, una crisis de credibilidad de las encuestas electorales, que en el caso boliviano mostró una distorsión muy extrema.

El desplazamiento del centro político

En CC, a diferencia de la elección del año 2019, abandonamos el centro político y lo dejamos libre para la recuperación del mismo por parte del MAS. Lo hicimos porque asumimos que por lo menos dos tercios de la población estaba firmemente decidida a votar en contra del MAS. Mientras que, en 2019,

en CC nos lanzamos resueltamente a disputar el voto indeciso de centro con el MAS, en 2020 creímos que nuestro desafío principal era disputar el voto anti-MAS con las expresiones representadas principalmente por Juntos, de la presidenta Áñez, y por Creemos, de Luis Fernando Camacho y por ello radicalizamos nuestro discurso anti-MAS, casi eliminando de nuestro mensaje el reconocimiento a las cosas positivas que había dejado el proceso de cambio durante los 14 años del MAS. Al tomar esta decisión de estrategia electoral, en CC relegamos a un segundo plano la necesidad de diferenciarnos de Juntos y Creemos y, por lo tanto, de manera indirecta, favorecimos la estrategia del MAS de mostrar al antimasismo como un bloque homogéneo, al que se estigmatizó como “golpistas”, “antinacionales” y “antipopulares”. El resultado de la votación demuestra, de manera inapelable, que el desplazamiento de nuestra estrategia electoral (de CC), lejos de favorecernos nos privó de persuadir a importantes sectores de clase media y populares, los cuales prefirieron, ante la polarización, votar por el MAS, a pesar de las dudas y cuestionamientos que tuvieran. De alguna manera, el MAS logró activar una especie de “voto útil” para recuperar el centro político, que ya en elecciones anteriores resultó definitivo para su victoria.

El retorno al MAS del voto por Chi

Las elecciones generales fallidas del 2019, además de varias características especiales, tuvieron como ingrediente esencial el surgimiento de un candidato atípico, un *outsider* que logró irrumpir en el escenario político boliviano con importante presencia, sobre todo en el occidente altiplánico. El médico Chi Hyun Chung, nacido en Corea, nacionalizado boliviano, pastor evangélico, vecindado en Santa Cruz de la Sierra, logró convencer en 2019 a más de medio millón de electores para que voten por él. La mayor parte de estos ciudadanos, podemos presumirlo luego de revisar varias investigaciones, son cristianos evangélicos, principalmente de las áreas rurales

del occidente de Bolivia, aunque su votación en sectores juveniles de las áreas urbanas, en especial de la ciudad de Santa Cruz, también fue significativa. Ahora podemos afirmar, apoyados en la evidencia, que la inmensa mayoría de esos votantes, por lo menos 8 de cada 10, habían optado en anteriores elecciones por los candidatos del MAS. El 2020 se produjo la traslación inversa; estos electores, por razones que todavía deben ser investigadas (para explicar por qué ya no vieron en Chi una alternativa), decidieron retornar a votar por el MAS. Si asumimos que el MAS obtuvo en las elecciones de 2019 el 45% de la votación, Comunidad Ciudadana el 38% y Chi el 10% (los resultados oficiales, con la distorsión del “fraude”, eran: MAS 47%, CC 37% y Chi 9%), podemos concluir, a partir del análisis de la *big data*, que, para las elecciones de 2020, aproximadamente un 8% del voto de Chi migró al MAS, lo que explica, con otros incrementos, fruto de otros factores, el resultado final del MAS (55%). En La Paz, en 2019, el MAS obtuvo el 52% y Chi el 11%, el 2020 el MAS logró el 68%. En Cochabamba, en 2019, el MAS obtuvo el 55% y Chi el 7%; en 2020 el MAS logró el 66%. En Oruro, en 2019, el MAS obtuvo el 48% y Chi el 13%; el 2020 el MAS logró el 63%. En Potosí, en 2019, el MAS obtuvo 49% y Chi 10%, el 2020 el MAS logró el 58%. En Chuquisaca, en 2019, el MAS alcanzó el 40% y Chi el 8%; el 2020 el MAS logró el 49%. En Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, el voto de Chi parece haberse fragmentado y no haber ido, necesariamente, en su mayoría al MAS. En todo caso, queda demostrado, de manera muy clara, que el derrumbe de Chi en 2020 le permitió al MAS recuperar un electorado rural clave para que su victoria resultara amplia e inobjetable.

La aparición de Camacho

Los 21 días de resistencia al “fraude” electoral que habrían llevado a cabo el MAS y Evo Morales en 2019 para impedir la segunda vuelta electoral, produjo, entre otras cosas, la emergencia de Luis Fernando Camacho como un líder

carismático, con apelaciones regionales identitarias muy potentes, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. La decisión de Camacho de participar en las elecciones generales, en binomio con Marco Antonio Pumari, otro líder regional surgido de las mismas jornadas de lucha de octubre y noviembre de 2019, resultó altamente promisoria para los objetivos de recuperación electoral del MAS. La votación opositora al MAS, que en 2019 se había logrado concentrar de manera mayoritaria en CC, sufrió entonces una división importantísima, que a la postre resultó definitiva para el resultado electoral. La aparición de Camacho, sobre todo en la región oriental de Bolivia (Santa Cruz, Beni y Pando), impidió el desencadenamiento fluido hacia el denominado “voto útil” en favor de CC, tal como sucediera en las elecciones de 2019. Luis Fernando Camacho, sobre todo en Santa Cruz, nos restó alrededor del 9% de su votación nacional, lo que explica que CC termine en 29%. En 2019, en CC obtuvimos, en Santa Cruz, 47% y en 2020, 17%. Estos 30 puntos que perdimos se fueron a Creemos, que además recibió la mayor parte del voto de Chi que había logrado el 2019 (7%), así como la votación obtenida por el candidato presidencial Óscar Ortiz (9%). Luis Fernando Camacho obtuvo el 45% de los votos en Santa Cruz, lo que sumado a magras votaciones en el resto del país, le significó el 14% de los votos a nivel nacional. De allí que, así como el “factor Chi” le permitió al MAS recuperar un 9% de su votación a nivel nacional, el “factor Camacho” nos restó a CC otro 9%, lo que explica, en gran medida, cómo pudo abrirse tanto la brecha entre la primera y la segunda fuerzas políticas del país.

La candidatura de Áñez

Por si la incidencia de los tres factores anteriores no fuera suficiente para explicar los resultados de las elecciones generales de 2020, existen otros que, sin duda, influyeron en el ánimo ciudadano en mayor o menor medida. Uno de los más importantes fue la inopinada candidatura a la presidencia

de Jeanine Áñez, que desordenó y deslegitimó el proceso de transición democrática y le permitió al MAS reagruparse, recomponerse y recuperar el centro político. La decisión de la presidenta, que confundió su efímera popularidad con posibilidades electorales, resultó nefasta para la oposición al MAS, no tanto porque introducía un nuevo elemento de dispersión, sino porque generó en la población, en especial en el electorado de centro democrático, la amarga sensación del retorno a prácticas políticas rechazadas y condenadas por la gente. Adicionalmente a ello, la desastrosa gestión de la pandemia, los escándalos frecuentes de corrupción y el abuso de poder del gobierno transitorio, nos fueron endosados por el MAS a CC, en calidad de cómplice. Por su parte, en CC, aparentemente, no fuimos lo decididamente enérgicos y claros para ponernos contra ese gobierno. Una vez más se cumplió aquí la antigua regla de que, en la política, la forma es fondo y que lo que cuenta es la apariencia. En CC nunca tuvimos nada que ver con el gobierno de Áñez y lo criticamos con firmeza por la corrupción y por la ineficiencia que mostró en todo su mandato, pero obviamente no fue eso lo que percibió el electorado de centro democrático que, al final del día, optó por creer más en el relato que le ofrecía el MAS.

La crisis

Otro factor que influyó de manera clave para los resultados de las elecciones generales de 2020 fue el relacionado con el despliegue y aceleración de la crisis económica. Como todos sabemos, el país empezó el año 2020 con claras señales de desaceleración y problemas en la economía. No había duda para nadie, que los años de las vacas gordas habían quedado en el pasado y que se avecinaba, lentamente, la crisis económica. Tanto despilfarro, corrupción e ineficiencia, nos empezaban a pasar la factura. Pero realmente nadie atisbó la llegada del “dragón negro” de la pandemia del Covid-19, con su secuela de muerte, colapso, desolación y por supuesto aceleración inimaginable de la crisis económica. El mundo padeció y

Bolivia, como no podía ser de otra manera, resultó uno de los países más afectados. La crisis económica se abatió sobre la población con gran dureza, provocando desempleo, cierre de empresas y emprendimientos, caída de las exportaciones y una sensación de incertidumbre económica generalizada. En medio de esta tragedia, teníamos que llevar adelante elecciones generales, que tuvieron que postergarse una y otra vez, hasta que finalmente, la paciencia y la desesperación no dieron para más y nos encontramos con las urnas el 18 de octubre, asustados, deprimidos y con el ánimo por los suelos. Aquí, es muy probable que el recuerdo de la estabilidad y buen estado de la economía en el gobierno del MAS, simbolizado adecuadamente por el exministro de economía y candidato a la presidencia, Luis Arce, hayan generado las pequeñas dosis de esperanza y adhesión suficientes para que el segmento decisor principal, no alineado en el clivaje MAS/anti-MAS, termine inclinando la balanza por el partido hoy en el gobierno.

El miedo

Finalmente, es indudable que otro factor, presente ya en anteriores elecciones, fue el efecto del voto inducido por el miedo al desorden y al caos que el MAS introdujo en el electorado si no votaban por ellos. Los bloqueos y huelgas, que se intensificaron a todo lo largo del gobierno de Áñez, lejos de generar repudio y disminución de la intención de voto por el MAS en las áreas periurbanas y de ciudades intermedias, paradójicamente, parecen haber incrementado sus adhesiones y posibilidades, a raíz de un razonamiento perverso: “Si no gana el MAS, no habrá paz social y cualquier otro gobierno caerá víctima del acoso de las organizaciones sociales”. Sobre todo, la incertidumbre y el pánico vividos en octubre y noviembre de 2019, puestos al día por el cruel “bloqueo del oxígeno” de agosto de 2020, generaron en una parte de la población boliviana una especie de actitud de “capitulación” ante el “poderío” del MAS.

Como hemos tratado de probar, la explicación de unos resultados electorales, sobre todo aquellos tan sorprendidos como los de 2020 en Bolivia, no está en un solo factor, sino en varios. Obviamente, algunos de ellos resultaron más influyentes que otros y precisamente el orden en el que los expuse, pretende una suerte de jerarquización según su importancia.

¿Y qué pasó entre 2020 y 2021?

Históricamente, las elecciones municipales y departamentales han dado cifras muy diferentes a las de las elecciones generales. Allí se visibiliza una Bolivia diversa y multicolor que ha cumplido un rol, no solicitado, pero útil, de balance y control del poder central. Las elecciones municipales y departamentales de 2021 ratificaron esta característica tan peculiar de nuestro sistema político.

El ejemplo que mejor ilustra lo anterior es el desempeño del actual partido de gobierno, con afanes de constituir un sistema de partido hegemónico. Se suele pensar (y afirmar sin mayor prueba empírica) que el MAS tiene “bastiones” y poblaciones electorales inconquistables, sin tomar en cuenta la enorme brecha que históricamente ha mostrado este partido al comparar su desempeño en elecciones generales, respecto de las elecciones subnacionales. En 2005, el MAS obtuvo el 53,7% de los votos en la elección general, pero en la elección de prefectos, que se realizó conjuntamente, solamente llegó al 35% (es bueno recordar, además, que un año antes, en 2004, el MAS solo obtuvo el 18,5% de los votos en las elecciones municipales). En 2009, el MAS logró el 64,2% de los votos, pero en 2010, unos meses después, alcanzó solamente el 34,5% en las elecciones municipales y el 50% en las departamentales. En 2014, el MAS consiguió el 61,3% de la votación, pero nuevamente, en 2015, unos meses después, logró el 38,8% en las elecciones municipales y el 41,7% en los comicios departamentales. Si bajamos un escalón en la desagregación de los datos, la diferencia entre

lo que obtiene el MAS a nivel departamental y municipal, en algunos departamentos y municipios, respecto de lo que suele obtener en elecciones generales, es mucho mayor aún. El año 2005, en las elecciones generales ganó, cómodamente, en los departamentos de La Paz y Cochabamba, pero, al mismo tiempo, perdió las prefecturas de esos departamentos frente a José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, respectivamente. En las municipales de 2010, a pesar de una arrasadora victoria en las elecciones generales de año anterior, perdió Sucre, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz y Trinidad. En las elecciones municipales de 2015, el MAS recuperó Sucre y Potosí, pero perdió ampliamente en El Alto y Cochabamba.

En 2020, el MAS obtuvo el 55,11% en las elecciones generales y en las subnacionales de 2021 alcanzó un 42,4% en el caso de las gobernaciones y un 33,3% en la votación a gobiernos municipales.

Podríamos seguir abundando en cifras y comparaciones, pero parece que no existe una clientela política rígida del MAS (o de cualquier otra fuerza política), cuando comparamos elecciones generales con subnacionales. Esto sucede porque, contrariamente a lo que piensa una buena parte de los políticos y sus círculos de influencia, la gente no define su voto principalmente a partir de sus afinidades políticas o ideológicas. Se sabe ya, que son más bien aspectos emocionales y muy influenciados por el contexto social, unidos a las características de los candidatos y las candidatas, los que definen el voto popular y, no tanto, los partidos o las doctrinas políticas. Por eso, una buena parte de la misma gente que votó por Evo Morales en elecciones generales, respaldó, al mismo tiempo, a Percy Fernández, Soledad Chapetón o Luis Revilla para alcaldes o, en el caso de las gobernaciones, a Rubén Costas, Leopoldo Fernández o Félix Patzi.

Este fenómeno volvió a suceder en las elecciones municipales y departamentales en 2021. Un sector importante de la ciudadanía que optó por Luis Arce y el MAS en los comicios de octubre de 2020, lo hizo, en marzo de 2021, por candidatos

contrarios a esa sigla política. Tal cosa parece que sucedió también en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Potosí, etc., así como en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí y Tarija, entre otros.

IV. ¿Y AHORA QUÉ?

Nuestro país está polarizado y eso es muy malo. La polarización implica que la sociedad se divide artificialmente entre “buenos y malos”, “ángeles y demonios”, “justos e injustos”, “puros e impuros”, en fin, entre “nosotros y ellos”. La polarización da origen a la exclusión y a la violencia.

La polarización que padecemos es muy peligrosa porque se expresa espacialmente. Estamos, como hace 16 años, enfrentados entre campo y ciudad. Las recientes elecciones de autoridades nacionales, municipales y departamentales muestran, de manera patética, esta realidad. También la polarización exagera las contradicciones de clase y culturales. Los factores identitarios, que dan lugar al racismo, se visibilizan en sus rasgos más execrables a través de la polarización. Vivimos, pues, sobre un barril de pólvora a punto de estallar.

La sociedad se desarrolla democráticamente cuando hay diversidad y libertad. Cuando hay pluralismo y no estamos obligados a elegir solo entre dos opciones o sometidos a una sola. La salud de una democracia se mide por la variedad de centros políticos que existen, cuando los extremos son minoritarios y campea la libertad de opción, de opinión y el no alineamiento.

Lamentablemente, lo que vemos hacia un futuro inmediato es todavía un sistema de representación política precario, endeble, poco institucionalizado, dominado por el caudillismo y el corporativismo. Las señales que percibimos actualmente no nos permiten ser optimistas respecto a una transformación positiva de esta realidad.

Lo nacional popular y Santa Cruz: Perspectivas sobre el 7M

Manuel Suárez Ávila

Introducción

Este texto intenta explicar cómo, efectivamente, existen condiciones objetivas para superar el empate permanente y la polarización crónica que vive la política en Bolivia.

La elección del 7 marzo del 2021 ratifica la correlación de fuerzas que Bolivia sostiene desde 2005. Esta correlación muestra, una vez más, un empate polarizador. Un empate entre las fuerzas del MAS y la Bolivia opositora, básicamente asentada en Santa Cruz.

Ahora bien. A la luz de varios hechos históricos, económicos, demográficos, culturales y políticos, parece evidente que ese empate polarizado no es estructural. En efecto, con una perspectiva de largo plazo, lo que en realidad encontramos son una serie de coincidencias estructurales entre los dos polos enfrentados. Esas coincidencias se basan en el hecho de que la tradición nacional popular es origen y racionalidad de la Santa Cruz moderna, actual y exitosa que enfrenta al MAS y, a la vez, es origen y racionalidad del MAS potente y modernizador que enfrenta a la Santa Cruz mencionada.

Bajo esa consideración, este texto trata de exponer que la tradición nacional popular es una base y escenario suficiente para buscar un entendimiento estable entre las dos fuerzas polarizadas del escenario boliviano.

Primera hipótesis: Santa Cruz como parte esencial de la tradición nacional popular

La tradición nacional popular se consolida como la tendencia más importante de modernización en la historia boliviana.

Ahora bien, la fortaleza de la tradición nacional popular no se explica únicamente a partir de la política.

Porque si bien la Revolución del 52, o los cambios que introduce Morales a partir del 2006, dan cuenta de facetas muy importantes de esta tradición, lo cierto es que hay que explicar la misma, también, a partir de un hecho socioeconómico extraordinario –y aún poco estudiado como fenómeno revolucionario–; a saber: el sorprendente éxito modernizador de Santa Cruz.

El éxito modernizador de Santa Cruz comienza con las políticas económicas y sociales de la Revolución de 1952 y se consolida a través del desarrollismo propio de la tradición nacional popular en las siguientes décadas. En efecto, se consolida a través de las políticas desarrollistas de Banzer de los años 70 y a través de los gobiernos nacionalistas del MAS.

El éxito económico de Santa Cruz se corresponde con cinco elementos claves:

- *El desarrollo planificado*: Una política de desarrollo que combina planificación estatal con iniciativa privada. Política que encuentra bases en el Plan Bohan, que se vuelve sentido de Estado con la Revolución y que dura hasta nuestros días.

En este punto hay que matizar que la perspectiva económica del departamento de Santa Cruz no solo estuvo orientada al mercado interno (aunque el departamento se ha convertido en el primer productor de alimentos para Bolivia), sino también se orientó hacia el mercado externo. Santa Cruz aprovecha así, entre otras ventajas, contar con

dos fronteras internacionales –Brasil y Paraguay–, además de disponer de una tercera muy al alcance de su economía: la de Argentina, a través de Yacuiba, ciudad fronteriza tarijeña.

- *La aparición de la gran ciudad*: O lo que es igual, urbanización creciente de la ciudad de Santa Cruz, asociada a la llegada masiva de migración. La migración –boliviana y, en menor medida, extranjera– lleva hasta Santa Cruz, de modo sostenido y acelerado, –desde mediados de los años 60– capital, fuerza de trabajo, demanda interna, tecnología y creatividad. La tendencia en esta materia muestra que Santa Cruz va rumbo a convertirse –en el medio plazo– en la megaurbe boliviana, en la gran ciudad, repitiendo un patrón similar al que mostraron otros países en desarrollo a lo largo y ancho de la región: la aparición de una megaciudad que concentra el éxito económico y modernizador de cada país: Buenos Aires, São Paulo, Lima, Ciudad de México, Santiago, Caracas, etc.

Con relación a esta urbanización y migración crecientes, se puede entender el negocio de la construcción en Santa Cruz. El negocio de construir una ciudad que ha crecido más medio millón de habitantes desde el Censo de 2012 a la fecha. Un negocio que se despliega, tanto en la construcción privada como en la obra pública. Y un negocio ligado no solo a sectores con ingresos medios y altos, sino también a sectores sociales de bajos ingresos, a través de imaginativos sistemas de crédito que han sobrepasado a la propia banca y sus normas. La propiedad de terrenos o viviendas familiares se ha democratizado a paso rápido en la Santa Cruz de las últimas décadas, pero especialmente, lo ha hecho durante los gobiernos de Morales. En efecto, la propiedad de un terreno en Santa Cruz, casi de cualquier tipo y en cualquier nivel socioeconómico,

se ha convertido en un sistema popular de ahorro y de enriquecimiento acelerado.

También con esa urbanización y migración crecientes ha surgido en Santa Cruz un mundo nuevo de servicios y comercio, orientados al mercado interno de la gran ciudad. La expansión de los servicios y del comercio en la capital cruceña solo es comparable al mismo fenómeno en la ciudad de El Alto. En torno a estos sectores también ha ido apareciendo una nueva burguesía, que ha consolidado intereses y acumulación mediante la propiedad inmobiliaria: sus emprendimientos no solo ofrecen el servicio o el producto comercial a la venta, sino que fundamentan gran parte de su éxito en la plusvalía de la propiedad inmobiliaria donde se asienta el propio emprendimiento.

- *La modernización del campo*: Se trata del éxito de la agropecuaria, de la agroindustria y de la economía de la exportación ligada del agro. Con la economía del agro, Santa Cruz entra al escenario mundial de la soya que, como se sabe, está íntimamente ligado a la demanda mundial de alimento que generan las potentes y nuevas economías asiáticas. A la vez –como en el caso del comercio y los servicios–, en torno al agro se ha ido consolidando una nueva burguesía. Es la primera vez que el área rural crea en Bolivia unas clases urbanas modernizadoras que han desarrollado relaciones, costumbres, ideas y creencias con capacidad de sustituir a la Santa Cruz tradicional y tradicionalista.
- *El capitalismo popular*: Estamos ante el impulso de una suerte de capitalismo popular y urbano en la ciudad de Santa Cruz que, en gran parte, se funda en la economía informal. Muchos de estos rasgos de lo que llamamos capitalismo popular se repiten en la ciudad de El Alto.

- *La cultura del emprendimiento*: Este es tema de otros estudios, pero dos hipótesis son tentadoras al respecto. La primera es la clásica propuesta de ver a las ciudades receptoras de gran migración como centros óptimos para el desarrollo de una cultura del emprendimiento. En esta hipótesis subyace la siguiente idea: la gente migra para buscar nuevos horizontes y eso puede crear, en muchos aspectos, un clima y un potencial de trabajo y de empresa muy favorables. La segunda hipótesis es la reivindicación de una identidad cruceña asociada a la cultura del emprendimiento. Es decir, la hipótesis de que Santa Cruz tradicionalmente ha sido tierra con un espíritu de empresa: una tierra de emprendedores. Quizá ambas hipótesis tengan validez porque, de hecho, pueden ser perfectamente complementarias.

Cabe destacar la siguiente lectura política a partir de lo comentado sobre el éxito cruceño: 1. Es una economía moderna, comercial, exitosa, abierta y muy ligada al mundo privado, lo cual incidirá en la visión de la convivencia y de la legitimidad en la política y la sociedad (por ejemplo, Santa Cruz tiende a valorar lo empresarial y su mitología, antes que lo político y la suya); 2. Es una sociedad que mide sus tiempos y sus intereses en códigos distintos a la política. Por ejemplo, la masa de nuevos propietarios (muchos de ellos, migrantes) que ha comprado un inmueble familiar en Santa Cruz, no lo ha hecho pensando en vender ese bien inmueble cada cinco años, que es un típico periodo político (presidencial o municipal), lo ha hecho pensando en un interés “para toda la vida”. Eso crea una racionalidad de intereses distinta a la que impone o sugiere el calendario político y sus coyunturas. Lo mismo con el caso de la demanda de alimentos del Brasil o Asia –que arrastra a la economía del agro cruceño–, una demanda que no tiene por horizonte de vida un lustro, sino muchas décadas. Se trata, por tanto, de una demanda que impone tiempos distintos a la convivencia y a la vida pública en Santa Cruz.

Segunda hipótesis: La tradición nacional popular como tendencia moderadora

La tradición nacional popular puede operar como mecanismo que impulsa a la sociedad y a la política hacia el centro o hacia la moderación política.

Por esa misma razón, puede también operar como mecanismo que frena proyectos fundados en la violencia, en la tiranía o en otros registros de tipo radical, sean estos de inspiración militar, religioso o civil.

Hay tres elementos propios de la tradición nacional popular que explican su tendencia moderadora:

- El capitalismo popular.
- La tendencia creciente hacia la objetivación de la sociedad.
- La flexibilidad ideológica.

Veamos, con mayor detalle, estos tres elementos.

a) El capitalismo popular como racionalidad moderadora

La tradición nacional popular boliviana dota al orden social y político de una racionalidad de moderación: la modernización asociada al capitalismo popular.

El capitalismo popular es una de las consecuencias que surgen del capitalismo de Estado, propio del desarrollismo o de la economía nacionalista y estatista que desplegó desde los años 50 la tradición nacional popular.

El capitalismo popular es la extensa economía urbana de las familias que no fueron incluidas como beneficiarias selectas y formales del capitalismo de Estado.

El mercado popular siempre fue un modo de convivencia urbana en la Colonia y luego en la República. Su escenario más emblemático fue el tambo. Pero el capitalismo popular es distinto.

El capitalismo popular se produce en unas relaciones sociales de relativa igualdad. Por decirlo de modo simbólico: se produce donde no hay pongos sino comerciantes y consumidores. Y por eso comienza a tomar forma desde el 52, adquiriendo una potencia especial en el periodo de Evo Morales. Pero, además, a diferencia del tambo premoderno, el capitalismo popular –y su rasgo esencial, la informalidad– lo invade casi todo y no se limita a la plaza a abastos.

El capitalismo de Estado genera dos grandes colectivos de beneficiados selectos y formales: por un lado, el colectivo que pertenece a la esfera pública (gubernamental) y, por otro, el grupo que pertenece a la esfera privada.

En efecto, el capitalismo de Estado se compone, por una parte, de esa esfera pública donde caben los miembros de las burocracias gubernamentales, así como los trabajadores y la administración de las grandes empresas que pertenecen a los distintos niveles de gobierno. Por otra parte, el capitalismo de Estado se compone de la esfera privada y formal que surge asociada al desarrollismo. Y a este escenario ingresan los propietarios, los trabajadores y la burocracia de las empresas privadas formales.

Sin embargo, en el capitalismo popular lo que tenemos son cientos de miles de familias urbanas y de sectores populares excluidos de estos dos grandes colectivos de beneficiarios selectos y formales del capitalismo de Estado. Cientos de miles de familias que se ganan la vida por fuera de la formalidad o al borde de ella, inventando y haciendo micro, pequeños o medianos negocios “por cuenta propia”. Ahora bien, recordemos que no constituyen colectivos ajenos al capitalismo de Estado, son más bien una consecuencia del mismo y conviven perfectamente con él.

La economía del capitalismo popular, por lo general, se basa en la pequeña propiedad urbana y familiar (el domicilio). Sus sectores naturales son la pequeña producción (por ejemplo, de alimento), los servicios o el comercio.

Una variante de capitalismo popular boliviano –muy importante e influyente en la política– se desarrolla en la pequeña propiedad agraria ligada a la siembra de la coca.

La acción social –y el correspondiente orden social– del capitalismo popular están basados en la racionalidad y la legitimidad propia de la sociedad comercial; en este caso, en la informalidad capitalista. Y por eso, el capitalismo popular genera sus propias burguesías. Por decirlo de otro modo, genera sus clases medias modernas y modernizadoras.

Con el capitalismo popular estamos simplemente ante “la realidad”: la sociedad comercial en marcha. Y así, estamos a mucha distancia del mundo de los deseos y de la épica. Lejos de los deseos revolucionarios y a mucha distancia de la visión épica y de la visión mítica, teológica, ideológica o militar, de la sociedad.

En otras palabras: es muy probable que la acción política de los que actúan en la racionalidad del capitalismo popular no resulte una acción que tienda hacia la revolución ni hacia lo enfático en la política. Por el contrario, es muy probable que esa acción tienda hacia la moderación.

Una cuestión interesante deriva del encaje entre el capitalismo popular y los llamados movimientos sociales. Veamos.

Los movimientos, como actores de lo político, son sujetos muy importantes en la tradición nacional popular. Tanto, que algunas interpretaciones llegan a postular que los movimientos sociales son el actor central de la acción política en los sistemas ligados a esta tradición.

De hecho, la tradición nacional popular boliviana, a partir del 52, impulsó y desarrolló un tipo de relación y de orden político –propio y específico– para los movimientos y su relación de fuerzas: el movimientismo.

En este sentido, la pregunta es cómo encajan los movimientos sociales –y el tipo de acción política que despliegan– con el capitalismo popular.

Pues bien, según mi hipótesis, los movimientos sociales, en el marco de la tradición nacional popular boliviana –desde los grandes movimientos típicos del capitalismo de Estado como la COB, hasta los potentes movimientos típicos del capitalismo popular, como las federaciones de cocaleros o las juntas vecinales–, tienden a representar y a postular intereses modernos o aburguesados y, por eso mismo, intereses que propenden hacia la moderación política. Son actores que, por definición, no buscan la revolución, sino la reforma de la vida pública.

Veamos: los movimientos ligados al capitalismo de Estado tratan lo estatal (y sus circunstancias) como un generador de derechos modernos; un generador de igualdad moderna, entretanto que los movimientos sociales ligados al capitalismo popular defienden y postulan la racionalidad del propietario. Es decir, en gran parte, defienden la racionalidad capitalista moderna: favorecen y postulan la propiedad privada (familiar) y el comercio libre, entre otros valores y estructuras.

Consecuentemente, los movimientos de la tradición nacional popular boliviana (los del sindicalismo clásico ligado al capitalismo de Estado o los del gremio de pequeños propietarios del capitalismo popular), son actores que –en política– no encajan con proyectos radicales y, al contrario, tienden a buscar seguridad, viabilidad y estabilidad para sus miembros, en el marco del sistema o de la reforma del mismo.

Es por ello que, muy probablemente, la hipótesis de que, hoy por hoy, existen movimientos sociales que, desde la tradición nacional popular, postulan la revolución para mudar la racionalidad capitalista, para cambiar la cultura capitalista (y burguesa) o para subvertir el orden estatal, es más un deseo de grupos políticos o intelectuales, que una realidad social o política. Lo que existe, actualmente –y lo que ha existido en el periodo Morales– son movimientos sociales propios de la racionalidad nacional popular, pugnando por sus intereses dentro del sistema y en el marco de esa tradición.

Según creo, los movimientos sociales bolivianos –en efecto– están ligados a una revolución o a una tradición revolucionaria, y esa tradición revolucionaria no es otra que la tradición modernizadora e igualadora de lo nacional popular. Esa es la matriz de carácter revolucionario de la que vienen los movimientos sociales bolivianos.

Esa tradición revolucionaria nacional popular, en todo caso, tiene vasos comunicantes fuertes con la tradición y los valores de las revoluciones burguesas europeas. Y, del mismo modo, tiene vasos comunicantes fuertes con la tradición y los valores de las transformaciones socialdemócratas posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa; las transformaciones orientadas a instalar un estilo de vida del tipo “Estado de bienestar”.

b) La tendencia creciente hacia la objetivación de la sociedad

Para fines didácticos, puede decirse que el centrismo –o tendencia moderadora– viene ligado al efecto de modernización, de igualación y de aburguesamiento que genera lo nacional popular.

La tradición nacional popular es un modo de construir la vida pública. En Bolivia, antes de esta tradición, existía poco rastro de vida pública (por lo menos, en el sentido moderno de la misma). Los niveles de vida pública, si cabe el término, se limitaban a pocos escenarios, todos marcados por la tradición o el afecto; por utilizar la explicación weberiana sobre los tipos de legitimidad. Por ejemplo, la familia (el linaje o el poder paternal), la iglesia (la comunidad de creyentes, sus rituales y el poder del clero) o los círculos afectivos: lo caciquil o el poder carismático del caudillo.¹

En suma: las relaciones sociales previas a la tradición nacional popular, en Bolivia, estaban mediadas por la

1 Esta es una clasificación desarrollada de acuerdo con la “Teoría de las categorías sociológicas” en Weber, *Economía y Sociedad*, 1922.

racionalidad del privilegio o de lo feudal. Es decir, estaban sujetas a la legitimidad y la dominación subjetiva.

La tradición nacional popular moderniza. Hace las veces de la revolución burguesa modernizadora en Bolivia. Y así, crea la vida pública. O lo que es igual, desplaza la racionalidad del privilegio y del poder subjetivo y comienza a instalar la racionalidad de los derechos y del poder objetivo, es decir, la racionalidad burguesa.

Pues bien, una de las consecuencias de instalar lo público o lo objetivo en lugar de lo privado y lo subjetivo –como racionalidad básica de la convivencia– es la tendencia al centro y a la moderación.

Me explico. Las sociedades regidas por lo objetivo (regidas por la ley) tienden a ser más moderadas que las sociedades regidas por lo subjetivo (el brujo, el sacerdote, el cacique o el caudillo). En efecto, el debilitamiento de poderes subjetivos, particulares o sectarios, crea las condiciones para el pacto o el consenso donde todos participan. Y ese pacto o consenso de todos –o de muchos– genera un tipo de mando o dominación que se llama ley: ese es el escenario de la moderación.

Cuatro procesos históricos marcan el camino de modernización, de igualación y, de este modo, de moderación boliviana. A saber:

- La Revolución del 52.
- La transición democrática (1978-1982).
- Las políticas de cambio del gobierno de Evo Morales (2005-2019).
- El éxito económico de Santa Cruz (años 50 hasta hoy).

El rasgo básico de esos cuatro procesos es que cambian la vida pública boliviana y la orientan hacia una meta común: la igualación moderna de la gente. Es decir, la orientan hacia la democratización de la convivencia y lo hacen en el marco de la tradición nacional popular.

c) La flexibilidad ideológica de la tradición nacional popular en Bolivia

En la tradición nacional popular caben todos. Es una tradición fundada en la negociación política y social. Una tradición que aparece como práctica y sistema de creencias capaz de crear un centro, al cual se arriba negociando.

Y por eso, la idea de la “alianza de clases” es clave para entender esta tradición. Esta idea entra en la vida pública boliviana de manos de Walter Guevara Arze (“Manifiesto a los ciudadanos de Ayopaya”, 1946).

Pero, además, la tradición nacional popular crea un itinerario histórico y común a todos los actores políticos bolivianos. Un itinerario que va más allá de las muchas diferencias coyunturales, ideológicas o regionales. Veamos el perfil de ese itinerario:

- No se entiende la igualación de los bolivianos sin lo nacional popular. Esta tradición funda la tendencia igualadora y modernizadora en Bolivia.
- No se entiende la construcción de lo estatal en Bolivia sin la tradición nacional popular. Esta tradición funda la tendencia al monopolio del uso de la violencia legítima. Y así, funda la posibilidad del Estado boliviano.
- No se entiende la idea de “Nación” (la comunidad política) sin la tradición nacional popular.
- No se entiende la democracia de los movimientos sin la tradición nacional popular. Esta tradición funda el movimientismo: forma de la política que se basa en las relaciones entre los movimientos.
- No se entiende la Santa Cruz actual y moderna sin la tradición nacional popular. Esta tradición funda el desarrollismo que caracteriza al país desde el año 52 y que es clave para el éxito económico y la modernización de Santa Cruz.

- No se entiende la educación igualadora sin la tradición nacional popular.
- No se entiende la identidad indígena, como cuestión central de lo público, sin la Revolución del 52 y sin la tradición nacional popular.
- No se entiende la participación de la mujer en la política sin la Revolución y sin la tradición nacional popular.
- No se entiende la democratización de la propiedad campesina y rural sin la Revolución del 52 y sin la tradición nacional popular.
- No se entiende la transición democrática de los 80 sin la participación de las fuerzas ligadas al Nacionalismo Revolucionario.
- No se entiende la Participación Popular sin la tradición nacional popular.
- No se entienden las políticas de bienestar contemporáneas –derechos sociales, sindicales, bonos– sin la tradición nacional popular.
- No se entiende el importante rol modernizador de Evo Morales en la historia de Bolivia sin el camino abierto por lo nacional popular y por el 52.

Un dato a subrayar tras este punteo. La Santa Cruz moderna y Evo Morales obedecen a la misma racionalidad: la modernización igualadora. Y tienen la misma raíz y tradición: la nacional popular. En otras palabras: cualquiera sea el posicionamiento ideológico y cualquiera sea el interés que represente, la gran mayoría de los actores políticos bolivianos contemporáneos convergerá en torno a los valores e instituciones del itinerario histórico que acabo de mencionar.

Tercera hipótesis: Lo nacional popular como campo de lucha

La tradición nacional popular se consolida como campo de lucha y alianzas para la política boliviana.

Un campo de costumbres y normas donde se generan las relaciones que articulan la lucha, la legitimidad, la dominación y así, el orden político, económico y social en Bolivia.

En efecto, lo nacional popular ha sido el mundo donde ocurre lo público y lo político en Bolivia.

En esa misma perspectiva también es posible decir que Santa Cruz tiende a lo nacional popular en su relación histórica con el poder central. Pero, además, es posible decir que Santa Cruz tiende a lo nacional popular como escenario para la articulación interna o “cruceña” de la lucha, la legitimidad y el orden político, económico y social.

Cuarta hipótesis: La posibilidad de superar las tensiones pendientes en la política boliviana

Bolivia vive ese tiempo cuando dos grandes bloques de fuerzas populares se enfrentan en una lucha polarizada: el bloque ligado al MAS y el bloque ligado a las fuerzas de la Santa Cruz autonomista.

Aunque ambos bloques son hijos de la racionalidad y la tradición nacional popular –esa racionalidad justifica sus existencias–, han desarrollado unas tensiones políticas que, probablemente, ponen en riesgo la política boliviana como modo de convivencia pacífica.

Esas tensiones son dos: por un lado, la tensión entre republicanismo y hegemonismo y, por otro, la tensión entre regionalismo y gobierno central. Veamos.

La tensión entre republicanismo y hegemonismo

El bloque cruceño autonomista se ha “embanderado” con los valores y la propuesta de una Bolivia democrática, liberal y republicana. Y el bloque masista se ha “embanderado” con la propuesta de una hegemonía del poder popular, bajo el liderazgo del MAS. Al respecto, se puede apuntar que “lo popular” en el MAS, en gran parte, está muy relacionado con el principio de “la identidad y lo nacional”. En este caso, con la pluralidad de “identidades nacionales”. Es una propuesta

similar a la del 52, que también propone el principio de la identidad (aunque no de “las naciones”, sino de “la nación”) como la fuente de legitimidad del poder.

De esa tensión entre republicanismo y hegemonismo derivan estas preguntas: ¿Cuánto déficit de democracia republicana soporta el hegemonismo del MAS sin convertirse en una dictadura? ¿Cuánto déficit de vocación popular soporta lo republicano cruceño sin volverse una burbuja formal y elitista?

Por lo pronto, gran parte de los electores sienten que en Bolivia hay bastante que mejorar en materia de democracia y libertad. Ese sentimiento, probablemente, está instalado entre muchos electores del MAS, quienes sintieron que el gobierno de transición vulneró sus derechos políticos. Pero también está instalado entre los electores que no votan al MAS, y sienten que los gobiernos del MAS vulneran los suyos.

Ahora bien, este es un tema especialmente importante y delicado en Santa Cruz, donde una mayoría de los electores contrarios al MAS ha desarrollado un sistema de creencias que asocia la identidad cruceña con la necesidad de luchar contra el gobierno del MAS, gobierno que considera autoritario o, por lo menos, abusivo. De hecho, es muy probable que la movilización popular cruceña que precedió a la salida del presidente Morales, en noviembre de 2019, haya estado estrechamente relacionada con esas creencias.

De tal modo que el gobierno del MAS, hoy por hoy, tiene el reto de decidir cómo va a tratar este problema. Una posibilidad es que lo ignore (es decir, gobernar de espaldas a esa Santa Cruz): es el camino de la guerra fría. Otra alternativa es reconocer en esas creencias cruceñas un enemigo a vencer (y, en consecuencia, gobernar contra esa Santa Cruz): es el camino de la represión. Otra vía, sin embargo, consistiría en ver en esas creencias un dato político importante que puede convertirse en una oportunidad; por ejemplo, que puede derivar en un acuerdo entre el MAS y Santa Cruz (gobernar pactando con esa Santa Cruz); este es el camino hacia un entendimiento nacional.

Lo mismo, por parte de Santa Cruz. Santa Cruz, quizá, puede decidir si prueba la vía del pacto y, por ejemplo, puede tomar en cuenta argumentos como el siguiente: nunca en la historia de Santa Cruz, los cruceños tuvieron tantas autoridades, instituciones y políticas públicas bajo control del voto popular y democrático de la propia Santa Cruz. Lo cual significa que nunca –como hoy– Santa Cruz tuvo tanto poder sobre tantos de sus asuntos. De hecho, jamás la política cruceña fue tan abierta y tan competitiva como lo es hoy en día. Hoy la democracia interna y la consolidación de las actuales elites políticas cruceñas es más fuerte que nunca.

Y, en gran parte, ese crecer de la vida política cruceña ha acontecido durante el gobierno de Morales. Ha acontecido, entre otras cosas, debido a la Constitución Política de 2009, a la creación de las autonomías departamentales y a la creación de las gobernaciones y su sistema institucional. Pero también, ha acontecido debido a la ampliación de los presupuestos y competencias de las autoridades municipales y departamentales. Ahora bien, como argumenta la tradición cruceñista, este fenómeno “no es un regalo del MAS a Santa Cruz”. Y en muchos sentidos, es cierto que este fenómeno es producto de las conquistas políticas de Santa Cruz frente al gobierno central. Pero también puede decirse que este fenómeno de crecimiento de la política cruceña, en gran parte, es una muestra de que hay un camino por el que Santa Cruz puede avanzar coordinando ese avance con los gobiernos nacionales, aun cuando estos gobiernos estén a cargo del MAS.

De ahí que, quizá, cabe en Santa Cruz, hoy en día, una nueva perspectiva valorando la relación con los gobiernos del MAS como una relación donde no solo se pueden generar pugnas y relaciones muy tensas, sino también donde pueden generarse pactos y oportunidades para la democracia, para Santa Cruz y para la gente. En todo caso, es una decisión que deben tomar los cruceños y en particular, las elites políticas cruceñas.

La tensión entre regionalismo y gobierno central

En este campo, puede decirse que el bloque de fuerzas ligado a la Santa Cruz autonomista se ha “embanderado” con una crítica potente y con una propuesta. La crítica es contra el impulso centralista que los cruceños detectan en todos los gobiernos nacionales. Y la propuesta es “más autonomía”. En ese escenario pueden escucharse voces que impulsan la idea federal. Lo federal no es aún una demanda hegemónica en la sociedad ni en el electorado cruceño, pero es una idea que ningún actor político importante niega, de frente, en Santa Cruz.

Por su lado, el bloque ligado al MAS no se ha “embanderado” con ninguna propuesta centralista, pero desde sus gobiernos este bloque ha ejercido el poder con estilos y gestos que a muchos actores y electores cruceños les recuerdan la más dura tradición del centralismo. Muy probablemente, un punto de tensión agregado fue la percepción prevaleciente en muchos sectores cruceños –durante el tiempo del debate constituyente– de que las llamadas autonomías indígenas consistían en un plan político para desarticular la autonomía departamental. Sin embargo, luego la experiencia ha demostrado que es posible una coexistencia exitosa entre autonomías indígenas y departamentales, así como se ha demostrado también una cohabitación consolidada entre el gobierno nacional del MAS y muchas autonomías departamentales.

Ahora bien. La posición cruceña criticando la tendencia centralista del MAS se profundiza con la creencia vigente –en grandes mayorías electorales cruceñas y en sus elites políticas– de que Santa Cruz es víctima de una suerte de “centralismo andino”. Este mensaje contiene un cambio cualitativo: ya no sólo se trata de un tema sobre cómo organizar la administración territorial del Estado (más o menos centralismo), sino que se trata de cuestiones de mayor calado simbólico: es el escenario para que Santa Cruz desarrolle las bases de un mensaje nacionalista. Es decir,

para que Santa Cruz plantee las cosas como las plantea un pueblo que se siente oprimido por otro.

En efecto, es probable que el regionalismo cruceño ya haya desarrollado muchos de los rasgos propios de los nacionalismos clásicos durante la gestión de Morales. Estos rasgos son dos: identidad propia y proyecto de poder para autogobernarse.

Veamos primero lo de la identidad propia cruceña. La identidad cruceña, como autodefinición, es una exploración en desarrollo. Y, a estas alturas, es muy probable que haya consenso en Santa Cruz sobre qué significa ser cruceño. En primer lugar, la palabra que nombra a la circunstancia de pertenecer a lo cruceño es “camba”. Los cruceños que reivindican una identidad especial se autoidentifican con la denominación “camba”. A este término normalmente se le dota del siguiente sentido “optimista”: el cambia es amable, emprendedor, hospitalario, sincero o frontal, amante de la libertad, mestizo con ascendencia entre indígena y española, alegre y tiene un espíritu colectivo asociado a la tradición misional jesuítica: lo cual significa –en esa perspectiva– que el “camba” abraza una serie de virtudes o valores cristianos, entre los que destaca la fe católica y la generosidad con el prójimo.

Pero, además de esos rasgos “optimistas” de la autoidentificación cruceña, también es muy fuerte la identidad “camba” como contraste y contraposición al “otro”: en este sentido, “camba” significa “no ser colla”. Y aquí hay una lectura que roza el antagonismo propio lo político: “camba” significa que un “colla” no puede decidir el destino de Santa Cruz. O, en esa misma perspectiva, “camba” significa estar contra el MAS. Una posición que hoy por hoy es criticada desde varios ámbitos y desde el propio MAS, por considerarla cercana a visiones xenófobas. Como es conocido, la visión “camba” suele responder a esa crítica acusando al MAS del mismo problema: la cercanía de este partido a discursos que impulsan el desprecio de lo “camba” desde las culturas andinas.

Por otro lado, en la reflexión sobre la tendencia del cruceñismo a convertirse en un nacionalismo clásico, veamos aquello de tener un proyecto de poder para autogobernarse. Santa Cruz lo tiene, en parte.

Y la primera consideración es que los electores de Santa Cruz, en una gran mayoría, “desean” autogobernarse, en el sentido que les repele la idea de tener una Santa Cruz “gobernada desde La Paz”.

De momento, ese proyecto de poder cruceño para autogobernarse propone profundizar la autonomía departamental, por ejemplo, mediante un pacto fiscal.

No sabemos cómo terminará tratando el MAS esta tensión, ni cómo lo hará la Santa Cruz autonomista. Sin embargo, sostengo, como hipótesis, que no resultará viable en esta materia el plan de vencer o derrotar a la contraparte.

Es decir, el gobierno central no encontrará una solución definitiva o sólida en la estrategia de “derrotar” al regionalismo cruceño. En la perspectiva de esta hipótesis, el gobierno central, cualquiera que esté a cargo, cometería un error histórico al buscar un modelo donde Santa Cruz resulte tratada como “una región más”. Esto por tres razones evidentes:

- Santa Cruz no es una región más: Es extraordinaria en poder económico y demográfico. El sorprendente éxito modernizador de Santa Cruz en las últimas décadas es tan especial que es la base –y quizá la única oportunidad– de éxito para Bolivia de cara al futuro.
- La relación entre Santa Cruz y los gobiernos centrales, hasta hoy, no ha sido armónica y, por el contrario, se ha caracterizado por la tensión. Las últimas dos décadas, en efecto, han sido de tensión creciente y de incremento del sentimiento regionalista cruceño.
- Cuanto más se profundiza esta tensión, más crece lo que hemos descrito como la tendencia a la formación de un nacionalismo cruceño. Y eso significa que más crece la probabilidad y el escenario de un conflicto de fondo.

El gobierno central (cualquiera sea el partido gobernante) puede derrotar políticamente al regionalismo cruceño en determinadas coyunturas, como ha ocurrido la última década, pero es muy probable que estemos ante victorias pírricas. Es decir, victorias que luego requieren de importantes niveles de presión –para muchos de abuso– judicial, policial y hasta militar y, por tanto, victorias que profundizan las bases del conflicto.

Y lo mismo por el lado cruceño: Santa Cruz pagará costos demasiado altos –e innecesarios– si toma la decisión estratégica de vivir en permanente polarización con el gobierno central de Bolivia. Por ejemplo, la polarización permanente tiende a frenar la economía o tiende a poner a la clase política cruceña en una situación de permanente acoso judicial.

En consecuencia, Santa Cruz necesita un pacto con el gobierno central. Un pacto que le genere estabilidad y que normalice su vida política. Pero, ¿por qué no hay entendimiento entre Santa Cruz y el gobierno central? Yendo más lejos: si las dos grandes tensiones –la cuestión republicana y la cuestión regionalista– tienen caminos de resolución en el pacto, entonces, ¿por qué desde el 52 hasta hoy, los actores de uno y otro lado tienden al antagonismo radical?

Quizá caben tres hipótesis al respecto:

- *Hay un fallo de comunicación.* Es muy probable que muchos políticos cruceños no acaben de entender Bolivia y que muchos políticos ligados a los gobiernos centrales no acaben de entender Santa Cruz. Pero, además de los problemas de mutuo entendimiento entre los actores, también es muy probable que los mecanismos políticos de intermediación sean frágiles y poco institucionalizados.
- *El conflicto no es caro ni letal, sino que es conveniente para los actores.* Es decir, el conflicto, para los actores, es más beneficioso que el pacto. Por dos posibles

motivos: primero, porque los actores en lucha pueden hacer una carrera política con más probabilidades de éxito en el escenario del conflicto; y segundo, porque en el fondo, el conflicto no aparenta ser catastrófico. Por ejemplo, no amenaza con una guerra civil. Así, el conflicto puede ser gestionado como una simulación (casi ritual) de lucha y pugna entre las partes con el objetivo de dar contento a los públicos internos en cada lado. Y, además, puede ser manejado por las partes con el fin de generar la necesaria demostración de fuerzas al rival para crear mejores condiciones de negociación.

- La tercera hipótesis sería una combinación de elementos de las dos anteriores.

Ahora bien, ¿puede la tradición nacional popular ser el escenario de solución de estas dos graves tensiones políticas bolivianas: la tensión entre republicanismo y hegemonismo y la tensión entre regionalismo y gobierno central? Mi hipótesis es que sí, siempre y cuando el MAS recupere su temple nacional popular y, desde allí, “mueva ficha”.

En ese contexto sostengo que, en el MAS, hoy por hoy, solo el liderazgo de Evo Morales puede mover semejante ficha y en semejantes temas. ¿La razón? El liderazgo de Morales tiene matriz nacional popular y, además, es creíble entre las fuerzas ligadas a la Santa Cruz modernizadora y autonomista y es creíble entre el abanico de fuerzas que componen el bloque del MAS.

Así, mi hipótesis es que, en gran parte, el futuro de una Bolivia estabilizada pasa por la intermediación de Morales. Esta hipótesis, no obstante, parte del reconocimiento de que en el MAS hay una tendencia –o un ala– de vocación nacional popular.

Si esta tendencia se impone al resto de las tendencias e intereses que pugnan al interior de ese partido, entonces, cabe la probabilidad de recuperar la tradición nacional popular en el MAS, como escenario de un gran acuerdo nacional sobre

democracia, sobre la cuestión cruceña, sobre inclusión social y, en suma, sobre la modernización del país.

Veamos. Hoy por hoy, el MAS acoge tres tendencias históricas. A saber:

- *La tendencia sindical y nacionalista.* Es la tendencia que mejor rescata los valores y las pulsiones de la tradición nacional popular. Y es, al mismo tiempo, la tendencia que hoy se liga a la tradición sindical nacionalista, históricamente liderada por el expresidente Morales.
- *La tendencia socialista,* representada en su momento por una activa comunidad de intelectuales andinos y de izquierdas.
- *La tendencia que lucha por el poder de los pueblos indígenas.*

El apego a la idea y práctica del pacto es lo propio de la tradición sindical nacionalista en el MAS y se liga al pactismo de lo nacional popular. Esa idea de pacto apunta hacia el pacto social. Es decir, se orienta al pacto creador de la soberanía popular o de la “voluntad general” (me refiero directamente a la idea de Rousseau en *El Contrato Social*, 1762). Ese pacto social, en la tradición nacional popular boliviana adquiere carta de ciudadanía con la mentada idea de la “alianza de clases”, de Walter Guevara (“Manifiesto a los ciudadanos de Ayopaya”, 1946).

En perspectiva, podemos preguntarnos si la tendencia sindical nacionalista asociada al liderazgo de Morales derrotó al socialismo y a la tendencia de quienes luchaban por el poder para los indígenas dentro el MAS, durante los gobiernos de 2006 a 2019. Creo que no. Mi hipótesis es que los moderó. Quizá, tal y como hizo Paz Estenssoro con el obrerismo y con las milicias de los 50 o, quizá, como hizo Siles Suazo con el Partido Comunista de Bolivia (PCB) durante la UDP.

Por otra parte, es probable que la tendencia sindical nacionalista del MAS haya evitado que el gobierno de

Morales terminara convertido en un experimento marxista o socialista, orientado por la visión de la lucha de clases y por la lógica amigo/enemigo. Así como también es probable que la tendencia sindical nacionalista del MAS haya equilibrado la potencia de las fuerzas que, desde el mismo MAS, luchan por el poder para los pueblos indígenas. El de Morales fue un gobierno de potente inclusión indígena, pero nunca entregó la llamada “soberanía nacional” (es decir, el poder) a ninguna identidad o nación indígena en particular.

Quizá, lograr esos delicados equilibrios que construyó la tradición sindical nacionalista dentro del MAS hubiera sido imposible sin la base de la tradición nacional popular y sin el precedente de la Revolución del 52. Es decir, Bolivia ya había tenido su revolución modernizadora. Morales, según creo, tomó en cuenta esta realidad.

Ahora bien. Cabe preguntarse: ¿Queda algo de ese talante moderado en el MAS o se rompió con la caída de Morales, en 2019? Veamos.

La narrativa, por el lado de las fuerzas ligadas al MAS, se concentra en acusar a las fuerzas ligadas a la Santa Cruz autonomista, de actuar en una lógica premoderna, oligárquica y golpista. Con ese diagnóstico, no quedaría más camino al MAS que neutralizar o aplastar –por la vía judicial, por ejemplo– a las mencionadas fuerzas cruceñas. La conclusión de esa narrativa puede sintetizarse en la necesidad de aplastar al contrincante.

Por su parte, las fuerzas ligadas a la Santa Cruz autonomista ven en la actuación del gobierno del MAS un plan para instalar un sistema de izquierda autoritaria. Plan que perciben como especialmente emponzoñado contra lo cruceño. La conclusión lógica de esta narrativa puede llamarse “la necesidad de resistencia hasta el final”.

Para muchos observadores que se mantienen al margen de las pasiones de esas pugnas, es evidente que ambas narrativas no son del todo ciertas: ni el modelo cruceño de desarrollo se parece al de la oligarquía previa al 52 (es, en realidad, su

negación) ni la propuesta del MAS intenta instalar en Bolivia una tiranía comunista (también es su negación).

En suma: espadas en alto, con ventaja en la relación de fuerzas para el bloque ligado al MAS. Panorama de profundización del conflicto y esperanza de que el liderazgo de Morales, rescatando la tradición nacional popular, encuentre el escenario de un entendimiento boliviano orientado a consolidar la modernización boliviana y, en particular, a avanzar en la democracia republicana, en la cuestión cruceña y en inclusión social.

Quinta hipótesis: Las elecciones de marzo como oportunidad de entendimiento

Las elecciones subnacionales de marzo, a pesar de sostener la polarización habitual, pueden ser vistas como una oportunidad para avanzar en la resolución de las tensiones políticas bolivianas. ¿En qué sentido? En el sentido de que los actores pueden leer en ellas la ratificación de que es imposible vencer de modo definitivo al oponente. Es decir, las elecciones han ratificado (una vez más) el empate de poder permanente que Bolivia vive desde 2006.

Todas las iniciativas que han llevado a cabo ambas partes, en estos dos últimos años (2019/2020) por audaces y cruentas que parezcan, no han cambiado la correlación de fuerzas. Seguimos en el mismo estancamiento y en la misma polarización que nos ha caracterizado por más de una década. No hay desempate. Y esta elección subnacional de marzo lo ratifica con claridad.

Veamos. Desde el 2005 se han producido cinco elecciones presidenciales. La media de votos que ha obtenido el MAS es del 55%, mientras que la media de votos que han obtenido sus principales retadores, desde la oposición, es del 28%. Morales baja la media del MAS en la elección de 2019, aunque, en esa ocasión, de todos modos, ganó con gran diferencia a su principal retador, Carlos Mesa. Mi hipótesis sobre la disminución de votos de Morales en 2019 es esta: los

candidatos Chi Hyun Chung y Félix Patzi le restaron votos aprovechando su momento de desgaste. Es decir, se dividió el “voto del cambio”. Por su lado, Mesa sube la media opositora el año 2019 (al llegar al 36%), pero retorna a esa media (28%) el 2020. Por otro lado, tanto el 2019 como el 2020 la suma de los votos opositores se sitúa en torno al 41% (Mesa + Ortiz en el 2019 y Mesa + Camacho en el 2020).

En otras palabras, durante más de una década el “voto del cambio” ligado al MAS es muy sólido, pero lo mismo sucede con el voto opositor.

En lo geográfico, como se sabe, también se repiten pautas similares. El voto del MAS es muy fuerte en occidente y menos fuerte en oriente. Así como es muy fuerte en áreas rurales y en las ciudades intermedias y menos fuerte en las ciudades grandes, a excepción de El Alto donde es inestable. Y todo ello es un espejo (reflejando al revés) del voto opositor, que es fuerte en ciudades grandes y es débil en lo rural y en occidente, pero tiende a ser fuerte en el oriente.

Lo mismo con relación a los niveles socioeconómicos: a más alto el nivel de ingresos y a más alto el nivel educativo, mayor es la tendencia a votar por los opositores al MAS. Y, como reflejo, a menores ingresos y nivel educativo, más probabilidad de votar por el MAS.

También son influyentes las variables relacionadas con la identidad indígena: cuanto mayor autoidentificación del elector con las identidades indígenas de los pueblos originarios de occidente, más probabilidad de votar por el MAS. Del mismo modo, cuanto menor identificación con lo indígena, mayor probabilidad de votar contra el MAS.

A la vez, esta constante en la tendencia del voto –que se viene repitiendo por 16 años y cinco elecciones presidenciales– se percibe también, de manera evidente, en elecciones para autoridades municipales y para gobernadores.

La oposición suele ganar, con ventaja, las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija, y la mayor parte de las veces también

las de Pando y Beni. Del mismo modo, suele ganar en las elecciones municipales de las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Trinidad y La Paz.

En las elecciones municipales, además, se da la circunstancia de que la oposición tiene capacidad de apuntarse victorias significativas en El Alto, Cochabamba e, incluso, en Potosí y Sucre.

Con estos datos, la correlación de fuerzas, según el voto, suele mostrar las siguientes dos polarizaciones: un porcentaje en torno al 55% que apoya al MAS y un porcentaje en torno al 40% que suele apoyar posiciones republicanas y/o autonomistas. Estamos ante lo que podría llamarse un país de “senderos que se bifurcan”, tomando el riesgo de parafrasear a Borges.

Esa bifurcación se profundiza –y quizá se dramatiza– en lo geográfico: por un lado, tenemos una Santa Cruz que vota contra el MAS, vota por la identidad regionalista y, quizá, también vota por valores republicanos. Y, por otro lado, tenemos un occidente –sobre todo rural– que vota por el MAS y los valores que representa.

De esta manera, en lo electoral, en el ámbito nacional, vivimos una suerte de guerra de trincheras: cada bando en la suya. Estamos, pues, ante una suerte de empate crónico y la pasada elección subnacional ratifica esa tendencia.

¿Cómo se expresa ese empate permanente y esa polarización nacional en Santa Cruz? Del siguiente modo: confirma a la Santa Cruz regionalista y autonomista –la Santa Cruz opositora al MAS– como fuerza consolidada.

La política en Santa Cruz, tras las elecciones subnacionales de marzo, no registra cambios históricos o de fondo. Es la misma que ha sostenido el duelo polarizador con el MAS por más de 15 años. En todo caso, lo que sí vemos son cambios de formas y de actores.

Veamos.

En Santa Cruz, como en el resto de Bolivia, desde 2005 hasta 2021, ha habido cuatro elecciones para elegir la máxima

autoridad política del departamento: una para prefecto (2005) y tres para gobernadores (2010, 2015 y 2021).

En estas cuatro elecciones la tendencia se ha inclinado hacia un sistema de bipartidismo polarizado pero abierto. Esto quiere decir que el sistema permanece abierto para la entrada de un tercer competidor (normalmente un candidato de poca fuerza electoral), pero los dos primeros monopolizan la mayoría de los votos en base a una disputa de mensajes muy polarizados y de estrategias de tensión. Esta tendencia al monopolio de los votos entre los dos primeros competidores polarizados es cada vez más sólida y tiende a agudizarse.

Las dos fuerzas polarizadoras son, por un lado, las fuerzas ligadas al autonomismo y al regionalismo, y por otro, el MAS. Entre ambas corrientes principales han monopolizado una media del 85% de los votos como promedio en las cuatro elecciones (concretamente, el 92% en la elección de marzo de 2021).

El candidato de las fuerzas autonomistas y regionalistas ha alcanzado siempre la victoria con una mayoría clara y distante respecto de la segunda fuerza, obteniendo una media del 53% de los votos (promedio de las cuatro elecciones). El 2005, Rubén Costas –candidato de las fuerzas autonomistas y regionalistas– obtiene el 47% de los votos; el 2010 el 51% y el 2015 el 59%. El 2021 Costas (con su partido Demócratas) deja de ser el candidato de estas fuerzas, pues Luis Fernando Camacho (con su partido Creemos) viene y ocupa esa posición. Camacho obtiene el 55% de los votos.

Se sostiene así la tendencia mencionada hacia la victoria del candidato autonomista y regionalista. Y se refuerza la hipótesis de que no hay cambio evidente en las relaciones de fuerzas tras la votación de 2021.

Por su parte, el candidato del MAS, en las elecciones para la primera autoridad del departamento de Santa Cruz, suele alcanzar el segundo lugar (salvo el 2005 que queda relegado al tercer puesto), logrando una media del 32% de los votos (como promedio de las cuatro elecciones). Sus

resultados, entre 2005 y 2021 son los siguientes: 2005 (24%), 2010 (37%), 2015 (31%) y 2021 (38%); siendo este último su mejor resultado.

En lo cualitativo, el electorado de la mayoría habitual, que es la autonomista y regionalista, sigue en el 2021 –como lo hace desde el 2005– votando por una combinación de cuatro elementos polarizadores, a saber: i) vota por un líder carismático, de origen cívico y con gran trayectoria de enfrentamiento al MAS; ii) vota por la identidad cruceñista, cuya propuesta política es el autonomismo; iii) vota por las múltiples formas de antimasismo (por ejemplo, por el antimasismo que asocia los gobiernos del MAS con abusos políticos y autoritarismo); y iv) vota por conservar un “modo de vida”, asociado a la libre empresa y cuyo símbolo tradicional es el llamado modelo de desarrollo cruceño.

Por otro lado, puede decirse que los valores de ese electorado son conservadores en lo moral y liberales en lo económico: están ligados –de muchas maneras– a la racionalidad y la mitología del mercado y a la vida empresarial.

Así las cosas, puede confirmarse la hipótesis de que, a fines de las relaciones políticas dentro de Santa Cruz, y a fines de las relaciones políticas de Santa Cruz frente al gobierno central del MAS, las correlaciones de fuerzas no han cambiado tras el 7M.

El cambio de Camacho por Costas tiene una dimensión generacional, pero, de momento, ambos proyectos expresan similares valores, visiones políticas, mensajes y estrategias, y similar representación de clases y sectores sociales. En esto, remarco que ambos recogen la representación de las clases altas y medias altas, pero que –sobretudo– son proyectos con una extraordinaria capacidad para representar lo popular en Santa Cruz.

Resulta interesante notar que la sustitución de un líder por otro (Camacho por Costas) se produjo de modo suave y sin conflicto público entre estos actores. Esta sustitución,

de hecho, no afecta de modo significativo la correlación de fuerzas bolivianas ni al sistema político nacional.

Por ejemplo, a efectos parlamentarios son fuerzas muy parecidas. Tanto Creemos como de Demócratas generaron una representación parlamentaria minoritaria en la Asamblea Nacional. Pero, a la vez, ambos proyectos mantendrán bancadas con cierta disciplina, cohesión y lealtad partidaria, dado que Camacho y Creemos (como lo fueron Costas y Demócratas) son un proyecto con expectativa de poder y así, con capacidad de “premiar o castigar” a su bancada. Es decir, en ambos casos se trata de bancadas pequeñas, pero unificadas.

Es decir, probablemente se trata del cambio de unas figuras de elites que no sólo representan cosas muy similares, sino que además tienen la misma fuerza y potencial político.

De hecho, quizá la única diferencia importante entre Costas y Camacho consiste en cómo cada uno de ellos logra relacionarse con el gobierno del MAS. La relación de Camacho es fría y, de momento, más tensa. Costas y Morales, con el tiempo, habían logrado consolidar –a partir de la Constitución de 2009 y después de los procesos electorales de 2009 y 2010–, un sistema de cohabitación estable y hasta cordial. A ese sistema, se sumaba con comodidad gran parte de la elite empresarial cruceña. Camacho, sin embargo, aún no teje con Arce aquel nivel de cohabitación que Costas y Morales alcanzaron. Pero, además, es muy probable que, de momento, el nuevo gobernador, no haya logrado consolidar la representación política de la elite cruceña para hablar con una sola voz desde Santa Cruz ante el gobierno nacional del MAS.

Con ese escenario –y más allá de las tensiones personales o de grupos particulares en Santa Cruz–, lo que tenemos es una Santa Cruz que, en el plano histórico y político, es muy similar a la que hemos visto en los últimos 15 años. Se trata de una Santa Cruz donde la hegemonía cultural y electoral sigue siendo detentada por fuerzas autonomistas y regionalistas. Y una Santa Cruz que, después de la movilización popular que

impulsó la salida de Morales, en noviembre 2019, se reconoce a sí misma como una fuerza con un potencial extraordinario de movilización en la calle.

Sin embargo, desde mi punto de vista, ese potencial de la calle no es nuevo. No viene del 2019. Ya había un potencial similar en los años 2004-2009, ligado a la Santa Cruz autonomista y regionalista. Un potencial que se desplegó con manifestaciones ciudadanas masivas, que en ámbitos locales se recuerdan con el título del Cabildo del millón.

Muy probablemente la fuerza de la calle, en ambas etapas de las movilizaciones cruceñas, fue la misma. Lo fue en origen, en mensaje y en potencial. Sin embargo, para la lucha política del año 2019, habían cambiado dos cosas que terminaron transformando el resultado de la lucha. En el lado cruceño había cambiado la táctica, la nueva manera de lucha consistía en sostener la movilización en la calle durante muchos días y en fundar la comunicación sobre el mundo de las redes. Y en el lado del MAS, había cambiado algo fundamental: el MAS –por muchos motivos– se había debilitado. El gobierno masista de 2019 era mucho más débil en todos los frentes que el gobierno que detentó el poder entre 2005 y 2014. Y en esos cambios, probablemente, podemos encontrar gran parte de la explicación –directa o inmediata– de la caída de Morales y del rol de Santa Cruz en ese episodio.

Finalmente, un nuevo elemento –generado en los últimos procesos políticos cruceños– es la irrupción del mensaje y la movilización medioambientalista. Mensaje que, como se sabe, jugó un papel muy importante en la movilización que impulsó la salida del presidente Morales en noviembre de 2019.

Curiosamente, en la elección nacional de 2020 y en las subnacionales de 2021, el ambientalismo no ocupó un espacio propio relevante. Probablemente, esto significa que estamos ante un buen mensaje que, sin embargo, carece de estrategia y estructura para incorporarse a la lucha electoral. Ahora bien, es previsible que, a futuro, el mensaje y las

fuerzas medioambientalistas sean mucho más potentes y tengan más presencia y espacios de poder en la política cruceña.

Habiendo visto lo departamental, miremos ahora lo municipal. La elección municipal, en la ciudad de Santa Cruz, significó –también– un cambio de formas, pero no de fondo. La ciudad de Santa Cruz suele votar, de modo mayoritario y desde hace décadas, por líderes populares que, de manera coloquial, pueden calificarse de centro y/o centroderecha. Es el caso de exalcalde Percy Fernández, quien obtuvo el 52% de los votos en la elección de 2010 y el 42% en la elección del 2015. Y es el caso, también, del alcalde Jhonny Fernández, quien en marzo de 2021 obtiene el 34% de los votos. Resulta muy probable, a la vez, que ese mismo tipo de electorado –en gran parte– fuera el voto que favoreció al candidato Gary Áñez (33% de los sufragios) en la pasada elección municipal de marzo. De hecho, así lo evidenciaban, durante la campaña electoral de 2021, las encuestas y estudios de opinión sobre traspaso de votos entre candidatos.

La polarización que vemos en la carrera a la Gobernación de Santa Cruz no se repite en la competencia electoral por el Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las razones son muchas, pero, en mi criterio, pueden mencionarse dos. Primero, la cercanía de lo municipal a los problemas diarios y directos de la gente y, por eso, la lejanía de la política municipal ante los grandes temas políticos de la polarización. Y, segundo, el perfil centrista y popular de los tres líderes (y sus partidos) que han ganado el puesto de alcalde municipal en Santa Cruz por casi tres décadas: Percy Fernández, Jhonny Fernández y Roberto Fernández. Por cierto, debe señalarse que estos tres líderes y sus proyectos son ejemplos clásicos de actores ligados a la tradición nacional popular.

Pues bien. Así las cosas, puede hablarse de una polarización crónica en lo nacional y de una Santa Cruz cuya racionalidad política tiende a consolidar dicha polarización.

¿Qué hacer ante la polarización? En mi opinión, los políticos tienen dos opciones:

- Una alternativa es profundizar la polarización en busca de una victoria definitiva y aplastante sobre el contrario: aplastar a Santa Cruz o aplastar al MAS.

Con esa racionalidad, las partes podrían buscar la derrota definitiva del opuesto en el campo donde se disputa la hegemonía cultural. Batalla en la que los contendientes se echarán en cara –vía propaganda, por ejemplo–, las creencias, los mitos, los prejuicios, los insultos y las descalificaciones que correspondan a las tácticas de sus narrativas polarizadas y polarizadoras. O quizá, las partes podrían buscar esa victoria aplastante mediante la fuerza, es decir, en el escenario de las calles, la violencia y la acción directa, donde ambos extremos han demostrado ser eficientes: la calle generó muchas victorias al MAS y, al mismo tiempo, la calle estuvo tras su caída en el 2019. Por último, ambas partes podrían buscar la victoria aplastante del contrario en el campo de la represión judicial y policial. Y por qué no: las partes podrían combinar las tres vías mencionadas.

- La otra opción es el pacto.

¿Qué van a hacer los políticos esta vez? ¿Intentar el desempate por fuera del pacto político? ¿O van a buscar un pacto?

Sexta hipótesis: El “No” ante las 12 preguntas

Este texto no pretende plantear ninguna propuesta política. Pretende, únicamente, explorar los distintos escenarios. Por eso, concluyo lanzando una serie de preguntas (12) que pretenden dar algún respaldo al escenario de encaje entre lo federal, lo republicano y lo nacional popular:

1. ¿Lo nacional popular implica un sistema político autoritario?
2. ¿Lo nacional popular es incompatible con lo republicano?
3. ¿Lo nacional popular es contrario a la identidad cruceña?
4. ¿Lo nacional popular es incompatible con lo federal?
5. ¿Lo nacional popular es contrario al modelo de desarrollo cruceño?
6. ¿Lo republicano implica políticas contrarias a la inclusión social?
7. ¿Lo republicano implica políticas contrarias a lo plurinacional?
8. ¿Lo republicano implica políticas que impulsan el racismo o colonialismo?
9. ¿Lo republicano implica políticas neoliberales o de privatización?
10. ¿Lo federal implica neoliberalismo y/o imperialismo?
11. ¿Lo federal implica racismo?
12. ¿Lo federal implica terrorismo o separatismo?

En mi hipótesis todas estas preguntas podrían ser respondidas por la teoría política. Y muy probablemente –desde esa perspectiva– todas y cada una de las respuestas serían la misma: “No”.

Sin embargo, las narrativas en pugna –hoy por hoy– son capaces de responder a todas y cada una de esas preguntas con un “Sí” contundente y enfático.

En suma. Es probable que las narrativas polarizadoras que utilizan los actores de ambos lados carezcan de sustento teórico. Es probable que sean narrativas destinadas a impulsar mitos y falsos argumentos únicamente con fines políticos.

En cualquier caso, la teoría política –por si sirve de algo– estará siempre al alcance de todos.

La pirámide que tiembla, el muro que no
termina de caerse: Realineamiento de los
factores de poder y reconfiguración
política en Tarija

Rodrigo Ayala Bluske

Utilizando el denominativo “pirámide” describimos, gráficamente, la manera en que se ordena la estructura de poder tradicional en Tarija. Con el de “muro”, en tanto, nos referimos al discurso político que la élite ha utilizado como herramienta central para legitimar y defender dicha estructura en los últimos 20 años.

Si quisiéramos resumir la situación de ambos elementos podríamos decir que la pirámide está seriamente dañada, ha perdido gran parte de su base de sustento; y que el muro está agrietado, ha sufrido importantes agujeros; pero que, de manera terca, ambas estructuras siguen resistiendo.

Alrededor de los dos factores –la estructura de poder tradicional tarijeña y el discurso político de la “tarijeñidad” que la defiende– giran los actores políticos locales. En este trabajo analizaremos la evolución política de dichos actores en los últimos años, así como la forma en que se han (re)posicionado a la luz del ciclo electoral del 2018-2021. En este análisis incluimos los intentos de renovación generacional de los estratos dirigenciales tarijeños en la oposición, las pugnas entre los distintos sectores del MAS, la situación de las agrupaciones y partidos políticos a nivel regional, así como la crisis institucional de la Gobernación de Tarija que, sobre todo a partir de la crisis económica y

de la implementación de la autonomía regional chaqueña, enfrenta una nueva realidad, lindante en algunos aspectos con su propia desintegración.

La pirámide se resquebraja

En la pirámide de poder tarijeña la influencia de los actores va descendiendo en la medida en la que estos se aproximan a la base.

Las sedes del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija-Cercado y del Comité Pro Intereses del departamento de Tarija (conocido popularmente como Comité Cívico), se encuentran en la esquina noroeste de la plaza Luis de Fuentes de la ciudad capital. En la cuadra del frente, en la esquina sureste, está ubicada la sede de la Asamblea Legislativa Departamental (cuando recién se creó, este organismo se ubicó exactamente en la esquina que separa los edificios de la Gobernación y la Alcaldía, pero luego, por razones de comodidad, se trasladó). En lo que queda de la plaza, antaño se encontraban las casas de algunas de las familias más influyentes de la ciudad, inmuebles que, en los últimos años, se han ido alquilando a entidades comerciales. En estos edificios podríamos decir que se encuentra el vértice de la estructura.

Comenzando el descenso, alrededor de ella están los cuatro barrios tradicionales (San Roque, La Pampa, Las Panosas y El Molino), donde se encontraba concentrada la clase media tradicional tarijeña. Estos dos elementos –edificios propios del “ejercicio de poder” y familias acomodadas e influyentes “cercanas” a la plaza principal, y clase media tradicional– constituyen los dos niveles más elevados de la estructura tarijeña y, para constituir un tercer nivel, en los últimos 50 años fueron surgiendo otros barrios nuevos con intensidad creciente, en los cuales se han ido ubicando la clase media emergente y los migrantes provenientes tanto del interior del departamento como del resto del país, especialmente de Potosí (en Tarija capital

existe una enorme comunidad proveniente de la región de Chichas, Potosí).¹

No se ha realizado un estudio en profundidad sobre las tendencias políticas que siguen los migrantes del occidente boliviano, de extracción quechua y aymara, asentados sobre todo en Tarija-Cercado y Yacuiba; sin embargo, está claro que muchos de ellos encabezan las organizaciones afiliadas al MAS. Es interesante hacer notar, también, que no se ha registrado ninguna disputa en profundidad entre estos grupos y los que conforman los sectores populares tradicionales en el departamento; los chapacos o chaqueños, por ejemplo.

La forma en que la élite de la ciudad de Tarija administra su relación con el resto del departamento se da a través de subélites provinciales, aunque sería más correcto llamarlas “seccionales”.² En este trabajo, en todo caso, nos referimos a ellas como “provinciales” ya que es el denominativo que se ha establecido en el lenguaje político tarijeño, aunque en realidad su organización corresponda a la sección municipal. Finalmente, en la base última de la pirámide se encuentran las comunidades campesinas, repartidas a lo largo del territorio departamental.

-
- 1 Véase Sergio Lea Plaza (coord.), Ximena Vargas y Adriana Paz, *Tarija en los imaginarios urbanos*, La Paz: Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), 2003. Esta investigación analiza en detalle la dinámica de los migrantes en Tarija, a principios de siglo. La importancia de los chicheño-tupiceños es tal que han introducido una nueva visión de la ciudad, lo que se traduce en fenómenos culturales como el Carnaval de integración que rivaliza con el propio Carnaval chapaco.
 - 2 La provincia, como tal, es una unidad político-administrativa que prácticamente ha dejado de existir y no tiene casi ninguna utilidad, más que la de contribuir en algún caso a la distribución de asambleístas por territorio. Desde principios de siglo, cuando se creó la figura del “corregidor mayor”, y luego las de ejecutivos seccionales y subgobernadores, las “secciones municipales” se han convertido en las unidades en las que efectivamente se divide el departamento.

Los pueblos indígenas originarios –guaraníes, weenhayeks y tapietes–, históricamente, han tenido un rol marginal en la estructura de poder tarijeño, aunque su relevancia ha aumentado en el último periodo político en la medida en que han adquirido representaciones directas en los poderes legislativos nacional, departamental y municipales correspondientes.

La pirámide está descrita con un criterio espacial-territorial (sus niveles se ensanchan en la medida en que su influencia política y social disminuye), aunque, obviamente, tiene un contenido clasista. La mayor parte del “vértice” (Gobernación, Alcaldía de Tarija-Cercado), tradicionalmente ha estado ocupado por las familias más influyentes de Tarija, las cuales provienen de la clase media tradicional (la única excepción al respecto, se dio durante el ejercicio de la Gobernación interina por parte de Lino Condori, entre 2010 y 2015). Este es el segmento social que, históricamente, ha desarrollado el discurso tarijeñista y que, a pesar de todos los avatares, mantiene su hegemonía sobre el conjunto de la ciudad capital. Otro es el caso de la Asamblea Departamental, instancia que surgió de la crisis constituyente, y que refleja la disputa política planteada desde ese momento.

La relación indirecta entre la élite, asentada en la ciudad capital, y las comunidades campesinas evidencia una de las mayores debilidades de la primera, lo que la diferencia de sus pares del oriente, de Santa Cruz y Beni, en particular. La aplicación de la Reforma Agraria en Tarija, a partir de 1952, provocó que la élite perdiera su herramienta central de dominio en el agro: la gran hacienda. Por el contrario, en el oriente del país, al no haberse ejecutado esta medida, las élites regionales han mantenido un dominio, en muchos casos secante, sobre el área rural.

El proceso constituyente de principios de siglo, la ruptura de algunas de las subélites con la élite asentada en la ciudad capital y el empoderamiento progresivo de los movimientos sociales rurales en Tarija –especialmente de la

Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Tarija (FDCCT)– ha provocado que, en los últimos años, la relación entre la élite y el movimiento campesino sea cada vez más inestable.

Si volvemos a remitirnos a los seis niveles de la pirámide de poder tarijeña descritos líneas arriba (élites dirigenciales departamentales, familias acomodadas e influyentes, clase media tradicional, clase media emergente, subélites provinciales y comunidades rurales), nos daremos cuenta de que la élite tradicional, en general, ha mantenido su influencia sobre los cuatro primeros niveles, la ha perdido en gran medida con respecto al quinto nivel (el de las subélites provinciales) y casi completamente en relación al sexto (las comunidades rurales).

De esta manera, el equilibrio político departamental en Tarija, tal y como ocurre en otras ciudades de Bolivia, pasa por una permanente tensión entre tres ámbitos que, generalmente, tienen comportamientos diferenciados en la política cotidiana y en los procesos electorales: la capital (donde se encuentran los cuatro primeros niveles de la pirámide); las ciudades intermedias –con las que existe una relación tensa, especialmente con Yacuiba, Villamontes y Bermejo y, en menor medida, con otras como Entre Ríos, Caraparí, San Lorenzo y Concepción– y las comunidades campesinas de la base. Esta situación obliga al conjunto a hacer, de manera cotidiana, ejercicios de negociación y redistribución del poder.

Esta realidad se ha manifestado no solo en el ejercicio del gobierno departamental, sino también en mecanismos de la sociedad civil como el Comité Cívico, que al finalizar la primera década de este siglo tuvo que “ceder” a las provincias el 50 por ciento de la representación en su mayor mecanismo de decisión, el Congreso de la Tarijeñidad, hecho impensable dos décadas atrás.³

3 A pesar de la medida mencionada, la tensión entre el Comité Cívico Departamental y los Comités Cívicos Provinciales, que

Los tres ámbitos señalados utilizan mecanismos de acción política diferenciados para alcanzar sus propósitos y, en general, los comicios nos demuestran que también sus tendencias político-electorales se diferencian notablemente.

Sin embargo, el golpe más importante que ha sufrido la élite tarijeña durante el proceso constituyente ha sido la creación de la Autonomía Regional del Gran Chaco.

El proceso de consolidación de la autonomía chaqueña tiene raíces históricas profundas; los grupos dirigenciales tarijeños, en la etapa de la Bolivia preautonómica, a la vez que padecían un manejo gubernamental centralista secante por parte del gobierno asentado en La Paz, reproducían el mismo tipo de práctica en su relación con las provincias. De tal manera que, una vez que se comenzó a avizorar el proceso constituyente, la subélite chaqueña diseñó y ejecutó una estrategia efectiva para dejar de depender de la élite capitalina; esa acción se concretó en la autonomía regional chaqueña, materializada paulatinamente a través de las siguientes herramientas normativas:

- La Ley Nacional 3038 de 29 de abril de 2005 que aprueba la asignación a las entidades de gobierno chaqueñas del 45% del total de las regalías por concepto de venta de hidrocarburos que recibe el departamento.
- El Decreto Supremo 29042 de 28 de febrero de 2007 que reglamenta la Ley 3038 y efectiviza el traspaso del 45%.
- El Decreto Supremo 331 de 15 de octubre de 2009 que dispone que el 45% de las regalías asignadas al Gran Chaco se traspasen directamente desde el

reproduce la que se da entre la élite departamental y las subélites es permanente y de ello encontramos, a través de los años, numerosos ejemplos en la prensa. Es el caso, por ejemplo, de la nota de prensa “Cívicos de Tarija suspenden cabildo por pedido de Comités Provinciales” (*El Deber*, Santa Cruz, 6/11/2020).

Tesoro General de la Nación (TGN) a las cuentas de la subprefectura y corregimientos mayores del Chaco.

- La Ley Departamental 079 de 12 de abril de 2013 que dispone el traspaso de la totalidad de competencias exclusivas establecidas en el art. 300 de la Constitución Política del Estado al Gobierno Regional del Gran Chaco Tarijeño.

La consolidación de la autonomía regional chaqueña significó para la élite tarijeña la pérdida de gran parte de la base de su aparato de ejercicio de poder (el presupuesto y aparato gubernamental chaqueños). Pero no fue un fenómeno aislado, estuvo acompañado de procesos similares en gran parte de las provincias (secciones municipales) de Tarija las cuales, si bien no llegaron a alcanzar autonomías regionales similares a la chaqueña, sí consiguieron diversos grados de “independencia” respecto a la élite.⁴

A partir del proceso constituyente y la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia (2009), entonces, la pirámide tradicional del poder tarijeño ha quedado como una estructura debilitada, contrahecha, dañada en extremo, porque ha perdido gran parte de su base de sustento. Se trata de una edificación donde la cabeza apenas se sostiene, encontrándose en permanente disputa con varias de las partes del edificio, que tradicionalmente cumplían una función de sostén. De esa manera, la élite solo sigue ocupando la cabeza de la estructura (el Poder Ejecutivo departamental) merced al apoyo político mayoritario que mantiene en el municipio de Tarija-Cercado, el cual concentra aproximadamente el 45% de la masa electoral del departamento.

4 Hasta el proceso electoral del 2021, las secciones municipales de Tarija tuvieron la potestad de elegir sus subgobernadores por voto, lo cual fragmentó el aparato público de la Gobernación y creó entidades paralelas a las alcaldías. La práctica fue declarada inconstitucional por el TCP, por lo que fue suprimida.

La evolución política de la élite tarijeña, su vínculo con los sectores empresariales y la generación del M de Abril

¿Cuál es el origen de la élite tarijeña? Es el segmento de propietarios de haciendas que constituía parte de la “feudal-burguesía”, la clase dominante del pre 52. Con la Reforma Agraria dicho sector perdió su dominio sobre la tierra y se convirtió en lo que podríamos llamar “clase media tradicional”. Desde los años setenta, parte de ese contingente social se ha estructurado en un débil sector empresarial dividido en dos grupos; por una parte, el dedicado a los rubros productivos (agricultura, vitivinicultura, cerámicas, crianza de pollos, etc.) y, por otra, el de la construcción.

¿Existe una vinculación directa entre lo que podríamos denominar el poder económico tarijeño y el poder político? ¿Existen en Tarija organismos de *lobby* empresarial tan fuertes como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) o la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO) en Santa Cruz? La respuesta categórica es no.

El primer sector, ligado a los rubros productivos, es reacio a intervenir en política y, más bien, opta por una actitud de cooperación general con todos los gobiernos buscando obtener ventajas para sus respectivos gremios. El segundo –el de la construcción–, por el contrario, es cercano al poder político en la búsqueda de obtener ventajas en los concursos licitatorios que asignan fondos al sector; sin embargo, a pesar de su influencia, ninguno de sus miembros ha tenido un liderazgo político importante. En este caso, se trata de una cercanía oportunista, con intereses a cortísimo plazo y sin ningún tipo de proyección a futuro. Por otra parte, la marcada crisis económica que se ha desarrollado en los últimos años, ha convertido a los organismos empresariales, especialmente la Federación de Empresarios Privados, en una suerte de sindicato de deudores de obras de construcción, con un papel reducido a lidiar con las autoridades de turno, buscando la asignación

de mayores porciones del presupuesto al pago de deudas que, en muchos casos, tienen varios años de mora.

Los líderes políticos tarijeños, entonces, provienen principalmente de la clase media tradicional y, generalmente (por lo menos hasta la última generación, que se encuentra entre los 35 y 40 años), estudiaron en la estatal Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS).

Al igual que en el resto del país, en Tarija, el partido dominante post 52 fue el MNR. Posteriormente, en la etapa de la “democracia pactada”, esta agrupación encontró en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) un rival que le disputó el dominio del espectro político departamental. Junto a estas dos fuerzas, que tenían una sólida estructura partidaria, tanto en la ciudad capital como en las provincias, surgió una tercera opción a través del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).

El FRI fue una expresión formal del Partido Comunista Marxista-Leninista (PCML), pero su fuerza en Tarija es producto, más que de sus ideas o de su estructura orgánica, de la popularidad de su principal líder, Oscar “Motete” Zamora Medinaceli, en los barrios suburbanos de la ciudad. En ese sentido, las acciones que desarrolló no difirieron en lo más mínimo de las de los restantes partidos de la izquierda socialdemócrata o de la derecha. El FRI, en Tarija, fue importante en determinados momentos, pero siempre reducido a la categoría de “socio menor” del MNR y del MIR, ya que su influencia jamás llegó más allá de los límites de la ciudad capital.

En este contexto, una agrupación que tuvo una importancia significativa, no como fuerza política sino como un “semillero” de líderes políticos, fue el M de Abril, creado a mediados de los años noventa por un grupo de jóvenes dirigentes.

El nombre del M de Abril hace referencia al mes aniversario de Tarija.⁵ El grupo surgió (y subsistió) como

5 El 15 de abril de 1817 se libró la batalla de La Tablada, considerada la más importante en las luchas independistas de la región.

un movimiento apegado al Comité Cívico de Tarija, y en determinado momento aspiraba a convertirse en una especie de partido regional autónomico de la izquierda local. El intento fracasó, pero sin embargo sus principales dirigentes, luego de ocupar la presidencia del Comité Cívico, pasaron a encabezar el MNR y el MIR, los partidos tradicionales más importantes y las agrupaciones ciudadanas que sucedieron a estos durante el proceso constituyente.

El primer dirigente del M de Abril que ocupó la presidencia del Comité Cívico fue Mario Cossío Cortez, quien posteriormente tuvo una significativa trayectoria política: concejal del MBL, candidato a la Alcaldía del MNR, prefecto y gobernador. El segundo líder del M de Abril en dirigir el Comité Cívico fue Oscar “Negro” Montes, quien luego llegaría al sillón edil por el MIR (en dicha elección derrotó a Cossío, candidato del MNR). Montes se mantuvo como alcalde de Tarija durante 15 años y en las pasadas elecciones subnacionales de 2021 resultó electo gobernador.

Otros dirigentes políticos de importancia que salieron del M de Abril son Mauricio Lea Plaza, quien fuera secretario ejecutivo de Mario Cossío durante su gestión como gobernador y actualmente es asambleísta departamental en alianza con la agrupación de Oscar Montes, y Edgar “Chino” Guzmán quien, después del fallecimiento de Oscar Zamora, ha sido el principal dirigente del FRI.

Como sabemos, el proceso constituyente (2006-2008) astilló, literalmente, a los partidos de la democracia pactada. En el caso de Tarija, tanto el MNR como el MIR fueron sucedidos por agrupaciones ciudadanas que heredaron sus aparatos partidarios. La creación de estas agrupaciones ciudadanas de carácter regional fue una respuesta de las élites partidarias, que por una parte buscaban independizarse de los liderazgos nacionales en crisis y, por otra, “modernizarse” para escapar a la debacle en la que claramente habían caído.

Sin embargo, la presencia de estas agrupaciones también responde a un fenómeno estructural: la consolidación de las

autonomías departamentales en el proceso constituyente. A partir de este fenómeno, la política, en el nivel nacional, queda relegada a un rol secundario para las élites locales (ya que los “jefes” de La Paz pierden la facultad de nombrar “a dedo” los cargos más importantes) y, por tanto, las agrupaciones políticas locales pueden disputar, por sí mismas, los cargos del Ejecutivo (Gobernación y municipios) donde se gestionan los presupuestos y se nombran las plantas burocráticas estatales. De ahí que, por ejemplo, el ejercicio legislativo en la política tarijeña pueda dividirse en dos niveles con valoraciones distintas: los políticos “más importantes” se postulan a la Asamblea Departamental, mientras que los de “menor peso” tienen que optar por los puestos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). De igual manera, para un dirigente político de primera línea en Tarija, en estos años, será mucho más importante ocupar la cabecera de la Gobernación que asumir un puesto en el Ejecutivo en La Paz, así este tenga rango ministerial.

Agrupaciones ciudadanas surgidas durante el ejercicio de la autonomía

Mario Cossío, el dirigente joven más importante del MNR, formó la alianza Camino al Cambio para presentarse en las elecciones de Prefecto del 2005, las primeras en las que se eligió al titular del Poder Ejecutivo departamental, aún antes de que se aprobará la nueva Constitución Política del Estado. La “alianza” estaba constituida por el MNR (del que Cossío seguía siendo militante), el FRI y un grupo de independientes. Posteriormente, este grupo se inscribiría formalmente ante el Órgano Electoral como agrupación ciudadana con el nombre de Camino Democrático al Cambio. Esta agrupación copó el espacio más conservador del electorado tarijeño, anteriormente ocupado en forma mayoritaria por el MNR. Entre sus principales dirigentes se encuentran Mauricio Lea Plaza, Sara Cuevas, María Lourdes Vaca y Luis Pedraza.

Sin embargo, el MNR siguió existiendo como partido con dirigentes que tienen peso electoral propio, como Johnny Torres (reciente ganador de la Alcaldía de Tarija-Cercado) y Alfonso “Pica” Lema, que fue subgobernador y también alcalde y dirige una fracción disidente del MNR, denominada “Tendencia Víctor Paz Estenssoro”.

En el caso del MIR, Oscar Montes siguió un proceso análogo al de Cossío. Fue elegido alcalde de Tarija-Cercado por el MIR en las elecciones municipales de 2000 y repitió el 2004. Sin embargo, el 2010 fundó su agrupación UNIR-Unidos para Renovar. Este espacio político tuvo un carácter más centrista (heredando de alguna manera las tendencias socialdemócratas del MIR), y mientras Camino al Cambio se apoyó más fuertemente en la clase media tradicional, UNIR estuvo cercano a las clases medias emergentes.

La desestructuración de los partidos tradicionales también significó la “independización” de las subélites provinciales. Los líderes de cada una de las secciones municipales ya no volvieron a depender de manera directa de los jefes políticos de la capital departamental y, en la mayor parte de los casos, se lanzaron a crear sus propias agrupaciones ciudadanas.

El fenómeno más importante en este sentido fue el del Chaco. Los dirigentes chaqueños mostraron en toda esta etapa una visión política común. Ese proyecto político se centró en la autonomía regional y, para concretarla, los líderes chaqueños provenientes mayoritariamente también del MNR y el MIR fundaron una sola agrupación ciudadana denominada Poder Autonómico Nacional (PAN). Esta agrupación es clave en la medida en que expresó políticamente el proyecto autonómico regional de la subélite chaqueña.

Con certeza, el dirigente político chaqueño más importante de esta etapa es Willman “Castor” Cardozo, que fue elegido diputado nacional por el MIR en 2002. Cardozo tuvo la virtud de traducir en un discurso político radical las reivindicaciones autonomistas chaqueñas. Fue quien presentó y gestionó la aprobación de la Ley Nacional 3038 de 2005, con

la que se dispuso la entrega al Chaco del 45% de las regalías hidrocarburíferas correspondientes a Tarija, norma que, como hemos visto, dio inicio en los hechos a la estructuración normativa de la autonomía regional. Esta postura significó para Cardozo una popularidad que le garantizó la victoria en todas las elecciones a las que se presentó, hasta el 2021, a pesar de que en algunos casos candidateó por partidos o agrupaciones prácticamente inexistentes en el ámbito político departamental. Junto con Cardozo, se alinearon en el PAN otros dirigentes tradicionales chaqueños como Rubén Vaca, de Villamontes, y Carlos Bru, de Yacuiba, que provenían del MNR.

En general, puede decirse que la autonomía departamental se ha planteado históricamente en Bolivia como el espacio de realización de las élites departamentales. En la Bolivia anterior a la Revolución Nacional de 1952, muy poco vertebrada (la “vinculación territorial” se ligaba centralmente a la explotación y exportación de minerales), y con un aparato económico elemental (explotación minera sumada a la explotación agrícola de características feudales), era imposible pensar en una estructuración autonómica o federal, de ahí que Bolivia haya vivido durante la mayor parte de su historia bajo un régimen de centralismo secante. Sin embargo, la “marcha hacia el oriente” llevada adelante por el primer gobierno del MNR y la relativa complejización de nuestro aparato productivo (agroindustria, emprendimientos industriales de alguna importancia, emprendimientos forestales, etc.) posibilitaron que, paulatinamente, las élites departamentales pudieran pugnar por mayores niveles de descentralización, primero, y luego de autonomía, la cual finalmente se pudo consolidar en el proceso constituyente.

En el terreno estrictamente político-partidario, puede decirse que, a partir de la implementación de la autonomía departamental, las élites ganaron independencia respecto de los mandos nacionales. Partidos políticos constituidos, como el FRI y el MNR, si bien formalmente responden a mandos

nacionales, en los hechos actúan en completa independencia. El MNR, por ejemplo, en las elecciones nacionales del 2020 resolvió, en forma pública, no sumarse a la candidatura de Tuto Quiroga y, más bien, en los hechos, favoreció la postulación de Carlos Mesa, sin sufrir por ello ninguna sanción o reprimenda por parte de la dirección de La Paz.⁶

El FRI, por su parte, después de la muerte de su líder “Motete” Zamora, ha quedado prácticamente reducido a una organización política testimonial; sin embargo, desde las elecciones del 2019 recuperó alguna importancia al “prestar” su sigla política para posibilitar la candidatura de Carlos Mesa, a través de la alianza Comunidad Ciudadana (CC).

El itinerario del MAS en Tarija

Al igual que en el resto del país, el MAS nació en Tarija sobre la base de las organizaciones sociales, las que siguen siendo su principal base de sustento. Un segundo paso, central en el itinerario para convertirse en una fuerza política importante en el departamento, fue su alianza y posterior “incorporación” de las subélites provinciales, especialmente las del Chaco, a su estructura. Finalmente, podemos decir que el tercer movimiento, aún pendiente, imprescindible para lograr ser la fuerza dominante tarijeña y derrotar a las fuerzas de la oposición, es el de integrar a sus filas a la clase media urbana de Tarija-Cercado. En los últimos diez años la organización encabezada por Evo Morales ha hecho numerosos esfuerzos para lograr este último objetivo y, a pesar de que por momentos parecía que podía hacerlo, finalmente no lo consiguió plenamente, lo que explica que hasta hoy no haya logrado ganar ni la Gobernación de Tarija ni el Gobierno Municipal de la capital.

La organización social por excelencia en Tarija es la Federación Sindical de Comunidades Campesinas de

6 Sobre la postura del jefe departamental de Tarija, véase “MNR decidió no apoyar a Tuto y profundizó su crisis” (*Nuevo Sur*, Tarija, 6/2/2020).

Tarija (FSCCT), que agrupa al conjunto de organizaciones campesinas del departamento. En el caso del Chaco y Bermejo existen “federaciones especiales” que están afiliadas a la federación departamental, pero que cuentan con ejecutivos propios.⁷

La Federación, como se la conoce, tiene una sólida competencia reivindicativa y una enorme capacidad de movilización. Por otra parte, dispone también de una importante base logística que le da sustento; administra, entre otros bienes, el Mercado Campesino de Tarija, que se ha convertido en el principal enclave comercial de la ciudad (un equivalente a la Buenos Aires o a la Eloy Salmón en La Paz), de donde percibe ingresos económicos que no están claramente cuantificados, pero que sin duda son significativos.

Al inicio de la crisis constituyente, su dirigencia “histórica”, encabezada por Luis Alfaro, no estaba alineada con el MAS, sino, más bien, mantenía una relación próxima a sectores afines a Felipe Quispe, el Mallku.

Sin embargo, cuando quedó claro que el MAS era la organización política que contaba con posibilidades reales de disputar el poder a los partidos de la “democracia pactada”, la Federación se realineó rápidamente, con Alfaro a la cabeza, quien fue su candidato a prefecto en las elecciones subnacionales del 2005 y, posteriormente, candidato a asambleísta constituyente el año 2006.

Sin embargo, con el correr del tiempo, podríamos decir que Alfaro fue víctima de su propio éxito. En la medida en que el MAS crecía en sectores urbanos y se aliaba con sectores importantes, como la subélite chaqueña, este dirigente fue perdiendo influencia. Esto llevó a que, en las elecciones del 2015 rompiera con el MAS y fuera candidato a gobernador

7 Podría pensarse que esta forma de organización tiene un contenido identitario, ya que la Federación agrupa directamente a las comunidades chapacas, del valle y el altiplano tarijeño, mientras que en el Chaco y en Bermejo, donde existen otras formaciones culturales, existen “federaciones especiales”.

por Tarija para Todos (TPT), obteniendo un interesante tercer lugar con el 13,50% de los votos. Después de integrar el gabinete de Adrián Oliva entre el 2014 y el 2018, Alfaro fue nuevamente candidato a gobernador por el FPV el 2021, pero en este caso con un resultado irrelevante (1,93%). En su momento este dirigente tuvo la oportunidad de convertirse en una figura política alternativa al MAS, como Damián Condori en Chuquisaca; sin embargo, su alianza con Oliva lo neutralizó políticamente. El aliarse y pasar a integrar el gabinete de quien era identificado como un representante de los sectores conservadores tarijeños impidió que Alfaro pudiese seguir desarrollando un perfil propio.

A lo largo de la última década se han estructurado y fortalecido otras organizaciones sociales (interculturales, Bartolinas, desocupados, etc.), aunque la Federación de Campesinos sigue siendo el principal motor del MAS-IPSP en Tarija.

La incorporación de las élites provinciales al MAS

Las subélites provinciales tarijeñas encontraron en su alianza, primero, y en su incorporación orgánica al MAS, después, el vehículo para alcanzar sus reivindicaciones frente a la élite departamental. Al mismo tiempo, ese proceso le permitió al oficialista MAS tener una amplia presencia territorial en el departamento y la posibilidad de contar con una bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa Departamental.

Como hemos señalado, las subélites provinciales se encontraban ligadas, en primera instancia, a los partidos tradicionales (MNR y MIR), pero luego, a raíz de la crisis constituyente se organizaron en una agrupación propia (PAN) y, posteriormente, se incorporaron directamente al MAS.

Si bien desde el inicio del gobierno de Evo Morales (2006) el estrato dirigencial chaqueño tuvo claridad en su línea estratégica de alianza con el nuevo gobierno, fue después de las elecciones departamentales de 2010 cuando se inició

su colaboración directa con el MAS. En dichas elecciones, si bien Mario Cossío ganó al MAS (49,89% versus 44,1%), ambas expresiones políticas empataron en la representación legislativa obteniendo 11 asambleístas cada una (ver cuadro 1). Por su parte, el PAN, que obtuvo tan solo un 7% de la votación, logró hacerse con 5 asambleístas departamentales. Por su parte, los pueblos originarios tarijeños, (guaraníes, weenhayeks y tapietes) eligieron un representante cada uno, por usos y costumbres, de acuerdo con la normatividad vigentes.

Cuadro 1 Resultado de las elecciones para la Gobernación de Tarija, 2010

N.º	Sigla	Candidato	Porcentaje de votos	N.º asambleístas
1	PAN	Edwin Flores	7%	5
2	MAS-IPSP	Carlos Cabrera	44,1%	11
3	Camino al Cambio (CC)	Mario Cossío Cortez	48,9%	11
4	Asambleístas de pueblos indígena originario campesinos	--	--	3

Fuente: Elaboración propia.

La diferencia entre el voto y la representación legislativa alcanzada por las tres fuerzas políticas nos da una idea del predominio del factor territorial sobre el poblacional en la asignación de escaños. Camino al Cambio (CC), obteniendo casi un 50% de los votos, tan solo logró algo más de un tercio de los representantes; en el otro extremo, el PAN, con la séptima parte de los votos conseguidos por CC, logró casi la mitad de los escaños que obtuvo la alianza ganadora. Esa disparidad se explica por las concesiones que el propio Cossío realizó a las subélites provinciales al momento de consensuar el Estatuto Autonómico Departamental, dada su debilidad

en cuanto al manejo territorial del departamento. Una vez que la autonomía departamental se puso en marcha con todos sus engranajes, el gobernador sufrió en carne propia las consecuencias de dichas decisiones.

Asambleístas departamentales 2010

Apenas inaugurado el nuevo periodo de gestión gubernamental en el ámbito departamental tras los comicios del año 2010, la alianza MAS-PAN puso en marcha una estrategia dirigida a destituir al gobernador recién electo, Mario Cossío. El Ministerio Público había comenzado una serie de investigaciones sobre varios contratos realizados por el gobernador durante su anterior gestión como prefecto electo, y dado que la normativa vigente en ese momento permitía su suspensión a sola imputación, antes de que el juicio se hubiera ejecutoriado, la Asamblea lo suspendió y fue reemplazado por Lino Condori, asambleísta del MAS.⁸

El gabinete de Condori estuvo integrado por dirigentes de ambas fuerzas, sin embargo, más allá de los acuerdos políticos, el nuevo gobernador tuvo que enfrentar una extrema impopularidad en Tarija-Cercado y, para ello, se apoyó en las élites provinciales. De esa manera, durante el periodo 2010-2015 se consolidó el “entronque” MAS-PAN o, si se quiere, el entronque entre movimientos sociales y subélites provinciales.

En la elección del 2015, el PAN desapareció como fuerza política y la mayor parte de sus integrantes pasaron a formar parte del MAS. Es interesante comparar los dos cuadros de asambleístas departamentales, dado que, en estas elecciones, el MAS consiguió 16 representantes: la suma exacta de los que obtuvieron, por separado, las dos fuerzas políticas mencionadas en las elecciones del 2010.

8 Para conocer la visión de Cossío sobre su destitución, véase el artículo “Cossío recordó 10 años de su derrocamiento como gobernador” (*Nuevo Sur*, Tarija, 17/12/2020).

Cuadro 2 Resultado de las elecciones para la Gobernación de Tarija, 2015

N.º	Sigla	Candidato	Porcentaje de votos	N.º asambleístas
1	UD-A	Adrián Oliva Alcázar	45,44%	9
2	DEMÓCRATAS	Luisa Díaz Ramos	0,68%	0
3	TPT	Luis Alfaro Arias	13,50%	0
4	ISA	Hilda Flores Herrera	2,49%	2
5	MAS-IPSP	Pablo Canedo	36,17%	16
6	FPV	Aluida Vilte	1,72%	0
7	Asambleístas de pueblos indígenas originario campesinos	--	--	3

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, la organización política Unidad Departamental Autonomista (UD-A), que agrupó a los opositores, obtuvo 9 asambleístas, con lo que redujo su participación en dos escaños. Se trata de un dato interesante, ya que, a pesar de ganar la elección, el frente encabezado por Adrián Oliva ni siquiera consiguió igualar el número de asambleístas obtenidos por Cossío en 2010. Los dos asambleístas restantes fueron electos por ISA (Integridad, Seguridad y Autonomía), una agrupación con amplia base en Villamontes, sección municipal chaqueña. Esto indica que el voto de la oposición siguió concentrándose en la capital departamental, mientras que el MAS, al acentuar su presencia en las provincias, pudo mantener su nivel de representación, a pesar de que ISA le “robó” un espacio territorial importante.

Asambleístas departamentales 2015

En las elecciones del 2021, el bloque MAS-subémites chaqueños (expresado en 2010 como alianza partidaria y, posteriormente, como entronque partidista), por primera vez durante el periodo autonómico, disminuyó su representación en la Asamblea Legislativa Departamental (ALP), pasando a tener 13 representantes. Por su parte, la oposición, aunque dividida, obtuvo 14 representantes: 12 correspondientes a Unidos –que postuló a Oscar Montes (gobernador electo)– y 2 a Todos, frente que encabezó Adrián Oliva (exgobernador). En este caso, el rol definidor quedó en manos de la bancada indígena, que será la que durante el quinquenio determine la orientación de la directiva de la ALP.⁹ De esta manera se puede prever un difícil equilibrio en los próximos años, ya que la conformación de bloques mayoritarios en este organismo dependerá de la capacidad de negociación de ambas estructuras (el MAS desde el gobierno central y Unidos desde la Gobernación) o, en otras palabras, de su capacidad y disposición de otorgar concesiones a las organizaciones indígenas.

Asambleístas departamentales 2021

Al margen de las variaciones en las tendencias electorales, el ejercicio realizado resulta útil para ilustrar la forma en que la adscripción de las subémites provinciales al MAS logró dotar a este partido de una importante consistencia y presencia territorial.

De los líderes chaqueños “históricos”, el único que decidió quedarse en el bando opositor fue Willman Cardozo quien, en primera instancia, formó un grupo propio denominado Talego, con el que integró el 2015 el frente UD-A que encabezaba

9 En la primera elección de directiva, realizada el 2021, la bancada indígena se alió con Unidos y Todos, merced a lo cual después de mucho tiempo la ALP cuenta con una dirección de orientación opositora al MAS. La condición puesta por los indígenas para tomar tal posición fue que uno de sus representantes fuera el presidente de la Asamblea.

Adrián Oliva y, finalmente, se fusionó con el sector político encabezado por este, para formar la agrupación Todos.

La fusión del PAN con el MAS constituye la última parte del itinerario del desmarque de las subélites provinciales de la tutela de la élite departamental. En las secciones municipales ajenas al Chaco, con la excepción de Tarija-Cercado, la mayor parte de sus líderes o se han unido orgánicamente al MAS o, en los hechos, se plegaron a este partido una vez que fueron electos.

Cuadro 3 Resultado de las elecciones para la Gobernación de Tarija, 2021

N.º	Sigla	Candidato	Porcentaje de votos	N.º assembleístas
1	MTS	Luis Alfaro Arias	1,93%	0
2	FPV	Wilfredo Barrios Arancibia	0,57%	0
3	TPT	Gershy Colque Machicado	0,95%	0
4	ISA	Mirtha Arce Camacho	2,27%	0
5	MAS-IPSP	Álvaro Ruiz García	38,17%	13
6	Unidos por Tarija	Óscar Montes Barzón	38,05%	12
7	Comunidad de Todos	Adrián Oliva Alcázar	18,05%	2
8	Asambleístas de Pueblos Indígena Originario Campesinos	--	--	3

Fuente: Elaboración propia.

El MAS, la clase media tarijeña y el “muro de la tarijeñidad”

Si bien, como hemos visto, la adscripción de las élites provinciales le proporcionó al MAS el predominio territorial en el departamento y la base para contar con mayoría en casi

todos los periodos legislativos departamentales, la asignatura pendiente de ese partido ha sido la de ganar la adhesión del grueso de la clase media tarijeña. El no lograr dicho propósito, le ha significado la imposibilidad de acceder, mediante elecciones, a la Gobernación departamental. En todo caso, fueron diversos los intentos masistas por lograr dicho objetivo.

¿Cuál es el discurso ideológico que la élite tarijeña ha empleado tradicionalmente para arrastrar detrás de sí a las clases medias? Es el discurso de la “tarijeñidad”, el de la defensa de “los intereses de Tarija”, que está firmemente anclado en la “memoria larga” del departamento. Dicho discurso es una herencia que, especialmente, Mario Cossío y CC tomaron de la lucha autonomista precedente, adaptándola a la crisis constituyente y al periodo del gobierno del MAS.

La clave fundamental en las luchas “cívicas” del siglo pasado (luchas que involucraron tanto a los actores políticos como a la sociedad civil) fue la de la reivindicación descentralizadora y autonomista. La presencia de un Estado centralista, cuyo excesivo control entorpecía el desarrollo departamental y daba lugar a diversas formas de autoritarismo,¹⁰ evidentemente marcó a fuego a los distintos segmentos de la sociedad tarijeña.

La habilidad de Cossío, desde su primer periodo como prefecto electo, fue la de lograr trasladar, en forma mecánica, la confrontación tradicional que se daba con el Estado centralista al terreno político, identificando al MAS con el “enemigo tradicional”; y, evidentemente, la actitud inicial de esta formación política, de hostilidad a la reivindicación regional, ayudó a dar forma a dicha visión.¹¹

10 Recordemos que, en ese periodo, no solo cualquier trámite, por más nimio que fuera, tenía que ser consultado en la ciudad de La Paz, sino que todas las autoridades eran nombradas a “dedo”, lo cual generaba una enorme sumisión a los políticos del eje, y no pocos abusos y decisiones arbitrarias por parte de estos.

11 Cossío y su grupo utilizaron la fórmula del “antitarijeñismo” no solo contra el MAS, sino también, en determinado momento,

La construcción de este “muro” de “división” estricta en lo político partidario, entre “lo tarijeño” y lo “antitarijeño”, tuvo influencia sobre todo en la clase media, de tal manera que cualquier dirigente que se identificara como “masista”, o afín al MAS, era calificado ruidosamente como “traidor” y condenado a una eventual “muerte civil”. En ese sentido, también se produjo una afinidad casi absoluta entre las posturas políticas opositoras y la actividad del Comité Cívico.

Prácticamente desde el inicio de su periodo de gobierno, el MAS realizó diversas acciones para incorporar miembros representativos de la clase media tradicional tarijeña a su estructura. El primer logro importante al respecto lo consiguió en las elecciones subnacionales de 2010, cuando realizó una alianza con la agrupación Dignidad, que articulaba a los dirigentes políticos departamentales más importantes no afiliados a ninguno de los partidos tradicionales, entre ellos el senador Roberto Ruiz y el exrector de la UAJMS, Carlos Cabrera Iñiguez. Ruiz provenía del Comité Cívico del que fue presidente (2002-2004) y su prestigio se evidenciaba en el hecho de que es el único caso, que conozcamos, que fue elegido por unanimidad para dicha función; por su parte, Cabrera también alcanzó una notable popularidad como rector de la universidad estatal, caracterizándose por tener un perfil concertador y proactivo.

Dicho grupo ya había participado en las elecciones nacionales del 2006 aliándose a Podemos, que postuló a la presidencia a Jorge Tuto Quiroga. En el periodo posterior, Ruiz, en su calidad de senador, fue partícipe de la denominada “mesa clandestina” que trabajó para consensuar cambios

lo hicieron contra sus otros rivales; es el caso, por ejemplo, de Oscar Montes y Johnny Torres, a los que atacaron duramente con esa descalificación cuando, en el año 2013, siendo alcalde municipal de Tarija-Cercado el primero y parlamentario el segundo, participaron en las negociaciones realizadas en Santa Cruz para encontrar una solución al conflicto con Chuquisaca, a raíz de la distribución de regalías gasíferas provenientes del pozo Margarita.

en la nueva Constitución Política del Estado; finalmente, en 2009, fue el único de los políticos de oposición de ese momento que apoyó la opción del “Sí” en el Referéndum Constitucional, lo que terminó de alejarlo de la oposición al gobierno de Evo Morales.

En las elecciones para gobernador, Cossío terminó imponiéndose a Cabrera por una diferencia del 4,8% de los votos, un porcentaje mínimo que muestra la potencialidad de la incorporación de los sectores de la clase media al esquema del MAS (en las anteriores elecciones departamentales, para la elección de prefectos, en el 2005, el MAS, antes de su alianza con las subélites provinciales y los sectores de la clase media urbana, había sacado un 20,4% de la mano de Luis Alfaro, frente los 45,6% de Mario Cossío y 33,9% de Jaime Paz Zamora).

El periodo 2010-2015 originó un significativo desgaste en el MAS, ya que este partido tuvo que soportar la gestión interina de Lino Condori, dirigente campesino del municipio de Yunchará, que encontró una fuerte resistencia, sobre todo en los sectores urbanos. De tal manera que, para las elecciones de 2015, nuevamente se le hizo imperioso buscar nuevas incorporaciones de sectores representativos de la clase media.

Inicialmente, el MAS se inclinó por repetir la candidatura de Cabrera y varios analistas coinciden en que dicha opción podría haber tenido una importante chance de ganar la elección, en la medida en que Oscar Montes, considerado el principal candidato de la oposición, optó por no presentarse a la contienda electoral. Sin embargo, Cabrera quedó inhabilitado debido a un error administrativo (no renunció con la debida anticipación a su puesto como decano de la Facultad de Economía en la UAJMS), de tal manera que el partido de gobierno tuvo que buscar, en un tiempo récord, un nuevo candidato a gobernador.

La nominación de Pablo Canedo en reemplazo de Cabrera representó un nuevo hito en el acercamiento de este partido

a los sectores de la clase media tradicional tarijeña. Hijo de uno de los dirigentes históricos de ADN (el exprefecto Rafael Canedo), el nuevo candidato era uno de los miembros más destacados de las juventudes autonomistas (conservadoras) tarijeñas. Ruiz y Cabrera provenían de sectores académicos e intelectuales, en cambio Canedo estaba relacionado íntimamente con todos los resortes de la clase media tradicional en sus ámbitos social, empresarial y político.

Por otra parte, la incorporación de Canedo no fue la única por parte de representantes destacados de la clase media; en la elección nacional inmediatamente anterior ya habían sido electas, entre otras, personalidades como Milciades Peñaloza en el cargo de primer senador. Peñaloza era un destacado empresario que años antes había sido jefe departamental de ADN. Del mismo modo sucedió con Ignacio Soruco, otro joven dirigente de la clase media, proveniente del mismo medio que Canedo.

La incorporación de sectores como los de Dignidad, en 2010, y los relacionados a Pablo Canedo, en 2015, fueron intentos importantes para “derribar” el muro discursivo impuesto por los sectores más influyentes de la clase política tradicional tarijeña. Aunque no lo lograron completamente, posibilitaron la ampliación de la base tradicional del MAS en Tarija.

Intentos de renovación del segmento tradicional de la política tarijeña y la “generación perdida”

¿Existe una generación perdida después del ejercicio de los gobiernos departamental y municipal de Tarija-Cercado en el periodo 2015-2020?

Evidentemente, en 2015 se produjo una sustitución generacional de dirigentes, de tal manera que parecía que la generación del M de Abril se encontraba dando un paso al costado y estaba siendo sustituida por una nueva generación de dirigentes. En el caso de la Gobernación asumió el liderazgo Adrián Oliva y en el municipio de Cercado lo hizo Rodrigo

Paz Pereira; sin embargo, como veremos, ambos procesos tuvieron connotaciones distintas.

Oliva fue uno de los dirigentes jóvenes más importantes del grupo cercano a Mario Cossío. En el 2002, cuando tenía 24 años, durante el gobierno de coalición MNR-MIR, fue nombrado asesor general (tercer cargo en importancia en la gestión) del prefecto Paul Castellanos Mealla; posteriormente, durante el gobierno de Carlos Mesa fue viceministro del Interior y en la gestión de Mario Cossío como prefecto volvió a ocupar las funciones de asesor general.

Para el periodo 2010-2015 Oliva fue electo diputado nacional y, desde la Asamblea, comenzó a aglutinar a los dirigentes jóvenes más importantes de Camino al Cambio, en oposición a la línea seguida por Mario Cossío, que se encontraba exiliado en Paraguay, y Mauricio Lea Plaza, que dirigía la agrupación en Tarija. Junto a él se situaron Waldemar Peralta, dirigente cívico juvenil, y Alain Echart, también dirigente cívico juvenil y exasambleísta departamental, de 32 y 29 años, respectivamente, en el momento en que se formaba la propuesta política. El grupo disidente básicamente cuestionó el excesivo apego de la línea partidaria a la situación de Cossío y planteó una ampliación de la mirada de la oposición, para lograr una comprensión más cabal de los cambios ocurridos en Bolivia a partir del proceso constituyente.

En principio, los “olivistas” coquetearon con la idea de estructurar una propuesta nacional, pero luego se volcaron hacia Tarija y adquirieron el nombre de Vanguardia Integración. En el periodo preelectoral del 2015, Oliva mostró la virtud de tener claridad sobre la posición a la que iba a aspirar (gobernador de Tarija) y mantenerse en esa línea. Al principio, cuando parecía que la batalla electoral iba a darse entre Oscar Montes y Carlos Cabrera, los miembros de los otros grupos de la oposición, en lenguaje coloquial, ningunearon a Oliva, es decir, ignoraron a Vanguardia Integración (ni siquiera lo invitaron a las mesas de concertación convocadas con el fin de lograr una candidatura unitaria). Sin embargo, cuando

Montes anunció su decisión de retirarse de la contienda departamental y mantener solo las candidaturas al Gobierno Municipal, tanto al MNR como a Camino al Cambio no les quedó más remedio que volver la vista hacia Oliva y darle su apoyo, para lo cual conformaron el frente Unidad Democrática Autonomista (UD-A).

La ruptura entre Oliva y sus excorreligionarios de Camino al Cambio comenzó a darse apenas tomó posesión el nuevo Gobierno Departamental. Vanguardia Integración había cedido a Mauricio Lea Plaza y María Lourdes Vaca las principales candidaturas para la Asamblea Departamental, pero se negó a incorporar a otros dirigentes de dicha agrupación al gabinete. De tal manera que, durante el resto del periodo, Camino al Cambio, en forma similar al MAS, se embarcó en una feroz oposición desde el seno mismo de la Asamblea.

Al igual que Oliva, Rodrigo Paz Pereira, el nuevo alcalde de Tarija-Cercado en ese período, también rompió con el líder histórico de UNIR, aunque las circunstancias fueron completamente distintas. No obstante, Oliva inició la ruptura desde mucho antes de postularse a la Gobernación, mientras que Paz lo hizo después de ser electo.

Oscar Montes comenzó a promocionar a Paz durante el periodo 2010-2015, cuando lo designó candidato a concejal y, posteriormente, le dio un espaldarazo promoviendo como presidente del Concejo Municipal. Para las elecciones del 2015, cuando era evidente que Montes ya no podía repetir su candidatura al municipio (pues había sido electo tres periodos consecutivos), designó como candidato a Paz Pereira y, como era de esperar, el nuevo alcalde ganó la contienda, arropado por el caudal electoral del jefe de su agrupación. Paz Pereira rompió con Montes apenas se inició la gestión, quedándose con la mayor parte del aparato burocrático que había acompañado al anterior alcalde en la pasada gestión y también con la mayoría de los concejales electos por UNIR.

Asimismo, también intentó arrebatarse a Montes la sigla de su agrupación, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió dicha contienda a favor del exalcalde. De ahí que Paz Pereira tuviera que crear una nueva organización política local con el nombre de Primero la Gente. Durante los cinco años de su mandato como alcalde, se desarrolló una batalla cruenta en los barrios tarijeños y en los medios de comunicación locales entre estos dos líderes políticos.¹²

Tanto Paz Pereira como Oliva confrontaron diversas dificultades en su gestión, y el hecho de que no hubieran podido repetir sus respectivas victorias electorales en los comicios de 2021 (y de que los miembros de las generaciones anteriores hayan retomado los liderazgos tarijeños de la oposición al MAS en esos años), plantea la posibilidad de que se trate una “generación perdida”.

Sin embargo, los escollos que enfrentaron Paz Pereira y Oliva durante sus respectivas gestiones fueron de distinta naturaleza. El alcalde, que tuvo la comodidad de contar con una situación económica estable y con mayoría en el Concejo Municipal, se embarcó desde un principio en lo que la opinión pública denominó como “obras millonarias”; es decir, proyectos que concentraban grandes porciones del presupuesto municipal. Es el caso, por ejemplo, de la Ciudad Inteligente, del Puente 4 de Julio (conocido como “puente millonario” en la medida en que costaba dos o tres veces más que el puente más caro, construido hasta el momento en la ciudad) y, sobre todo, del denominado “Hito Histórico” o “Mástil millonario”.

Esta última obra se convirtió en un auténtico símbolo del despilfarro según la percepción de la mayor parte de la población, no tanto por el costo (que oscilaba entre

12 La extrema violencia verbal en los enfrentamientos que se suscitaron entre Paz Pereira y Montes en este periodo se puede evidenciar en numerosas notas de prensa; véase, por ejemplo, “Rodrigo Paz a Montes: ‘El Pueblo de Tarija no es estúpido’” (*El País*, Tarija, 22/08/19).

Bs 5 y 7 millones, si es que se contabilizan o no las obras complementarias), sino por su discutible utilidad y por el lugar en que fue construido (un mástil enorme, en medio de las barriadas más pobres de Tarija, que carecen de servicios básicos como agua potable y alcantarillado). Circularon también diversas versiones sobre un supuesto sobreprecio.

Gran parte de la gestión de Paz se agotó en los argumentos esgrimidos para justificar las obras mencionadas, mientras en la opinión pública se instalaba una percepción de desconfianza respecto a su gestión. De tal manera que, a medida que se acercaba la fecha de la nueva contienda electoral, quedó claro que iba a ser muy difícil para la autoridad repetir el triunfo del 2015, de ahí que finalmente optara por ser candidato a senador por Comunidad Ciudadana (opción contraria a la de la mayor parte de los líderes políticos locales, los cuales generalmente aspiran a pasar de los puestos en el Legislativo nacional a los de los poderes ejecutivos departamental o local) y dejara a su agrupación fuera de la contienda electoral.

En el caso de la gestión de Oliva, desde un principio se encontró con una situación política y económica adversa. Por una parte, tuvo que sufrir la oposición cerrada desde la Asamblea Departamental motorizada por el MAS y Camino al Cambio y, por otra, heredó una crisis económica superlativa. La gestión de Lino Condori había realizado numerosos contratos en el momento en que el departamento tenía un récord de ingresos merced a los altos precios de los hidrocarburos, bajo la suposición de que los mismos iban a mantenerse a futuro.

A Oliva le tocó, además, lidiar con la baja tanto de los precios como de la producción hidrocarburífera, merced a lo cual se desató una verdadera batalla entre las instancias de gestión en el departamento (Gobernación, subgubernaciones electas, municipios) por apoderarse de la mayor parte del esmirriado presupuesto departamental. Como parte de esa batalla, la Asamblea Legislativa dictó la Ley 206, conocida popularmente como la “ley del ocho por ciento”, mediante

la cual se destina de manera automática ese porcentaje a beneficio de los municipios de Tarija (uno por ciento para cada municipio que no es de la zona del Chaco, ya que esta cuenta con su propio presupuesto). Sin embargo, al tomar en cuenta para el cálculo la totalidad del presupuesto departamental (incluyendo el 45% que recibe el Chaco), en realidad dicha norma termina arrebatando, de manera automática, aproximadamente un 15,5% de la totalidad de recursos que gestiona la Gobernación.

La promulgación de esta ley dio lugar a una serie de conflictos económico-legales entre el Ejecutivo, la Asamblea y los municipios, y culminó con el uso indiscriminado de los denominados “débitos automáticos” (que se mantienen hasta ahora) y que tienen al presupuesto departamental dependiendo de las acciones de los municipios y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entidad que ejecuta dichos “débitos”.

La crisis económica afectó a la Gobernación la cual, si bien durante su gestión mostró un buen manejo estratégico y comunicacional, acusó debilidad en el área administrativa. Por otra parte, el agravamiento del contexto general, debido a la crisis del Covid-19, debilitó al conjunto de las autoridades político-administrativas. Oliva se presentó a las elecciones del 2021, pero no pudo repetir el resultado del 2015.

La renovación de liderazgos y el ciclo político-electoral 2018-2021 en la oposición al MAS

La renovación política en lo que se puede denominar, genéricamente, como oposición en Tarija, ha tenido dos fuentes principales: primero, la de los liderazgos surgidos de las plataformas ciudadanas o colectivos opositores gestados principalmente durante las movilizaciones del 2019 y, en segundo término, la de figuras emergentes en el curso de las gestiones de Oliva y Paz Pereira.

Al igual que en el resto del país, los grupos ciudadanos opositores que se movilaron en oposición a la reelección

de Evo Morales crecieron no solo al margen de los partidos tradicionales, sino en muchos casos en oposición a ellos. En Tarija, dichos grupos se alimentaron de otro tipo de organizaciones, tales como clubes de voluntarios, activistas ambientales y las denominadas “cuerdas”, una suerte de organizaciones sociales juveniles, similares en algún caso a las “fraternidades” cruceñas.

Pasada la movilización de octubre-noviembre de 2019, dicho movimiento fue incapaz de adquirir una perspectiva política propia, por lo que varios de sus miembros fueron absorbidos por las agrupaciones y partidos tradicionales que compitieron por incorporar en sus filas a los más representativos, aunque sin otorgarles puestos de relevancia, ni en sus mandos dirigenciales ni en las candidaturas legislativas. Mariela Baldivieso y Luciana Campero, la primera diputada uninominal y la segunda diputada plurinominal suplente por Comunidad Ciudadana, son dos dirigentes representativas de dicho movimiento. Por su parte, Rolando Vacaflor, actual director de turismo de la Alcaldía de Cercado, también es un dirigente proveniente de las organizaciones juveniles.

En el caso de los liderazgos surgidos de las gestiones de Oliva y Paz Pereira, destacan nombres como los de Lily Morales, que fue encargada de diversos programas sociales en la Gobernación, y de Patricia Paputsakis, que jugó un rol similar en la Alcaldía de Paz Pereira. Morales tenía la intención de postularse a una diputación uninominal, sin embargo, el alineamiento de Oliva con la candidatura de Jeanine Áñez finalmente se lo impidió. Por su parte, Paputsakis, al ver que Paz Pereira desistió de presentar una candidatura propia, decidió lanzarse con su propia agrupación a la que denominó Basta; empero, los resultados le fueron esquivos, ya que solo pudo alcanzar un 1,45% de la votación.

Un liderazgo nuevo, interesante, es el de la concejala por Tarija-Cercado, Marcela Guerrero, electa por Unidos el 2021. Se trata de una dirigente campesina de mucho prestigio

y, dada su extracción, en general se daba por sentado que desarrollaría su vida política en el MAS. Sin embargo, ella optó por incorporarse a UNIR de Oscar Montes y desde allí candidatear por Unidos. Las razones que adujo para su incorporación fueron las del bloqueo a la que la sometieron los dirigentes tradicionales del partido de gobierno. En el futuro veremos si la actuación de la dirigente queda diluida o si genera algún nuevo tipo de liderazgo social en el departamento.

Finalmente, una candidatura nueva que concitó cierto nivel de apoyo en la elección es la del activista ambiental Gonzalo “Chulo” Torres,¹³ quien detenta una larga trayectoria en la protección a los animales. En este caso con la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Torres consiguió obtener un concejal, con el 8,34% de los votos; sin embargo, su representante en el Concejo Municipal (el exasambleísta del MAS, Erwin Mansilla), pocos días después de la elección decidió seguir un camino político distinto, por lo que no se espera que exista una proyección política de la agrupación de “Chulo” Torres a futuro en el ámbito municipal.

La movilización del 2019, por parte de sectores antimasistas de jóvenes de la clase media tarijeña, pudo haber servido como un semillero de nuevos dirigentes de la oposición; sin embargo, el hecho de que estos no contaran con una organización política propia y que, en consecuencia, fueran absorbidos por las agrupaciones y partidos tradicionales, ocasionó que dicho potencial se diluyera, salvo con algunas excepciones, como las mencionadas arriba. En todo caso, por ahora no se vislumbran nuevos liderazgos emergentes con el peso suficiente para disputar las jefaturas tradicionales.

13 Torres, que es hermano del candidato ganador, Johnny Torres, ya fue candidato a alcalde en las elecciones del 2015, aunque sin lograr ningún concejal.

Renovación y fricciones partidarias en el MAS, en el periodo 2018-2021: masistas, “invitados” y “azulados”

Si en la oposición la disputa de liderazgos se dio entre las “antiguas” y las “nuevas” generaciones (en general dentro de las élites departamentales), en el caso del MAS la confrontación se ha desarrollado enfrentando a los dirigentes de los movimientos sociales, con los denominados “invitados”, que provienen de sectores empresariales y de la clase media tradicional.

En general, durante los procesos electorales que van del 2010 al 2021, la lógica partidaria consistió en colocar a “invitados” en las candidaturas visibles o electas por voto directo (gobernador, alcalde, diputados uninominales), de tal manera que pudieran arrastrar detrás de sí a sectores de la clase media, mientras que para las candidaturas menos “visibles” o no electas por voto directo (asambleístas plurinominales, concejales, asambleístas departamentales) se nominaba a miembros de las organizaciones sociales.

Esa forma de distribución de factores de poder condujo a que se diera una suerte de equilibrio, siempre tenso, entre unos y otros. Los movimientos sociales permanentemente reclamaron sobre la poca “utilidad” de los “invitados”, pero, a su vez, en el momento de la verdad, aceptaron su presencia. De igual manera, ambos sectores desarrollaron sus propios mecanismos de comunicación con los niveles superiores partidarios y gubernamentales.

Sin embargo, al igual que en el resto del país, el ciclo de conflictos iniciado en el 2019 y la “resistencia” frente al gobierno de Jeanine Áñez, posicionaron de manera dominante a los movimientos sociales, de tal forma que la mayor parte de los dirigentes y autoridades electas en el último periodo están en la órbita de estos. La importancia de los “invitados”, entonces, se ha relativizado y los más visibles (Pablo Canedo, Ignacio Soruco, Rodrigo Ibáñez, Milciades

Peñaloza) han salido del radio de la actividad pública, por lo menos provisionalmente.

Sin embargo, la práctica política y el tiempo transcurrido desde el inicio del acercamiento del “instrumento político” a los sectores de clase media, ha creado una suerte de tercera categoría a la que hemos denominado como “azulados”. Se trata de aquellos dirigentes que, si bien provienen de otros partidos o de sectores de clase media o empresariales, han logrado identificarse de tal manera con las organizaciones del MAS, que en este momento ya no son identificados como “invitados”, sino que, más bien, se integran con las instancias orgánicas masistas. Como veremos más adelante, este grupo de dirigentes adquirió importancia en el ciclo electoral 2020-2021.

Entre los nuevos asambleístas departamentales y concejales electos por parte del MAS el 2021 en Tarija hay una predominancia de dirigentes gremiales o sindicales, que ya tienen experiencia en sus respectivos ámbitos, pero que entran a la política por primera vez; es el caso, por ejemplo, de Eider Quiroga, dirigente campesino que ahora es asambleísta departamental, o de Adriana Romero, dirigente gremial que asumió una de las concejalías por Tarija-Cercado. Sin embargo, esos dirigentes están acompañados por otros que ya tienen una larga trayectoria en la política local, como José Yucra y Marina Hoyos, intercultural el primero y dirigente de los desocupados la segunda, que también fueron electos asambleístas el 2021.

La actuación de los partidos y agrupaciones de oposición en el ámbito nacional durante del periodo electoral 2018-2020

Desde la implementación del régimen autonómico y la desintegración de los partidos tradicionales vigentes de la etapa de la democracia pactada, las fuerzas nacionales y las regionales de la oposición, en Tarija, juegan un curioso rompecabezas durante los periodos preelectorales; más allá

de las afinidades o diferencias ideológicas, ambos polos calculan sus mejores opciones para una articulación efectiva. Las fuerzas nacionales tratan de “entroncarse” con los grupos regionales de mayor presencia territorial, ya que ellas prácticamente no cuentan con ninguna. Por otra parte, las agrupaciones departamentales y municipales calculan qué candidato nacional tiene mayores posibilidades no solo de proporcionarles un paraguas favorable para el arribo de sus candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino, eventualmente, para compartir espacios en el gobierno en caso de ganar las elecciones. Generalmente ocurre entonces que las listas de candidatos al Legislativo nacional por Tarija están integradas, en su mayor parte, por miembros de las fuerzas regionales aliadas, aunque uno o dos puestos de preferencia se les conceden a las fuerzas nacionales, como parte de la negociación.

Sin embargo, en nuestro caso, la dinámica política que se dio en el periodo 2018-2020 determinó que el partido mejor posicionado en legisladores en el ámbito nacional, Comunidad Ciudadana, no esté relacionado con ninguna fuerza departamental o municipal, de presencia territorial importante. Los partidos y agrupaciones que acompañaron a Carlos Mesa, el 2020, tienen escasa presencia en Tarija y, por tanto, las listas de parlamentarios de Comunidad Ciudadana están integradas, sobre todo, por personalidades independientes.

¿Cómo se produjo este fenómeno? Para las elecciones generales del 2019, luego declaradas “sin efecto legal”, Comunidad Ciudadana decidió aliarse con una de las agrupaciones “fuertes” tarijeñas, Todos, encabezada por el gobernador Adrián Olivia (por otra parte, recordemos que el FRI, aliado de Oliva, es el partido que proporcionó a la alianza la personería jurídica). De tal manera que la otra agrupación “fuerte”, UNIR, debió plegarse a la candidatura de Oscar Ortiz mediante la alianza Bolivia Dice No. Camino al Cambio, debilitada por su década de oposición radical,

primero a la gestión de Lino Condori y luego a la de Oliva, definió, en principio, apoyar al candidato Fernando Camacho de Creemos, pero luego se retiró y optó por dar su apoyo al candidato con más posibilidades de vencer al MAS.

Luego de la anulación de las elecciones y de la asunción del gobierno interino de Áñez, la situación cambió radicalmente, ya que tanto Todos como UNIR definieron apoyar la candidatura (a la postre fallida) de la presidenta interina. UNIR, dos de cuyos miembros más prominentes, el senador Víctor Hugo “Ojorico” Zamora y la diputada Gina Torres, se convirtieron en miembros del entorno íntimo de la mandataria, terminó dividiéndose, y Oscar Montes abandonó la alianza que la respaldaba. Finalmente, al renunciar Áñez a su candidatura, Todos también quedó al margen de la contienda electoral.

Es por eso que los miembros más conocidos de la bancada de Comunidad Ciudadana, los senadores Rodrigo Paz y Soya Zamora, son miembros de fuerzas de carácter casi testimonial en la política tarijeña actual, Primero la Gente y el FRI, respectivamente, y por eso también el resto de su bancada está constituida por personalidades sin conexión partidaria (un resultado de esa situación fue el temprano “desmarque” de su diputado uninominal, Edwin Rosas, que en las elecciones subnacionales rompió la línea partidaria apoyando al candidato del MAS a la Gobernación).

Un caso atípico dentro de la política tradicional tarijeña fue el del MNR, partido que tiene una importante presencia en la ciudad de Tarija, gracias a la popularidad de su jefe departamental, Johnny Torres. En las elecciones del 2019, la organización definió apoyar la candidatura de Virgilio Lema, presentándolo como una suerte de *outsider* alternativo a los políticos de la oposición tradicional. La experiencia, sin embargo, no dio buen resultado, ya que el MNR obtuvo un 0,6% a nivel nacional y un 1,8% en Tarija. Si las elecciones no hubieran sido declaradas sin efecto legal por parte de la Asamblea Legislativa, dicho partido habría perdido

su personería jurídica. Posteriormente, en las elecciones generales del 2020, la organización definió desmarcarse del candidato nacional (Tuto Quiroga) y apoyar al que tuviese más posibilidades de ganarle al MAS.

La situación de los partidos y agrupaciones de oposición después de las elecciones subnacionales del 2021

El contexto general, negativo por la crisis económica y sanitaria, por las fallas en la gestión y los errores políticos, como el apoyo definido por parte de Todos a la fracasada candidatura de Jeanine Áñez, condujeron a la desaparición, en términos concretos, de las agrupaciones que, bajo el mando de Oliva y Paz Pereira, pretendieron renovar los liderazgos tradicionales tarijeños. Este fracaso, a su vez, contribuyó al reposicionamiento de la generación del M de Abril, que articuló en la alianza Unidos a UNIR, el MNR y Camino al Cambio.

Primero la Gente, de Rodrigo Paz, como hemos visto, terminó sin ninguna representación, ni en la Asamblea Legislativa Departamental ni en el Concejo Municipal de Cercado. Todos, de Oliva, por su parte, logró un tercer lugar con el 20,08% de los votos en la elección departamental, obteniendo dos escaños en la asamblea, aunque ocupados no por políticos de la agrupación sino por aliados (un dirigente vecinal y un miembro del entorno de Willman Cardozo). En su candidatura al municipio de Cercado, Todos logró el tercer lugar, obteniendo un concejal, pero también en este caso perteneciente a un grupo aliado: la fracción disidente del MNR dirigida por Alfonso “Pica” Lema.

Una vez definida la segunda vuelta para la Gobernación, Oliva se negó a ofrecer un apoyo explícito a Unidos de Oscar Montes, en contra del MAS, lo que supuso la ruptura de su grupo, ya que Alan Echard, su candidato a alcalde, sí se definió por el apoyo a Montes y, en la actualidad, ha asumido un puesto en el Ejecutivo, lo que lo convierte en parte del equipo

del nuevo gobernador. Por su parte, los otros dos miembros del grupo directivo de Todos, Waldermar Peralta y el mismo Adrián Oliva, han señalado, en declaraciones a la prensa, que se dedicarán a la actividad privada, por lo que se entiende que su agrupación ha entrado en una suerte de receso.

Unidos, compuesto por UNIR, MNR, Camino al Cambio y Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina, si bien perdió por escaso margen en la elección para gobernador en la primera vuelta, obteniendo un 38,05% frente al 38,17% del MAS, finalmente se impuso en la segunda vuelta con un 54,44% a favor de Oscar Montes frente al 45,56% obtenido por la candidatura de Álvaro Ruiz.

En el caso de Tarija-Cercado, Unidos, encabezado por Johnny Torres se impuso con un cómodo 53,68% frente al 25,36% obtenido por el MAS que postuló a Rodolfo Meyer, con lo que se reafirmó la vocación opositora de la urbe tarijeña. Y en las provincias, el frente logró dos triunfos significativos al ganar los municipios de Uriondo y Entre Ríos, otrora bastiones del partido del gobierno.

El triunfo de Unidos ha significado el reposicionamiento de la generación M de Abril; pero su futuro dependerá de la calidad de la gestión de Montes, en momentos en que la Gobernación atraviesa por una crisis económica nunca vista antes, por lo menos en el último siglo.

El desempeño del MAS en las elecciones subnacionales

Aunque con carácter simbólico, el MAS logró un triunfo en las elecciones departamentales del 2021: Álvaro Ruiz se convirtió en el primer masista en ganar una elección a Gobernador departamental en Tarija, pero no alcanzó la ventaja suficiente como para evitar el balotaje en segunda vuelta, donde finalmente resultó derrotado. Ruiz no logró, en primera vuelta, la mayoría absoluta o el 40% de los votos, con una diferencia de 10 puntos respecto al segundo, requeridos por la norma.

Pero más allá de ese dato, si vemos con detalle el resultado de las subnacionales, nos daremos cuenta de que, en conjunto, el partido de gobierno sufrió un retroceso en diversos ámbitos: disminuyó en tres escaños su presencia en la Asamblea Departamental y perdió dos municipios en los cuales se suponía que tenía una fuerte presencia electoral.

¿Cuál es la razón por la que el fuerte desgaste sufrido durante la gestión de Olivia no benefició a la candidatura masista? Probablemente, la contradicción existente entre la estrategia electoral seguida por su candidato, conciliadora y de acercamiento a los sectores de la clase media, y las directrices políticas nacionales que, más bien, priorizaron la línea dura y la confrontación.

Frente al desplazamiento de los “invitados” por parte de los movimientos sociales, durante el gobierno de Áñez el MAS recurrió, para las elecciones subnacionales, a candidatos que hemos denominado como “azulados” (los cuales, originalmente no provienen del núcleo masista, pero que, en virtud de su acercamiento a las organizaciones sociales y de su trabajo orgánico en el partido, lograron superar el estigma de ser “invitados”). Tanto Álvaro Ruiz, candidato a gobernador, como Rodolfo Meyer, candidato a la Alcaldía de Cercado, son empresarios provenientes de la clase media tradicional tarijeña, pero que en los últimos años se acercaron notoriamente a las bases masistas. Meyer ha sido uno de los asesores principales de la Federación de Campesinos y Ruiz, desde sus funciones como alcalde de Uriondo, se convirtió en una de las principales cabezas del accionar partidario en Tarija.

Para acceder a la candidatura, Ruiz tuvo que vencer a un duro rival, el subgobernador de la provincia O'Connor, Walter Ferrufino, un dirigente “azulado” al igual que Ruiz (su primera elección la ganó como miembro del PAN), pero más ligado en imagen a los ámbitos rurales y provinciales.¹⁴

14 Sobre la dura batalla entre Ruiz y Ferrufino, véase “Candidatura a gobernador pone al MAS al borde de la fractura”, *Nuevo Sur*, Tarija 22/12/2020.

La dura refriega interna hizo que el partido de gobierno entrara debilitado a la contienda electoral; sin embargo, rápidamente el nuevo candidato desarrolló una estrategia de alto impacto: por una parte, hizo una serie de ofrecimientos vinculados a la crisis económica (bono para sectores productivos, inyección de cien millones de dólares en tres meses, etc.) y, por otra, desarrolló diversos mecanismos para atraer a la clase media, uno de los cuales fue la creación del grupo “Los Amigos de Álvaro”, de mucha actividad, donde se agruparon diversos miembros provenientes de los partidos de la oposición. A nivel dirigenal, para la segunda vuelta, Ruiz consiguió el apoyo de dos personalidades conocidas: Erwin Rosas, dirigente vecinal electo diputado por Comunidad Ciudadana pocos meses antes, y Valmore Donoso, presidente del Concejo Municipal, exdirigente juvenil adenista y recientemente vinculado a Creemos, de Luis Fernando Camacho.

Durante la campaña, Ruiz logró movilizar una gran cantidad de gente, especialmente en la ciudad de Tarija, mostrándose concertador y propositivo; sin embargo, sobre todo en el tramo final, diversas intervenciones de los dirigentes nacionales de su partido reafirmaron la estrategia de confrontación, lo que ostensiblemente quitó credibilidad a su línea estratégica de campaña.

Las dificultades sufridas por Ruiz ilustran los problemas que ha tenido el MAS, de forma estructural, en Tarija. Si bien Evo Morales logró ganar en su mejor momento en dos ocasiones –en las elecciones nacionales de 2009 y de 2014–, esos resultados nunca pudieron replicarse a nivel departamental. La explicación probablemente se encuentra en que su partido no ha podido desarrollar un discurso sostenido, creíble, a los ojos de la clase media, en sentido de que no es un factor adverso al “tarijeñismo”, es decir, a los “intereses departamentales”. Otro de los errores que cometió el partido de gobierno en ese sentido, en plena campaña por la segunda vuelta, fue el de volver a la práctica de los “débitos automáticos” sobre el presupuesto de la Gobernación. Todos esos elementos ayudan a entender el magro resultado final obtenido por Ruiz.

Uno de los problemas que puede atentar contra la acción política del MAS en el próximo periodo es la ausencia de una dirección política departamental. Pasada la elección, Ruiz fue nombrado viceministro de Autonomías y se trasladó a La Paz. Uno de los rasgos de los anteriores gobiernos del MAS, fue el de su férreo control territorial a través de la designación de ministros encargados de determinados departamentos. En el gobierno de Luis Arce esa práctica no se ha replicado, por lo que, al menos en el caso de Tarija, no existe una acción política centralizada por parte de ese partido.

De manera más general, podemos decir que mientras el partido de gobierno no desarrolle mecanismos que reduzcan su identificación con la “centralidad” existente en el país, le será difícil conquistar a la clase media y, en definitiva, terminar de romper el muro discursivo desarrollado por la élite, el cual, a pesar de haber sufrido diversos daños, aún logra convocar al carácter identitario del voto, tal como se ha demostrado en las pasadas elecciones.

El Chaco, ¿dos departamentos bajo el mismo nombre?

¿Qué es lo que une a la Región Autónoma del Gran Chaco con el departamento de Tarija en estos momentos? Muy poco, en lo que se refiere a gestión gubernamental. Casi nada, podríamos decir.

El Decreto Supremo 331, que dispone el traspaso directo del 45% de regalías desde el Tesoro General de la Nación a las cuentas de los subgobernadores chaqueños; y la Ley Departamental 079, que supuso el traspaso de la totalidad de las competencias departamentales exclusivas, establecidas en el art. 300 de la Constitución Política del Estado, a la Asamblea Regional Chaqueña, cortaron casi todo vínculo práctico entre el Ejecutivo departamental y la Región Autónoma del Chaco.

Antes, si bien el 45% estaba destinado automáticamente por norma a la región del Chaco, al pasar los dineros por el tesoro departamental, se obligaba a ambas instancias

(Gobernación y ejecutivos chaqueños) a una práctica de coordinación que ahora es inexistente. Por otra parte, el traspaso completo de competencias le ha dado, en los hechos, a la autonomía chaqueña la cualidad gubernativa que la Constitución niega a las autonomías regionales (concebidas como una instancia de planificación).

El único nexo normativo que une al Chaco con Tarija es aquel que señala que la Asamblea Departamental es la entidad que transfiere las competencias departamentales al Chaco (en el que se ampara la Ley 079). En teoría, entonces, la Asamblea podría modificar la Ley 079 y recuperar, parcial o totalmente, las competencias cedidas, pero eso es imposible en términos prácticos.

A partir de dichas herramientas normativas, la subélite chaqueña ha continuado con una estrategia incesante orientada a cortar todo lazo con la autoridad departamental. Uno de los pocos nexos que quedaban entre ambos ámbitos, el de las empresas desconcentradas de la Gobernación –SETAR (Servicios Eléctricos de Tarija) y EMTAGAS (Empresa Tarijeña del Gas)–, también ha comenzado a fraccionarse.

Ya en la gestión del último gobierno de Evo Morales las autoridades chaqueñas gestionaron la partición de EMTAGAS, para crear una empresa regional análoga; sin embargo, ante las dificultades jurídicas del caso, optaron por propiciar una intervención de YPFB a la “parte chaqueña” de la empresa (situación por lo demás irregular). Después de varias idas y venidas jurídicas, finalmente se consolidó la intervención. No se sabe si la empresa continuará con YPFB o si se creará la versión regional, pero lo real, en uno u otro caso, es que la administración tarijeña ya no tiene nada que ver con ella. Asimismo, los dirigentes chaqueños han señalado que seguirán el mismo camino con SETAR y con los servicios departamentales vigentes.

Al terminar de desmembrarse las instancias mencionadas, a las que habría que sumar algunos servicios que brinda el ente departamental, la Gobernación de Tarija perderá el último

vestigio de presencia territorial que le queda en el Chaco, ya no habrá ningún funcionario, de ningún tipo, que esté bajo su dependencia, y tampoco habrá proyectos conjuntos (a menos que se negocien entre instancias separadas, como ocurre con las gobernaciones de los otros departamentos); por tanto, el gobernador, más allá de la cortesía (o de las campañas electorales), no tendrá motivos para trasladarse al territorio autónomo del Gran Chaco.

En todo caso, las dos instancias autonómicas –la Gobernación y la máxima autoridad ejecutiva chaqueña– comparten la misma dependencia respecto de los ingresos provenientes de la producción de gas para sostener sus respectivos andamiajes autonómicos. Es probable que, de la crisis motivada por la reducción de los precios del gas, surjan nuevos elementos para reconstruir o seguir desmontando la relación entre el Chaco tarijeño y la institucionalidad departamental.

Los liderazgos políticos en el Chaco tarijeño

Pero no solamente en el terreno institucional el Chaco ha marchado a contramano de la orientación departamental en los últimos años, sino también en el político, como evidencian los resultados electorales del 2021. Mientras en el departamento de Tarija la oposición se reafirmó con las victorias de Unidos, en el Chaco, más bien, se produjo una confirmación del liderazgo del MAS, que obtuvo un conjunto de victorias tanto en la elección para la MAE (máxima autoridad del Chaco), como en las restantes subgobernaciones (Caraparí y Villamontes), así como en los tres municipios que integran la región.

Resultado de las elecciones del Ejecutivo Regional del Gran Chaco

Un dato no menor, que sin duda acrecentó la sensación de “victoria” del partido oficialista sobre la oposición, fue el de la dura derrota de Willman Cardozo en su candidatura a la

Alcaldía de Yacuiba. Cardozo no solo es el único dirigente “histórico” chaqueño que se negó a incorporarse o aliarse al MAS, sino también el más importante, el que dio línea a la reivindicación chaqueña en el 2005, planteando y logrando la aprobación de la Ley 3038, que institucionalizó la distribución de las regalías gasíferas otorgando el 45% al Gran Chaco y abrió el camino para la aprobación en referendo de la primera región autónoma de Bolivia.

Debido a la trayectoria reseñada, Cardozo ganó un aura de invencibilidad en las lides electorales, ya que nunca, hasta esta última elección, perdió en ninguna (y, más aún, generalmente las ganó por diferencias notables). De ahí que su derrota el 2021, con un tercer lugar y un 18,92% de los votos, sea significativa en el devenir de la política tarijeña.

La composición de los sectores dirigenciales del MAS en el Chaco, tras las elecciones del 2021, marcan un equilibrio entre el reposicionamiento de sus dirigentes “históricos” y la aparición de nuevas figuras. Las tres alcaldías (las entidades más estables en cuanto a asignación de recursos) fueron ocupadas por los viejos líderes que formaron el PAN: Carlos Bru en Yacuiba, Rubén Vaca en Villamontes y Hermas Pérez en Caraparí. Sin embargo, en la MAE y en los ejecutivos asoman nuevos nombres como los de José Luis Abrego, o Karen Sánchez en el Ejecutivo de Villamontes.

La “vuelta” de los viejos dirigentes se debe, en gran parte, a la misma razón que determinó el desgaste de Oliva: un contexto adverso para las autoridades que fueron electas en el 2015 por agrupaciones ajenas al MAS. Es el caso del Ejecutivo seccional de Villamontes, Robert Ruiz, de ISA, por ejemplo, o del alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos.¹⁵

15 El caso de Vallejos es ilustrativo, ya que fue electo como autoridad opositora, gracias al caudal electoral de Willman Cardozo; sin embargo, pocos días después de ser posesionado rompió con su mentor y se declaró militante del MAS.

Las perspectivas

El próximo periodo histórico estará signado por la prueba de fuego del régimen autonómico: su capacidad de subsistencia frente a la disminución de los ingresos provenientes de las regalías de hidrocarburos. Este tema, de carácter estructural, llevará al departamento (y probablemente a la región autónoma del Chaco), de manera ineludible, a plantear cambios en el pacto fiscal, con la esperanza de que desde allí emerjan nuevas fuentes de recursos para sustentar este nivel autonómico.

Sin lugar a dudas, Tarija es el departamento que ha sufrido mayores cambios a nivel institucional durante el proceso constituyente, especialmente centrados en la consolidación de la autonomía regional chaqueña. Esa restructuración ya se ha planteado en sus aspectos fundamentales, pero el (re)encuentro entre las provincias tarijeñas y la ciudad capital –o, en otras palabras, la posibilidad de una concertación de intereses entre las élites departamentales, las provinciales y el movimiento campesino– todavía es un tema cuya resolución constituye una incógnita. El futuro nos dirá cuál es el itinerario que sigue un departamento que encontró sus propios mecanismos para integrarse al cambio global que ha vivido nuestro país.

En la gestión que durante 15 años desempeñó como alcalde Oscar Montes se desarrolló una política centrista merced a la cual, en muchos casos, fue un aliado implícito del gobierno de Evo Morales, sobre todo en la época en que era gobernador el opositor radical Mario Cossío. El próximo periodo nos dirá si Montes puede reeditar esa política y lograr un acercamiento con el gobierno nacional el cual, dada la crisis que vivimos, podría ser beneficioso para ambas instancias.

Una de las incógnitas más importantes en la evolución política tarijeña de los últimos años es la que enunciamos líneas arriba: ¿Por qué el enorme desgaste político que sufrió a nivel nacional el gobierno de Jeanine Áñez, así como el

notable deterioro, sobre todo debido a temas de contexto, que sufrió a nivel regional la gestión de Adrián Olivia, no repercutieron en un mejor desempeño electoral del MAS, tanto en el nivel nacional como en el local, y más bien fueron a reforzar a otros actores de la oposición como Carlos Mesa y Oscar Montes?

Anteriormente, en el nivel nacional, el MAS, a la cabeza de Evo Morales, logró dos victorias en Tarija y, sin embargo, en este último ciclo electoral, tanto en las elecciones del 2019 como en las del 2020, quien se impuso fue Carlos Mesa. En el terreno local, como hemos visto, en 2021 el MAS disminuyó su representación en la Asamblea Departamental y perdió en dos municipios donde tenía fuerte arrastre. ¿Cuál es la razón de este fenómeno político?

En nuestro criterio, el problema radica en que la política de confrontación que emerge del nivel nacional del MAS –que, como hemos visto, contradijo la de su propio candidato a gobernador, Álvaro Ruiz, en la campaña electoral del 2021– se complementa con el discurso del “tarijeñismo” de los sectores “duros” de la oposición en Tarija. Es decir que, ante cada gesto hostil del nivel central, se refuerza la noción del “antitarijeñismo centralista” que está anclada en la “memoria larga” de la clase media tarijeña.

¿De dónde sale la noción de que hay un “antitarijeñismo” en el gobierno central respecto a Tarija (noción completamente distinta a la del Chaco donde, más bien, se considera al gobierno como un aliado)? A nuestro juicio, básicamente de políticas arraigadas en percepciones que se han ido concatenado con el paso de los años. La primera percepción es que Tarija es un departamento multimillonario con ingresos ilimitados gracias a gas, realidad que, por lo menos desde el 2015, se ha visto desmentida de forma rotunda. La segunda percepción se corresponde con el tópico de que tratando con “mano dura” a los gobiernos regionales opositores de Tarija se logrará doblegarlos y ganar a sus electorados, lectura que hace tiempo ha demostrado ser falsa no solo en Tarija,

sino en otras latitudes del país (recordemos, por ejemplo, el efecto imprevisto que tuvieron las expresiones amenazantes del embajador Estados Unidos, Manuel Rocha, en reforzar la votación del MAS el año 2002).

Durante el gobierno interino de Lino Condori, evidentemente, se tenía la impresión de que los recursos de Tarija eran inagotables (se llegó a disponer de un presupuesto anual de, aproximadamente, Bs 4.000 millones). En ese periodo se realizaron compromisos con el gobierno central y se reafirmaron otros que, sin duda, debilitaron la economía tarijeña y que hoy son insostenibles. El cobro de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) a la Gobernación por el interconectado de energía eléctrica a nivel nacional,¹⁶ la renuencia de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) a aceptar el traspaso de la variante Canaletas-Entre Ríos del camino al Chaco,¹⁷ o el pago del capital e intereses por el

16 De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la “política de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía en el sistema interconectado” (art. 298, II.8) es obligación del gobierno nacional. Sin embargo, sin ninguna razón que lo justifique, el gobernador interino, Lino Condori, firmó un convenio en 2014, según el cual la Gobernación se hace cargo de dicho costo. Eso ha significado, en los hechos, que Tarija se encuentre en la insólita situación de ser la única región del país en pagar ese tipo de infraestructura y que Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) se coloque en la ridícula situación en que, siendo una empresa de distribución, tenga también la obligación de pagar el transporte de la energía. Los Bs 185 millones comprometidos para esta asignación han resultado imposibles de pagar debido a la crisis económica y se han convertido en el pretexto para que ENDE no concluya los trabajos de interconexión en territorio tarijeño.

17 De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia existentes, el gobierno nacional paga, a través de la ABC, por lo menos un 70% de la construcción de carreteras de la red nacional. En Tarija, en la mayor parte de los casos, es la Gobernación la que ha corrido con dichos gastos. La variante Canaleta-Entre Ríos, pieza central de la vinculación carretera al Chaco, fue construida con el 100% de recursos departamentales. Se la eligió como una variante respecto a la ruta tradicional que pasa por la zona

crédito que posibilitó la ejecución del proyecto San Jacinto,¹⁸ son unos pocos (entre muchos) ejemplos de lo que podrían considerarse abusos contra Tarija por parte del poder central.

Por otra parte, la política de “mano dura” contra la Gobernación de Tarija se ejemplifica con la Ley Departamental 206 de 21 de abril de 2017, de Transferencia de Recursos Económicos para Inversiones Concurrentes a los Gobiernos Autónomos del Departamento de Tarija. La propuesta de Ley ya había sido presentada a la Asamblea Departamental y rechazada durante la gestión de Lino Condori; sin embargo, se presentó nuevamente durante la gestión del opositor Adrián Oliva y esta vez fue aprobada. Esta norma, denominada como “Ley del 1%” por sus defensores y como “Ley del 8%” por sus opositores, determina transferir el 8% por ciento del total del

de Narvárez, porque resultaba más conveniente por razones geológicas. Sin embargo, desde que se concluyó, la ABC se ha negado a hacerse cargo de los costos de mantenimiento de dicha variante con el pretexto absurdo de que “la ruta nacional es la que pasa por Narvárez” y que Canaletas-Entre Ríos es parte de la red caminera departamental. Lo que no pueden explicar los responsables de la ABC es la razón por la cual si, evidentemente consideran a Narvárez como parte de la ruta nacional, no la pavimentaron y mejoraron hasta ahora, manteniéndola como un camino de tierra completamente inservible para las necesidades del transporte nacional que pasa por Tarija.

- 18 El pago por los créditos para la construcción del Proyecto Múltiple San Jacinto es otro ejemplo de políticas nacionales hacia Tarija que, sin exageración, podrían formar parte de una galería del absurdo. Este proyecto, que empezó a construirse en los años ochenta, fue financiado por créditos provenientes de la Argentina en una primera instancia y de Italia en una segunda fase. Ambos créditos fueron luego condonados al Estado boliviano; el primero en virtud de acuerdos a los que se llegó con la Argentina en 1989 y el segundo como resultado del programa HIPIC, de alivio a la deuda que se implementó a finales de los años noventa. De tal manera que, tras las condonaciones referidas, Bolivia no paga ni un centavo por la construcción del proyecto y, sin embargo, el gobierno nacional cobra, religiosamente, la deuda a Tarija por una obligación nacional inexistente, en lo que constituye otra situación inexplicable en el ámbito de la racionalidad.

presupuesto departamental a los ocho municipios tarijeños que no son del Chaco (uno por ciento por municipio). Sin embargo, como la Gobernación de Tarija gestiona únicamente el 55% del presupuesto departamental (el restante 45% va directamente al Chaco), finalmente los municipios de quedan con aproximadamente un 15,5% del presupuesto de la Gobernación.

Desde el año 2018, aproximadamente, los acreedores de la Gobernación (entre ellos, en ocasiones, los propios empleados, que esperan sus sueldos atrasados), ya saben que cualquier deuda debe ser cobrada a la entidad inmediatamente después de que el gobierno desembolse los recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas, ya que, horas después de llegar estos recursos, los mismos son “debitados” automáticamente para pagar a los municipios las deudas emergentes de la Ley del 8% o al gobierno nacional las obligaciones que corresponden a los compromisos asumidos durante la gestión de Lino Condori. Durante los últimos meses de 2020 y los primeros de 2021, la situación llegó a ser de tal gravedad que los empleados de la Gobernación no pudieron cobrar varios sueldos y los beneficios sociales ya establecidos, como la canasta del adulto mayor o el PROSOL (bono de apoyo a los campesinos), se interrumpieron completamente.

Esa situación de incertidumbre económica genera, sobre todo en la ciudad de Tarija, donde la información fluye más rápidamente, desconfianza frente al gobierno nacional, y refuerza la percepción de que existen intereses “antitarijeñistas” en las esferas del gobierno central. De esa manera, como suele ocurrir en estas circunstancias, los sectores “duros” del masismo se complementan con los “tarijeñistas” radicales de la oposición.

Evidentemente, no solo por la salud de la democracia en el país, sino también como un requisito para lograr un adecuado funcionamiento institucional, se necesita replantear la relación entre el gobierno nacional y el departamental para superar la lógica amigo-enemigo.

Tarija vive hoy una etapa de transición; necesita superar el modelo rentista, que implica además una práctica política centrada en las peleas fratricidas por la administración de porciones del presupuesto departamental, convertido en una suerte de alfa y omega de los políticos locales. En ese sentido, la búsqueda de un acercamiento entre la “oposición” y el MAS es imprescindible.

La separación del Chaco de los mecanismos gubernativos departamentales, mediante el proceso de autonomía regional, es una alerta para la élite tarijeña, ya que no es imposible pensar que otras secciones municipales –las del subandino especialmente (Entre Ríos y Bermejo)– podrían querer seguir un camino similar.

La adecuada gestión de la crisis económica y el desarrollo de una política de concertación, en consecuencia, son factores imprescindibles para el inicio de un nuevo periodo de gestión autónoma fructífera para el conjunto departamental.

Previsiblemente, la generación del M de Abril agotará su ciclo en la actual gestión, por lo que la renovación de liderazgos se convierte en un serio problema para la oposición, dados los duros golpes sufridos por Oliva y Paz Pereira durante el anterior periodo. Por otra parte, al MAS aún le resta concretar la conquista de la clase media tarijeña para lograr la victoria en las instancias departamentales. Mientras esto no ocurra, la pirámide y el muro que la defiende seguirán resistiendo, a pesar de los duros golpes que les ha infringido el proceso político en los últimos 15 años.

VIII

Cochabamba, voto dirigido y militante luego de la dramática crisis política estatal de 2019 y dos elecciones sucesivas: Ciclo electoral 2020-2021

*José De La Fuente Jeria y
José Andrés De La Fuente Bernal*

Introducción

Cochabamba, a juzgar por los datos electorales, afrontó las elecciones generales del 18 de octubre del 2020 y las de los gobiernos departamentales y municipales¹ del 7 de marzo del 2021 con la convicción de que, frente a la pandemia que nos arrinconó como país y a la gravísima crisis política todavía en pie, debían ser las urnas las que devuelvan los mínimos democráticos de certidumbre, estabilidad y optimismo político y social.

El ciclo electoral que se analiza aquí constituye un retorno de la democracia luego de más de un año crítico marcado por una extrema tensión y polarización política en torno a los resultados electorales de las elecciones generales de 2019² y a un quiebre institucional sostenido en una inaudita serie de hechos de violencia política con dos masacres de inicio, violaciones flagrantes y masivas de los derechos civiles y detenciones arbitrarias. El interinato,

1 Cabe señalar que, en Raqaypampa, constituido como Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) desde 2018, solo se votó para la elección del Gobierno Departamental.

2 Marcadas por el inocultable e inaceptable desconocimiento de los resultados del Referéndum de febrero de 2016.

en tanto forma institucional que tomó el mentado quiebre institucional, terminó en una gestión gubernamental agotada, en un contexto de enorme desazón y fracaso social y político que desbandó el lado opositor al proceso político iniciado el 2006. El resultado global de la crisis fue un ambiente político crispado por los múltiples enfrentamientos a lo largo del país y los bandos atrincherados en los extremos políticos, por lo cual las elecciones generales y subnacionales fueron catalizadores democráticos y resolutivos de la mayúscula crisis política, social, económica y sanitaria que el país vivió por más de un año y cuyos principales efectos han perdurado en la forma de una fuerte polarización social y política, especialmente alimentada mediáticamente y desde los extremos políticos, junto a un marcado desgaste de la oposición y a un repunte del MAS, partido con un proceso de renovación en ciernes que ha puesto en cuestión o ha desaparecido varios de los liderazgos vigentes antes de las elecciones generales.

Frente a estos hechos políticos y sociales, de tanta significación y trascendencia política e histórica, surge la inevitable pregunta –o conjunto de preguntas– sobre las consecuencias electorales y políticas que las elecciones del ciclo 2020-2021³ registran y que, obviamente, concentran diversos cambios, reajustes, desplazamientos y no pocas fracturas políticas al interior de las organizaciones políticas, de las propias organizaciones sociales y, naturalmente, de la sociedad boliviana en general.

En este sentido y, en términos generales, Cochabamba no fue la excepción política o social de lo sucedido en el país a raíz de la profunda crisis, aunque todo indica que hay una enorme y positiva particularidad en los resultados globales y en el manejo político institucional de la postcrisis y, luego, de las

3 Cotejar los resultados electorales de este periodo con los registrados en las elecciones generales del 20 de octubre del 2019 es un trabajo que falta desarrollarse porque los datos, lamentablemente, recién están disponibles. Sin embargo, lo poco que se pudo observar en este sentido parece muy valioso.

elecciones departamentales y municipales. Por lo menos esto señalan los datos electorales en cuanto a la reconfiguración de las fuerzas políticas y de sus liderazgos departamentales y locales, fenómeno que es preciso analizar para que, puesto en evidencia, sirva de lección aprendida. Podemos aprender respecto de la comprensión de la coyuntura departamental y acerca de la coyuntura política nacional, especialmente sobre el actual periodo constitucional que concluirá con el Bicentenario de la República-Estado Plurinacional de Bolivia, en agosto de 2025.

Esta es la expectativa y la ilusión del trabajo que se presenta y que centralmente busca contestar la pregunta: ¿cómo hemos quedado, políticamente y como departamento, luego de una crisis política y estatal tan profunda? Pregunta que la vamos asimilando con el histórico estoicismo político el cual, tantas veces, nos ha permitido salir de las honduras de los enfrentamientos políticos y sin que siquiera asome la alternativa de un régimen de fuerza o militar.

1. Elecciones generales

a) Elecciones generales 2019

Las elecciones generales del 2019 quedaron sin efecto legal,⁴ luego de la caída del Gobierno de Evo Morales. La confusa, convulsa y dramática situación política que acabó con los 14 años de gestión del proceso de cambio, emergió de la suspensión de la validez de las elecciones al medio de una convulsión político-social que deriva en el derrocamiento-

4 Dejadas “sin efecto legal” mediante la Ley N.º 1266, del 24 de noviembre del 2019 que, en su art. 2, par. 1, así lo dispone. Esta ley también convocó a nuevas elecciones para el mandato constitucional 2020-2025 pero sin fijar fecha, esta fue postergada dos veces –los comicios debían celebrarse, originalmente, el 3 de mayo de 2020 pero fueron aplazados, por la irrupción de la pandemia, hasta una fecha que tenía como límite el 2 de agosto–; luego, el TSE, de manera unilateral, volvió a postergar las elecciones fijadas para el 6 de septiembre hasta el 18 de octubre.

renuncia del entonces presidente Evo Morales y la ilegal auto-proclamación de Jeanine Áñez. La situación explotó tras la controversia originada por la suspensión del TREP y que coincidió con la narrativa de “fraude” estructurada de antemano⁵ y el pronunciamiento ilegítimo, tanto por su premura como por su inconsistencia, de la OEA en referencia a la presencia de “irregularidades” en el proceso electoral.

En cuanto a los datos básicos registrados y recientemente liberados por el organismo electoral sobre las elecciones generales 2019 (ver tabla 1), podemos decir que se observa un alto nivel de participación, con el 88,31% a nivel general y el 90,32% a nivel departamental en Cochabamba. El 96,71% de los votos válidos se concentran, para el departamento y de manera análoga en la votación general –con el 92,37%–, en tres partidos: el MAS-IPSP con el 57,52% –frente al 47,08% a nivel general–, CC con el 32,21% –frente al 36,51% a nivel general– y PDC con el 6,98% –frente al 8,78% a nivel general–.

En la desagregación de esta información a nivel departamental, se evidencia que Cochabamba es el departamento donde mayor votación porcentual logró el MAS –con el referido 57,52%– y que este fue un voto, de una u otra manera, bastante contundente ya que se registró una participación del 90,32% de los votantes habilitados y el porcentaje de votos válidos llegó al 95,70%. Estos resultados hacen de Cochabamba el departamento donde el MAS obtuvo su mayor apoyo departamental, quedando La Paz como el segundo departamento donde esta organización política superó la barrera de la mitad de los votos, con el 53,18%, en una votación igualmente convencida al registrar una participación del 91,64% y un 95,33% de votos válidos.

5 Algunas fuentes ubican el diseño de esta estrategia en julio de 2019: Rubén Atahuichi, “En una cena en junio de 2019, EEUU supuso fraude y pidió ‘levantar la voz’ a Brasil, Perú y Argentina”, *La Razón*, 14 de julio de 2020, disponible en: <https://www.la-razon.com/nacional/2021/07/14/en-una-cena-en-julio-de-2019-eeuu-supuso-fraude-y-pidio-levantar-la-voz-a-brasil-peru-y-argentina/>.

Tabla 1 Elecciones generales 2019: Resultado nacional y Cochabamba

Detalle	Cochabamba		Nacional		Total general	
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje
Votos válidos	1.145.988	95,70%	5.936.042	94,97%	6.137.671	95,00%
Votos blancos	13.362	1,12%	91.640	1,47%	93.507	1,45%
Votos nulos	38.149	3,19%	222.882	3,57%	229.337	3,55%
Votos emitidos	1.197.499	90,32%	6.250.564	89,62%	6.460.515	88,31%
Total habilitados	1.325.896	---	6.974.363	---	7.315.364	---
Total inhabilitados	4.824	0,36%	31.321	0,45%	32.852	0,45%
Total inscritos	---	---	---	---	7.315.364	---
Total actas	6.134	---	---	---	---	---
Total actas computadas	6.134	100%	---	100%	---	100%
Total actas anuladas	0	0,00%	---	---	---	---
Participación por actas computadas	---	90,32%	---	89,62%	---	88,31%
MAS-IPSP (Evo Morales - Álvaro García Linera)	659.188	57,52%	2.768.712	46,64%	2.889.359	47,08%
CC (Carlos Mesa - Gustavo Pedraza)	369.156	32,21%	2.186.352	36,83%	2.240.920	36,51%
PDC (Chi Yung Chung - Paola Barriga)	79.970	6,98%	522.582	8,80%	539.081	8,78%
Bolivia Dice No - 21F (Oscar Ortiz - Shirley Franco)	17.312	1,51%	256.937	4,33%	260.316	4,24%
PAN-BOL (Ruth Yolanda Nina - Leopoldo Chui)	6.343	0,55%	37.844	0,64%	39.826	0,65%
MTS (Félix Patzi - Lucila Mendieta)	4.996	0,44%	75.532	1,27%	76.827	1,25%
FPV (Israel Rodríguez - Justino Román)	3.461	0,30%	23.029	0,39%	23.725	0,39%
UCS (Víctor Hugo Cárdenas - Humberto Peinado)	2.937	0,26%	24.011	0,40%	25.283	0,41%
MNR (Virginio Lema - Fernando Untoja)	2.625	0,23%	41.043	0,69%	42.334	0,69%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Por otra parte, es importante tener en cuenta, como se verá en la siguiente tabla, que los altos niveles de participación, en conjunción con los altos niveles de voto válido, frente a un (relativamente) bajo porcentaje de votos blancos y nulos, permiten interpretar los porcentajes de votación obtenidos por cada tienda política como el resultado de una toma de decisión firme y consecuente por parte de un electorado altamente polarizado. Algo que, necesariamente, debe ser considerado al proseguir con el análisis de las elecciones generales del 2020 y, en general, con cualquier análisis respecto del campo político boliviano, con independencia del grado de desagregación que se pretenda emplear.

b) Elecciones generales 2020

Sobre la base de lo anterior, podemos analizar con algo más de detalle las elecciones generales del 2020. Lo primero que puede observarse es un ligero pero constante aumento respecto de 2019, en todos los niveles de participación, con el 90,60% en el departamento de Cochabamba, 89,79% a nivel nacional y 88,42% como nivel general de participación electoral. Con dos partidos –ADN y Libre 21– fuera del acto electoral, fueron cinco los partidos en contienda, de los cuales solamente tres tuvieron una votación relevante respecto de la representación político-territorial más importante: el MAS con el 65,90% en Cochabamba, 54,3% a nivel nacional y 55,11% a nivel general; Comunidad Ciudadana con el 31,68% en Cochabamba, 29,16% a nivel nacional y 28,83% a nivel general; y el partido recientemente creado, Creemos, con el 1,14% en Cochabamba; una votación marginal en el departamento, pero significativa a nivel nacional (14,06%) y general (14%), que hace necesario tener en cuenta a esta agrupación.⁶

6 Los departamentos donde Creemos superó el 5% de la votación son Tarija (5,35%), Santa Cruz (45,07%), Beni (23,70%) y Pando (26,22%). En referencia al número de votos directos, con un total de 717.742, Santa Cruz representa el 83,25% de su votación en el país, constituyendo el principal polo opositor departamental.

Tabla 2 Elecciones generales 2019: Resultados por departamento*

	Participación	MAS-IPSP	CC	PDC	21 F	MTS	Válidos	Blancos	Nulos	Emiitados	Habilitados
General	88,31%	47,08%	36,51%	8,78%	4,24%	1,25%	95,00%	1,45%	3,55%	6.460.515	7.315.364
Cochabamba	90,32%	57,52%	32,21%	6,98%	1,51%	0,44%	95,70%	1,12%	3,19%	1.197.499	1.325.896
Chuquisaca	88,13%	42,35%	44,22%	8,03%	1,96%	0,66%	93,09%	2,53%	4,38%	326.384	370.680
La Paz	91,64%	53,16%	29,83%	10,67%	1,19%	3,18%	95,33%	1,27%	3,40%	1.751.007	1.910.654
Oruro	90,91%	48,08%	32,96%	13,54%	1,65%	1,29%	94,84%	1,47%	3,69%	305.248	335.777
Potosí	87,84%	49,35%	32,84%	10,44%	3,35%	1,30%	91,80%	2,85%	5,35%	397.060	452.047
Tarija	86,94%	40,20%	42,42%	11,17%	2,71%	0,35%	93,74%	1,94%	4,32%	328.268	377.600
Santa Cruz	88,83%	34,76%	46,85%	6,88%	9,42%	0,25%	95,62%	1,13%	3,25%	1.655.353	1.863.543
Beni	85,94%	34,93%	34,77%	7,07%	17,40%	0,68%	93,96%	2,53%	3,52%	228.511	265.886
Pando	84,37%	44,29%	40,22%	7,67%	3,51%	0,81%	94,48%	1,85%	3,67%	61.234	72.580

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

* Se indica, en verde, los porcentajes superiores al 80%; en azul (50-80%); en negro (10-50%); en naranja (5-10%); y, por último, en rojo (menos de 5%). Del mismo modo se procede en las siguientes tablas.

En su momento, cuando se insistía en que renuncié a su candidatura en favor de Mesa, Camacho y su gente expresaron, al explicar su negativa, que su candidatura no era de simple oposición, sino de representación regional y entonces todo indica que la fuerte concentración del voto cruceño en su favor y, en menor medida en los otros departamentos, coincide con tal perspectiva.

Tabla 3 Elecciones generales 2020: Resultados nacionales

Detalle	Cochabamba		Nacional		Total general	
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje
Votos válidos	1.173.651	96,63%	5.996.402	94,98%	6.159.211	94,99%
Votos blancos	10.816	0,89%	90.296	1,43%	91.419	1,41%
Votos nulos	30.079	2,48%	226.761	3,59%	233.378	3,60%
Votos emitidos	1.214.546	--	6.313.459	--	6.484.008	--
Total habilitados	1.340.548	--	7.031.295	--	7.332.296	--
Total inhabilitados	23.037	1,60%	136.532	1,94%	s/d	--
Total padrón	1.443.179	--	7.626.141	--	s/d	--
Total actas	6.390	100%	34.157	100%	35.600	100%
Total actas computadas	--	100%	--	100%	--	100%
Total actas anuladas	--	0%	--	0%	--	0%
Participación por actas computadas	--	90,60%	--	89,79%	--	88,42%
Total electores inscritos	1.340.548	--	7.031.295	--	7.332.296	--
MAS-IPSP (Luis Arce Catacora - David Choquehuanca)	773.386	65,90%	3.281.803	54,73%	3.394.052	55,11%
CC (Carlos Mesa - Gustavo Pedraza)	371.826	31,68%	1.748.678	29,16%	1.775.953	28,83%
Creemos (Luis Fernando Camacho - Marco Antonio Pumari)	13.356	1,14%	843.170	14,06%	862.186	14,00%
FPV (Chi Yung Chung- Salvador Emilio Pinto)	11.867	1,01%	92.604	1,54%	95.255	1,55%
PAN-BOL (Feliciano Mamani - Ruth Yolanda Nina)	3.216	0,27%	30.147	0,50%	31.765	0,52%
ADN (María de La Cruz Bayá - Sergio Tarqui)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Libertad y Democracia - Libre 21 (Tuto Quiroga - Tomasa Yarhui)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Ahora, bajando a la desagregación a nivel departamental, la situación ha cambiado bastante frente a las elecciones generales de 2019. En las elecciones de 2020, el departamento donde el MAS obtuvo su mayor votación fue La Paz, con el 68,36% –con un mayor nivel de participación mayor que el 2019 con el 92,17%, y un nivel igualmente mayor de votos válidos con el 95,97%–, seguido de Cochabamba, con el 65,90% –al 90,60% de participación y el 96,63% de votos válidos, ambos con un aumento frente a 2019–, Oruro, con el 62,94% –al 91,19% de participación y el 95,57% de votos válidos– y Potosí, con una votación superior a la mitad de los votos (57,61%), un 88% de participación y el 92,06% de votos válidos.

Como puede apreciarse con claridad en la tabla 4 y tomando en cuenta los datos presentados en el resumen por igual desagregación para el 2019, los niveles de participación, voto válido, blanco y nulo se han mantenido básicamente constantes para el nivel general. Si se consideran los promedios generales, el cambio es verdaderamente mínimo, tal y como se evidencia en la siguiente tabla comparativa.

Es importante matizar los datos anteriores, teniendo esta última tabla en mente. Fuera de los casos de Potosí y de Beni –que ameritarían explicaciones que exceden los alcances de este trabajo–, lo que se advierte es un porcentaje relativamente bajo de votos nulos y blancos frente al porcentaje de votos válidos. Así pues, mientras que el promedio general para los datos departamentales del 2019 fue de una participación del 88,32% –donde el 94,36% de los votos eran válidos, el 1,81% votos blancos y el 3,83% votos nulos–, para el 2020 se registraron una participación y un porcentaje de votos válidos ligeramente inferiores (88,04%⁷ y 94,12%, respectivamente), el

7 Nótese, sin embargo, que mientras la diferencia del promedio de participación a nivel departamental frente al general es de 0,01%, este sube al 0,38% para el 2020, lo cual representa una variación superior a los 25.000 votantes y que ayuda, en parte, a explicar el salto a favor del MAS –superior a los 114.000 votos– en los resultados departamentales.

Tabla 4 Elecciones generales 2020: Resumen por departamento

	Participación	MAS	CC	Creemos	PAN BOL	FPV	Válidos	Blancos	Nulos	Emitidos	Habilitados
General	88,42%	55,11%	28,83%	14,00%	0,52%	1,55%	94,99%	1,41%	3,60%	6.484.008	7.332.296
Cochabamba	90,60%	65,90%	31,68%	1,14%	0,27%	1,01%	96,63%	0,89%	2,48%	1.214.546	1.340.548
Chuquisaca	87,03%	49,06%	45,99%	2,24%	0,66%	2,04%	94,02%	2,12%	3,86%	321.823	368.623
La Paz	92,17%	68,36%	28,58%	0,72%	0,65%	1,69%	95,97%	1,22%	2,81%	1.772.643	1.923.305
Oruro	91,19%	62,94%	33,02%	0,93%	0,99%	2,13%	95,57%	1,44%	2,99%	309.984	339.950
Potosí	88,00%	57,61%	35,85%	2,79%	1,19%	2,56%	92,06%	3,24%	4,70%	398.911	453.287
Tarija	85,34%	41,62%	50,24%	5,35%	0,45%	2,34%	93,08%	2,14%	4,78%	321.609	376.846
Santa Cruz	89,22%	36,21%	17,32%	45,07%	0,26%	1,13%	94,61%	1,19%	4,20%	1.683.085	1.886.387
Beni	85,52%	34,72%	39,17%	23,70%	0,46%	1,94%	89,69%	2,47%	7,84%	231.079	270.213
Pando	82,87%	45,80%	25,89%	26,22%	0,28%	1,81%	94,54%	1,84%	3,61%	59.779	72.136

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Tabla 5 Participación en elecciones generales 2019 y 2020: Detalle por departamento

	2019				2020			
	Participación	Válidos	Blancos	Nulos	Participación	Válidos	Blancos	Nulos
General	88,31%	95,00%	1,45%	3,55%	88,42%	94,99%	1,41%	3,60%
Cochabamba	90,32%	95,70%	1,12%	3,19%	90,60%	96,63%	0,89%	2,48%
Chuquisaca	88,13%	93,09%	2,53%	4,38%	87,03%	94,02%	2,12%	3,86%
La Paz	91,64%	95,33%	1,27%	3,40%	92,17%	95,97%	1,22%	2,81%
Oruro	90,91%	94,84%	1,47%	3,69%	91,19%	95,57%	1,44%	2,99%
Potosí	87,84%	91,80%	2,85%	5,35%	88,00%	92,06%	3,24%	4,70%
Tarija	86,94%	93,74%	1,94%	4,32%	85,34%	93,08%	2,14%	4,78%
Santa Cruz	88,83%	95,62%	1,13%	3,25%	89,22%	94,61%	1,19%	4,20%
Beni	85,94%	93,96%	2,53%	3,52%	85,52%	89,69%	2,47%	7,84%
Pando	84,37%	94,48%	1,85%	3,67%	82,87%	94,54%	1,84%	3,61%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

1,80% de votos blancos y el 4,09% de votos nulos. En ambas elecciones puede afirmarse que la votación fue llevada a cabo por un electorado bastante decidido y motivado a participar, registrándose niveles de participación y de votación válida superiores en 2020.

La importancia de estos datos, así como su alcance interpretativo, se hallan relacionados, de manera directa, con la afirmación y la constatación, nuevamente, de una fuerte polarización política en la que el país se encuentra sumido desde hace mucho tiempo, pero teniendo a las elecciones generales de 2019 como el punto más álgido en términos de convulsión social y política. Esta polarización puede ayudar a explicar, por ejemplo, el hecho de que, tomando la votación de los principales partidos políticos de oposición en Santa Cruz, se obtiene la misma cifra –redondeada– de un millón de votos para Comunidad Ciudadana, el Partido Demócrata Cristiano y Bolivia Dice No-21 F en 2019, que para Comunidad Ciudadana y Creemos en 2020.⁸ Sin embargo, en el caso de Cochabamba hay una diferencia notable, pues el MAS incrementó su votación en alrededor de 114.000 votos –pasó de registrar 659.188 en 2019 a 773.386 en 2020–, representando un aumento del 8,38% del electorado departamental, pese a que en 2019 hizo frente a tres partidos de oposición –CC, PDC y 21 F– y el 2020 solo enfrentó a dos: CC y Creemos.

En términos generales, los principales cambios entre ambas elecciones dejan al margen, de manera más bien notoria y relevante, al que fuera concebido en su momento como el principal partido opositor (CC); una organización que habiendo participado en ambas elecciones apenas varió su cantidad de votantes en el departamento, pasando de 369.156 en 2019 a 371.826 en 2020. Esta mínima diferencia, de 2.670 votos, representa, para los votos emitidos el 2020, el 0,20% y sugiere que los resultados de las elecciones del 2019 reflejaban el techo de votación para CC y, al mismo tiempo,

8 Los detalles de este fenómeno exceden los alcances de este trabajo.

su núcleo duro de votación; en otras palabras, solo aquellos ya convencidos de votar por la alianza de Mesa votaron por él, demostrando este partido una absoluta incapacidad para convencer a otros. Por otro lado, un cambio claramente notable fue lo ocurrido con la votación del PDC-Chi,⁹ cuya participación, tanto en Cochabamba como a nivel general, dejó de ser relevante de una elección a otra; si bien Chi, con el PDC, obtuvo, en 2019, 79.970 votos, equivalente al 6,98% de los votos válidos del departamento, su rendimiento electoral de 2020, esta vez con el FPV, llegó a sumar 11.867 votos, equivalentes al 1,01%. Y, finalmente, es preciso considerar la irrupción de una nueva alianza, Creemos, que en las elecciones de 2020 obtuvo el 1,14% (13.356 votos) de la votación válida del departamento, pero queda consignado en el análisis por la relevancia que adquiere en el contexto general de las elecciones generales de ambos años.

9 Es preciso señalar que la votación obtenida por el PDC, en 2019, sorprendió por su alto rendimiento –del 8,78% general, 8,80% nacional y 6,98% departamental– pero también por haber sido efecto directo de la candidatura del pastor evangélico presbiteriano de origen coreano, Chi Hyun Chung. El dato es relevante puesto que el voto a favor del llamado “Bolsonaro boliviano” –en alusión a las posiciones ultraconservadoras del candidato Chi respecto de varios temas sociales (como su posición en contra de los derechos reproductivos de la mujer y a los derechos de las diversidades sexuales)–, implica la existencia un núcleo ultraconservador relevante, tanto a nivel departamental como en el país. A partir del hecho de que luego, como candidato del FPV, Chi solo haya alcanzado un 1,55% a nivel general, y 1,01% a nivel departamental –y teniendo en cuenta el escaso voto departamental por Creemos (que con el 1,14% fue superior al FPV) y el ínfimo incremento de votantes de CC–, se puede sostener la interpretación de que el voto obtenido en 2019 con el PDC fue expresión, en parte importante, de un rechazo de facciones conservadoras cuya inclinación electoral hubiera sido el MAS, frente a la ilegítima repostulación de Morales. Asimismo, que una buena parte de ese voto conservador se haya ido a Chi y vuelto al MAS (2020) puede comprenderse como la comodidad de un votante conservador circunstancial.

La explicación de la mencionada variación positiva para el MAS, con todo lo previo, se debe a múltiples factores: menor cantidad de votos blancos y nulos –una reducción de un 20% para ambos indicadores en 2020 respecto de 2019– y mayor cantidad de votos válidos –con un incremento de poco más de 28.000 votos en 2020–, además de un mayor nivel de participación. Pero los motivos más importantes fueron, sin lugar a dudas, la importante variación en la votación obtenida por Chi en 2019 y sus drásticamente reducidos resultados del 2020; esta variación implica la absorción de una buena parte de los 68.103 votantes, que dejaron de apoyar a Chi de una elección a la otra, por parte del MAS, junto a, por supuesto, la incapacidad de CC por convencer a más cochabambinos de votar a su favor.

Tras haber introducido los aspectos generales presentados a nivel departamental, procedemos a la presentación y análisis de la desagregación a nivel regional y municipal. De inicio, se presenta la siguiente tabla que resume las principales estadísticas respecto de las características de estas elecciones a nivel regional.

Tabla 6 Elecciones generales 2020: Resumen por región

Región	Participación	MAS	CC	Creemos	PAN BOL	FPV
Departamento	90,60%	65,90%	31,68%	1,14%	0,27%	1,01%
Región Metropolitana	90,93%	61,27%	35,89%	1,23%	0,34%	1,27%
Región Andina	91,88%	96,84%	1,82%	0,34%	0,33%	0,66%
Región de los Valles	88,86%	84,88%	11,85%	0,63%	0,31%	1,19%
Región del Trópico	92,59%	96,49%	2,69%	0,39%	0,12%	0,31%
Región del Cono Sur	91,62%	89,42%	8,80%	0,70%	0,27%	0,81%
AIOC Raqaypampa	93,28%	99,22%	0,22%	0,25%	0,06%	0,25%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Como puede apreciarse con claridad en la tabla anterior, el dominio electoral del MAS en Cochabamba es abrumador

para cuatro regiones, así como para la AIOC, y menor para la región Metropolitana (el eje conurbano integrado por Cercado, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe) donde, sin embargo, alcanza un 61%, resultado indudablemente alto.

Antes de concentrarnos en los aspectos generales, exploremos un poco la anterior tabla. Nótese, de inicio, el elevado nivel de participación y su diferencia relativa con la votación por el MAS. Para las regiones Andina y del Trópico, así como para la AIOC, el porcentaje de la votación por el MAS es superior al de la misma participación, y aunque en el caso de las regiones de los valles y del Cono Sur lo opuesto es cierto, el nivel de votación por el MAS continúa siendo abrumador. Tal nivel de participación –porcentaje resultante de la división de los votos emitidos entre el total de votantes habilitados– es un indicador, a efectos de comprensión de la presente tabla, más general y necesariamente complementario para un análisis que quiera mostrar las dos dimensiones básicas de todo proceso electoral, y no solo desde el acotado punto de vista de una lectura político-electoral: por un lado, se tiene el nivel de participación de la población como clara expresión de su compromiso político y democrático con el proceso electoral en sí mismo –expresado, en este caso, de manera ejemplar gracias a los altos niveles de participación tanto a nivel regional, como departamental y general–; por otro lado se dispone de la referencia más específica y estrecha al porcentaje de votos válidos –cuyo promedio es de 95,98%, frente al 1,54% de votos blancos y el 2,48% de nulos–, siendo el aspecto fundamental de este último indicador la expresión de la contundencia de la decisión del electorado como un elemento de análisis importante de manera general, pero particularmente central en tiempos de polarización como en los que todavía nos hallamos.

De los 40 municipios que conforman estas cuatro regiones, 10 son los municipios en los que el MAS ha sacado entre 80% y 90% de votos válidos –7 en la región de los valles y 3 en la región del Cono Sur. Asimismo, son 4 los municipios en los que ha obtenido entre el 70% y 80% –3 en la región de los valles y uno

en la región del Cono Sur– y tan solo un municipio, Pasorapa, donde sacó menos del 60%. En los restantes 25 municipios, el MAS ha arrasado con un promedio general del 95,97%.

En concreto y resumiendo, el MAS ha logrado un promedio del 96,71% en las regiones Andina y del Trópico, obteniendo el resultado más “bajo” en el municipio de Chimoré (93,62%). Es evidente que ambas regiones representan poco más del 15% de los votos válidos del departamento –3,89% y 11,23%, respectivamente–, pero es cierto también que la representación política a nivel nacional no se decide de manera exclusiva en términos numéricos poblacionales, por lo que estos resultados deben ser tomados en cuenta.

Pasemos ahora a la Región Metropolitana, que condensa el 70% de los votos válidos del departamento, en apenas siete municipios (véase tabla 7).

Nuevamente, los altos niveles de participación y, aún más, los altos niveles de votación válida sugieren un electorado decidido y comprometido con el proceso electoral. Si bien el MAS consiguió superar el 80% solo en un municipio, es evidente que, en general, ha dominado la votación en la región, en base al criterio por municipio, claro está. A nivel regional, el MAS ha conseguido el 61,27% de los votos válidos, frente al 35,89% de CC¹⁰ –estas votaciones representan, a nivel departamental, el 37,15% y el 28,54%, respectivamente–. Aunque el resultado en el municipio de Cercado –cuyo universo de habilitados representa el 39,1% del departamento– es bastante inferior al de cualquier otro municipio (a excepción de Colcapirhua, único municipio del departamento donde el MAS ha sido superado por CC), esto era previsible si se tomaba en cuenta que el entorno urbano de las capitales del país, a nivel general, es el encuadre geográfico que concentra la mayor y más potente oposición al MAS.

10 Anotamos que la votación hacia las otras opciones es más marginal que los votos nulos, por lo que no las tomamos en cuenta para el resto del análisis.

Tabla 7 Elecciones generales 2020: Resultados en la Región Metropolitana de Cochabamba

Región	MAS-IPSP	CC	Creemos	PAN BOL	FPV	Válidos	Blancos	Nulos	Participación
DEPARTAMENTAL	65,90%	31,68%	1,14%	0,27%	1,01%	96,63%	0,89%	2,48%	90,60%
Cercado	49,43%	47,66%	1,58%	0,28%	1,06%	96,81%	0,65%	2,55%	89,66%
Quillacollo	58,65%	38,35%	1,24%	0,35%	1,41%	96,06%	0,99%	2,95%	91,08%
Sipe Sipe	83,41%	14,09%	0,84%	0,38%	1,28%	96,13%	1,04%	2,83%	91,84%
Tiquipaya	57,40%	39,96%	1,16%	0,28%	1,20%	96,36%	0,67%	2,97%	90,57%
Vinto	70,66%	26,39%	1,11%	0,40%	1,43%	95,98%	0,93%	3,09%	91,18%
Sacaba	61,86%	35,53%	1,23%	0,26%	1,12%	96,74%	0,73%	2,53%	91,06%
Colcapirhua	47,49%	49,26%	1,46%	0,40%	1,39%	96,20%	0,85%	2,94%	91,12%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Como una pequeña adenda, añadimos la desagregación de la votación por circunscripción uninominal (tabla 8). Los datos en Cochabamba de las elecciones de 2020 muestran que es la dupla máxima –la candidatura a presidente y vicepresidente– la que concentra el mayor nivel de intención y de decisión del voto y que luego este va diluyéndose en mayor o menor medida dependiendo de la circunscripción que se analice (pero la tendencia es clara, la votación es siempre menor). Lo interesante, respecto de todas las elecciones, es que la circunscripción uninominal vuelca la tendencia predominante de mayor cantidad de nulos sobre blancos, invirtiéndose esta relación. Este es un dato importante si se considera que los votos válidos, en el caso de las circunscripciones uninominales, rondan el 90%, en claro contraste con el nivel departamental (96,63%). Esta tendencia podrá verse de manera más completa en la siguiente tabla.

Parece evidente que, mientras la población tiene muy claro por quién votar para el binomio presidente/vicepresidente –y lo hace de manera muy motivada, como se expresa en los altos niveles de participación y de voto válido–, al mismo tiempo, la situación es notoriamente distinta en las circunscripciones uninominales que son las representaciones directas elegidas para la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Otro aspecto importante respecto del nivel de desagregación de las circunscripciones uninominales es que el promedio de votación uninominal obtenido por el MAS fue, en 2020, de 70,92%, mientras que en 2019 había alcanzado un 60,73%. Si bien, respecto del 2019, el MAS incrementó su votación en cada una de las circunscripciones, este no fue un incremento para nada uniforme, en contraste con la votación de CC.

Tabla 8 Elecciones generales 2020: Resultados por circunscripción uninominal (Cochabamba)

CIRCUNSCRIPCIÓN	MAS-IPSP	CC	Creemos	PANIBOL	FPV	Válidos	Blancos	Nulos	Participación								
GENERAL	3.394.052	55,11%	1.775.953	28,83%	862.186	14,00%	31.765	0,52%	95.255	1,55%	6.159.211	94,95%	91.419	1,41%	233.378	3,60%	88,42%
DEPARTAMENTAL	773.386	65,90%	371.826	31,68%	13.356	1,14%	3.216	0,27%	11.867	1,01%	1.173.651	96,63%	10.816	0,89%	30.079	2,48%	90,60%
CIRCUNSCRIPCIÓN 20	36.642	25,45%	95.917	66,63%	9.451	6,56%	433	0,30%	1.520	1,06%	143.963	92,70%	6.455	4,16%	4.877	3,14%	88,69%
CIRCUNSCRIPCIÓN 21	81.978	62,39%	43.390	33,02%	4.548	3,46%	0	0,00%	1.474	1,12%	131.390	90,18%	8.439	5,79%	5.864	4,02%	89,56%
CIRCUNSCRIPCIÓN 22	90.933	59,50%	53.179	34,80%	5.693	3,73%	1.204	0,79%	1.822	1,19%	152.831	90,50%	10.546	6,24%	5.505	3,26%	90,61%
CIRCUNSCRIPCIÓN 23	84.238	64,85%	40.886	31,48%	3.573	2,75%	0	0,00%	1.192	0,92%	129.889	91,82%	8.348	5,90%	3.224	2,28%	91,07%
CIRCUNSCRIPCIÓN 24	125.526	97,76%	2.442	1,90%	439	0,34%	0	0,00%	0	0,00%	128.407	95,66%	4.840	3,61%	986	0,73%	93,17%
CIRCUNSCRIPCIÓN 25	71.610	92,03%	5.780	7,43%	0	0,00%	0	0,00%	424	0,54%	77.814	91,31%	5.774	6,78%	1.633	1,92%	91,15%
CIRCUNSCRIPCIÓN 26	83.574	80,82%	16.363	15,82%	2.348	2,27%	0	0,00%	1.118	1,08%	103.403	89,08%	9.688	8,35%	2.986	2,57%	89,50%
CIRCUNSCRIPCIÓN 27	82.470	77,51%	23.047	21,66%	0	0,00%	0	0,00%	878	0,83%	106.395	87,68%	9.748	8,03%	5.199	4,28%	91,06%
CIRCUNSCRIPCIÓN 28	71.396	55,47%	49.664	38,59%	3.963	3,08%	692	0,54%	2.996	2,33%	128.711	89,37%	8.802	6,11%	6.506	4,52%	91,08%
CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL 2 – "INDÍGENA"	1.574	98,44%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19	1,19%	1.599	76,95%	380	18,29%	99	4,76%	86,76%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Tabla 9 Elecciones generales 2019 y 2020: Resultados por circunscripción uninominal (MAS y CC)

PARTIDO	2019		2020	
	MAS-IPSP	CC	MAS-IPSP	CC
General	47,08%	36,51%	55,11%	28,83%
Departamental	57,52%	32,21%	65,90%	31,68%
Circunscripción 20	21,77%	64,65%	25,45%	66,63%
Circunscripción 21	49,69%	35,22%	62,39%	33,02%
Circunscripción 22	47,29%	35,17%	59,50%	34,80%
Circunscripción 23	53,90%	35,78%	64,85%	31,48%
Circunscripción 24	95,02%	4,98%	97,76%	1,90%
Circunscripción 25	86,88%	9,11%	92,03%	7,43%
Circunscripción 26	69,40%	20,69%	80,82%	15,82%
Circunscripción 27	63,78%	25,81%	77,51%	21,66%
Circunscripción 28	42,09%	36,92%	55,47%	38,59%
Circunscripción especial 2 – "Indígena"	77,51%	22,49%	98,44%	0,00%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Es importante prestar atención (tabla 9) a la información de las circunscripciones 20, 21 y 22, correspondientes al Cercado, y a la oposición tradicional de la zona norte (circunscripción 20), frente al resto del municipio (circunscripciones 21, centro y zona sur; y 22, zona sur). Nótese, de entrada, que, si bien el incremento de la votación del MAS en la circunscripción 20 es modesto, con un 3,68%, en las circunscripciones 21 y 22 el incremento fue notorio (12,7% y 12,21%, respectivamente). Comunidad Ciudadana, por su parte, registró un leve incremento en la circunscripción 20 (1,98%), pero bajó en la 21 y 22 (en un 2,2% y 0,37%, respectivamente). La diferencia en los niveles de participación entre ambas elecciones es muy marginal para ser mencionada. Es también notable

el incremento generalizado –y bastante significativo– del MAS en el resto de las circunscripciones, así como la caída, igualmente generalizada y notoria, del rendimiento electoral de CC para las mismas circunscripciones.

2. Elecciones departamentales y municipales 2021

Las elecciones subnacionales 2021, llevadas a cabo el 7 de marzo, serán analizadas con los niveles de desagregación para las votaciones a la Gobernación y a las alcaldías de los 47 municipios,¹¹ lo que permitirá hacer un análisis del voto cruzado respecto de los resultados de cada tienda política en estas votaciones. Empezamos por la votación para el Gobierno Autónomo Departamental (ver tabla 10).

Lo primero a señalar, en comparación con las elecciones generales de octubre de 2020, es que en la votación para gobernador la participación se redujo en un 4,47% y los votos válidos en un 5,49%, dentro del total considerado.¹² Con el 86,15% de participación, Cochabamba ocupa el tercer lugar a nivel departamental, después de La Paz (88,37%, por los resultados de la primera vuelta) y Oruro (87,04%). Respecto de la votación válida, como un parámetro fundamental para evaluar la contundencia de la decisión del electorado, Cochabamba ocupa, nuevamente, el tercer lugar con el 91,14%, luego de Santa Cruz (94,17%) y de Tarija (91,54%).

11 Para el caso del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Raqaypampa (GAIOC), guardamos su lugar sin confundirlo con un municipio y porque tampoco tuvo elección de sus autoridades.

12 Parece ser que, en efecto, son las elecciones generales las que tienden a concentrar los mayores niveles de decisión y de compromiso ciudadano con el proceso electoral o, al menos, puede ser esta una hipótesis válida para explicar esta diferencia. Por otra parte, también es posible que, a nivel de la percepción ciudadana, la estabilidad de tener, luego de más de un año de Gobierno ilegítimo, un Gobierno democrático –surgido de una votación contundente en las elecciones generales pasadas–, ubique cualquier otro proceso electoral, necesariamente menor, en un segundo plano.

Tabla 10 Resultados elecciones para la Gobernación de Cochabamba (2021)

DETALLE	TOTAL	PORCENTAJE
Votos válidos	1.061.981	91,14%
Votos blancos	58.513	5,02%
Votos nulos	44.732	3,84%
Votos emitidos	1.165.226	
Ciudadanos habilitados por actas computadas	1.352.936	
Total ciudadanos habilitados	1.352.936	
Total actas computadas	6.481	100,00%
Total actas anuladas	0	0,00%
Total actas habilitadas	6.481	100,00%
Participación por actas computadas		86,13%
MAS-IPSP (Humberto Sánchez Sánchez)	609.973	57,44%
Súmate (Henry Antonio Paredes Polo)	267.308	27,17%
MTS (José Carlos Sánchez Verazaín)	78.805	7,42%
UNIDOS.CBBA (Juan Flores Encinas)	46.030	4,33%
C-A (José Flores Burgos)	21.875	2,06%
SOMOS (Faustino Challapa Flores)	15.504	1,46%
PDC (Limber Ronald Morejón Antezana)	8.327	0,78%
PAN-BOL (William Zapata García)	7.494	0,71%
FPV (Reinaldo Gonzalo Becerra Butrón)	6.665	0,63%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Por otra parte, puede notarse la fuerte concentración del voto en los primeros dos partidos políticos que, junto a la tercera opción, suman el 92,03% de la votación válida total. Así, tenemos, a nivel departamental, al MAS con el 57,44%, Súmate con el 27,17% y el MTS con 7,42%.

Veamos, ahora, en la siguiente tabla, cómo van las cuentas bajando al nivel regional y, en los casos que amerite, municipal.

Tabla 11 Resultados elecciones para la Gobernación de Cochabamba: Resumen por región (2021)

Región	Participación	MAS	Súmate	MTS	UNIDOS	C-A	SOMOS	PDC	PANBOL	FPV
Departamento	86,13%	57,44%	27,17%	7,42%	4,33%	2,06%	1,46%	0,78%	0,71%	0,63%
Región Metropolitana	86,27%	51,13%	26,52%	7,91%	7,43%	3,04%	1,65%	0,86%	0,84%	0,48%
Región Andina	86,34%	90,26%	1,21%	2,58%	0,69%	0,34%	2,91%	0,32%	0,66%	1,04%
Región de los Valles	85,11%	71,04%	11,50%	9,89%	1,27%	4,45%	2,04%	0,93%	0,96%	4,13%
Región del Tópico	86,76%	93,27%	1,82%	2,58%	0,23%	0,35%	0,67%	0,22%	0,56%	0,28%
Región del Cono Sur	86,90%	82,09%	7,85%	3,29%	1,70%	1,16%	2,16%	0,41%	0,57%	0,76%
AIOC Raqaypampa	87,84%	93,61%	0,81%	0,46%	0,73%	0,19%	3,12%	0,08%	0,23%	0,77%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Respecto al cuadro anterior, hay dos aspectos fundamentales para tener en cuenta: en primer lugar, los niveles de participación, aunque ciertamente inferiores¹³ a los presentados para las elecciones generales del 2020, son lo suficientemente altos como para llegar a conclusiones similares respecto de los niveles de decisión y compromiso electoral del universo de votantes del departamento, sobre todo si se tiene en cuenta que, a nivel general, el promedio del porcentaje de votos válidos es del 87,56%. En segundo lugar, y si bien es notorio, nuevamente, el abrumador dominio del MAS en el departamento, a nivel regional, fuera de la Región Metropolitana, es importante notar que las pequeñas variaciones a ese nivel pueden traducirse en variaciones más importantes, pero ello solo a nivel estrictamente municipal. De momento, destaquemos pues los niveles, aún bastante elevados –y por ello motivo de celebración general–, tanto de una alta participación general en las elecciones como de un nivel igualmente elevado de votación válida, aunque, por supuesto, ponderando que el promedio de votos blancos (6,48%) y nulos (5,95%) es ciertamente llamativo, aunque no inesperado.

En el caso de las elecciones subnacionales para la Gobernación, a diferencia de las generales de 2020, es posible resumir la información pertinente respecto del rendimiento electoral del MAS en relación con el número de municipios donde se alcanzó un determinado porcentaje de votación (véase tabla 12).

13 Esta variación es completamente consecuente respecto del encuadre general de los contextos políticos de ambas elecciones. Pero, más allá, parece ser el caso de que no hay elección en el país que registre participación mayor y más firmemente decidida que las de las elecciones generales, sobre todo si se ahonda en los diferentes niveles de desagregación del voto, como bien pudo apreciarse en la desagregación por circunscripción uninominal de las elecciones generales 2020 respecto de los resultados para presidente y vicepresidente.

Tabla 12 Elecciones para la Gobernación de Cochabamba (2021):
Rendimiento electoral del MAS por región

Región	N.º municipios	90% +	80% +	70% +	60% +	50% +	40% +	30% +
Departamento	47*	15	8	9	8	5	2	1
Región Metropolitana	7	-	-	-	1	3	2	1
Región Andina	8	4	3	1	-	-	-	-
Región de los Valles	15	1	2	5	6	1	-	-
Región del Trópico	5	4	1	-	-	-	-	-
Región del Cono Sur	12	5	2	3	1	1	-	-
AIOC Raqaypampa	1	1	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

* La sumatoria de municipios, técnicamente, sería 48, pero el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Raqaypampa (GAIOC) se cuenta siempre aparte, por lo que el número total de municipios, como tal, es 47.

Entonces, en relación con el rendimiento del MAS en estas elecciones, hay que señalar que en 15 municipios este partido logró superar el 90% del voto válido, en 8 municipios superó el 80%, en 9 superó el 70%, en otros 8 superó el 60%, en 5 superó el 50%, en 2 el 40% y en un solo municipio estuvo por debajo del 40%. Puede notarse que, a diferencia de lo acontecido a nivel departamental, en las elecciones generales del 2020, el promedio del porcentaje de la votación obtenida por el MAS ha disminuido en un 8%: del 88,02% obtenido en el 2020 al 80,24% en las elecciones para el Gobierno Autónomo Departamental.

Esta variación obedece a dos motivos principales: primero, y de nuevo, es preciso concebir la diferencia, marcada sobre todo por el nivel de participación, entre elecciones generales por la Presidencia del Estado y cualquier otra elección de autoridades a nivel regional o local. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que, si bien el MAS es el único partido con presencia en todos los municipios del país, ello también significa que hay numerosos municipios y regiones donde el balance electoral es distinto del nacional en virtud de la

presencia de agrupaciones ciudadanas que, sin tener alcance electoral nacional tienen presencia y favor considerable entre la población departamental, regional o municipal.

Esto es lo que se puede percibir, a nivel de las elecciones municipales, donde el MAS es el único partido con presencia en todos los municipios, haciéndose con 41 de las 47 alcaldías (notoriamente, cuatro en la región metropolitana, incluyendo la tercera más importante, Sacaba).¹⁴ Sin embargo, también encontramos otros contrincantes locales y algunos específicos para un solo municipio, como es el caso de JESUCA, PPS, UPC, UNPA y PARCA. Lo más notorio, en este caso, es que las organizaciones políticas que se constituyeron para la contienda en un solo municipio lograron una votación harto exitosa, comprendida desde un 17,94% –para el caso del PPS en Vinto– hasta un destacado 49,44%, para el caso de JESUCA en Villa Rivero. Y aquí, nuevamente y en el mismo formato, se presenta una tabla sobre el rendimiento electoral del MAS a nivel municipal.

Tabla 13 Elecciones municipales Cochabamba (2021):
Rendimiento electoral del MAS por región

Región	N.º municipios	100%	90% +	80% +	70% +	60% +	50% +	40% +	30% +	20% +
Departamento	47	10	4	6	4	5	3	9	3	3
Región Metropolitana	7	-	-	-	-	-	1	2	2	2
Región Andina	8	5	2	-	1	-	-	-	-	-
Región de los Valles	15	-	1	1	1	3	1	6	1	1
Región del Trópico	5	1	1	3	-	-	-	-	-	-
Región del Cono Sur	12	4	-	2	2	2	1	1	-	-

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

14 Véase en anexo la tabla con toda la información para los resultados municipales.

Tabla 14 Elecciones municipales Cochabamba (2021): Participación, votos válidos, blancos y nulos

	Participación	Válidos	Blancos	Nulos
Departamento	86,11%	90,98%	3,24%	5,84%
Región Metropolitana	86,30%	93,26%	2,19%	4,55%
Región Andina	86,14%	86,77%	4,80%	8,80%
Región de los Valles	85,05%	91,89%	2,77%	5,33%
Región del Trópico	86,74%	94,61%	1,96%	3,43%
Región del Cono Sur	86,95%	89,60%	4,03%	6,37%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

La Región Metropolitana será tratada en detalle luego, pero de momento nos adentraremos un poco en la significancia de los datos de la anterior tabla. Es evidente que, fuera de casi mantener el nivel de municipios con votación superior al 90% –que, con un municipio menos, son 14 frente a los 15 donde obtuvo este abrumador porcentaje para las elecciones a la Gobernación–, los cambios más importantes se dan no solo en el resto de los rangos de porcentaje sino que, con relación a la tabla que mostraba los resultados para la elección a gobernador, se ha tenido que añadir una columna más, pues en 3 municipios¹⁵ el MAS obtuvo menos del 30% de la votación. Para poner estos números en mejor perspectiva, hay que recordar que, si bien el promedio de votos válidos para las elecciones municipales a nivel departamental es alto, con el 89,60%, sigue estando por debajo del mismo para la Gobernación. Sin embargo, se encuentra una diferencia interesante al advertir que el promedio general del 4,03% de votos blancos y 6,37% de votos nulos para las municipales no solo supera, en su sumatoria, a lo propio de las elecciones para la Gobernación, sino que la proporción se halla invertida: los

15 Cercado y Colcapirhua, dentro de la Región Metropolitana, pero, de manera llamativa Cliza, para la Región de los Valles, donde el primer lugar corresponde al MTS (37,77%) y el segundo a UPC (36,85%).

nulos son bastante más que los blancos. Démosle una ayuda visual a este tema, recordando que la siguiente tabla debe ser interpretada junto a las dos anteriores para una perspectiva de contraste más completa.

No se presentan estos datos con la intención de establecer correlaciones fuertes, sino la mera, pero necesaria, postulación de algunas hipótesis respecto del rendimiento del MAS en tanto partido en los procesos electorales a nivel municipal, en conjunción con los niveles de votación, participación y, por supuesto, respecto a las distintas alternativas electorales ciudadanas. Si bien Súmate, opción política de oposición, ha tenido un buen rendimiento en la Región Metropolitana, este ha sido nulo para las regiones Andina y del Trópico, débil en la Región de los Valles –fuera del 33,91% en Tarata y el 20,19% en Toco, no ha llegado a superar el 20% en ningún otro municipio de esta región, donde además no ha obtenido ningún voto en dos municipios y ha tenido nula participación en otros cuatro– y muy pobre en la Región del Cono Sur –luego de sacar el 29,04% en Pasorapa y el 26,74% en Omereque, solo en Aiquile superó el 5%, obteniendo cero votos en 6 municipios y registrando nula participación en otros dos. Es el MTS, en todo caso, el partido que ha tenido un buen rendimiento en la Región de los Valles –registrando más del 30% en 6 municipios– y cierta presencia en la Región del Trópico, donde obtuvo el 14,63% en Chimoré, el 15,93% en Entre Ríos, y el 10,35% en Sinahota. Si bien algunos de los otros partidos, cuya presencia se ha restringido básicamente a la Región Metropolitana, han logrado alguna que otra votación relevante en algún municipio de las demás regiones, son nuevamente las agrupaciones políticas altamente localizadas las que han presentado a los principales contendores contra el MAS en los municipios fuera de la Región Metropolitana, algo ciertamente importante para tomar en cuenta en conjunción con los niveles superiores de votos nulos frente a votos blancos.

Tabla 15 Elecciones municipales Cochabamba (2021): Resultados en municipios de la Región Metropolitana

Región	MAS-IPSP	Súmate	PAN BOL	MTS	Válidos	Blancos	Nulos	Participación
Región Metropolitana	29,69%	55,63%	0,16%	8,50%	96,25%	1,09%	2,67%	86,02%
Cercado	34,96%	7,23%	0,00%	4,02%	92,82%	2,46%	4,72%	85,44%
Quillacollo	51,08%	10,48%	0,00%	2,66%	91,63%	3,01%	5,37%	86,48%
Sipe Sipe	37,41%	19,21%	5,51%	23,87%	93,84%	1,90%	4,27%	86,56%
Tiquipaya	42,25%	13,63%	0,00%	1,74%	91,23%	2,83%	5,93%	85,88%
Vinto	40,03%	14,10%	0,00%	25,92%	93,39%	1,95%	4,66%	86,49%
Sacaba	23,07%	16,52%	0,00%	12,92%	93,68%	2,12%	4,20%	87,22%
Colcapirhua								

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Ahora pasamos a concentrarnos en la Región Metropolitana, dado su alto impacto en el departamento en virtud de su elevada concentración poblacional y porque, en gran medida, mucha de la información hasta ahora recabada en relación con el rendimiento electoral general del MAS no varía de manera substancial fuera de esta región.

Es preciso señalar algunos resultados relevantes en relación con los municipios de la Región Metropolitana, dado que podría confundir antes que ilustrar. En ese sentido, es necesario tomar en cuenta los siguientes datos:

- Mientras que, para la elección a la Gobernación, el MAS obtuvo el 41,94% de la votación válida en Cercado, superando al 40,15% de Súmate, y concentrando entre ambos el 82,09% del voto válido; en las elecciones municipales, el 29,69% del MAS es algo más de la mitad del 55,63% de Súmate, representando, entre ambos, el 85,32% del voto válido. Teniendo prácticamente el mismo nivel de participación en ambas elecciones, y tomando en cuenta que las diferencias relativas respecto del porcentaje de votos válidos, blancos y nulos contribuye a un balance general donde se tiene básicamente el mismo número de votos emitidos entre ambas elecciones, es evidente que ha existido un porcentaje importante, aunque de momento imposible de determinar con exactitud, de voto cruzado.¹⁶
- Respecto del municipio de Quillacollo debe mencionarse el 35,82% logrado por la agrupación UNE.

16 De momento no es posible contar con un nivel de desagregación más profundo que permita una cuantificación precisa de este porcentaje. Hasta el momento, el nivel de desagregación más directo en el sistema del OEP es el de recinto electoral, pero el trabajo de ordenamiento de esa información respecto de la desagregación por zonas y distritos excede los alcances de este trabajo. Es por esta razón que no es posible, con la información públicamente disponible, realizar un análisis más preciso y directo con niveles de desagregación mayores.

- Respecto de Sipe Sipe debe mencionarse el 35,78% de la agrupación Unidos por Cochabamba (Unidos.Cbba).
- Respecto de Vinto debe notarse el 21,84% de la agrupación UNE y el 17,94% de la agrupación PPS.
- Finalmente, para Colcapirhua destaca el 13,20% de UCS.

El caso de Súmate

El análisis exige dedicar un apartado a este caso, en particular, porque se trata de un fenómeno político determinado por el liderazgo político municipal de Manfred Reyes Villa en el municipio capitalino, lo mismo que por los hechos postelectorales que han constituido un especial escenario político y que requieren una explicación particularizada.

En consecuencia, la pregunta de referencia es: ¿Cómo entendemos esta, en apariencia, contradictoria elección ciudadana dentro un mismo territorio, entre las elecciones para gobernador (finalmente, se impuso Humberto Sánchez, del MAS) y la elección municipal para alcalde de la ciudad capital, en la que ganó Manfred Reyes Villa por Súmate? Se trata, en todo caso, de dos liderazgos que, efectivamente, representan líneas políticas e ideológicas claramente opuestas y cuya convivencia electoral y postelectoral llama fuertemente la atención. Como es comprensible, frente a un hecho político hay dos formas de desarrollar una explicación que, en este caso, comprende dos hechos electorales producidos en simultáneo y sobre una misma jurisdicción.

La primera forma de abordar el hecho político es a partir del repaso de los antecedentes y el contexto de una confrontación anterior entre ambas entidades políticas (el MAS y la antigua NFR, núcleo de Súmate), matizada por el protagonismo personal de Reyes Villa quien, desde las elecciones generales del 2002 fue contendor de Evo Morales –arrebátandole, en aquellos comicios el segundo lugar por un margen muy estrecho– y que, a su vez, también

tiene una especial impronta personal respecto de la entidad política que lo cobija. A partir de esa clara y primera oposición política y electoral, sucede la elección, otra vez simultánea, en la contienda de diciembre del 2005, en la que se elige a Evo Morales como presidente y a Reyes Villa como prefecto del departamento (con un pequeño margen respecto del candidato del MAS). Estas diferencias políticas se ahondan, en el contexto de la Asamblea Constituyente, con enfrentamientos entre vecinos de la zona norte de Cochabamba, partidarios del prefecto, y cocaleros que ocupaban la plaza principal pidiendo la renuncia de Reyes Villa, hechos que derivan en los eventos trágicos y sangrientos del 11 de enero de 2007.

Exactamente como en el resto del país, en Cochabamba la tensión y la polarización política habrá de ir en aumento hasta la accidentada conclusión de la Asamblea Constituyente en Oruro (diciembre 2007) y la realización de los referéndums autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en el primer semestre del 2008. Tras la realización del referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008 –que ratificó la continuidad de Evo Morales y la revocatoria del mandato de Reyes Villa, además de los prefectos de La Paz, Pando y Tarija–, este conflicto llega a su punto máximo con el enfrentamiento entre cívicos y campesinos en la denominada masacre de Porvenir (Pando), el 11 de septiembre del mismo año. En este contexto político, se inician distintos juicios penales y administrativos a Reyes Villa por presuntas irregularidades en su gestión, llegándose a producir la huida del país del exprefecto, quien acaba pidiendo asilo político en Estados Unidos.

Este resumen, escueto y referencial, sirve para valorar una relación de oposición que tiene larga data y ribetes muy difíciles de superar, explicando una de las dimensiones de la coyuntura que analizamos.¹⁷ Sin embargo, este contexto solo

17 En esta línea referencial debe anotarse también que el año 2000, cuando tuvo lugar la llamada “guerra del agua” en Cochabamba,

explica las oposiciones y la profundidad de las diferencias políticas (neoliberales privatizadores frente al proceso de cambio), sociales (clases y estratos sociales claramente diferenciados) y territoriales (zona norte-zona sur; lo urbano y lo rural, etc.) entre estas dos entidades políticas y sus respectivas poblaciones afines.

La segunda forma de explicar lo sucedido –y que debe, como es obvio, complementarse con la anterior– trata de lo específico de la coyuntura que nos ocupa y es la que nos permite entender los resultados electorales de 2021 y el escenario político postelectoral, en función de otra dimensión de la política: la gestión pública o el desempeño de los candidatos en los gobiernos que tuvieron a su cargo y la percepción ciudadana que está detrás de los votos. Humberto Sánchez fue un exitoso alcalde del municipio de Sacaba por dos gestiones y Reyes Villa también tuvo varias gestiones a su cargo (por lo menos en cinco momentos distintos; tres por elección directa), sobre la cual perdura en la memoria ciudadana una positiva valoración. Este primer elemento es, sin duda, un fuerte condicionamiento social y ciudadano hacia la convergencia de la percepción ciudadana, porque los dos candidatos son particularmente apreciados por su buen desempeño en la gestión pública. Consecuentemente, las profundas y variadas diferencias político-ideológicas en las que hemos abundado en la primera aproximación han cedido protagonismo –para pesar de los extremos y de los agraviados– a la calidad de gestores públicos de los candidatos.¹⁸ Es un importante factor a tener en consideración

el alcalde involucrado en la privatización de las fuentes hídricas fue, precisamente, Reyes Villa.

- 18 Hay que valorar con objetividad el voto cruzado, que es superior al 10%. En Cercado el alcalde ganador añade 15% y el candidato masista pierde más de 10%; sin este trasvase de votos del MAS a Súmate en la elección municipal, el triunfo de este último solo habría sido por mayoría simple. Esta relación puede ser insuficiente para explicar el voto cruzado en la zona sur (con sus distritos 9, 7 y 14), y que pudo tener mayores proporciones por que

—que se complementa con el agotamiento ciudadano, luego de la dura y profunda crisis política vivida durante el interinato— que se haya elegido pensando en las gestiones antes que en la polarización y los enfrentamientos. Y, si a este cuadro se agregan los discursos en pos del trabajo unitario y la convergencia de ambos candidatos, es evidente que se produjo una natural coincidencia ciudadana a la hora de elegir autoridades políticamente opuestas pero que ofrecían trabajo conjunto.

Este es el escenario que marca la diferencia del clima político en Cochabamba respecto de otras capitales y departamentos y que ha descolocado a los extremos hiperideologizados que se resisten a la decisión ciudadana y buscan sabotear la actual entente política entre el Gobierno Departamental y el municipio capitalino el cual, por lo demás, está fuertemente condicionado por la necesidad de articulación de esfuerzos intergubernativos para enfrentar problemáticas estructurales como la gestión de la basura y la contaminación, por mencionar lo más obvio. Sin embargo, es evidente que hay un potencial opositor importante expresado en el 27,17% de votos departamentales obtenidos por la oposición (40,15% en el Cercado) y algo más del 55% del voto municipal de Reyes Villa. Sin embargo, esta votación tiene como principal explicación su naturaleza antimasista,¹⁹ no de proyección propia, y que todavía se relativiza más si, comparando los datos de las elecciones generales 2019 y 2020, vemos que gran parte de los votos de diferencia a favor de Luis Arce fue un voto contra Evo Morales, porque son votos que salen del mismo universo electoral y que el 2019 se pierden pero el 2020 retornan.

es la zona donde las exigencias de gestión pública y provisión de servicios básicos son enormes, empezando del agua potable.

19 Este extremo es tan evidente que el voto de Súmate prácticamente significó la desaparición de CC.

3. Conclusiones

a) La democracia, para el país, es un sentido común y un principio político generalizado, enraizado y dominante que, luego de casi cuatro décadas de libertades democráticas, prácticamente ininterrumpidas, impone que la sociedad boliviana ejerza su máxima confianza y plena capacidad de definición política para salvar cualquier crisis, conflicto o enfrentamiento en un acto electoral masivo, comprometido, plural y transparente.²⁰

Vista la sociedad boliviana desde el grueso de sus instituciones públicas y privadas y, a partir del protagonismo de las organizaciones sociales, en toda su diversidad y pluralidad, queda meridianamente claro que la opción democrática es el pilar político, organizativo e institucional que sostiene al conjunto del Estado, a las organizaciones políticas y al sistema de representación.

b) La polarización política extrema y los enfrentamientos violentos a lo largo de todo el país, como consecuencia del fallido acto electoral de las elecciones generales de 2019 y de su desemboque político ilegítimo, violento y racista, ha generado fisuras profundas en el tejido social boliviano y una radicalización importante en el campo político nacional. En este sentido, Cochabamba no fue una excepción (por su condición, además, de *locus* de una de las dos masacres, la de Sacaba), en ningún sentido, aunque con particularidades muy marcadas como explicaremos a continuación.

c) En el caso de Cochabamba, visto como departamento, regiones, municipios y un Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Raqaypampa (GAIOC), los

20 La mayor prueba inmediata de este aserto es que a cada postergación de las elecciones generales a iniciativa abierta o bajo mesa del Gobierno interino, la pérdida de votos para el bloque antimasista era mayor.

actos electorales de octubre del 2020 y marzo del 2021 constituyen una consistente consolidación de la base política del MAS, sin oposición definida a nivel departamental o, en todo caso, con un variopinto conjunto de distintas organizaciones pequeñas como formas de oposición estrictamente localizadas con la excepción, por supuesto y a nivel municipal, de Súmate, en Cercado, organización que registró una participación importante tanto para la votación a la Gobernación (40,15%), en Cercado, como a nivel departamental (27,17%).

Sin embargo, con igual énfasis, debe marcarse la focalización de la oposición y resistencia al MAS en la capital departamental y en los municipios conurbados de la región metropolitana, los cuales, juntos, constituyen alrededor del 70% del electorado departamental. Este es un dato fuerte y que debe ser parte de la agenda postcrisis.

Estos resultados electorales y políticos muestran que la profunda crisis política ha sido enfrentada departamentalmente desde bloques sociales claramente diferenciados y a partir de opciones de representación política diversas, lo que es demostración de un saludable escenario y clima democráticos. Esto no significa, sin embargo, que haya pasado la polarización ni que la crisis política, socioeconómica y sanitaria remita, simplemente se puede inferir que, de lejos, estamos mejor que en el desgobierno del interinato y que hay un margen de confianza que la ciudadanía aporta para darse un respiro, no ahondar la crisis y, menos aún, acrecentar el enfrentamiento político.

Esta pequeña interfase política es lo que acrecienta la responsabilidad política del MAS, en lo departamental y lo nacional, frente a la evolución de la crisis en lo inmediato y en el largo plazo. La recuperación política y su reposicionamiento de partido dominante frente

a una oposición derrotada, aunque en el contexto de un solapado debate sobre su liderazgo, multiplica su peso político por encima de sus fuerzas reales, por lo que será decisiva su capacidad de conducción para la suerte del país al enfrentar la multidimensional crisis que vivimos como departamento, país y planeta.

- d) Una particular demostración de esta fluidez democrática y política es el voto departamental del MAS para su candidato a gobernador (Humberto Sánchez, quien obtuvo el 57,44%) –Súmate alcanzó el 27,17%– y, del mismo modo, el voto de Súmate (Reyes Villa) para el Gobierno Municipal de Cochabamba (55,63%) (el MAS obtuvo el 29,69%). Para alcanzar estas sendas mayorías políticas y electorales, indudablemente, se intercambiaron preferencias a través del voto entre una y otra elección, pero en la misma jurisdicción.

Esta es otra de las particularidades de las elecciones subnacionales en Cochabamba, donde un importante sector del electorado ratifica su predominio departamental definiendo que el Gobernador sea del MAS y, al mismo tiempo, que un alcalde, claramente opositor y de los que formaron parte de los enfrentamientos políticos con el proceso de cambio durante el primer Gobierno de Evo Morales, sea la autoridad edil capitalina.

Este es un mensaje político nítido y muy fuerte. El electorado y la sociedad son capaces de elegir de forma dirigida y contundente entre opciones ideológicas contrarias, valorando las capacidades de gestión de los candidatos y dejando de lado la tan mentada polarización porque, claramente, no se los eligió para que se enfrenten, sino en función de sus discursos conciliadores y con especial énfasis en la unidad.

- e) Este panorama aleccionador y relativamente optimista sobre el manejo societal de la profunda crisis política

ocurrída a partir de fines del 2019, no debe confundirse con la consistencia política de las organizaciones políticas y la representación que, por supuesto, han sentido y están sufriendo las consecuencias de una coyuntura dramática y dolorosa, la cual pone en cuestión los liderazgos.

A partir de la disminución de la votación departamental en algo más de un 8% respecto del caudal electoral de las elecciones generales 2020, es evidente que, en el bloque político dominante del MAS, hay una corriente claramente orientada a enfrentarse con el bloque opositor²¹ a cuenta de los hechos violentos de la crisis política, mientras que otro sector, no terminantemente enfrentado al primero, asume la responsabilidad de la gestión gubernamental como el eje político articulador. Esta diferencia tenderá a marcarse con el tiempo y alcanzará al debate por el futuro liderazgo nacional del instrumento político, denominación con la que se conoce al MAS entre las organizaciones sociales.

En la vereda contraria, es inocultable la debacle de CC, prácticamente desaparecido de las elecciones municipales de Cochabamba –y del país, en general– y que, en el único municipio del departamento donde venció (Colcapirhua), fue porque el candidato ganador, según declaró, se prestó la sigla, ante la falta de una agrupación ciudadana propia. Algo muy parecido a lo que sucedió con el MTS, que también prestó la sigla a candidatos ajenos, con tal de aparecer en los resultados, como antes también ocurriera con el FRI y el FPV. La debacle departamental del principal

21 Al respecto, véase el discurso de Evo Morales en el Congreso de las mujeres interculturales, Ivirgarzama, 3 de septiembre de 2021, en el que rechaza cualquier reconciliación con los “enemigos”, luego de la intervención del vicepresidente David Choquehuanca quien proponía, en términos generales, lo contrario.

referente político nacional opositor tiene que ver con el reposicionamiento político de Reyes Villa y con que sus referentes tienen una historia y una cantera compartidas con CC que los hace electoralmente excluyentes.

En resumen, el campo político emergente de la crisis política 2019 y de las definitivas elecciones de 2020 y 2021 empieza a reconstruirse partiendo de una mayoritaria presencia política del MAS y de una enorme disminución y dispersión del espacio opositor. Sin embargo, se puede advertir, claramente, un partaguas: el MAS no puede volver a ser el mismo de antes de las elecciones del 2019 y la oposición anti Evo Morales tiene que refundarse con un horizonte mayor porque fijar en una persona el referente de un proyecto político es insustancial. El MAS, al igual que la oposición, debe reinventarse para retomar sus proyecciones políticas, lo mismo que sus liderazgos que, por lo demás, ya se están renovando en lo generacional y en lo político. Empezando de los ministros, pasando por gobernadores o alcaldes, en todos los frentes resulta evidente que la crisis ha pasado factura a las organizaciones políticas y que el país está más en manos de personas que de entidades políticas.

4. Agenda

Frente a este retrato estadístico global, la agenda política departamental tiene dos perspectivas y un par de alternativas postcrisis.

La primera perspectiva es la redefinición política. Esta pasa por la decantación de los liderazgos anteriores y posteriores a la crisis y que, centralmente, están orientados en función a los resultados que puedan conseguir y consolidar las gestiones gubernamentales departamentales y municipales respecto de las grandes o principales demandas ciudadanas.

En el caso de la Gobernación de Cochabamba, su gestión habrá de medirse en función de la articulación y sinergia con el Gobierno del nivel central (principal financiador y sostén de la gestión) y, en el caso de los municipios, respecto de la articulación horizontal, como en el caso específico de la Región Metropolitana, que es un nivel de coordinación intergubernativa entre ocho gobiernos autónomos (el departamental y siete municipios) y de cuyos resultados dependen los principales problemas de la calidad de vida a partir de lo sanitario, pasando por lo económico-productivo y terminando por lo ambiental.

Respecto a la agenda pendiente, los temas básicos son los siguientes: terminar de construir el Tren Metropolitano exige la articulación del ministerio a cargo de la obra con la Gobernación y los municipios que deben liberar áreas y hacer las adecuaciones urbanas necesarias, descontando la definición fundamental de la línea amarilla a cargo del municipio de Cercado. Solucionar el problema de la basura, por otra parte, demanda que los siete municipios, a la cabeza de la Gobernación, procesen sus residuos sólidos diariamente mediante un único modelo de gestión. Descontaminar el río Rocha, por otra parte, requiere de un convenio intergubernamental de, cuando menos, 25 municipios, la Gobernación y el nivel central, para la ejecución de un Plan Director, el cual concierne a una población cercana al 60% del departamento, asentada en torno a la cuenca hidrográfica. Ni hablar, además, de la amplia agenda ambiental que implica afrontar la contaminación aérea o la estructuración de un transporte masivo no contaminante y que dé lugar al uso de medios alternativos y saludables como la bicicleta, entre otros.

En la segunda perspectiva, todo indica –como ya ocurrió en el municipio de Entre Ríos, que votó en una especie de primarias o internas para elegir entre nueve candidatos a la Alcaldía– que, ante la realidad de corrientes lideradas por liderazgos enfrentados y varios candidatos

de un mismo bloque político, la salida de las elecciones primarias deberá constituirse en el filtro democrático que impida la fragmentación política y privilegie la decisión ciudadana. Las elecciones primarias pueden marcar una diferencia sustancial para el procesamiento orgánico, social y ciudadano de la inevitable disputa política interna y un freno ante eventuales fracturas políticas. En ese sentido, nuestro ejercicio democrático podría enriquecerse, antes que sufrir por las divisiones y las fracturas políticas, con esta forma de organización horizontal de la política en torno a lo social y lo comunitario (fácilmente asimilable desde los distritos urbanos) y que tiende a imponerse como un modelo de democracia más radical que la simple mecánica de representación a través de partidos políticos y personerías políticas.

Consecuentemente, la propuesta de una agenda democrática mínima para la postcrisis y el indetenible y próximo Bicentenario, en 2025, requiere de la coordinación vertical y horizontal de las gestiones intergubernativas orientada a la resolución de las problemáticas estratégicas y al desarrollo de los niveles de institucionalidad como, por ejemplo, el rechazado Estatuto Autonómico Departamental o el de las faltantes Cartas Orgánicas Municipales que son un vacío normativo e institucional insoslayable, el cual debe resolverse urgentemente.

Referencias

–Resultados finales y Estadística del Padrón Electoral 2019:
<https://cochabamba.oep.org.bo/procesos-electorales-y-consultas/democracia-representativa/elecciones-generales/elecciones-generales-2019/> (Resultados finales Cochabamba)
<https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2019/> (Estadística del padrón electoral biométrico y resultados generales)

–Resultados finales y Estadística del Padrón Electoral 2020:

<https://cochabamba.oep.org.bo/procesos-electorales-y-consultas/democracia-representativa/elecciones-generales/elecciones-generales-2020/> (Información de apoyo)

<https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2020/> (Estadística del padrón electoral biométrico y resultados generales)

–Resultados finales y Estadística del Padrón Electoral 2021:

<https://www.oep.org.bo/elecciones-subnacionales-2021/> (Resumen estadístico del padrón electoral biométrico y resultados generales)

<https://computo1v.oep.org.bo/> (Resultados específicos por desagregación municipal)

Anexo Elecciones municipales Cochabamba (2021): Resultados por regiones y municipios

		Alcaldía		Segundo		Tercero		Válidos	Blancos	Nulos	Participación
REGIÓN METROPOLITANA	Cercado	Súmate	55,63%	MAS-IPSP	26,69%	MTS	8,50%	96,25%	1,09%	2,67%	86,02%
	Quillacollo	UNE	35,82%	MAS-IPSP	34,96%	Súmate	7,23%	92,82%	2,46%	4,72%	85,44%
	Sipe Sipe	MAS-IPSP	51,08%	UNIDOS	35,78%	Súmate	10,48%	91,63%	3,01%	5,37%	86,48%
	Tiquipaya	MAS-IPSP	37,41%	MTS	23,87%	Súmate	19,21%	93,84%	1,90%	4,27%	86,56%
	Vinto	MAS-IPSP	42,25%	UNE	21,84%	PPS	17,94%	91,23%	2,83%	5,93%	85,88%
	Sacaba	MAS-IPSP	40,03%	MTS	25,92%	Súmate	14,10%	93,39%	1,95%	4,66%	86,49%
	Colcapirhua	C-A	25,26%	MAS-IPSP	23,07%	Súmate	16,52%	93,68%	2,12%	4,20%	87,22%
	Independencia	MAS-IPSP	71,24%	MTS	25,88%	PAN-BOL	2,89%	89,50%	4,00%	9,42%	85,06%
	Morochata	MAS-IPSP	100,00%	PAN-BOL	0,00%	X	X	94,70%	4,30%	1,00%	87,20%
	Cocapata	MAS-IPSP	100,00%	X	X	X	X	73,58%	8,93%	17,49%	83,35%
REGIÓN ANDINA	Arque	MAS-IPSP	100,00%	SOMOS	0,00%	X	X	91,07%	1,37%	7,56%	86,89%
	Tacopaya	MAS-IPSP	93,03%	MTS	6,97%	FPV	0,00%	80,57%	3,48%	15,94%	88,10%
	Sicaya	MAS-IPSP	100,00%	X	X	X	X	84,19%	8,82%	6,99%	87,01%
	Tapacari	MAS-IPSP	95,38%	MTS	4,62%	PAN-BOL	0,00%	87,92%	2,18%	9,90%	87,74%
	Bolívar	MAS-IPSP	100,00%	PAN-BOL	0,00%	X	X	92,59%	5,33%	2,09%	84,53%

Continúa en la siguiente página

	Alcaldía		Segundo		Tercero		Válidos	Blancos	Nulos	Participación
Colomi	MAS-IPSP	67,91%	MTS	32,09%	X	X	92,63%	2,69%	4,68%	86,37%
Tarata	MAS-IPSP	66,09%	Sumate	33,91%	PAN-BOL	0,00%	94,04%	2,48%	3,48%	83,05%
Anzaldo	MAS-IPSP	88,90%	Sumate	11,10%	X	X	82,91%	4,33%	12,76%	84,65%
Arbieto	MAS-IPSP	59,34%	MTS	33,77%	Sumate	9,88%	91,92%	3,51%	4,57%	84,27%
Sacabamba	MAS-IPSP	94,31%	MTS	5,69%	X	X	90,55%	3,82%	5,63%	85,79%
Capinota	MAS-IPSP	48,02%	MTS	39,15%	UNIDOS	7,16%	92,25%	2,35%	5,39%	86,34%
Santiviñez	MAS-IPSP	69,07%	Sumate	18,69%	MTS	12,23%	94,60%	1,59%	3,80%	84,76%
Cliza	MTS	37,77%	UPC	36,85%	MAS-IPSP	25,38%	92,01%	2,07%	5,92%	83,70%
Toco	MAS-IPSP	49,48%	MTS	30,33%	Sumate	20,19%	90,89%	3,74%	5,36%	83,99%
Tolata	MAS-IPSP	48,62%	SOMOS	22,34%	Sumate	15,62%	94,36%	1,92%	3,72%	77,48%
Punata	MAS-IPSP	44,36%	PDC	22,90%	MTS	8,63%	90,10%	2,79%	7,05%	83,75%
Villa Rivero	JESUCA	49,44%	MAS-IPSP	47,56%	UNIDOS	2,99%	91,32%	3,25%	5,42%	84,35%
San Benito	MAS-IPSP	48,94%	ARI	29,95%	PAN-BOL	8,96%	92,65%	2,55%	4,80%	85,80%
Tacachi	FPV	36,02%	MTS	32,80%	MAS-IPSP	31,18%	95,38%	1,15%	3,46%	91,55%
Cuchumuela	MAS-IPSP	76,89%	MTS	23,11%	X	X	92,74%	3,28%	3,98%	89,89%

REGIÓN DE LOS VALLES

Continúa en la siguiente página

		Alcaldía		Segundo		Tercero		Válidos	Blancos	Nulos	Participación
REGIÓN DEL TROPICO	Villa Tunari	MAS-IPSP	100,00%	Sumate	0,00%	X	X	93,65%	1,81%	4,54%	89,30%
	Chimoré	MAS-IPSP	85,37%	MTS	14,63%	PAN-BOL	0,00%	94,02%	2,23%	3,75%	84,75%
	Puerto Villarroel	MAS-IPSP	90,72%	PAN-BOL	9,28%	X	X	95,27%	1,87%	2,87%	88,29%
	Entre Ríos	MAS-IPSP	84,07%	MTS	15,93%	PAN-BOL	0,00%	94,66%	2,30%	3,04%	86,79%
	Shinahota	MAS-IPSP	89,65%	MTS	10,35%	PAN-BOL	0,00%	95,44%	1,60%	2,96%	84,58%
	Aiquile	MAS-IPSP	68,90%	UNPA	24,91%	Sumate	6,19%	90,05%	3,22%	6,73%	82,77%
	Pasorapa	MAS-IPSP	42,33%	Sumate	29,04%	SOMOS	28,62%	94,42%	1,39%	4,18%	87,61%
	Omoreque	MAS-IPSP	73,26%	Sumate	26,74%	X	X	91,18%	2,77%	6,05%	84,22%
	Arani	MAS-IPSP	52,80%	MTS	26,69%	C-A	20,51%	89,50%	2,87%	7,62%	86,31%
	Vacas	MAS-IPSP	100,00%	MTS	0,00%	Sumate	0,00%	77,19%	13,68%	9,13%	88,08%
REGIÓN DEL CONO SUR	Totora	MAS-IPSP	87,38%	FPV	10,44%	Sumate	2,17%	92,21%	2,57%	5,22%	87,49%
	Pojo	MAS-IPSP	100,00%	PAN-BOL	0,00%	X	X	94,38%	3,93%	1,70%	88,16%
	Pocona	MAS-IPSP	100,00%	PAN-BOL	0,00%	Sumate	0,00%	88,25%	2,89%	8,85%	87,80%
	Mizque	MAS-IPSP	79,24%	UNIDOS	16,47%	Sumate	4,29%	92,01%	2,74%	5,24%	87,11%
	Vila Vila	MAS-IPSP	89,52%	MTS	10,48%	Sumate	0,00%	90,75%	3,06%	6,19%	87,98%
	Alalay	MAS-IPSP	100,00%	Sumate	0,00%	X	X	85,73%	5,99%	8,29%	88,08%
	Tiraque	MAS-IPSP	66,64%	PARCA	25,04%	MTS	8,32%	89,57%	3,25%	7,18%	87,82%

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del TSE.

Lo indio, indígena y comunitario en la recomposición del campo político en Bolivia tras el ciclo electoral 2020-2021

Elizabeth Huanca Coila

1. Constitución y restitución del sujeto político IOC en la vida democrática: pistas de un largo, doloroso y empeñoso andar

La participación y representación política en el sistema democrático electoral no es producto de un reconocimiento tácito o natural desde las diferentes estructuras de gobierno que pasaron por el territorio boliviano. Desde la instalación de la modernidad como sistema único y válido, los sujetos indios lidiaron con la racialidad de las relaciones, con el carácter clasificador como sociedad primigenia, salvaje, sujeto de civilización, sin educación, sin higiene, hechos para el servicio, para peones, sin gusto, sin clase como la “gente bien” a decir de los grupos sociales oligárquicos blanco-mestizos.¹

1 Como bien lo describe Lorgio Orellana: “El MAS no transformó la estructura básica del patrón de acumulación primario exportador, tampoco la economía terrateniente, ni la explotación de blanco-mestizos y mestizos sobre ‘indios’ y ‘cholos’. En esos trabajos veíamos que la preeminencia socioeconómica y cultural de la oligarquía, en algún momento buscaría reproducirse nuevamente en la esfera del poder político. Y ese contradictorio proceso se está desarrollando hoy. El gobierno de transición da varias señales en el sentido de un retorno de las clases de grandes propietarios blanco-mestizos, principalmente de Oriente, al manejo de la administración pública” (2020: 166).

Esta histórica relación de lucha y conquista de derechos políticos se puede organizar en cuatro momentos, descritos a continuación.

Luchas de liberación del yugo colonial

Muchos de los textos historiográficos que relatan las grandes rebeliones indígenas en tierras altas y tierras bajas, como las de 1780-1781 y 1899, sostienen que la organización de estas sublevaciones estaba regida a partir del uso de sus formas originarias comunitarias, en las que las decisiones eran tomadas con base a la voluntad general dentro de las asambleas y no tanto desde los mandos superiores (Quispe, 1990; Hylton y Thomson, 2007).² Formas que responden a sistemas políticos propios, premodernos, con una larga trayectoria y modelamientos según los contextos, pero insoslayablemente sustentadas en los principios y valores de las concepciones andinas. Estudios serios pero poco conocidos nos hablan del desarrollo de un sistema político como soporte al Control Vertical Territorial Eco-simbiótico (Condarco y Murra, 1987) en las sociedades andinas y amazónicas premodernas, el amalgamamiento y recreación de estos sistemas en la época colonial a través de la autogestión de los territorios a los que fueron arrinconados (Platt, 1987) y estudios más actuales de Simón Yampara y del Centro Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí (ISALP) dan cuenta de la supervivencia de estos sistemas con la noción básica vertical-horizontal y diagonal.

Desde el control colonial de los territorios –ahora bolivianos– y sus poblaciones, hasta entrada la vida republicana, las rebeliones indias/indígenas buscaron la

2 Las mismas rebeliones fueron reguladoras de las prácticas distorsionadas de poder en las sociedades indias/indígenas. Es el caso de Tupak Katari y Bartolina Sisa, quienes asumen el liderazgo de la rebelión por encima de las autoridades cacicales que ya estaban comprometidas con su pequeño poder ante la Corona española.

liberación de la subordinación, sometimiento, esclavización, explotación, violencia y deshumanización ejercidos por los poderes de la Colonia pero también por los empoderados gamonales, doctorcitos y mestizo-criollos, como nueva casta política local. La liberación y la resistencia implicaron también la restitución de las bases espirituales y epistemológicas, así el *Taqi Unquy* (1560), conocido como la “rebelión de las Huacas”, logró aglutinar a varios líderes y lideresas espirituales que articularon acciones con líderes y lideresas políticos (Castro-Klarén, 1990). Luego están las rebeliones de Tupak Katari/ Julián Apaza y Bartolina Sisa (1780), constituidas también en un hito en el proceso de creación de pensamiento político andino;³ la rebelión liderada por el cacique mojeño Pedro Ignacio Muiba en 1810; el Movimiento de la Guayochería,⁴ liderado por el itonama *chokiwa/chaman* Andrés Guayocho y coliderado por la mojeña Nicolasa Nosa de Cuvene en 1887 (Nicolasa cogobernaba con su esposo Nicanor Cuvene), José Santos Noco y muchos otros y otras que no los registra la historia. En 1799 y 1804-1809 las rebeliones chiriguanas,

-
- 3 En un contexto de pérdida de tierras, dignidad, autonomía, hambre, miseria, despojo y humillación española, donde la Corona costeó su comodidad y patrimonios con la sangre y servidumbre de los indios, ambos líderes plantean la base política de su rebelión en base a los siguientes elementos: 1) Lucha anti-colonial contra la discriminación racial “invisible”, por justicia, dignidad y libertad; 2) Diarquía del poder, asumiendo juntos la responsabilidad de la rebelión y predicando el gobierno propio y el derecho a la tierra y al territorio; 3) La reconstitución del Qollasuyo, sobre sistemas organizativos propios; 4) Un proyecto político de rearticulación organizativa comunal (abajo-arriba) y la eliminación de “cacicazgos caudillistas”; 5) Pluralidad de los sistemas de gobierno (a diferencia de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, más reformistas, la propuesta de Sisa-Katari planteaba la transformación o cambio de las estructuras e instituciones coloniales; 7) Eliminación del blanco, en alusión al sistema colonial *q'ara*, más allá de la pigmentocracia, pues su rebelión incluyó la eliminación de indios/as que se blanqueaban.
- 4 Calificada como revuelta y éxodo, más tarde se comprenderá que fue un movimiento político espiritual.

con el liderazgo del cacique Cumbay frente al poder colonial, colaboraron en la independencia de Bolivia. Del mismo modo sucedió en 1892 con Apiawiyki Tumpa y los guerreros guaraníes/chiriguano que se levantaron en contra de la expropiación de tierras y de la desaparición de su cultura. Cabe mencionar, por otra parte, a los Caciques Apoderados, en 1880, y la rebelión de Zárate Willka, en 1899. El terrible Willka impulsa a Juan Lero Ponce (1899), en Oruro, quien funda el primer Gobierno Indio de Peñas con la consigna de formar un movimiento político propio, independiente de las alianzas con mestizos y criollos, a raíz de las experiencias vividas, particularmente con José Manuel Pando.⁵

El aparato colonial republicano gamonal desplegó acciones inverosímiles para tiempos de derechos humanos, por ejemplo, en 1881 Arteché forma una Comisión de Guerra contra los mojeños, itonamas y trinitarios, a la cabeza de Nicolás Suárez, en Beni, porque los indios los estaban dejando sin mano de obra. Para masacrarlos, se crea la narrativa de que los indios insurrectos atacarán a los *carayanas*/blancos porque no los quieren y tienen la intención de la toma violenta de Trinidad. Esta comisión incluyó en sus filas a guerreros flecheros indígenas canichana (Cortez, 2011) En tiempos republicanos, los hacendados vendían propiedades “incluyendo” indios, poco más como ganado o esclavos.

Cabe apuntar la saña y crueldad con la que se castigó a las mujeres atrapadas en situación de rebelión. Las líderes espirituales fueron perseguidas y también acusadas de ser hechiceras. Las que lograron escapar se refugiaron en lugares alejados y de difícil acceso para su supervivencia. Bartolina Sisa fue la imagen del disciplinamiento contra quienes se quisieran rebelar; fue torturada por un año aproximadamente,

5 A quien Zárate Willka había ayudado a ganar la Guerra Federal, entre enero y abril de 1899. Una vez ganada la guerra y poseionado Pando como presidente, Willka fue apresado y todo el compromiso y agenda para el cogobierno criollo-indígena fue desechado.

desmembrada en vida –le cortaron los senos y la lengua–, torturada mediante la práctica de asesinatos frente a ella, y sus restos, descuartizados, fueron colgados en sitios estratégicos en los que se produjo la rebelión. Del mismo modo, Nicolasa Nosa fue azotada y torturada durante varias jornadas hasta ser ejecutada; ese mismo día muchas otras lideresas políticas y espirituales fueron asesinadas frente a sus familias y comunidades (REPEM, 2020).

Entre 1829 y 1937, la época de la promoción de la Confederación Perú-Boliviana, la predominancia de las castas y élites estaba vigente; por supuesto, el indio o la india no tenían significancia alguna, no eran sujeto de ningún derecho y apenas sobrevivían en calidad de servidumbre o, en ciertos casos, de “delincuentes”, como se calificaba a los rebeldes. Incluso, en el Gobierno electo de Melgarejo, se aplicó, con mayoría absoluta, la Ley de Desvinculación de comunidades indígenas (1866), seguida por las disposiciones de la Convención Nacional de 1880,⁶ así como por normativa en esta materia emitida por los distintos gobiernos liberales entre 1899 y 1920: todos apostando al despojo de la propiedad comunal a las sociedades indias en tierras altas y en tierras bajas, con sus matices regionales, ante el apetito individual acumulador de una élite blanco-mestiza/criolla. En suma, se instaura agresivamente la propiedad moderna y, desde 1885, avanza la reglamentación para la colonización hacia el oriente-Amazonía, situación ante la cual las naciones y pueblos indios/indígenas resisten o asumen el pago de las contribuciones obligatorias. La destrucción de la gestión territorial colectiva fue clave para mermar las condiciones de ejercicio de autogobierno, economía y sociedad bajo el

6 A pesar de que esta Convención, que concluye con una Constitución Política del Estado, asume la democracia liberal y marca un hito en la comprensión de la democracia como derecho y establece un sistema político electoral como método para elegir gobernante, también fija claramente la división de la sociedad de los que son (patricios) y no son (plebeyos) sujetos de este derecho, respecto del que, obviamente, los indios quedaban al margen.

principio de reciprocidad, base compartida por las diversas sociedades indias.

Desde 1825, la ciudadanía del indio era prácticamente nula, por lo que, los procesos “electorales”, en el marco de una democracia militar caudillista y oligárquica, no incluían a la mayoría de la población (indios y mujeres) como habilitados para el voto o la representación (Chávez *et al.*, 2007). Había, sin embargo, matices y resistencias, como es el caso de Santos Noco, líder mojeño trinitario que en 1905 abogó por conseguir el ejercicio de la ciudadanía manteniendo sus principios y normas como pueblo y permitiendo el ingreso del mecanismo reduccional “civilizatorio”, pero con el objetivo de que les dejen autogestionarse en territorio propio, sin abusos ni explotación (Guiteras, 2010).

Ciudadanización, ideologización y agenda india/indígena/indigenista

Durante el siglo XIX las élites criollas se ocuparon de despojar al indio de sus tierras y de relegarlo a la condición de salvaje y siervo. El peligro para las sociedades letradas era la fuerza colectiva del indio, la pervivencia de estructuras y formas organizativas de su economía y de su autogestión política. Entre 1880 y 1938, según la Constitución, el indio no tenía derecho a la ciudadanía porque mantenía sistemas de propiedad colectiva –incumpliendo el requisito de detentar propiedad individual con el respectivo pago al Estado– y era analfabeto; por lo tanto, se lo consideraba incapaz del ejercicio político –del mismo modo, aquel que recibía educación de su patrón tampoco era sujeto del derecho al voto y a la elección– (Irurozqui, 2000). En tanto, la movilidad del indio adquiría cada vez más el tono doble de multirresidente, observándose en La Paz y Trinidad el crecimiento de barrios en correspondencia con el ayllu o comunidad o con el cabildo⁷

7 Por ejemplo, las comunidades lacustres tenían sus domicilios en la ciudad de La Paz alrededor de lo que ahora es la zona

y actividades altamente ligadas a las formas de producción rural o a la mano de obra especializada (matarifes/carniceros, pescaderos, artesanos, etc.). Ya en el siglo XX, la participación “cuasi obligada” del indígena en la guerra del Chaco también abre les ojos sobre las relaciones subordinadas y raciales.

A partir de este contexto, la demanda de educación se suma a la agenda india, debido a que era la barrera que les impedía exigir el derecho a la ciudadanía y, con ello, otros derechos conexos como la representación política, la propiedad y la autogestión/autogobierno. Educación para la liberación.

Entre 1899 y las primeras cuatro décadas del siglo XX, en tierras altas se presentan una serie de rebeliones indias en búsqueda del autogobierno y de la liberación de la opresión, caracterizadas por el diálogo y conexión de liderazgos con las tierras bajas y el Chaco (guaraníes, mojeños, chiquitanos). La “aparente” Guerra Federal (1898-1899), arraigada en la pugna entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, se llevó en medio muchas vidas indias, ya sea como aliados o como pongos, además de la traición de Pando a Zárate Willka.

En 1899 Zárate Willka es declarado presidente indígena en distritos comprendidos entre La Paz, Mohoza, Corocoro, Ayo Ayo y Caracollo; en 1921, Jesús de Machaca constituye su gobierno comunal autónomo gestionado bajo el sistema del ayllu, sustentado en su título general de tierras reconocido por la Prefectura; en 1927 tiene lugar la rebelión de Chayanta encabezada por los hermanos Katari; entre 1928 y 1934 se gesta la emancipación educativa a la cabeza de Leandro Nina

del Cementerio General, El Tejar y La Portada, con una cierta réplica en la ciudad de El Alto. Recreando las formas organizativas del ayllu e instituciones con matiz moderno se conformaron los centros de acción, organizaciones urbanas que dependían de la organización territorial. Lo mismo sucedió en el caso de Trinidad, donde se formaron nuevos barrios específicos de mojeños, itonama y yuracaré, en los que recrearon su cabildo indígenal pero en contexto urbano.

Quispe (cacique apoderado), presidente de la Sociedad de la República del Qullasuyu-Centro Educativo Qullasuyu (1930). Nina Quispe genera un movimiento con los representantes de cada departamento de Bolivia y, a través del proyecto “la renovación de Bolivia”, emite una solicitud de deslinde general de territorios (1934).⁸ Por su parte, en 1930, Santos Marka T’ula, fundó la Sociedad Centro Católico de Aborígenes Bartolomé de las Casas.⁹ Luego de la Guerra del Chaco, los indios impulsan y logran legalizar la existencia de comunidades indígenas/ayllus en la Constitución Política del Estado de 1938 (Ticona, 2003; Choque, 2016). En este periodo, la reafirmación clasificatoria de la identidad y, por lo tanto, el derecho ciudadano, campean, pues existían tres tipos de cédulas: A (blancos), B (mestizos) y C (indios) (Coronel, 2018).

En 1927 se presenta el inusual caso del candidato por circunscripción provincial-uninominal, Manuel Chachawayna, un achacacheño letrado, propietario y, por lo tanto, habilitado de acuerdo a la ley electoral, que participa con el Partido de la Unión Nacional, de Hernando Siles, quien lo acogió para atraer nuevos votantes alfabetizados y civilizados, especialmente a comerciantes y artesanos, consolidando su alianza con aymaras y quechuas. En cambio, para Chachawayna la estrategia era avanzar en la toma de poder político a través de mecanismos electorales (Ticona, 2003).

En mayo de 1945 se realizó el Primer Congreso Indígenal con patrocinio estatal del Gobierno militar de Gualberto Villarroel (presidente de blancos). Aunque el Congreso

8 Se articuló a líderes de tierras bajas, de los valles cochabambinos, además de guaraníes, tacanas, chiquitano y mojeños. Nina Quispe hablaba de una Bolivia distinta a la planteada por los gamonales, planteaba que indios y no indios son hermanos; proclamó la existencia de una sola casa para todos, con luz.

9 Esta organización fue una plataforma educativa pero también de lucha político-ideológica, junto a la Sociedad República del Kollasuyo.

estaba promovido por el Comité Indigenal, liderado por Luis Ramos Quevedo (presidente de indios), este no participó.¹⁰ No obstante, asistieron líderes de todo el país: guaraníes, chiquitanos, moxeños. Participaron naciones como Qhara Qhara cuyo cacique de Macha, Agustín Carvajal, tenía el mandato de hacer respetar el techo fiscal de su territorio (Platt, 2018). Comunidades como Santiago de Ojje (San Pedro de Tiquina, La Paz), ayllu que asistió junto al Centro de Acción Santiago de Ojje (organización urbana) cuyo representante Juan Coila tenía el mandato de exigir educación y resguardo territorial (testimonio de su hija, Salomé Coila) entre Bolivia y Perú.¹¹ El Congreso concluyó con cuatro acuerdos que se constituyeron en decretos, sobre dos temas clave: la abolición del pongueaje y *mit'anaje*, y el acceso a la educación, en coincidencia con las posturas de la Conferencia de Pátzcuaro (México, 1941),¹² la cual dio inicio al periodo de Estados promotores de políticas *indigenistas integracionistas*.

-
- 10 Ramos Quevedo fue desterrado por el mismo Gobierno, exiliado a Riberalta. Sin embargo, sus propuestas emancipatorias, analizadas y discutidas con varios líderes y lideresas por años, fueron las bases para los acuerdos del Congreso.
 - 11 Santiago de Ojje carga, hasta el día de hoy, con la ruptura de su dinámica territorial por encontrarse en la frontera lacustre del Titikaka, entre Perú y Bolivia. Durante algunos años pertenecieron al Perú pero, después de arreglos políticos sin la participación de la comunidad, aparecieron perteneciendo a Bolivia; lo mismo sucedió con sus islas. Ojje fue una de las cuatro ciudades principales tiwanakotas.
 - 12 A través del Sistema de Naciones Unidas, y desde la firma del acuerdo de Pátzcuaro, en 1940, los Estados han creado sendos reconocimientos “formales” de la existencia de Naciones y Pueblos Indígenas con derechos sociales, económicos, políticos y culturales. En la década de los noventa, en plena instalación del modelo neoliberal, se dieron “avances” de todo tipo y alcance para “incluir o incorporar” a los marginados a los procesos de democráticos y de desarrollo, como “respuesta” a las movilizaciones realizadas en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.

Los decretos ocasionaron rebeliones en las haciendas, represalias y expulsiones patronales contra los indios que asistieron al Congreso,¹³ también dieron lugar, entre otras causas, a la caída de Villarroel el 21 de julio de 1946. En 1947, en Caquiaviri se crea la República de Indios, en medio de una cadena de rebeliones indias sucedidas entre La Paz y Cochabamba (Huanca, 2017; Choque, 2016).

En este periodo, el sistema democrático electoral se consolida sobre la base de lo estipulado en la Constitución Política del Estado de 1938, que definía el periodo de mandato del presidente (cuatro años) y la elección directa de los diputados uninominales por provincia. Aparecen tres tipos de circunscripción (nacional, departamental y provincial). Para postularse, los candidatos tenían que inscribirse en el Registro Civil, cumplir con los deberes militares, ser bolivianos con certificado de nacimiento, sin condenas ni pliegos de cargo, y tener 35 años para candidatear a presidente y 25 para diputado. Por otra parte, para votar necesitabas ser boliviano, tener 22 años, leer y escribir y estar inscrito en el Registro Civil. Los indios veían estratégica la educación y por ello la impulsaron. Por ejemplo, Juan Coila, autoridad máxima de Santiago de Ojje, después del Cabildo Indigenal, junto a la población local, emprendieron la tarea de construir la escuela, conseguir un supervisor y formalizar la educación, lográndolo recién en 1955,¹⁴ 24 años después de la fundación de la Escuela-Ayllu en Warisata. Similares casos ocurrieron en distintas provincias del país.

13 Por ejemplo, es el caso de la hacienda Tocopa de Mendoza, cuyos patrones mandaron a flagelar a los tres delegados que asistieron al Congreso y les quitaron todo el material que les proporcionaron, particularmente lo relacionado a educación, con el claro mensaje de que esta era tierra del patrón y que ni el presidente tenía poder. Luego fueron expulsados de la hacienda.

14 Tal fue su empeño y compromiso con la educación que decidió donar las calaminas de su casa para el techo de las dos primeras aulas (testimonio de Paulina Mamani, esposa).

La Revolución de 1952, a través de la alianza político-campesina con el MNR,¹⁵ después de la serie de rebeliones protagonizadas con cierto apoyo de la Federación Obrera Local (FOL), fue un hito histórico por la reivindicación de los derechos políticos, con medidas como la nacionalización de las minas para dar paso a la Corporación Minera Estatal (Comibol), la Reforma Agraria para la eliminación de las haciendas –sin gran éxito– y el voto universal, que pretendió incorporar a todos a la vida política nacional sin considerar que la sociedad criollo-mestiza mantenía relaciones racializadas y marginales. El indio tuvo que esperar 127 años, aproximadamente, desde la fundación de la República, para acercarse a su reconocimiento como ciudadano; sin embargo, la categoría diferenciadora pervivió (Coronel, 2018), aunque trataron de subsumirla bajo la denominación genérica de “campesinos”.

El voto universal fue incluido en el Estatuto Electoral de 1956 y se sumó el requisito de afiliación partidaria para ser candidato, potenciando el pongueaje político de las “masas” votantes. Con la Reforma Agraria se impulsó la sindicalización, cambiando la identidad del sujeto indio por la de campesino y ocasionando, con ello, la exacerbación rural del sujeto y la destrucción de la base de gestión comunal, lo cual derivó en el empobrecimiento del indio. La instrumentalización política de los sindicatos campesinos y obreros, cooptados, particularmente en los niveles departamentales y nacional, derivó en fraccionamientos a la hora de las disputas electorales.

Mientras, la sociedad criolla consolidaba la binariedad político-social entre los ciudadanos de la nación (blancos y mestizos) y la indiada, bajo esquemas de representación del otro como el “no sujeto” de derechos o el incapaz del ejercicio político. Las sociedades indias avanzaban, entretanto, en la construcción de su agenda en el horizonte de la liberación de

15 Un par de años antes, el MNR no había propuesto la Reforma Agraria, pero a partir de su alianza campesina y de la habilitación del indio como votante, la propuesta cobra relevancia.

la opresión, integrando educación, reconstitución territorial, autogobierno y ejercicio de derechos ciudadanos plenos, reclamando sus derechos bajo los mismos términos o reglas del Estado boliviano; por ejemplo, la protección contra abusos a comunidades que tributaban desde la Colonia hasta la República, resistiendo al surcofundio o luchando por acceso a educación para ser ciudadano.¹⁶ Evidentemente, el Estado Nacionalista, con el MNR como partido hegemónico en el poder (1952-1964), se quedó en la formalidad del reconocimiento de los derechos y de la democracia, en el contexto de una crisis económica, de conocimientos y valores que profundizó más las diferencias de unos con otros. Así, las bondades de la modernidad se fueron afincando, sobre todo, en algunos segmentos económicos que detentan también poder político.

Desarrollo político-ideológico

En un contexto de múltiples crisis en torno al indio y de avance de la vida moderna, la problemática indígena no se resolvió con el acceso a la tierra.¹⁷ Durante la segunda mitad del siglo XX se transforman las urbes con el desplazamiento de las masas rurales a ciudades como La Paz, Oruro y Cochabamba, lo cual permitió mayor contacto con la cosa política, pero, al mismo tiempo, acentuó la racialidad de las relaciones con las sociedades criollas. Sin embargo, de los

16 Los ojjeños, por ejemplo, en 1952 condicionaron su participación con el MNR a cambio de la construcción de la escuela –demanda que no se cumplió– y del respeto a su territorialidad, es decir a la conservación del ayllu íntegro sin parcelación individual. Si bien Ojje figura como organización sindical, sus sistemas de producción, gobierno y normas internas responden al sistema del ayllu.

17 La historia muestra cómo la condición de servidumbre persistió en la zona guaraní. Por otro lado, el latifundio se transformó para convertirse en surcofundio en tierras altas, a partir de la promoción del modelo sindicalista y la posterior titulación de la tierra de manera individual.

migrantes “multi-doble” residentes emergieron generaciones de aymara-quechuas con nuevas visiones de vida, entre lo urbano y lo rural, saltando al campo de la disputa intelectual, política e ideológica.

Las décadas de 1960 y 1970 son de auge de organizaciones políticas “indias”, con un fuerte componente ideológico basado en la liberación y la descolonización. Así nacen el Partido Auténtico Nacional (PAN), en 1960,¹⁸ el Partido de Indios Aymaras y Keswas (PIAK), en 1962 –el cual, más tarde, en 1966, se llamó Partido Indio de Bolivia (PIB)–, ambos liderados por Fausto Reinaga; el Movimiento Nacional Tupak Katari (MNTK), en 1968; y el Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA),¹⁹ en 1975 (Quispe, 1999; Macusaya, 2014; Huanca, 2017). Todos tuvieron una fuente ideológica indianista y luego katarista, en desarrollo y muy potente, con dos soportes clave: 1) La fundación del Movimiento Indio Julián Apaza (MUJA), semillero de liderazgos en organizaciones y partidos “indígenas” andinos, por parte de estudiantes aymaras de la Universidad Mayor de San Andrés; y 2) El documento político denominado “Manifiesto de Tiwanaku” (1973),²⁰ cuyos planteamientos políticos fundamentan la liberación india de todas las formas de opresión, principalmente de la económica, ideológica y cultural, así como del despojo territorial. Este manifiesto plantea el ayllu como sistema político y democrático, cuestiona a los partidos y las ideologías

18 Su manifiesto “El reloj del tiempo” y los 22 fundadores son la base de las siguientes organizaciones y liderazgos políticos, tanto en partidos como en organizaciones (por ejemplo, la CSUTCB). Son también las bases preliminares ideológicas indianistas y de su consiguiente derivación en el pragmatismo katarista.

19 Julio Tumiri, uno de sus representantes, hizo activismo internacional y su planteamiento principal estuvo orientado al reconocimiento de la libre determinación.

20 A pesar de que se atribuye la redacción base a Xavier Albó o al CIPCA –aspecto cuestionado por indianistas kataristas contemporáneos–, esto no deslegitima el rol clave que tuvo en su tiempo y la instrumentalización del manifiesto por los políticos y líderes aymaras de su época.

de izquierda y derecha, y propone contar con un instrumento político propio como única posibilidad de soslayar una sociedad colonial, donde diversos partidos y organizaciones políticas han funcionalizado al indio-campesino solamente para llegar al poder, olvidándose de las bases de sus alianzas y/o acuerdos, y derivando, más bien, en el encarcelamiento y, a veces, muerte de los líderes y las lideresas indígenas. Luego se funda Mink'a como institución activista que posiciona las apuestas indianistas a nivel nacional e internacional a través del Consejo Indio de Sud América (CISA). En 1978, MITKA es el primer partido político indio-indianista, con personería legal, en presentar candidatura a presidente y vicepresidente (postulando a Luciano Tapia y a Isidoro Copa Cayo, respectivamente), con un programa político gubernamental descolonizador, pluricultural y plurinacional que recoge los constructos ideológicos históricos y últimos.

En tierras bajas, con la Revolución de 1952 llega la abolición de las haciendas y de las deudas de los indígenas. Entonces, varias naciones y pueblos indígenas que habían sido esclavizados o utilizados como servidumbre retornaron al monte, aunque otros permanecieron bajo el ala del patrón. Los mojeños reprodujeron su movimiento mesiánico “en busca de la Loma Santa”, ese lugar mítico donde la reciprocidad es la base fundamental de las relaciones de vida y no existe sometimiento ni persecución. Para los chiquitanos, la situación no cambió mucho, pues la Reforma Agraria benefició más a familias mestizas y criollas. En el caso de los guaraníes, sufrieron traiciones en sus alianzas con los criollos y una parte de las comunidades quedó atrapada en sistemas de esclavización hasta el siglo XXI. A pesar de la insistencia del MNR por instaurar sindicatos bajo la “alianza de clases”, los indios de tierras bajas mantuvieron sus sistemas colectivos, cultivados y revitalizados desde la tradición misional o la resistencia. Para los pueblos amazónicos, este proceso, más allá de parcelar la tierra, sirvió para reorganizarse en comunidades pequeñas. En este periodo de “campesinización”

se instaló el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), organización evangelista que tenía la misión de civilizar a los salvajes, reforzando la binariedad de la sociedad de ciudadanos y los salvajes indios (Huanca, 2017).

En las elecciones de 1980 participaron el MITKA (indianista) y el MITKA-1 (tupakatarista), logrando cada uno una diputación. Por su parte, el Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK), creado como brazo político katarista de la CSUTCB, aglutinó a campesinos de tierras altas y tierras bajas y participó en las elecciones en alianza con la Unidad Democrática Popular (UDP). En las elecciones generales de 1985 participaron el MRTK y la fracción dividida denominada Movimiento Revolucionario Tupak Katari de Liberación (MRTKL), liderada por Jenaro Flores (con base indianista), cuyo candidato a vicepresidente fue Filemón Escobar (izquierdista, no indio, años más tarde importante gestor del MAS).

En 1985 se realizaron las primeras elecciones municipales junto a las nacionales, también participaron el MRTKL y el MRTK. En 1987 se llevaron a cabo elecciones municipales exclusivas, con un fuerte componente social marcado por la “Marcha por la vida”, de agosto de 1986, contra la relocalización y las medidas económicas antipopulares como el Decreto Supremo 21060. En 1989 comienza la era de las megacoaliciones protagonizadas principalmente por partidos criollo-mestizos (derechistas, izquierdistas, populistas), periodo en el que participan el MRTKL, dirigido por Víctor Hugo Cárdenas, y el Frente Único de Liberación Katarista (FULKA), bajo el liderazgo de Jenaro Flores. Surgió también Conciencia de Patria (Condepa), partido de corte populista que capturó una importante masa de votantes aymara-quechuas, lo mismo que el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) en Potosí, Santa Cruz y Beni.

Entre 1990 y 1993, la CSUTCB remarcó una agenda de demandas que incluyó: la cogestión Estado y organizaciones en instancias públicas donde el derecho y la obligación coincidan,

elección de autoridades según normas y procedimientos propios y, con ello, reforma de la Ley Electoral, derecho a la propiedad de la tierra, defensa de recursos naturales, aprobación de la Ley de Naciones Originarias y convocatoria a una Asamblea Constituyente, entre otros (Camacho, 2002).

En 1991 se realizan elecciones municipales con un número importante de nuevos votantes: los indígenas de la Marcha por Territorio y Dignidad (1990), principalmente de tierras bajas, que fueron carnetizados y que se adscribieron a partidos populistas como UCS, Condepa, MBL y el FRI. En 1993, para las elecciones nacionales aparecen varios partidos indios: Movimiento Katarista Nacional (MKN), Eje Pachakuti y el MRTKL en alianza con el MNR, fórmula que gana las elecciones, resultando Víctor Hugo Cárdenas vicepresidente de Bolivia. Así inicial la era del impulso a las políticas indigenistas, el saneamiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y la Gestión Territorial Indígena (GTI).²¹ Con las reformas de segunda generación, en 1994, el MNR insiste con el proceso de modernización de las organizaciones comunales y, a través de la Ley de Participación Popular, se crean las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), como interlocutores válidos ante los Gobiernos Municipales. Se suma a estos “esfuerzos” el MBL²² a través de su ONG IPTK cuya relación funcional con el sindicalismo norte potosino se encargó de avanzar en la desestructuración

21 La CIDOB cobró un protagonismo especial en el relacionamiento con el Estado, pues se implementó el Programa de GTI con apoyo financiero de cooperación internacional, pero coordinado por el Estado. Por otro lado, se intensificó la presencia de ONG en la Amazonía para coadyuvar en la implementación de las medidas estatales.

22 Movimiento Bolivia Libre, partido de corte izquierdista-liberal; IPTK (Instituto Politécnico Tomás Katari), ONG del MBL con actividades concentradas en la región quechua, entre Chuquisaca y Potosí, que privilegió al sujeto político campesino y subalternizó al ayllu a condición de “sujeto de resolución de conflictos internos”. Esto explica su natural alianza política con el MNR en 1993, 1997 y 2002.

de curacazgos de los ayllus (Platt, 2018). Con la nueva Ley N.º 1551 de Participación Popular (20/04/1994), se crean 311 municipios, multiplicándose los campos de disputa electoral y de representación política.

En 1995, la CSUTCB, la CIDOB y la CNAMIOBS crean la Asamblea para la Soberanía de los Pueblos (APS),²³ organización que luego toma cuerpo como Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y que, en 1999 se fusiona al MAS, como el paso para saltar de la resistencia a la toma del poder político. Tanto cuando asciende Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente, como cuando los municipios tienen alcaldes indios o locales, un aspecto débil fue disponer de las capacidades de gestión pública y política bajo el sistema moderno establecido en la administración estatal. Al respecto, cuenta Moira Zuazo, cómo el vicepresidente aymara le comentó que no tenía gente suficiente para cubrir los cargos técnicos en el Gobierno.²⁴ Por otra parte, en el caso de los alcaldes “nuevos”, aunque eran muy legítimos porque gozaron de mayorías absolutas, al término de sus gestiones había casi un centenar de cuentas ediles congeladas por presunta malversación de fondos, en muchos casos vinculados a procedimientos no realizados o evadidos o por seguir los ritmos y mandatos de los gobiernos orgánicos/comunales. Como veremos, esto también se reitera en el caso de los dirigentes de base acusados de corrupción por el Fondo Indígena (2012),²⁵ cuando en realidad estos siguieron los

23 A convocatoria de la CSUTCB, que llevó adelante el I Congreso Nacional de Tierra y Territorio e Instrumento Político (ASP), antecedente del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y del mismo MAS.

24 Comentario realizado en la conferencia “Futuro y desafíos de los partidos en perspectiva nacional y regional”, realizado el 5 de octubre de 2020.

25 Gonzalo Colque, “La mirada moralista del Fondo Indígena”, 22 de diciembre de 2015, Fundación Tierra, disponible en: <http://www.ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/641-la-mirada-moralista-del-fondo-indigena>

procedimientos orgánicos en la gestión de fondos; y es un tema que Felipe Quispe Huanca reiteradamente recomendaba a los bloques de profesionales e intelectuales que lo seguían: “Deben armar planes y propuestas gubernamentales propios, con pensamiento descolonizador, armar equipos de profesionales y políticos con capacidad, pero también con conciencia política”.²⁶

En los años 90 se presenta un contexto oportuno para la lucha porque se presenta un escenario político y democrático con indios e indias. Para esto, fue fundamental el rol tanto de instituciones de apoyo (ONG, fundaciones, radios, etc.) como de organizaciones orgánicas que fueron creadas o fortalecidas (CSTUCB, CSTCB-CSIB, CMIBS, CIDOB, CONAMAQ, APG). En las agendas y los mandatos políticos persistió el autogobierno (sistema político y democracia propia), la reconstitución territorial y de nación, la descolonización social y política, y la idea de la creación de un instrumento político propio.²⁷ En este sentido, la creación de la ASP dio un mandato inicial para capturar el poder político de municipios (pequeños y rurales) donde sea posible amalgamar la democracia comunitaria y/o sindical y la democracia liberal.

En las siguientes elecciones municipales y nacionales fueron las organizaciones sociales las que se aliaron con los partidos para impulsar sus candidatos o para formalizar su elección por votación, sacaron 12 alcaldes para 1993 y 42 para 1995 mismos que fueron prácticamente elegidos de forma orgánica y ratificados a través de los concejos municipales. Se podría decir, entonces, que eran elecciones verdaderamente democráticas porque habían pasado por un proceso territorial serio, de acuerdo a sistemas locales propios de valoración de quiénes serían las personas idóneas

26 Recomendación realizada en un encuentro con bloques de profesionales y dirigencias indianistas, en enero de 2021.

27 Esto ya se había planteado en los años 60 y 70. Un dato importante al respecto es que miembros del MITKA fueron parte de la CSUTCB.

o a qué sector le tocaba turno ser representante en la instancia política: el poder local indio y campesino avanzaba con su democracia propia/apropiada, según las reglas de juego de la Ley electoral liberal (Ardaya, 1996).

Todos los espacios de poder político territorial local fueron disputados, por ejemplo, en las áreas protegidas, las organizaciones locales indígenas y campesinas crearon Comités de Gestión, los cuales, junto al Estado, se encargarían de coestionar estos espacios, particularmente donde existe sobreposición de comunidades indígenas o campesinas.²⁸ En 1997, en las elecciones nacionales varias organizaciones se alían a partidos para llevar sus candidatos propios a diputados uninominales; así, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se alía con la Izquierda Unida (IU) y resulta electo Evo Morales como diputado nacional. En las elecciones municipales de 1999 reaparecieron partidos indios como el Katarismo Nacional Demócrata (KND), en La Paz, Oruro y Chuquisaca; el MRTKL, en municipios rurales de Oruro; el Movimiento Originario Popular (MOP), instrumento político de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios y Ayllus del Norte de Potosí (FSUTOA-NP) y el MAS-U (Movimiento al Socialismo Unzaguista) (Atlas Electoral, 2017).

Un aspecto histórico importante que se debe remarcar es que, en 1997, Remedios Loza Alvarado se convierte en la primera mujer india/aymara en liderar un partido (Condepa) y candidatear a la presidencia. Loza ejerció como parlamentaria (1997-2002) propagando una conciencia de clase y de origen, accionando medidas en favor de mujeres indígenas, particularmente en el área urbana, como la ley para

28 Producto de mucha movilización, a fin de evitar que las áreas protegidas solo se conviertan en santuarios del conservacionismo duro, las organizaciones indígenas y campesinas se posicionaron como vivientes de estos espacios y, al mismo tiempo, vieron la oportunidad de blindar sus territorios con una doble condición, constituyéndose, a la vez, como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y Áreas Protegidas (AP) allá donde era posible.

la dignificación del trabajo de hogar (o de las mal llamadas sirvientas de patrones urbanos), oficio ejercido por indias migrantes.

El contexto marcaba la racialización de las relaciones, en la vida republicana, dando lugar a las “dos Bolivias” (explicitadas por los indianistas Reynaga y Quispe Huanca).²⁹ Después de una década (1990-1999) de movilizaciones y apuestas exitosas político electorales; entre el 2000 y 2003 se marca otro ciclo de alzamientos y movilizaciones articuladas desde la CSUTCB a la cabeza de Felipe Quispe Huanca (2000-2003), así como la movilización cocalera y campesina en 2002 contra la expulsión de su líder Evo Morales del Parlamento. Desde tierras bajas se realizó la III Marcha (2000) en demanda de la creación de instancias estatales que atiendan las necesidades indígenas y la IV Marcha (2002) junto a tierras altas por Asamblea Constituyente. El 2003 la Guerra del gas aglutinó a varios líderes y lideresas indios urbanos y rurales, que ya venían luchado desde años atrás; sin embargo, esta articulación de fuerzas solamente respondió a la convergencia de agendas de movilización de los descontentos de los diferentes sectores. Desde los barrios urbanos se movilaron los microgobiernos barriales (Mamani, 2010), en complementariedad con las organizaciones sindicales, gremiales y sociales.

Entre el 2003 y 2005 Bolivia tuvo tres presidentes, producto de la crisis política y económica. Para las elecciones generales de 2002 aparece el Movimiento Indígena Pachakuti

29 Donde la casta criollo-mestiza se hizo del poder económico y político, y el indio fue el sujeto subalternizado, despojado de sus territorios a través de varias medidas estatales; denigrado, marginado socio-económicamente, empobrecido, calificado como servidumbre y moralizado culturalmente. Situación que era interpelada por el sujeto indio con diversos alzamientos y movilizaciones. Solo como ejemplo, en 1996 se aprobaba la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que fue ampliamente rechazada por indígenas de tierras altas y tierras bajas, campesinos y colonizadores, y motivó la marcha “Por la Vida, la Tierra y el Territorio”.

(MIP) a la cabeza de Felipe Quispe “El Mallku” junto a Esther Balboa (candidatxs elegidos bajo modelo de poder diárquico de género, territorio, nación), Quispe es elegido diputado. También se presenta el MAS, con Evo Morales como candidato a presidente, obteniendo el segundo lugar en la votación general. El 2002 sobresale la elección de un diputado indígena chiquitano, José Bailaba (MAS), quien fustigó la “farsa” de la incorporación de las minorías cuando todas las decisiones eran por votación y bloques partidarios.³⁰

En este periodo, se subraya el desarrollo de una conciencia política crítica y organizada desde las sociedades indias, también se manifiesta la *politicidad propia intuitiva*, sobre la base de democracia comunitaria y/o sistema político propio, aunque no se la nombra como tal, pero si se la alude permanentemente en manifiestos y pronunciamientos. El sistema político propio trasciende de lo rural a la organización urbana; también en la gestión de los municipios. Resalta la puesta en valor de principios como la reciprocidad, la dualidad, la complementariedad y el marco relacional; en tierras altas y bajas.

Disputa del poder político local y nacional “sin partido”, con movimiento

Con la aprobación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (2004) se amplió el abanico de posibilidades para las sociedades indias urbanas y rurales en tierras altas y bajas, principalmente a nivel local. El histórico ejercicio de decisiones colectivas y comunitarias, adoptadas en espacios de consenso colectivo local y de representación horizontal en los niveles macro, ha permitido la autogestión territorial³¹ de las

30 “Bailaba Parapaino: La tierra que no es trabajada debe ser revertida”, Agencia de Noticias Fides (ANF), 29 de diciembre de 2002, disponible en: <https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/bailaba-parapaino-la-tierra-que-no-es-trabajada-debe-ser-4733>

31 La autogestión territorial indígena originaria campesina contiene un sistema de gobierno territorial asociado a mecanismos de

naciones y pueblos, en comunidades, barrios, organizaciones gremiales y sindicales. De una u otra manera, estas prácticas se permearon en los procesos electorales tradicionales, a partir de experiencia de elección de autoridades originarias e indígenas como candidatas “ya electos” para instancias municipales principalmente.³² En las elecciones municipales de 2004 se habilitaron un total de 347 agrupaciones ciudadanas –varias de corte indígena o campesino– y 52 organizaciones de pueblos indígenas para disputarse las alcaldías de los 327 municipios del país (Atlas Electoral de Bolivia, 2017). En muchos casos se dio continuidad a lo ya iniciado, como en el caso de San Ignacio de Moxos, Charagua, Villamontes, Urubichá y Gutiérrez (CEJIS, 2020).

En las siguientes elecciones nacionales (2005), la base ideológica indianista katarista –principalmente dirigida por Felipe Quispe Huanca–, la noción ayllista sindical del MOP, la apropiación de gobiernos locales en tierras bajas y la agenda popular hábilmente promovida por los cocaleros del Chapare, se articularon de forma casi natural e intuitiva y se constituyeron en un marco de acción colectiva política que visibilizó al sujeto indio como detentador del poder

control social y fiscalización, toma de decisiones sobre las estrategias de vida colectivas y familiares, prácticas de convivencia y justicia social, formas de autogestión para resolver necesidades y problemas internos, con lógicas políticas que no dividen los “poderes” y que mantienen una diversidad de situaciones, prácticas y formas según sus historias como pueblo y avances en la consolidación territorial. Y sobre todas las cosas, mantienen el control sobre los recursos del territorio, eso que es común y cuyos beneficios o perjuicios tienen que ver con las decisiones colectivas territoriales, que normalmente son significativas y, por lo tanto, sometidas a la máxima instancia de gobierno.

- 32 Existen experiencias interesantes y con resultados de gobernabilidad y avance en la gestión pública como los siguientes: distritos de Kaami (Chaco Guaraní) y El Futuro (Chiquitanía) y municipios de San Ignacio de Moxos, Chayanta y Curahuara de Carangas, entre otros. Son espacios locales donde se configuraron estos micropoderes, de forma pragmática bajo el paradigma de lo comunitario/colectivo.

gubernamental, con el MAS como partido gobernante y Evo Morales como presidente electo (con casi 54% de votos). Al mismo tiempo, este esquema funcionó como mecanismo político en el proceso constituyente (Huanca, 2017).

Este momento, largamente forjado, fue rápidamente reforzado con la elección de la mayoría de constituyentes, provenientes de organizaciones populares, indígenas, campesinas, interculturales, gremiales y sindicales aliadas al MAS.³³ Este aspecto era clave porque el campo de disputa real para que la nueva Constitución Política del Estado incluya la agenda y a los mismos indios en igualdad de condiciones –con el fin de trazar otro orden social no subalterno– fue la Asamblea Constituyente. El 2004 se formaliza la alianza de organizaciones en el Pacto de Unidad.³⁴ El desarrollo de propuestas se inició antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, desde la creación de la ASP y el Pacto de hermandad (2000), pues luego de la Marcha de 1990, las

33 Cabe hacer notar, que por entonces el MAS estaba abierto a la incorporación automática a representantes elegidos desde las bases orgánicas, lo cual afianzó sus relaciones y el tejido político en el campo popular-indio.

34 Dando continuidad al Pacto por la Soberanía y Dignidad, esta alianza, coordinadora y mecanismo de movimientos sociales para el accionar político, fue fundada por: CONAMAQ, MST-B, CPESC, Bloque Oriente; Confederación Sindical Unificada de Trabajadores Rurales de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (FNMCB-BS), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Central de Trabajadores Asalariados del Campo (CDTAC), Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Comité de Defensa del Río Pilcomayo (CODERIP), Coordinadora de Integración de Organizaciones Campesinas (CIOEC). Para el proceso constituyente se reorganizó este Pacto quedando cinco organizaciones matrices a la cabeza de esta institución y para finales del 2012 se desmembraron las alas indígena y originaria, quedando tres organizaciones que comenzaron a denominarse “trillizas”.

organizaciones indígenas y campesinas fueron madurando proyectos y una agenda política históricamente gestada.³⁵ Entre el 2003 al 2006, sobre la base de propuestas, manifiestos y pliegos las organizaciones desplegaron una estrategia de socialización, debate y construcción de propuestas para cambiar la Constitución. De esta manera cuando se instala la Constituyente, las organizaciones regionales y nacionales contaban con propuestas y con una estructura de información y comunicación orgánica que llegaba hasta la última comunidad. Así, por ejemplo, Julia Ramos, líder indígena tarijeña y exdirigente de la organización Bartolina Sisa, nos cuenta cómo tuvieron que caminar cerca de dos días para llegar al centro de Tariquía con el fin de desarrollar estas reuniones, donde participaba absolutamente toda la comunidad (niñxs, adultxs, ancianxs, hombres, mujeres): “Todos teníamos que aprender, conocer que se está haciendo y a que se está llegando”. Esta vigorosidad orgánica es la que soportó todo el aparato de amedrentamiento y violencia ejercida esos años.

A pesar de la proximidad de los partidos izquierdistas y nacionalistas con los indios, en el siglo XX era evidente la imposibilidad de una alianza real, pues los primeros concebían la modernidad, el republicanismo y sus instituciones como marco de resolución de sus problemas; en cambio, los segundos cuestionaban esa modernidad que los sumió en la opresión, racialización, subalternización y deshumanización. Por ello, las propuestas hacia una Constituyente eran apuestas transformadoras de Estado, en términos institucionales, políticos, administrativos, territoriales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, un ala de izquierdistas, con vínculos indianistas y kataristas,³⁶ fueron los más abiertos

35 El 2002 la IV Marcha Indígena plantea, la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

36 Como el exdirigente minero, Filemón Escobar, quien ya había participado con Jenaro Flores en otras lides electorales, y Álvaro García Linera, que convivió con el indianista tupakatarista Felipe Quispe Huanca, entre otros.

con la propuesta política, y para la Constituyente tuvieron que aunar fuerzas ambas corrientes y así se articularon acciones del proletariado con los indios, que al fin y al cabo tienen el mismo origen. La movilización orgánica y política se dio en torno a una agenda histórica, transformadora, reconstituyente y de reivindicación de derechos.

En este escenario se reconoce la habilidad y olfato político del MAS y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que, aunque no estuvieron en todas las movilizaciones y rebeliones, lograron enarbolar la reivindicación política histórica de las Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos, pero también de los sectores gremiales, proletarios, fabriles, mineros y otros, así como de una clase media e intelectual que no se veía en otras apuestas. En las primeras elecciones nacionales y subnacionales lograron contar con “representación espejo”, gracias a la inclusión orgánica de candidatos “pre-elegidos” de todas las localidades, respondiendo a uno de los principales debates de las organizaciones y sociedades populares, indígenas y campesinas, como posibilidad de representación directa y propia. A esto se sumó la narrativa de una agenda compartida que representaba los intereses de las sociedades racializadas y marginadas históricamente.

El diseño de la nueva Constitución afrontó muchas resistencias desde las sociedades y castas criollo-mestizas, pues ya los indios leían y escribían: no se les podía negar ningún derecho. Entonces, se activaron dispositivos de violencia racial y polarización “pseudorregional” (la denominada “media luna”),³⁷ bajo el argumento de que los indios iban a afectar sus intereses y necesidades básicas, en una suerte de venganza histórica. Don Ernesto Sánchez³⁸ cuenta que

37 “Ataques a la prensa en el 2008: Bolivia”, Committee to Protect Journalists (CPJ), disponible en: <https://cpj.org/es/2009/02/bolivia-2/>

38 Diálogo con Ernesto Sánchez, exdirigente moxeño de la CPEMB y de la CIDOB (agosto, 2012).

durante la Asamblea Constituyente, en Trinidad,³⁹ los políticos y patrones disparaban, atropellaban y atacaban o golpeaban a los técnicos de instituciones de apoyo a las organizaciones indígenas. Similar patrón de actuación se vio en Santa Cruz,⁴⁰ en el episodio de humillación de campesinos en Sucre (24 de mayo de 2008) y en la Masacre de Porvenir (Pando, 11 de septiembre de 2008).⁴¹

La propuesta democrática transgresora, elaborada desde las organizaciones y planteada a través del Pacto de Unidad, tuvo su primer campo de batalla con la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, pues el Pacto propuso la representación directa sin intermediación partidaria, entretanto que la convocatoria oficial formalizó la elección a través de partidos y diseñó un marco de composición en el que las minorías cobraban peso, aunque sus votos fueran muy inferiores. En suma, se planteó un sistema de democracia consociativa de corte liberal. Esto explica que, a pesar de la presencia mayoritaria de constituyentes de adscripción indígena (más del 55%), la Asamblea fuera paralizada y bloqueadas las discusiones. La presión movilizada de las organizaciones del Pacto de Unidad funcionó como un “tercer sujeto”⁴² para reactivar el retorno a las sesiones y la aprobación del nuevo texto constitucional.

39 Denuncia pública de Miguel Gonzales, director regional de CEJIS, institución de apoyo a pueblos indígenas en el proceso constituyente (fuente: <https://www.amnesty.org/download/Documents/44000/amr180012009spa.pdf>).

40 “Bolivia: Organizaciones urbanas y rurales condenan racismo y discriminación en Santa Cruz”, Servindi, disponible en: <https://www.servindi.org/actualidad/4582>

41 Véase “Informe defensorial sobre los acontecimientos suscitados en la ciudad de Sucre el 24 de mayo de 2008”, noviembre de 2009, La Paz, Defensor del Pueblo, disponible en: <https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-defensorial-sobre-los-acontecimientos-suscitados-en-la-ciudad-de-sucre-el-24-de-mayo-de-2008.pdf>

42 Esto considerando que el primer sujeto era la misma Asamblea Constituyente y el segundo el Poder Ejecutivo, en manos del MAS, pero sin mucha incidencia.

La propuesta del Pacto de Unidad apuntó a una democracia directa y comunitaria, participativa y de consenso. Durante el proceso constituyente este tema fue adquiriendo mayor controversia; se requería explicitar la conjugación de derechos individuales y colectivos en el sistema democrático. La democracia comunitaria conlleva las acciones políticas de la diversidad de naciones y pueblos indígena originario campesinos con formas propias de organización social, definición de autoridades, toma de decisiones, titularidad del poder, representación y participación, así como reglas de relacionamiento interno y externo (Garcés, 2010). Por otra parte, la CPE, la Ley del Régimen Electoral, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley de Organizaciones Políticas y otras reconocen el ejercicio del derecho a la democracia comunitaria, su articulación con con la democracia representativa y la democracia directa y participativa, en el horizonte de la democracia intercultural.

Legalmente, la democracia comunitaria puede ser ejercida en la elección de las y los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a las Asambleas Legislativas Departamentales (art. 63, inciso b, Ley del Régimen Electoral), debiendo estar especificadas en los estatutos autonómicos departamentales el número de representantes y las naciones representadas. Por otra parte, los Gobiernos Municipales con población de naciones y pueblos indígena originario campesinos pueden elegir su concejal municipal de forma directa (art. 284, parágrafo II, CPE). A nivel nacional, si bien está reconocida la representación de circunscripciones especiales en la Asamblea Legislativa Plurinacional, estos diputados aún deben ser elegidos intermediados por una organización política; por lo tanto, no es directa la representación. Donde sí se puede implementar plenamente la democracia comunitaria es en la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC). Con este sistema de representación y participación de naciones y pueblos, ya se desarrollaron tres elecciones nacionales y municipales, y

actualmente existen cinco AIOC funcionando con autogobierno. Con esta legalidad, la primera propuesta del Pacto de Unidad queda relegada al ejercicio particularizado en ciertos espacios y para “cierta” representación especial.

2. El sujeto político indio/indígena/campesino en el Estado Plurinacional

Desde el inicio, la implementación de la Constitución desató controversias y tensiones entre lo planteado y lo realmente ejecutado, entre narrativas que deslegitiman al indio en el poder, la persistencia de indios de primera y de segunda, y al masismo asociado con la idea de indixs salvajes, caudillistas, autoritarixs. Los siguientes hechos críticos acumularon energías de resistencia, confrontación y racialidad:

- Entre 2009 y 2012, los megaproyectos vinculados a pueblos indígenas, principalmente de tierras bajas. El caso más polémico fue el del TIPNIS y la “fallida” implementación de la consulta previa, libre e informada que, como tal, ha generado un imaginario sobre indígenas de primera y de segunda. También hay que mencionar la fallida aprobación de una ley de consulta previa participativa y elaborada mediante consenso.⁴³ Esto asentó el imaginario del indígena pobre de tierras bajas que no conoce las “bondades” de la vida moderna o que es conservador de la naturaleza.
- Este suceso se asoció con las divisiones orgánicas de las dos organizaciones indígenas matrices, tanto de tierras altas (CONAMAQ) como tierras bajas (CIDOB); unos se denominan orgánicos y otros oficialistas (aunque hubo momentos que una organización tenía hasta tres facciones).

43 Después de un largo proceso de construcción y consenso con las organizaciones indígenas, este proyecto de ley quedó congelado.

- La emisión de normas que reducen el alcance de los derechos colectivos indígena originario campesinos, como la Ley 073 (2010) de Deslinde Jurisdiccional, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; la Ley 535 (2014) de Minería y Metalurgia; el Decreto Supremo 2195 (2014) que establece un mecanismo para la asignación porcentual de la compensación financiera por impactos socioambientales de las actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos cuando estos se desarrollen en territorios indígena originario campesinos (TIOC). La polémica sobre estas normas y disposiciones abrió el debate en torno a la capacidad del Estado Plurinacional de preservar los derechos colectivos indígenas, principalmente a la libre determinación.
- Entre 2012 y 2015 “explotaron” los casos de corrupción del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígena Originario Campesinos. Este sonado caso sumó al imaginario y a las narrativas, sobre la existencia de un indio corrupto e incapaz de hacer las cosas bien con los recursos públicos, poniendo un fuerte acento de criminalización sobre las dirigentas de la organización Bartolina Sisa (mujeres de pollera) y sobre varias mujeres en cargos públicos (Nemesia Achacollo, Felipa Huanca, Julia Ramos, entre otras). Y fueron lxs indixs lxs encarceladxs, algunos con culpa tácita y otros por estar en procesos administrativos de aprobación de proyecto o por no seguir los procedimientos formales.⁴⁴

44 Algunos dirigentes manifestaron que el momento fue utilizado para acallar sus críticas o disidencias con respecto a las posiciones o acciones gubernamentales sobre pueblos indígenas. Es el caso de Tata Félix Becerra, ex Jiliri Apu de CONAMAQ (véase “Bolivia: Tata Félix preso por ser indígena y trabajar como campesino”, La Guarura, disponible en:

- El Referendo del 21 de febrero de 2016, que negó la reelección de cualquier autoridad más allá de lo que estipula la Constitución Política del Estado, y el rechazo a los resultados por parte del MAS, también contribuyeron a la generación del imaginario de indios que no hacen caso a los sistemas democráticos, que son autoritarios y no obedecen reglas. En un hecho que legalmente pudo ser posible, pero políticamente generó un ambiente totalmente desfavorable para el mismo proceso de cambio. A partir de este momento también comenzó a gestarse la idea de posible fraude.
- A esto se suman diferentes momentos de visibilización del indio corrupto, autoritario, aprovechado y hasta borracho, tal y como sucedió con los casos de Abel Mamani y Félix Patzi, cuando eran ministros. O acusaciones reiteradas contra autoridades con origen indio, como Eugenio Rojas.

Este contexto gestó un escenario de tensión entre pares, es decir, entre indios que eran “orgánicos” no afines al MAS (o disidentes) e indios (campesinos-indígenas) afines al Gobierno central. Similar situación se observó en niveles locales. Asimismo, este contexto también gestó el escenario “ideal” para rechazar la presencia de indios en distintas esferas de poder político, estereotipando su ineficiencia, con más o menos razón, con particular énfasis en las mujeres. Estas situaciones reforzaron actitudes de discriminación y racismo contra el sujeto indio como subsubalterno.

Por otro lado, vemos que partidos políticos tradicionales de corte más liberal y derechista han realizado repetidos intentos de adscripción de lo indígena en sus estructuras y agendas gubernamentales, pero con poco éxito, precisamente por su base colonial. Es el caso de SOL.bo y Demócratas,

<https://laguarura.org/2016/02/bolivia-tata-felix-presos-politico-por-ser-indigena-y-trabajar-como-campesino/>). Luego esta organización se dividió.

que plantearon una alianza de “clase media e indígenas” del TIPNIS, Achacachi y Chuquisaca⁴⁵ (nótese la noción de sujeto indio y la binariedad social). Por otra parte, grupos de indígenas y disidentes del MAS se presentaron a las elecciones generales de 2014 bajo el paraguas del Partido Verde de Bolivia-Instrumento de la Ecología Política,⁴⁶ obedeciendo a una estrategia de instrumentalización política pero sin mucho éxito porque las mayorías no se veían visibilizadas en sus agendas ni en sus candidatus. Esta estrategia tampoco logró adscribir plenamente a lxs disidentes del MAS o del proceso de cambio, probablemente porque no tienen propuesta para la agenda estructural.

Las sociedades con adscripción indígena que habitan ampliamente las urbes (67%), consideradas en muchos casos como “sectores populares”, ante la apabullante narrativa indígena ruralizada, se podría decir que, de bajo perfil, fueron asentando su presencia en ámbitos comerciales, políticos y sociales. Por ejemplo, se observa en Santa Cruz una vigorosa comunidad Qolla en rubros comerciales, de construcción, de agroindustria de granos y oleaginosas. Del mismo modo se observa una vigorosa comunidad de indígenas orientales y afrodescendientes (44 organizaciones, aproximadamente) bastante bien organizados; incluso los jóvenes cuentan con organizaciones como Jóvenes Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz (JIASC) o Voces Indígenas Urbanas. Por otra parte, en todas las ciudades y departamentos del país existe presencia de población con pertenencia indígena u originaria que, cuando el clima político se tensiona sufre hechos de

45 Véase “SOL.bo y Demócratas buscan una alianza rumbo a elecciones 2019”, *Página Siete*, 28 de febrero de 2018, disponible en: <https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/28/solbo-democratas-buscan-alianza-rumbo-elecciones-2019-171417.html>

46 Véase “Indígenas y disidentes del MAS perfilan a Fernando Vargas como candidato”, *Los Tiempos*, 3 de junio de 2014, disponible en: <https://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20140603/indigenas-disidentes-del-mas-perfilan-fernando-vargas-como-su-candidato>

racismo y discriminación o clasificación político-racial. Contradictoriamente, las sociedades criollo-mestizas han empezado a apropiarse y gustar/desear las fiestas de los andinos, donde se asientan nuevos capitales sociales que están penetrando en diversos espacios como, por ejemplo, el poder de los *gamiris*, la belleza y carácter de la *chola*, el encanto de los bailes como el *salay*, la *morenada*, el *caporal*, etc.

Y así pasaron 11 años de Bolivia como Estado Plurinacional con Democracia Intercultural, registrándose avances y logros notables e innegables para poblaciones indias/indígenas y populares, en términos subjetivos y objetivos, aunque las expectativas hayan sido (y sean) mayores. En el balance, sin embargo, antes de las elecciones de 2019, 2020 y 2021, se observó que la concentración de poder político estatal en la representación dirigencial, la partidización política de las organizaciones y el desarrollo de mecanismos apegados a la política liberal –como es la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y sus subsidiarias en el nivel departamental y local–, sumados a las contradicciones y tensiones entre la apuesta constitucional y la política pública real,⁴⁷ están debilitando, desestructurando o atacando los sistemas comunitarios, especialmente en relación a los siguientes aspectos:

- *Elección de candidaturas de representación territorial:*
Tanto la izquierda como la derecha han tendido a desconocer los procesos orgánicos y los acuerdos

47 En relación a la inacción por el deterioro de las condiciones de vida, particularmente de territorios indígenas en el Chaco, Oriente y Amazonía boliviana, con el avance de la frontera agrícola, conflictos por avasallamientos, así como los incendios forestales que en los últimos diez años afectaron a 5.229.872 hectáreas de 58 territorios indígenas de tierras bajas (véase “Incendios en los territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Análisis del periodo 2010-2020”, CEJIS, disponible en: <https://www.cejis.org/descargue-incendios-en-los-territorios-indigenas-de-las-tierras-bajas-de-bolivia-analisis-del-periodo-2010-2020/>).

de rotación y de legitimación de las candidaturas. Así, observamos que hasta en las circunscripciones especiales para asambleístas nacionales los partidos han fragmentado a las organizaciones –como sucedió en Charazani– o han recreado situaciones de subordinación de mayorías sobre minorías, como es el caso de los Uru Chipaya y los Uru Murato. De igual forma, se debilitaron los procesos municipales que adaptaron su democracia directa comunitaria a la democracia representativa.

- *Las rupturas entre el horizonte de vida de naciones y pueblos de tierras bajas y tierras altas versus el horizonte de desarrollo impulsado por el Gobierno:* El caso que marcó un punto de inflexión en esta relación fue el conflicto por la carretera del TIPNIS. Otros casos emblemáticos fueron los conflictos mineros en Mallku Qota y por la exploración petrolera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (Tarija). Del mismo modo, se puede citar una decena de conflictos y tensiones entre modelo de desarrollo y bienestar de naciones y pueblos. Esto decantó en la renuncia al Pacto de Unidad de parte de CONAMAQ y CIDOB, pero como estas organizaciones también aglutinan a territorios que probablemente aún ven favorable la alianza con el MAS y el Pacto de Unidad, se llegó a generar divisiones en el movimiento indígena y originario. Durante estos últimos años, las autorizaciones para la minería cooperativizada están generando conflictos en territorios indígenas y campesinos.⁴⁸ Por otra parte, hay que mencionar la ruptura del oficialismo con liderazgos o figuras indias, indígenas y campesinas, como Gualberto Cusi, Juan de la Cruz, Félix Vásquez y Alejo Véliz, así como

48 Véase “¿Cómo están afectando la minería a los pueblos indígenas de la Amazonía e Bolivia?”, CEJIS, disponible en: <https://www.cejis.org/como-esta-afectando-la-mineria-a-los-pueblos-indigenas-de-la-amazonia-en-bolivia/>

el desencuentro con Achacachi y la encarcelación de sus dirigentes, y el largo conflicto con Adepcoca. La subestimación de los reclamos y la represión sobre pueblos de tierras bajas son temas críticos.

- *El desarrollo de una “marca política” con la exacerbada adscripción de indios, campesinos, indígenas, interculturales, población popular al masismo y lo rural:* Con ello la funcionalización partidaria de la simbología indigenista. Por otro lado, la pelea subjetiva entre “la ancestralidad del pobre indio” y la “modernidad de la clase media”, creando un indio con aspiraciones de “no ser indio”.⁴⁹
- *La desmovilización de las organizaciones matrices a la luz de la llegada al poder y la ralentización del proceso de cambio:* Su debilitamiento orgánico implica un debilitamiento a los sistemas políticos propios, desprestigio o deslegitimación a todas las propuestas o apuestas políticas, dejando campo abierto para la cooptación y asimilación a los sistemas liberales.
- *Un Estado diseñado para una funcionalidad monocultural/monosistémica:* Con una reglamentación procedimental tan menuda que pone en jaque las iniciativas antisistémicas, plurales y diversas, más aún si estas apelan a lo comunitario/común, a lo público-privado en formato mixto y a la evaluación directa sobre las autoridades.
- *El desgaste del sujeto indio debido a la mirada romántica del movimiento ecologista o a la mirada temerosa desarrollista,* que suelen reducir a los indios a sujetos ruralizados y situados en regiones de conservación, por lo tanto, protectores de la naturaleza o defensores de su territorio, egoístas con el desarrollo del país

49 Esta puede ser una explicación de la supuesta disminución de población autoidentificada como indígena entre los censos 2001 y 2012

y conflictivos; ambos, sin contar con el verdadero horizonte histórico que mueve a las naciones y pueblos.

- *La binariedad intelectual académica y profesional*, que aún ve las prácticas políticas indígenas/indias como seculares, marginales o alternativas, sin considerar la posibilidad de asumirlas plenamente. Denota el indigenismo.
- *La subalternización institucionalizada de la democracia comunitaria a la democracia representativa*, pues la primera no goza ni de recursos estatales específicos ni de calendario democrático y está reducida a espacios particularizados y locales. Las izquierdas, corrientes indigenistas y algunas indianistas, antes de comprender el potencial que tienen las democracias comunitarias se han limitado a “apoyarlas” para su materialización en las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC), bajo un imaginario del sujeto político que ejerce su politicidad local en un “gueto” oficial. Hasta la fecha de 31 iniciativas solo 5 están implementándose. En parte, esta actitud ha favorecido el desempeño de estos sistemas políticos democráticos sin muchas interferencias, pues su ampliación a otros niveles significaría eliminar la presencia de partidos políticos o, en el horizonte de la democracia intercultural, vincular/integrar/complementar sistemas como lo hizo Charagua Iyambae. Las derechas en Bolivia, aparentemente, ni siquiera ven y conocen el funcionamiento de estos sistemas, lo cual denota su desinterés en apoyar este tipo de sistemas políticos. Los medios de comunicación y las instituciones, en general, siguen denominando “municipios” a las “AIOC” o “alcaldes” a las autoridades ejecutivas de las AIOC, o re-racializan las relaciones con afirmaciones a favor de las sociedades criollo-mestizas con el uso diferenciado de “ciudadano” versus “indígena/campesino”.

Este rápido repaso de los antecedentes históricos sobre la compleja relación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con el sistema de representación político, tanto en tierras altas como en tierras bajas, o el relacionamiento y funcionalidad de las democracias por las que atravesó la vida republicana y plurinacional del país, nos permite explicar cómo estos procesos de resistencia y re/existencia se sustentan, claramente, en modos políticos que privilegian el paradigma comunitario⁵⁰ en absolutamente todos sus componentes, matizados en distintos grados (dependiendo de la nación y pueblo, urbano y rural, local, regional, nacional, transnacional). Poblaciones cuyas estructuras organizativas y orgánicas les permiten participar en todos los espacios de disputa del poder político y económico principalmente con un discurso que pocas veces hace referencia a lo plurinacional tal cual, y que se desmarca de las prácticas esencialistas (Poweska, 2013). Absolutamente todos apuestan a una gestión de vida alternativa al sistema mundo moderno colonial.

Entre el 2018 y 2019 se hizo muy evidente la disputa de sentidos sobre lo indígena y lo comunitario versus lo no indígena y moderno-desarrollista, generando un entorno de escalamiento de conflictividad social, por lo que era casi previsible que se daría un “encontronazo”, una *Ch'ajwa*,⁵¹ que

50 Lejos de la noción indigenista de comunidad rural campesinizada, sino, más bien, en el marco de la epistemología andino-amazónica. Es decir, comunidad como ejercicio de una ciudadanía recíproca, complementaria, dual y en constante relacionalidad con las otras epistemologías y ciudadanías. Estamos hablando del concepto de comunidad planteado por Bautista (2014) que destaca cuatro aspectos centrales: lo comunitario, el servicio a la comunidad en clave de reciprocidad, la descolonización y el diálogo de saberes. A estos añado un quinto concepto que está vinculado con la relacionalidad humano-naturaleza-no humano, como sujetos que se complementan en la politicidad intuitiva.

51 *Ch'ajwa*, palabra aymara que significa desencuentro, crisis, discusión, debate, deliberación, riña. Para las sociedades andino-amazónicas, es relevante contar con momentos de crisis o

se viste o presenta en formato de polarizaciones de carácter étnico, partidario y regional, para, en el fondo, redimir a una sociedad colonial cuyos actores políticos tienen el agente colonial impregnado en su ser. Con un sistema de partidos incipiente, solamente el MAS tiene presencia nacional y subnacional, permanencia en los últimos tiempos y poder de decisión a través de autoridades electas, pero cada vez más cerca de ser capturado por los mecanismos y dinámicas tradicionales de las organizaciones políticas, con señales que estereotipan a una organización poco democrática o que ejerce la dictadura sindical, que no acepta críticas ni otros liderazgos. Un sistema de partidos que no se reinventó ni con la Ley de Organizaciones Políticas, tampoco en términos interculturales ni de género.

La ch'amanch'aka/q'amanchaca:⁵² bases para un nuevo ciclo político indio/indígena

Para el 2019, las reglas del juego electoral ya estaban definidas, con un Tribunal Supremo Electoral encabezado por una mujer andina y de pollera, María Eugenia Choque,⁵³ que encabezó uno de planteles de vocales más cuestionados de los últimos tiempos, lo cual, sumado a su condición identitaria, representó el “combo” perfecto para la deslegitimación de sus acciones, declaraciones y posturas. Por otro lado, había un sistema nacional de partidos con una sola organización

desencuentros para encontrar caminos de reinención hacia el equilibrio de las relaciones.

- 52 Concepto que alude a un estado climático de niebla cerrada e intensa que, metafóricamente, puede ser utilizada en situaciones o ciclos entre la Macha y Pacha. Se trata de un concepto aymara/quechua adoptado por el sociólogo Fernando Calderón para explicar el periodo de transición crítica de América Latina.
- 53 Aunque siempre se le criticó que ahora use más pollera que cuando estudiaba. Este es otro síntoma de la racialidad de las relaciones pues, como dice Cecilia Salazar, sobre cada mujer india pesa el racismo de segunda piel expresado en la vestimenta y en rasgos culturales visibles.

política dominante, el MAS, una alianza denominada Comunidad Ciudadana –conformada sobre la base de plataformas ciudadanas no indias– y la alianza 21F con carácter más regional y conformada por sectores opositores al MAS impulsados desde el Oriente de Bolivia. El 2019 también cobró relevancia para el sistema de partidos una “insólita” elección primaria donde las nueve organizaciones políticas o alianzas participantes solo tenían un candidato, automáticamente ganador. En el caso del Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por Félix Patzi y Maciel Terrazas –pareja de esposos aymaras, en coherencia con las bases de la politicidad aymara del poder dual, aunque criticado desde una visión liberal–, las elecciones primarias también fueron un espacio de definición de candidaturas parlamentarias, el sistema utilizado fue el asambleario desde la más mínima célula hasta el nivel macro, en un proceso que inició el 2018 antes de la convocatoria a elecciones primarias.⁵⁴

En las primarias ya se observa la presencia de partidos opositores al MAS, que acogen a clases populares, gremiales y disidentes del MAS (PAN-BOL con Ruth Nina y Leopoldo Chui; el MNR con el katarista Fernando Untoja candidato vicepresidencial,⁵⁵ UCS con Víctor Hugo Cárdenas; la alianza Bolivia Dice No, con Edwin Rodríguez como candidato a vicepresidente). Fueron primarias polémicas,⁵⁶ con

54 Modalidad definida en su estatuto.

55 Su candidato presidencial, Virgilio Lema, explícitamente planteó recuperar la República y deshacerse del Estado Plurinacional (véase “Los partidos bolivianos inscriben sus candidatos entre multitudes y divisiones”, Agencia EFE, disponible en: <https://www.efe.com/efe/america/politica/los-partidos-bolivianos-inscriben-sus-candidatos-entre-multitudes-y-divisiones/20000035-3827279>).

56 Debido a que el TSE autorizó la candidatura de Evo Morales, a pesar de los resultados del 21F, amparándose en la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que aprueba la reelección indefinida como derecho político mayor. Los gastos y los resultados de las primarias fueron débiles, pues las organizaciones políticas no promovieron la competencia, siendo todos los

prevalencia de la “vieja camada” de políticos; ninguno de los cuales abandera su condición étnica como factor diferenciador.

En agosto de 2019, la Chiquitanía –“Casa Grande” de los indígenas de tierras bajas, Madre Tierra⁵⁷– se incendiaba. Organizaciones indígenas regionales y locales se pronunciaron a nivel nacional e internacional; rápidamente escalaron en prensa y redes sociales las críticas al Gobierno sobre la inconsistencia de su “defensa” verbal de la Pachamama y de los derechos indígenas, y la realidad de las acciones de política pública extractivista, expansionista. Días antes a las elecciones, los pueblos indígenas del Beni rechazaron la aprobación de un Plan de Uso de Suelos (PLUS) que afectaría a sus territorios habilitando zonas boscosas para uso agropecuario, señalando que el mismo no fue sometido a consulta previa, como corresponde.⁵⁸ La tensión entre los pueblos indígenas de tierras bajas y el MAS estaba a flor de piel antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Mientras tanto, en las organizaciones sociales, indígenas y gremiales se llevaba adelante “otro” proceso democrático para designar candidaturas que luego serían formalizadas a través del voto, particularmente para las candidaturas uninominales (titulares y suplentes) y de circunscripción especial. Se suponía que en esta elección el MAS volvería a

candidatos hombres. Según datos del mismo Órgano Electoral Plurinacional, no votaron ni el 10% de 8 de las 9 organizaciones políticas participantes, el MAS –con todo su aparato– logró que vote el 30% de su militancia. A media carrera electoral, el MNR propuso formar un solo bloque que haga frente al MAS, pero las otras siete organizaciones políticas no estuvieron dispuestas a renunciar a sus candidaturas.

57 Esta situación estaba asociada a la aprobación del Decreto Supremo 26075 que autorizaba la quema controlada.

58 Véase “Denuncian que el Gobernador de Beni pretende aprobar Ley de suelos a favor de ganaderos”, Unitas, disponible en: <https://redunitas.org/denuncian-que-el-gobernador-de-beni-pretende-aprobar-ley-de-suelos-a-favor-de-ganaderos/>

la modalidad orgánica,⁵⁹ sin embargo, la intermediación de Conalcam⁶⁰ determinó candidaturas que provocaron “fuga” de organizaciones y liderazgos a otras organizaciones políticas como Comunidad Ciudadana (CC),⁶¹ que acogió la candidatura especial de kallawayas, elegida orgánicamente y rechazada por el MAS, organización que inscribió a otra candidata respaldada por una fracción orgánica (lo mismo ocurrió en otras candidaturas especiales,⁶² o de circunscripciones donde hay mayoría indígena). También se contribuyó a la

59 Cabe hacer notar que el MAS es el único partido que tiene en sus estatutos, explícitamente, el registro de candidaturas que sean designadas por las organizaciones sociales de acuerdo a normas y procedimientos propios, lo más democráticos posibles. El MTS, por su parte, plantea la definición de candidaturas según organización territorial, por lo que sería la segunda organización política que en algo se aproxima al MAS.

60 Véase “Miembros de la organización ‘Bartolina Sisa’ participan de ampliado del Conalcam”, disponible en: <https://www.bartolinasisa.org/2019/05/13/ejecutivas-de-la-organizacion-bartolina-sisa-participan-de-ampliado-del-conalcam/>

61 Esta organización política, la de mayor presencia opositora, no está registrada como partido, es una alianza con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), cuya personería jurídica posibilitó su habilitación. A esta organización se adscribieron varios líderes indígenas que participaron en la Marcha por el TIPNIS, no tanto por afinidad discursiva ni propuesta gubernamental del líder de CC sino por la posibilidad de candidatear.

62 Según un artículo inédito del investigador Radoslaw Poweska, en las circunscripciones especiales se hace todo un proceso de selección de acuerdo con las organizaciones involucradas con las circunscripciones electorales; todos responden a un sistema de rotación de representantes, según a que sector toque. Este proceso prescinde de la intermediación partidaria, ya para el registro de la candidatura se propone la “preselección” a los mismos, la organización política que acepte será la sigla que recibirá la votación de acuerdo a instrucción orgánica. El MAS era el único partido que aceptaba este proceso, sin embargo, en las últimas dos elecciones nacionales se incorporaron a esta dinámica otros partidos, generándose divisiones e incluso rupturas en los compromisos de rotación (por ejemplo, en el caso de los guaraníes, chiquitanos, urus y kallawayas).

profundización de las divisiones orgánicas a nivel local. Estos elementos son fundamentales para comprender el devenir del sujeto político indix.

Debido a los quiebres internos, a la re-relección y a otras cuestiones, el 2019 el MAS participó con una militancia engrosada principalmente por movimientos sociales afines a Evo Morales, como las “trillizas” (CSUTCB, CMIOCBS, CSIB), el sector de intelectuales de izquierda y los *jailones* (Generación Evo y otros), que cercaron al Gobierno indio. Como lo grafica el intelectual aymara Jesús Humérez (2020), esta era la situación de las estructuras del partido considerado instrumento de indixs, campesinxs y sectores populares.

En las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019, de las cuáles hay una infinidad de análisis, se manifestaron reacciones racializadas de los ciudadanos en contra de lxs “otrxs”, “lx indix”, principalmente en el eje central. Entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre (día de la renuncia de Evo Morales), se sembró un discurso de miedo y odio racial y clasista contra el salvajismo de el/la “otrx”, de el/la “indix”; a vista de “otrxs” que estaban en el mismo lugar, pero en calidad de porteros, servicio, tenderas. Don Virginio Wampa, portero de un edificio sopocacheño, cuenta: “Parecía loca la gente, estaban armándose para defender el edificio de unos salvajes campesinos, y estaban alistando palos con cuchillos pues decían que venían de El Alto o de Achocalla, o de Palca; y no se daban cuenta que yo también soy aymara, que estaban hablando de gente como yo” (conversación personal, 12/11/2019).

La racialización de las relaciones se evidenció en los momentos del bloqueo de las “pititas”, organizado por colectivos “ciudadanos”. Doña Marina, una mujer aymara y alteña, trabajadora del hogar en la zona sur de La Paz, en entrevista de una emisora de radio, contó que fue a dejar comida y refrescos al lugar donde la “señorita” (una joven) estaba haciendo bloqueo de las esquinas con las pititas”. En Santa Cruz, el Comité Cívico había desplegado una gran

movilización organizada por “rotondas”; doña Vicky nos cuenta que su madre, con cáncer (ambas mujeres son migrantes de pollera y kollas), no pudo acceder a medicamentos porque no les dejaron pasar los puntos de bloqueo cívicos por su identidad. En Cochabamba, lideresas y líderes campesinos fueron perseguidos, golpeados, incluso hicieron pedir perdón de rodillas a dirigentes campesinos como Feliciano Vegamonte. Especial ensañamiento con mujeres de pollera y/o andinas (violentadas, golpeadas, humilladas, insultadas, obligadas a sacarse la ropa). Así encontraríamos un sinfín de ejemplos en varias localidades, de acciones de ciudadanxs, masivamente jóvenes no populares, cometiendo abusos y regenerando narrativas clasistas bajo argumentos de “defensa de la democracia” o “defensa de sus bienes”, ante el abandono de la Policía que se amotinó desde el 8 de noviembre y “aprovecharon” el momento para hacer una demostración de repudio a la wiphala, símbolo significativo para lxs andinxs, pues la quitaron de sus uniformes y quemaron, y proclamaron el retorno de la República, como señal de desprecio a lo plurinacional.

El gamonalismo político, la gestión del miedo como la energía para la reconstitución política india

La crisis política estaba abonada con el miedo de unos contra otros y reforzada con actitudes y estereotipación política racista desde la élite política que “tomó” el poder; secundada por la pugna espiritual, por ejemplo, cuando el líder cívico cruceño, Fernando Camacho, ingresó a Palacio a dejar su carta, su aliado, un pastor, dijo: “Nunca más volverá la Pachamama al Palacio de Gobierno”.⁶³ Del mismo modo, en la posesión del Gobierno de facto también se hicieron demostraciones de desprecio de lo indio, que trataron de “solucionarse”

63 Véase “Nunca más volverá la Pachamama al Palacio de Gobierno’, sentencia aliado del líder cívico Camacho”, *La Jornada*, Ciudad de México, disponible en: <https://jornada.com.mx/2019/11/11/politica/008n2pol>

poniendo a una alteña de pollera como ministra de Culturas y a un indio a cargo del Fondo Indígena, dos figuras que eran totalmente irrelevantes en la toma de decisiones. Mientras tanto, avanzaba el proceso de disciplinamiento al indio, a la india; las Fuerzas Armadas, al mando del nuevo Gobierno y amparadas en un decreto supremo, masacraron a la población indígena, campesina y andina en Sacaba, Senkata, Huayllani, Ovejuyo y Pedregal,⁶⁴ con un saldo de más de 30 muertes. Además, las violaciones a los derechos humanos,⁶⁵ la represión a las movilizaciones y el acoso político a regiones consideradas masistas o indias empeoraron cuando se declaró emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, con el abandono sanitario criminal a poblaciones populares y a pueblos indígenas, por racialización geográfica. Según testimonios de dirigentes campesinos,⁶⁶ en la zona andina, las oficinas de las organizaciones provinciales de mujeres Bartolina Sisa fueron tomadas de manera violenta por la Policía y los líderes de absolutamente todas las comunidades en La Paz fueron perseguidos y amenazados por personas de civil: el amedrentamiento fue al estilo gamonal.

El 2020, en medio de la crisis, las organizaciones campesinas, indígenas y originarias de tierras altas y tierras bajas entablaron un amplio proceso de reflexión⁶⁷ sobre la

64 Véase “Bolivia: Víctimas de las protestas de Senkata presentan pruebas a la CIDH”, *Voz de América*, disponible en: <https://www.vozdeamerica.com/america-latina/bolivia-victimas-manifestaciones-de-senkata-pruebas-cidh>

65 Derechos Humanos de Bolivia no denunció las vulneraciones, pero sí lo hizo la regional de El Alto. La Defensoría del Pueblo generó bastante información sobre los agravios, fue importante su rol para la memoria.

66 Narraciones recogidas los mismos días del conflicto. Las denuncias circularon boca a boca entre la dirigencia, por eso es que Felipe Quispe se dio a la tarea de “bajar” a hablar con todos, localidad por localidad.

67 Amplios fueron los espacios de reflexión. El CONAMAQ (sus tres facciones) debatió en radio, conversatorios, diálogos, interpelado por las nuevas generaciones. Por su parte, la CIDOB (la que

relación que se había desarrollado en los últimos años con el MAS, el accionar de la derecha y el avance y rol de los movimientos IOC en la democracia boliviana. Esto motivó la germinación de los análisis críticos para retomar la agenda de “no más paternalismo político”, “autogobierno” y la urgencia de resistir al embate político de las castas tradicionales que no veían en el indio más que un sujeto enemigo, inadaptado e incapaz de asumir la cuestión política. La pandemia y la crisis política fueron justificantes de la prolongación de la gestión gubernamental, pero también fueron los factores críticos que movilizaron la acción articulada de indios, indígenas, originarios, campesinos, interculturales y clases populares que, bajo el liderazgo de Felipe Quispe, el Mallku, protagonizaron movilizaciones y bloqueos para garantizar la realización de elecciones en una fecha concertada. Felipe Quispe no era dirigente actual de la CSUTCB pero era el Mallku mayor, un líder político cuya voz, pensamientos políticos, irreverencia política y criterios siempre fueron seguidos y serán seguidos por generaciones de mayores y por jóvenes; por otra parte, este líder creó mucha afinidad con liderazgos y poblaciones guaraníes.

Esta vez, las movilizaciones andinas ya no dependía únicamente de liderazgos orgánicos territoriales o rurales, también se sumó un movimiento activista indianista, ayllista, katarista, tupakatarista, sisista⁶⁸ con relación territorial multiresidencial (occidente-oriente). Felipe Quispe Huanca

se quedó en la oficina de Santa Cruz, la que más afiliados tuvo) planteaba análisis todos los fines semana junto a sus dirigencias antiguas, nuevos liderazgos, urbanos y rurales (incluso llegaron a elaborar una nueva agenda indígena con 13 puntos). La CNAMIB, junto a organizaciones de mujeres afrodescendientes y de jóvenes indígenas urbanos de tierras bajas, impulsó procesos de reflexión. La CSUTCB y sus federaciones, por su parte, plantearon su posición y actuaron para evitar una mayor prolongación del Gobierno de Ññez.

68 Colectivos como Jiccha, Curva, Pensamiento Pacha, Voces Indígenas Urbanas, entre muchos otros.

planteó la agenda de resistencia y recuperación democrática, ahuyentó el miedo a las balas y al Covid-19, reorganizó a los territorios y a las bases. Tuvo gran acogida andina y amazónica su visión aguda, sobre la devastación política india en manos de los detentores del poder de turno (denominada derecha) y su propuesta de reconstituir la democracia con el retorno del MAS; así como su crítica al adormecimiento y obsolescencia de las organizaciones campesinas e indígenas y el planteamiento de refundación de la CSUTCB y la CIDOB⁶⁹ para salir de las crisis internas y divisiones. Planteó la renovación y reencauce de la agenda propia de indios y campesinos, urbanos y rurales.

Toda esta movilización “orgánica”, en el sentido de estructuras y activismo vivo, politicidad propia intuitiva, permitió entablar un ambiente de confianza para ganar las batallas cotidianas de racismo, discriminación y abandono sanitario ante el embate del Covid-19. Se crearon sistemas de salud paraestatales en base a conocimiento tradicional, manejo de plantas y espiritualidad; dignificación de los símbolos y recuperación/liberación/retorno de la wiphala a las manos de las sociedades indias, y planteamiento de la reconquista de espacios de poder político en el Estado Plurinacional. Mensaje claro en contraposición al del grupo cívico (principalmente cruceño y chuquisaqueño) y a los políticos tradicionales que detentaban el poder, todos enarbolando el retorno de la República, con un sentido de rechazo político culturalista al estilo de los años iniciales de la fundación de Bolivia.

En tierras bajas el proceso reflexivo fue intenso, pues el Gobierno aprobó decretos y autorizaciones que pusieron en riesgo sus vidas y sus territorios; era evidente que la casta

69 Véase “Felipe Quispe y Nelly Romero plantean la refundación de la CSUTCB y CIDOB”, 31 de julio de 2020, Fundación Tierra, disponible en: <http://www.ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/954-felipe-quispe-y-nelly-romero-plantean-la-refundacion-de-la-csutcb-y-cidob>

política “tradicional”, que estaba gozando del poder, veía al indio con ojos de gamonal. Según informe de CEJIS⁷⁰ elevado ante instancias internacionales defensoras de derechos de pueblos indígenas, en tierras bajas existían pueblos en riesgo de extinción por la crisis sanitaria y el abandono estatal, las actividades mineras, petroleras y forestales no pararon –más bien se intensificaron sin control ni respeto a los derechos–, se autorizó el uso maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificada y los pueblos indígenas no fueron incluidos en las medidas económicas de distribución de bonos. En territorios indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía, así como en valles y tierras altas, optaron por el autoaislamiento y control territorial, protocolos propios de prevención y curación.

A decir de Nelly Romero, cacique guaraní de larga trayectoria, “un aspecto que preocupa a los indígenas es que las tierras de hacendados son las más productivas, sus usuarios gozan de apoyo estatal y, por si fuera poco, la normativa de estos años se convirtió en la chispa que prendió el fuego de los incendios que aniquilaron millones de hectáreas de bosques”,⁷¹ en clara alusión a que, con uno u otro gobierno, su situación crítica empeoró. Las múltiples crisis, incluyendo la orgánica, movilizó el inicio del proceso de análisis crítico encabezado por mujeres guaraníes⁷² y por todas las demás

70 “Informe a las Naciones Unidas: Pueblos Indígenas de tierras bajas de Bolivia y Covid-19”, 30 de junio de 2020, CEJIS, disponible en: <https://www.cejis.org/informe-a-las-naciones-unidas-pueblos-indigenas-de-tierras-bajas-de-bolivia-y-covid-19/>

71 Véase “Felipe Quispe y Nelly Romero plantean la refundación de la CSUTCB y CIDOB”, 31 de julio de 2020, Fundación Tierra, disponible en: <http://www.ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/954-felipe-quispe-y-nelly-romero-plantan-la-refundacion-de-la-csutcb-y-cidob>

72 “Mujeres guaraníes apuntan a la unificación y fortalecimiento de la APG”, 28 de noviembre de 2019, IPRDS, disponible en: <https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/6127-mujeres-guaranies-apuntan-a-la-unificacion-y-fortalecimiento-de-la-apg>

regionales de tierras bajas afiliadas a la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). Por su parte, jóvenes indígenas también cuestionaron el rol de las dirigencias, evidenciando la crítica situación urbano-rural.⁷³ Estos debates, según se pudo percibir, estaban articulados con comunidades alejadas, a través de la web, redes sociales, radio.

Cada postergación de la fecha de elecciones (tres veces aplazadas) significó, para la indiada, mayor crisis, preocupación por el desmoronamiento y corrupción estatal, muertes por la crisis sanitaria, crisis económica, incremento de la violencia contra mujeres y wawas, injusticias sociales, avance de la criminalización, salvajización y racialización. La garantía de elecciones democráticas fue una conquista de las luchas y movilizaciones campesinas e indígenas,⁷⁴ aunque fue el MAS quien concretó este acuerdo como principal fuerza política.⁷⁵

73 <https://www.facebook.com/117399752847/videos/602594193720450>

74 Aunque la fecha fue finalmente negociada y aceptada por dirigentes del MAS y del Central Obrera Bolivia (COB), no estuvieron presentes en las reuniones los principales liderazgos como Felipe Quispe, las Bartolinas, la CSUTCB, etc. Esto generó muchas críticas desde las bases campesinas, en relación a la política subalternizadora de una casta blanca que negocia y cierra acuerdos y una indiada que sirve para movilizarse, nada más (véase “Segundina Flores arremete contra la clase media de lidera el MAS”, 13 de agosto de 2020, disponible en: <https://urgente.bo/noticia/segundina-flores-arremete-contra-la-clase-media-que-lidera-el-mas>).

75 Véase Fernando Molina, “El partido de Evo Morales acepta el aplazamiento de las elecciones mientras las protestas continúan en Bolivia”, 14 de agosto de 2020, *El País*, disponible en: <https://elpais.com/internacional/2020-08-14/el-partido-de-evo-morales-acepta-el-aplazamiento-de-las-elecciones-mientras-las-protestas-continuan-en-bolivia.html>

3. Participación de organizaciones y liderazgos indígenas en los procesos electorales 2020 y 2021

Las elecciones generales del 2020 han sido consideradas una de las más importantes en la historia contemporánea boliviana por la crisis múltiple que atravesaban los paradigmas democráticos, mucho más para el mundo indígena, campesino, indio y originario.

Reglas de juego electoral y el sistema político para el sujeto político indígena/indix

Estas elecciones ratificaron el mismo marco normativo aplicado en las elecciones de 2019, para elegir a una o un Presidente y una o un Vicepresidente; además de los titulares y suplentes de 36 senadurías, 60 diputaciones plurinominales, 63 diputaciones uninominales, siete diputaciones indígenas en circunscripciones especiales y nueve representantes supraestatales (uno por cada departamento). Amplios son los análisis realizados por especialistas e instituciones que fundamentan cómo el marco electoral específico (leyes y reglamentos) generó un retroceso en el ejercicio de derechos políticos indígenas colectivos poniendo límites a la posibilidad de representación directa o participación a través de sus propias instituciones. Para la elección 2020, en medio calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral aprobó el Reglamento para la Inscripción y Registro de Candidaturas N.º 043/200, cuyo artículo 6 parágrafo II incluye a las organizaciones de pueblos indígena originario campesinos como habilitadas para postular candidaturas a diputaciones en circunscripción especial y aplicó un Protocolo para el registro de organizaciones de NPIOC y sus postulantes. Esto para pueblos minoritarios.

Las poblaciones mayoritarias, principalmente andinas, presentaron sus candidaturas a través de organizaciones políticas; una gran mayoría apoyó candidaturas uninominales, vía el MAS. De las organizaciones políticas consideradas centro-derechistas, lo más resaltante es el caso de Toribia

Lero, bisnieta del legendario líder andino Juan Lero y lideresa de larga trayectoria, quien postuló con CC a circunscripción uninominal logrando el triunfo. Comunidad Ciudadana también habilitó como primera senadora por el Beni a la indígena mojeña Cecilia Moyoviri. Tanto Toribia como Cecilia presentaron propuestas reafirmando la plurinacionalidad del Estado.

Resultados que involucran al sujeto político indígena/indix

Con el marco normativo ampliatorio para la participación de “minorías indígenas”, se habilitaron seis (6) organizaciones de las NPIOC con cinco (5) candidaturas a circunscripción indígena especial: Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate en Cochabamba, Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en Santa Cruz y Tarija, Organización Indígena Chiquitana (OICH) en Santa Cruz, Organización de Capitanías Weenhayek (ORCAWETA) en Tarija y Organización del Pueblo Yaminawa en Pando. Varias candidaturas que el 2019 se habían presentado con el MAS esta vez candidatearon con su propia organización –como es el caso de la candidata chiquitana–; sin embargo, todas las circunscripciones fueron ganadas por el MAS, como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 1 Lista de asambleístas electxs por circunscripción especial indígena (2021)

Departamento	Candidato electo/a	Titular/Suplente	Sigla política
Pando	Tacni Elvis Mendoza Mendoza	Titular	MAS-IPSP
Pando	Javier Alejandro Machuqui Mamio	Suplente	MAS-IPSP
La Paz	Verónica Chalco Tapia	Titular	MAS-IPSP
La Paz	Johnson Jiménez Cobo	Suplente	MAS-IPSP
Cochabamba	Gildo Leodan Hinojosa Soria	Titular	MAS-IPSP
Cochabamba	Faviola Guaguasu Iguasú	Suplente	MAS-IPSP
Oruro	Honorio Chino Mamani	Titular	MAS-IPSP
Oruro	María Choque Chachaque	Suplente	MAS-IPSP

Continúa en la siguiente página

Departamento	Candidato electo/a	Titular/Suplente	Sigla política
Tarija	Darlen Isabel Velasco Torres	Titular	MAS-IPSP
Tarija	Josué Ayala Sánchez	Suplente	MAS-IPSP
Santa Cruz	Elsa Sánchez Romero	Titular	MAS-IPSP
Santa Cruz	Luis Alfonso Changaray Romero	Suplente	MAS-IPSP
Beni	Enrique Cunai Cuyaba	Titular	MAS-IPSP
Beni	Fátima Achipa Vaca	Suplente	MAS-IPSP

Fuente: Separata oficial, Órgano Electoral Plurinacional, 2020.

Estos resultados son llamativos más aun cuando se los relaciona con la vigencia de la Democracia Comunitaria, pues las candidaturas por organización NPIOC fueron definidas orgánicamente y se suponía que solo debían ser ratificadas en la votación, sin embargo, ganaron las candidaturas por partido político. Según el análisis de Vilma Mendoza, máxima representante de las mujeres indígenas de tierras bajas, esta elección evidencia dos cosas: 1) la crisis interna de las organizaciones indígenas, que no tienen una posición y están divididas; y, 2) el hecho de que las bases siguen esperanzadas en el MAS por considerarlo menos negativo que las otras tiendas políticas, las cuales no hicieron nada por los indígenas. En estas elecciones de circunscripciones especiales también se vislumbró la ausencia del cumplimiento respecto a los acuerdos de rotación en las representaciones, otro factor de debilitamiento de la democracia comunitaria. Al respecto, en una evaluación crítica de las organizaciones de tierras bajas se lamentó que, siendo la primera vez que se puede acceder a la representación política sin intermediación de los partidos, haya ganado todos los escaños indígenas un partido; a su vez Pedro Nuni, expresidente de la CIDOB y exasambleísta, expresó: “Hemos dejado archivar los mandatos del pueblo, estamos borrachos de otra ideología, ajena al movimiento indígena. Estamos haciendo caso a las directrices de otros intereses. Tenemos que sacudirnos de esa sumisión”.⁷⁶

76 Véase “Asambleístas indígenas y el reto de desempolvar su agenda de reivindicaciones”, *Guardiana*, 25 de octubre de 2020,

El llamado general es retomar y avanzar hacia la conquista de la Agenda Indígena, con un acento pronunciado de las mujeres indígenas.

Lo “democrático” en la democracia electoralizada

En el escenario externo a las organizaciones NPIOC, la exsenadora Carmen Eva Gonzales, conocida por sus comentarios antiindígenas y su posición conservadora, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP contra los contenidos de la Ley N.º 421 de Distribución de Escaños entre departamentos, promulgada en la gestión 2013, poniendo en cuestión que el 70% de representación uninominal está en área rural y solo el 30% representa el área urbana, cuestionado el “valor” del voto rural versus el voto urbano. El tema fue asumido por analistas, académicos, cívicos, políticos y el Conade, refutando un sistema electoral que supuestamente favorece al MAS. Se armó un falso debate en torno a este tema que pretendió poner en contra de los “indios” a la ciudadanía urbana. El TSE-OEP emitió un último boletín informativo donde explicitó que los escaños de la ALP responden a principios de igualdad territorial, equidad poblacional departamental, proporcionalidad y plurinacionalidad en el marco constitucional vigente (CEJIS, 2020). En el fondo, la casta política tradicional estaba disputándose la vigencia de una democracia liberal y rechazando la democracia intercultural; incluso rechazando la carta constitucional donde se reconocen derechos políticos individuales y colectivos de NPIOC. Más bien, el TCP resolvió la solicitud.

Durante el proceso electoral previo al día de las elecciones, se visibilizó la verdadera disputa de sentidos democráticos, pues el actor político de las mayorías estaba en las calles, carreteras y puntos de negociación, demostrando su rechazo

disponible en: <https://guardiana.com.bo/iniciativas/asambleistas-indigenas-y-el-reto-de-desempolvar-su-agenda-de-reivindicaciones/>

a un modo de hacer política racializada para con indixs, marginadora de las clases populares y de pocos recursos. Las narrativas políticas se disputaron sentidos en torno a quién es sujeto de derechos políticos y quién no; aparentemente, los portadores de wiphalas eran salvajes, no ciudadanos. Fue este el periodo en que se notaron, al máximo, las miopías de las castas políticas tradicionales, incapaces de leer la realidad boliviana.

Por otra parte, el factor del Covid-19, inesperadamente se convirtió en un ponderador del voto rural, pues a pesar de las muertes por la epidemia el padrón se incrementó en 17.561 electores, según datos del OEP, principalmente en zonas rurales. Esto se explica, en parte, por el fenómeno de retorno de los residentes a sus pueblos. Salomé Coila, exautoridad de Santiago de Ojje comenta que a pesar de las muertes por pandemia de varixs comunarixs mayores (de más de 20 años), la lista de empadronados no decayó pues numerosos residentes retornaron y se inscribieron para votar en el pueblo. Los datos del OEP parecen dar la razón a Salomé, pues el padrón de Santiago de Ojje registró 265 habilitados en 2019, 260 en 2020 y 298 en 2021. Similar situación se replicó en otras tantas comunidades. El virus, además, provocó el reavivamiento de prácticas comunales de cuidado de la vida, lo que favoreció la vida orgánica rural, campesina, indígena, originaria. Este retorno y movilidad también facilitó la incorporación de redes sociales para la comunicación; el uso de grupos de WhatsApp se masificó como mecanismo de información, consulta y organización. A esto se sumó la activa participación de radioemisoras como radio San Gabriel⁷⁷ en la región andina y radio Santa Cruz y sus afiliadas en el Oriente, como mecanismos de información.

Mientras las sociedades no indias y los medios de comunicación grandes se sumían en narrativas de MAS o anti-MAS, regionalismos y reproducción de los estereotipos,

77 Rol reconocido incluso por el mismo OEP.

las sociedades indígenas estaban preocupadas en debatir la agenda política, programas de gobierno, conocer candidaturas, hacerles conocer sus demandas, con la idea de asistir a un proceso electoral que reencauce la vida democrática... Entonces, cabe preguntarse, ¿quién es más democrático? Un ejemplo de esta vocación democrática se observó en Santa Cruz de la Sierra, donde más de 40 organizaciones indígenas y de afrodescendientes, urbanas y rurales, emprendieron una serie de debates y análisis intergeneracionales, con candidatos de todas las organizaciones políticas, utilizando una plataforma de Facebook denominada “Democracia Plural”⁷⁸ y replicando estos espacios a través de medios radiales en Charagua, San Javier, la Chiquitanía, Guarayos, etc. Desde miradas conservadoras, las poblaciones indígenas de tierras bajas son percibidas como minorías étnicas ruralizadas cuando, en realidad, mantienen una movilidad urbano-rural bastante dinámica; según Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), aproximadamente el 67% de la población indígena tiene residencia en centros urbanos.

Como si se tratara de otro mundo, las organizaciones indígenas avanzaban en debates con los candidatos y en el análisis de los programas de gobierno que, por cierto, poco o nada abordaban los temas de interés de la agenda indígena, a excepción del MAS y CC. A simple vista, incluso se observa planteamientos con tonos sancionadores de la existencia de lo indígena en la Constitución o de instructiva a convertir los territorios en centros de producción económica olvidando la libre determinación (CEJIS, 2020; Fundación Tierra, 2020). Otra vez, se constató el lugar subalterno que lo indio ocupa en la apuesta político-partidaria, particularmente los de corte liberal y neoliberal.

La observación “ciudadana” ampliamente impulsada en el país “obviamente” no incluyó lo indígena, sin embargo, organizaciones como la OICH, CICOL, el Gobierno Indígena

78 Véase: <https://www.facebook.com/democraciapluralbolivia>

de Charagua Iyambae y la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz (APISAC) desplegaron un proceso de observación indígena electoral con la participación de 25 jóvenes líderes. Del informe de observación remitida la OEP, resalta lo siguiente: una notaria electoral anuló los votos emitidos para las candidaturas de las organizaciones indígenas; existen brechas informativas que alimentan desigualdades territoriales; poca existencia de información sobre programas de gobierno; un tema crítico fue la inexistencia de papeletas con la opción de las candidaturas de las organizaciones indígenas en mesas de circunscripción especial en la Chiquitanía y en Charagua, denunciado oportunamente ante el TSE-OEP (CEJIS, 2020). Lo llamativo es que no hay avances de esta denuncia.

En tierras altas y valles la acción electoral fue la incontenente movilización de liderazgos por la fecha de elecciones, presionados por sus bases por la crisis sanitaria, económica y política, por el temor al retorno de los periodos neoliberales con el incremento de la canasta familiar, poco acceso a educación y menos a salud. Esto dio paso a la vigilancia activa del movimiento campesino y de los gremios urbanos, para la realización de elecciones tranquilas. Don Macario Cuela nos comenta que la instrucción en la 20 provincias de La Paz fue evitar hacer problemas y reclamos al OEP, a pesar de la ineficiencia de la información relevante para el día de las elecciones que, por la pandemia, tendría variantes en su hermenéutica, se criticó la emisión del mensaje “del abrazo”, para los liderazgos campesinos y vecinales significó un gasto insulso en vez de difundir información útil (Justina Torrez, locutora de Radio San Gabriel).⁷⁹ Así se llevó a cabo el día de las elecciones. En los barrios populares, en las comunidades el temor por las reacciones a los resultados estuvo latente,

79 Conversación sostenida a partir de la experiencia de Radio San Gabriel en la emisión de información educativa electoral en aymara y quechua, rasgo diferente a la información emitida por otros medios de comunicación.

pues como el Mallku predijo, “hasta los enemigos del MAS votarán por el candidato Luis Arce”.⁸⁰

Las dirigencias de base instruyeron a todas las organizaciones barriales y comunales la vigilancia sobre el conteo del voto y la preservación de un clima de calma (con tensión oculta). En observación directa, en Santiago de Ojje, apenas concluyó la votación, casi toda la comunidad se parapetó alrededor de las ánforas a escuchar el recuento de votos, terminando muy tarde en la noche; toda la noche no se durmió *vigiliando* las noticias de las ciudades; en la madrugada una comisión de líderes acompañó, vigilante, el traslado de ánforas a cargo del Tribunal Electoral Departamental. El ambiente era muy tenso, con muchos militares desplegados en el estrecho de Tiquina y alrededores. Aunque las noticias del triunfo de Arce ya llegaban desde la 1 de la madrugada del 19 de octubre, no se manifestaron elocuentes festejos porque la instrucción era esperar la formalización de los resultados, y ante cualquier intención de boicot o desconocimiento o intento de convulsión, las organizaciones reaccionarían en defensa de su voto. De nuevo, la pregunta que resuena es: ¿Quién es más democrático?

Por otra parte, la participación de mujeres indígenas, campesinas y originarias tuvo dos caras y un solo resultado. En el altiplano y en los valles, las candidaturas de la organización Bartolina Sisa fueron fuertemente fustigadas y acusadas de corruptas o vendidas al MAS (CDIMA, 2020),⁸¹ padeciendo un fuerte episodio de *bullying* político. En tierras bajas, en las circunscripciones especiales, las candidaturas titulares que fueron ocupadas por mujeres, tanto vía organización indígena (3 de 7 candidaturas) como vía partido (11 de 21 candidaturas),

80 Véase “El ‘Mallku’ asegura que hasta los enemigos del MAS votarán por el candidato Luis Arce”, 11 de julio de 2020, *La Razón*, disponible en: <https://www.la-razon.com/nacional/2020/07/11/el-mallku-asegura-que-hasta-los-enemigos-del-mas-votaran-por-el-candidato-luis-arce/>

81 Programa Diálogos en Democracia, ver en: <https://cdimabolivia.org.bo/videos/?v=72df28bd206a>

consideraron el criterio de paridad y alternancia. Llama la atención que, vía partido, fueron más mujeres como titulares, probablemente esto tiene cierta correspondencia con la queja que hacían las lideresas de CNAMIB sobre el machismo orgánico, en el evento de evaluación de la participación política indígena. Y de las siete circunscripciones cuatro están bajo la titularidad de una mujer, sin embargo, otros son los retos que atraviesan como el machismo, patriarcado político y las competencias para el desarrollo de sus labores.⁸²

Lo local: campo de disputa de poder y resignificación del sujeto político indix y resultados de las elecciones subnacionales 2021

Con un ambiente democrático, pero no por ello menos tenso, porque continuaron las confrontaciones racializadas y regionalizadas, los liderazgos indios, indígenas, campesinos y originarios reeditaron con mayor énfasis la práctica política desarrollada en anteriores elecciones subnacionales, bajo un sistema de multiorganizaciones políticas en la disputa del poder político electoralizado a nivel local.

Reglas de juego electoral y el sistema político para el sujeto político indígena/indix

La Ley N.º 1353 de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales - Elecciones Subnacionales 2021, de 7 de diciembre de 2020, da continuidad a las reglas para el concurso a las elecciones de autoridades municipales (alcaldxs y concejalxs) y departamentales (gobernadorxs, asambleístas departamentales, subgobernadorxs, corregidorxs) aplicadas para el 2015, con un matiz adicional. Dando continuidad a la ampliación de derechos políticos indígenas y a la práctica de la democracia comunitaria, se

82 Ver en *Revista Tejedoras* 2021, del OEP: <http://www.nu.org.bo/publicaciones/tejedoras-revista-sobre-democracia-paritaria/>

aplicó el Reglamento de registro de organizaciones NPIOC y participación en proceso electoral. Se habilitaron 32 escaños para designación directa, entre asambleístas departamentales (como ya se hacía antes) y concejales (con algunas nuevas incorporaciones).

Según datos del TSE-OEP, se registraron 15 organizaciones de NPIOC que habilitaron candidaturas en una Gobernación (Beni) y 28 municipios de cinco departamentos. La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) inscribió 105 candidaturas (para la Gobernación, Subgobernación, corregidorxs, asambleístas y concejales municipales). En esferas indígenas y no indígenas, la CPEMB recibió críticas por abrirse a candidaturas que no tienen origen étnico mojeño; sin embargo, la estrategia de la CPEMB consistió en valorar la posibilidad de ampliar su presencia política sin depender de una sigla partidaria convencional. La misma crítica recibió el MTS, partido político considerado aymara, que amplió su presencia a Santa Cruz, Pando y Beni con candidaturas que, de alguna manera, tenían vínculos con familias andinas.

En estas elecciones se habilitaron 121 organizaciones políticas (partidos, alianzas, organización NPIOC), dos más que el 2015, con una notable presencia de más organizaciones políticas en aquellos departamentos donde hubo más movilización durante la crisis política: La Paz (34), Santa Cruz (34), Potosí (20), Oruro (19), Cochabamba (17), Chuquisaca (16), Beni (14), Tarija (13) y Pando (9). Entre las organizaciones se observa muchas de corte indio, indígena, originario, campesino, popular (por ejemplo, Jallalla, aunque con discurso indianista por la candidatura de Felipe Quispe, así como ASP, MTS, MOP, APG, CPEMB, etc.). El MAS fue el único partido que presentó candidaturas en todo el país.

Resultados que involucran al sujeto político indígena/indix

Las elecciones subnacionales resultaron otro éxito, con una participación aproximada de 85%, un poco menos que el 2015,

pero con un padrón mucho mayor (en 2015 hubo 6.043.162 personas habilitadas, en 2021 fueron 7.131.075), a pesar de los decesos por Covid-19, particularmente de personas en edad de votar. El incremento del padrón en localidades rurales andinas sigue siendo notable, probablemente por dos elementos: 1) la obligación que tiene todo comunario y residente de aportar con votos que garanticen la redistribución presupuestaria municipal; y 2) el retorno de residentes, especialmente jóvenes, a las comunidades en busca de sostenibilidad de vida ante la múltiple crisis en las ciudades.

Los resultados del proceso electoral, para las mayorías indias, si bien no pueden desmenuzarse en datos electorales territoriales debido a la mezcla de población urbano-rural, cobran tres significados en el análisis (Separata OEP, 2021):

1. El surgimiento de liderazgos dispuestos a disputar el poder local con o sin el MAS:⁸³ La irreverencia india rechazada por el evismo en muchos casos por el famoso “dedazo”,⁸⁴ se postuló a través de organizaciones políticas menores, (caso Eva Copa) o que rechazaron organizaciones sociales y liderazgos importantes, y en otros casos porque definitivamente se trataba de candidatos, como Felipe Quispe, que no iban a postular con el MAS. También es remarcable la escasa o casi nula participación de este tipo de candidatos a través de organizaciones políticas de corte tradicional centro-derechista. La expresión geográfica de los resultados ilustra la aparición de nuevos liderazgos locales: el mapa del país ya no está tan pintado de azul, se

83 Aunque este documento no pretende hacer un análisis del MAS como partido de indios, es innegable la reiterada mención al mismo por su significancia como instrumento político creado por organizaciones IOC.

84 Véase “Lanzan sillas contra Evo Morales en repudio por ‘dedazos’ en el MAS”, 15 de diciembre de 2020, *Deutsche Welle*, disponible en: <https://www.dw.com/es/lanzan-sillas-contra-evo-morales-en-repudio-por-dedazos-en-el-mas/a-55942676>

incluyen nuevos colores, se diversifica el campo de representación política vía organizaciones/alianzas/partidos. Sin embargo, la supremacía del MAS en las Asambleas Legislativas es innegable. En La Paz llama la atención la cantidad de votos blancos (5%), nulos (4%) y el 20% de abstención que, en total, suman un tercio de votos habilitados aproximadamente para elección de gobernador (probablemente, el mensaje detrás de estos resultados es la disconformidad con la candidatura de aymaras a la Gobernación). Esto desmoronaría narrativas como, por ejemplo, que Santos Quispe cosechó votos del antimasismo y devela las diferencias en las apuestas políticas de las sociedades criollas e indias.

2. Persisten o aún dan coletazos las narrativas sobre “un sistema electoral que favorece al MAS” cuando, en los hechos, lo que más bien se devela es la incapacidad de generar propuestas y apuestas que capten la simpatía y el interés por una u otra organización política, de las diversas sociedades con sus realidades, intereses y demandas, pero también con una agenda histórica estructural de incorporación igualitaria del sujeto político indio en la vida democrática activa del país (estructura y toma de decisiones).
3. Institucionalidad pasiva, operativa y no estratégica del Órgano Electoral Plurinacional: Esto, si bien puede ser “adecuado” para mostrar imparcialidad, también resultar inadecuado por la ausencia de espacios de debate, deliberación, interculturalización y pluralización de la dinámica política, del reconocimiento de la diversidad de sujetxs políticxs.

Por otra parte, una participación ampliada a través de organizaciones políticas propias, permitió la elección de los alcaldes de San Andrés de Machaca (sigla CAOSAM), Taraco (sigla CAOTM) y Jesús de Machaca (sigla MACOJMA)

del departamento de La Paz, y al alcalde de Vitiche (sigla CONACH-W) del departamento de Potosí. Asimismo, se eligieron 33 concejales municipales por esta vía (de las siguientes siglas: CZM-APG, CUMI, ML, TCA, SAM, CAOCH, JAY, AAOQ, CPEMB). Cabe señalar que estos municipios ya practicaban la “elección comunitaria orgánica” y la formalizaban vía alguna organización política; ahora, sin embargo, lo hacen libremente vía su propia organización, sin intermediación, lo cual abre la posibilidad de mejores niveles de participación, cogestión y control social.

Para la democracia, se constata que la elección/designación de autoridades subnacionales está dispuesta por un sistema de organizaciones políticas (no partidos) regionalizado y diverso, como diversas son las sociedades del país. Se constata la persistencia de un sistema de representación cada vez más diverso, más plural en sistemas políticos, por su particularización en cada región. Por ejemplo, elegir autoridades municipales o departamentales en La Paz, no es igual que en Oruro o Beni o Tarija, y tampoco será igual que el 2015 porque se están creando aún espacios de representación directa vía Cartas Orgánicas. Las prácticas y problemas, en todo caso, generaron un repertorio de lecciones aprendidas que bien podrían alimentar una propuesta contemporánea de sistema de organizaciones políticas democráticas.

Los resultados para las minorías indias, en el marco de un sistema electoral “especial” para la designación directa de asambleístas y concejales indígenas, presentaron los siguientes resultados:

1. No hay retroceso en lo avanzado con la democracia comunitaria, la disputa de espacios avanza lento, soslayando todos los periplos/obstáculos de la democracia liberal. En la gestión 2021 se eligieron directamente 25 asambleístas departamentales,⁸⁵

85 De acuerdo al siguiente detalle: guaraní (2), afroboliviano (1), mosetén (1), leco (1), kallawayá (1), tacana-araona (1), yuqui (1),

tres (3) asambleístas regionales en Tarija por los pueblos guaraní, weenhayek y tapiete, y cuatro (4) concejales municipales (uno en cada uno de los siguientes municipios: San Lucas, Cajuata, El Puente y Yapacaní), todos ellos electos mediante sistemas, normas y procedimientos propios. Hay varias otras organizaciones, como los Yampara o los Soras, que están gestionando la habilitación de distritos indígenas, lo cual, según Ley 031, requiere de la creación a través de los Concejos Municipales.

Si bien hay avances, también hay injusticias, por ejemplo, en Potosí no se cuenta con asambleístas indígenas porque el departamento fue reconocido como mayoritariamente quechua, dejando fuera a poblaciones minoritarias que no son naciones quechuas (este es el idioma). En similar situación están yamparas, guaraníes y Qara Qara, que no cuentan con representación en el Gobierno Departamental de Chuquisaca (CEJIS, 2021).

2. En el imaginario de las sociedades no indígenas, profesionales, investigadorxs y analistas aún se nombra como “usos y costumbres” a los sistemas políticos propios. Este dato no es menor, en la medida en que lleva una carga de subalternización de unas “prácticas políticas menores” a la práctica política oficial, legal, mayor.

yuracaré (1), uru chipaya-uru murato (1), guaraní (1), weenhayek y tapiete (1), chiquitano (1), guarayo (1), ayoreo (1), yuracaré-moxeño (1), 2 por los pueblos tacana, pacahuara, itonama, joaquiniano, maropa, guarasuwe, mojeño, sirionó, baure, tsi-mané, movima, cayubaba, more, cavineño, chacobo, canichana, mosetén y yuracaré; 2 por campesinos del Beni; 3 por los pueblos yaminagua, pacahuara, esse ejja, machineri, tacana; 3 asambleístas regionales en Tarija por los pueblos guaraní, weenhayek y tapiete.

3. La democracia comunitaria avanza, pero tiene complicaciones con la institucionalidad resguardada por los procesos democráticos. Es el caso de la designación del asambleísta guaraní Ramiro Valle,⁸⁶ quien está cuestionado en su legitimidad representativa. Según Vilma Mendoza, las lideresas guaraníes observaron el incumplimiento de los procedimientos propios de selección de candidaturas, pues Valle se presentó como candidato de una capitanía a la que, al parecer, no pertenece. Esta situación también devela la división orgánica, pues una facción sí avala a Valle. De todos modos, la observación de Mendoza es que la comisión revisora debió hacer notar este detalle y el TED debió observar el procedimiento, esto denota desinterés por fortalecer los sistemas propios, al parecer se adoptan las mañas de la democracia liberal.
4. En esta línea, cabe mencionar también el “extraño” caso de San Ignacio de Moxos y Cavinás, que representa el retorno del gamonalismo político. San Ignacio de Moxos es un municipio densamente indígena, con tres distritos indígenas, compuesto por los territorios indígenas del TIPNIS, el TIM y el TIMI. Es el lugar de representación de la CPEMB y que en los últimos años estuvo gobernado por mojeños; el lugar donde el MAS sacó mayor cantidad de votación en el Beni cuando el gamonalismo político dominaba. Pues bien, en las últimas elecciones el alcalde elegido es un *karayana* (un no indio), Juan Carlos Abularach Suárez, quien el 2015 postuló por Unidad Democrática y no ganó, y ahora postuló por la Agrupación TODOS. Entre

86 Véase “Guaraníes desconocen a Ramiro Valle como Asambleísta y piden al TSE revocar credencial, alistan medidas”, 26 de abril de 2021, BN Noticias, disponible en: <https://bnnoticiastv.com/guaranies-desconocen-a-ramiro-valle-como-asambleista-y-piden-al-tse-revocar-credencial-alistan-medidas/>

sus primeras acciones, denunciadas por lideresas mojeñas del TIM, quiso desconocer a los subalcaldes indígenas basándose en leyes anteriores la Constitución y alegando una reducción presupuestaria. No obstante, el Concejo Municipal de San Ignacio de Moxos no está bajo dominio de TODOS sino del MAS y la CPEMB. La elección de subalcaldes por normas y procedimientos propios se da desde mucho antes de la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Similar situación se presentó con el pueblo cavineño y la nueva alcaldesa de Reyes.

En medio de este proceso, las cinco Autonomías Indígena Originario Campesinos (AIOC) vigentes pasaron desapercibidas/invisibles. Incluso algunos pensaban que seguían siendo alcaldías municipales y así las nombraban.

4. Participación de organizaciones y liderazgos indixs/indígenas en los procesos electorales 2020 y 2021

- Ambos procesos electorales, principalmente el primero, desnudaron los incipientes avances en la construcción de sociedades interculturales y plurales, pues el racismo y los discursos de odio primaron y generaron una herida en el alma de las sociedades, víctimas de racismo y masacre. Este es un sentimiento que no se quita con un abrazo de reconciliación, sino que amerita un trabajo serio de desmontaje de las relaciones coloniales de subordinación política del sujeto indio, indígena, campesino, originario. Hace falta un proceso de desagravio.
- Para las sociedades andinas principalmente, el resultado de las elecciones 2020 fue el retorno de un campo democrático donde es posible entablar disputas de espacios de representación y poder político; aspecto fundamental para el avance en las demandas

históricas de reposición de un Estado inclusivo, donde es posible gobernarse, gestionar modelos políticos propios, descolonizar y desracializar las relaciones de poder en todos los ámbitos. Para las sociedades de tierras bajas, con procesos reflexivos intensos, con sus diferencias de propuestas entre las bases y los liderazgos supraterritoriales, el retorno a un modelo de gestión de la cosa política mantiene posibilidades de exigir a los gobiernos el cumplimiento de los mandatos constitucionales, así como el ejercicio de derechos políticos colectivos e individuales. El balance entre lo avanzado, lo pendiente y la posible agenda política está sobre la mesa. Esto explica, en gran medida, la votación amplia por el MAS, como única opción “no odiadora de indixs” y defensora del Estado Plurinacional, por lo menos en el discurso.

- Con las elecciones subnacionales 2021, las sociedades indias, indígenas, campesinas, originarias obtuvieron varios resultados estratégicos para la renovación y reconstitución de su movimiento:
 - o La profundización de las crisis orgánicas y la evaluación de lo logrado con sus alianzas político partidarias.
 - o La recomposición de una agenda, aunque en facciones divididas, con matices según región. Es evidente que la crisis dio paso a la revisión de sus demandas, intereses y perspectivas políticas.
 - o Revitalización de liderazgos locales para puestos políticos estatales; la funcionalización de organizaciones políticas propias, agrupaciones ciudadanas, partidos políticos con algún origen.
 - o La irreverencia política, particularmente de mujeres que se plantearon sus posturas y acciones a sus organizaciones en medio de la crisis, sin renunciar a la crítica como parte de la deliberación

política. Es el caso de Eva Copa y Segundina Flores quienes, aunque sufrieron recriminaciones, fueron actores clave, por sus voces y por su accionar, para el retorno de la democracia.

- En ambos procesos se observa la incorporación de grupos de jóvenes tanto en tierras altas como en tierras bajas, urbano-rurales, con planteamientos críticos sobre las dirigencias, de renovación del carácter de las organizaciones hacia modelos orgánicos más contemporáneos y que se visualicen como urbanas y rurales. Generaciones ideologizadas y que se mueven en el plano de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), con abundancia de actividades de formación, debate y deliberación. En tierras altas, para los colectivos indianistas, kataristas y ayllistas que heredaron el mandato de Felipe Quispe es innegable la esperanza política que significa Eva Copa.
- ¿Se ha producido una recomposición del campo político y mutaciones en la representación política o, más bien, se trata de la apertura de un ciclo de recomposición del campo democrático de las organizaciones políticas indias, indígenas, originarias, campesinas y populares? En todo caso, hay que reconocer una clara demostración del movimiento indio, indígena, campesino, originario y popular de que no está dispuesto a renunciar a la matriz constitucional de la Democracia Intercultural, cuyos principios de soberanía popular, plurinacionalidad, interculturalidad, complementariedad, igualdad, participación y control social, representación, equivalencia, pluralismo político, pluralismo político, mayoría y proporcionalidad, preclusión, publicidad y transparencia, aunque no se materialicen marcan una ruta de andamiaje político vital para desmontar las colonialidades del poder. Es evidente que existe una

memoria de capacidades de articulación orgánica para la resistencia y la lucha por la reconstitución plena. No se puede hablar, por otra parte, de mutaciones de representación política porque, básicamente, se ratificó un modelo democrático y de representación con el uso de mecanismos particulares para las minorías indígenas al habilitar a sus organizaciones para participar en candidaturas sin partido. Sin embargo, las mayorías siguen disputando espacios de poder político en todos los niveles, incluso con retrocesos en algunas localidades. Por ello, más bien se puede hablar de diversificación, *ipso factum*, porque así lo invoca la Democracia Intercultural.

Incluso, las denuncias y observación electoral provenientes de organizaciones indígenas siguen el tratamiento “diferenciado” del OEP –sin “muchas atención”–, lo cual puede dejar entender que conciben el rol indígena como minoritario. Claro que también lo es, pues los escaños especiales apenas significan un 4% de representación total en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

- En el escenario de construcción de una participación y liderazgo real indígena y de una democracia intercultural, el papel institucional del TSE-OEP es mínimo, se remite a mejorar los mecanismos de participación de minorías y no a la verdadera transformación de la cultura político-democrática con el ejercicio de principios y valores propugnados constitucionalmente como la plurinacionalidad, la interculturalidad, la equidad, la igualdad, etc.
- Para las mujeres indígenas, el contexto no cambió mucho, aún enfrentan un sistema patriarcal y machista en la participación política, así como subordinado e invisible ante los ojos de los actores del sistema político y la institucionalidad electoral.

5. El sujeto IOC y el campo político en disputa: historia larga y con agravios

En relación al sistema de representación política, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cuál fue la relación de las naciones y pueblos IOC con el sistema de representación política en Bolivia en el marco del ciclo electoral 2018-2021? ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene en esta relación? ¿Con qué vínculos específicos respecto al MAS-IPSP y las oposiciones?

El sistema de representación política boliviana, si bien planta sus bases en principios del Estado Plurinacional, sus mecanismos y dimensiones operativas privilegian la implementación de una democracia moderna, donde la subalternización de sujetos políticos se nutre, además, de la racialidad de las relaciones. Entonces de qué representación podemos hablar si en la larga y corta memoria histórica suman y suman los agravios contra el “otro”, a quien se califica de salvaje e inferior en relación al ciudadano. De qué posibilidades de representación política podemos hablar cuando las mentalidades de los actores políticos tradicionales tienen dificultades para comprender que la wiphala, el indio, la mujer de pollera, la alteñidad, lo kolla, entre otros, no se agotan en una organización política como el MAS, pues esta es solo el “instrumento político” para la disputa del poder con paradigmas reales de inclusión, debate, deliberación y ampliación de las cualidades democráticas. Es probable que el Estado Plurinacional, en todo caso, requiera de un diseño más agresivo de mecanismos democráticos, en clave plural, que acojan a los existentes sin subalternizarlos ni reducirlos a un gueto.

La complejidad del campo político boliviano y las dinámicas de los dos últimos años desnudaron un campo de disputa que supera la simpleza del análisis sumido entre el oficialismo y las oposiciones: MAS o anti MAS. Lo que se disputa es el establecimiento de un campo democrático donde los actores indios gocen de las mismas condiciones que los actores no indios, donde la subalternización de las

relaciones sociales sean cosa del pasado, donde la racialidad política sea erradicada y permita el desarrollo de acciones colectivas para salir adelante, sin desigualdades. Está en juego la posibilidad real de conquistar el poder político para materializar el desarrollo económico y social en igualdad de condiciones.

El año 2019, bajo este sistema de participación y representación política, se constituyó en un punto de inflexión que develó el abigarramiento de las sociedades, en términos de Zavaleta, pero con organizaciones devaluadas, liderazgos nacionales y regionales absorbidos por las tentaciones del poder político estatal y disputas de representación, con serios cuestionamientos sobre sus conexiones con las bases. Se trató de una participación devaluada por relaciones racializadas, subordinación de mecanismos de debate y deliberación, ausencia de control social y fiscalización. Con una sociedad polarizada, preocupada en sus espacios e intereses, incapaz de (re)conocer al otro, sus intereses y necesidades, ¿de qué participación efectiva podemos hablar? Cuando, además, los mecanismos y prácticas estaban inundadas de informalidad enraizada, tipo clientelar y poco democrática. El 2019 también se observó que el sistema de representación, vía democracia comunitaria, estaba agonizando, pues los espacios de las circunscripciones especiales fueron partidizados.

El 2020, la participación política india, indígena, campesina, originaria y popular, en general, apostó por el retorno del MAS al Gobierno nacional. También se acentuaron las vías de representación particularizadas para minorías étnicas principalmente de tierras bajas, mientras las mayorías andinas estaban disputándose el poder político en los espacios comunes de la democracia representativa. El 2021, en un escenario democrático, lxs indixs, campesinxs, originarixs y populares ya no estaban dispuestos a cerrar filas con el MAS, por lo que, más bien, buscaron interpelar y retornar a las prácticas orgánicas de selección de candidatxs

con legitimidad, recurriendo a un abanico amplio de organizaciones políticas por donde canalizar sus candidaturas. En varios casos, las representaciones con respaldo de grupos sociales aplicaron la estrategia funcional del uso de sigla política, quitándole la supremacía al MAS, diversificando el campo de organizaciones políticas menores, locales y de corte popular centro-izquierdista. Así, se pudo advertir la irrupción a mayor escala de Jallalla, MTS, PANBOL, ASP y la CPEMB, organizaciones que anteriormente ya se habían presentado a elecciones, pero con un alcance menor al de ahora. En cualquier caso, no se puede hablar de límites del sistema de participación política, sino, más bien, de la primacía de la democracia representativa, que también acaba siendo funcionalizada por las sociedades indias, sobre la democracia comunitaria.

El sistema permitió la diversificación de las organizaciones políticas que facilitaron la presencia de representantes que no tienen una línea radical ni de derecha ni de izquierda. Esta puede ser una oportunidad para el país de reconfigurar el mapa y quebrar la dualidad “media luna”-MAS/Occidente. Para esto, el partido de Gobierno tendría que generar verdaderas alianzas de gobernabilidad y garantizar la gobernanza de las autoridades subnacionales, con una agenda plena que busque el bien común, que atienda a indios y no indios, que iguale las relaciones y que verdaderamente impulse la interculturalización, es decir, la eliminación de los rasgos raciales de las relaciones, empezando por la igualación del acceso a servicios, sancionando actos de discriminación, generando contenido educativo plural y de calidad para todos los ámbitos y niveles, sin discriminación a y entre indixs.

Hasta ahora, el Estado Plurinacional tiene un marco normativo que plantea sistemas para mejor y mayor participación y representación, sin embargo, los avances son escasos debido a los clivajes y a la colonialidad. Se abren puertas, pero los caminos aún están del otro lado,

de lo monocultural o, en todo caso, la neblina no deja ver nuevas opciones. Tal vez sería prudente pensar en un Estado minimalista, como plantea Fernando Mayorga, pero plural y abierto a la diversidad. Esto implica una reforma o reestructuración del Órgano Electoral para que pase a ser un Órgano de las Democracias, trascendiendo la atención prioritaria a procesos con voto y elecciones. Aunque se reconoce la vigencia de derechos colectivos e individuales, los primeros son casi invisibles, incluso para las autoridades electorales. El OEP y el marco normativo vigente mandan a las organizaciones políticas actuar en el marco de la democracia intercultural internamente, pero nadie le da importancia a la democracia dentro de sus propios actores⁸⁷ y se profundiza el rol de los partidos como actores de la democracia liberal, mas no de la democracia comunitaria, participativa e intercultural. Hasta ahora el MAS y, con algunos matices, el MTS, son las organizaciones políticas que establecen en sus estatutos las candidaturas a partir de nominaciones orgánicas o asamblearias, mecanismos que, de alguna manera, garantizan participación diversa.

El 2021 también mostró lo diverso de la democracia comunitaria y su poder diagonal, a través del pragmatismo aymara intercultural. Es el caso del MTS, cuando este se abre pragmáticamente a las candidaturas en tierras bajas, o el de Eva Copa quien, como figura política, logró articular un aparato organizativo que usó de “carcaza política” a Jallalla, pero que se nutrió de la vigorosa forma organizativa alteña y de las orientaciones ideológicas indianistas de Felipe Quispe, así como de la conformación de bloques juveniles barriales y temáticos, con un equipo conformado por varios grupos de profesionales muy competentes para trabajar su propuesta política (diálogo con Wilmer Machaca). Una vez en el cargo,

87 Sistema de organizaciones políticas, institucionalidad que vela por el voto y democracia, medios de comunicación, movilización ciudadana en control social, protección del voto, debate y deliberación, etc.

cuando Copa eligió a los subalcaldes, algunas juntas vecinales rechazaron las designaciones bajo el argumento de que no fueron consensuadas con sus organizaciones.

Entonces, hablar del lugar que ocupa el sujeto indio, indígena, campesino, originario y popular en el campo nacional-popular probablemente suena apresurado si antes no se consideran las siguientes acciones:

- Consolidar una base ideológica compartida por sus liderazgos y actores relevantes.
- Resolver la relación subalternizada y racial de los sujetos con derechos políticos. En este sentido, está claro el mensaje que dio Felipe Quispe Huanca cuando dijo que no se sentía boliviano porque pertenece al Qollasuyo Marka, porque, simplemente, el Estado boliviano no lo representa, no lo acoge, no lo respalda.
- (Re)conocer la existencia de varias naciones y sociedades con visiones de vida, sistemas políticos y apuestas estructurales plurales que bien pueden ser consideradas y adaptadas por cualquier otra sociedad.
- Resolver la existencia ya no de dos sino de tres Bolivias que parecen tener rumbos diferentes sin articulación: 1) de lxs no indixs; 2) de las minorías étnicas; 3) de las mayorías de indixs y populares. Estamos frente a la constatación de la reinvencción de las formas de subordinación india, ya sea por la vía del indigenismo, con un tratamiento particularizado de su participación política y reducido a un gueto territorial o a ciertas instancias más locales (no por ello de menor importancia); y, por otro lado, frente a la cosificación racial política sobre las mayorías indixs y populares. Se trata, a todas luces, de la colonialidad del poder vigente y viva. En este escenario, queda mucho trecho por recorrer para posibilitar un sentido nacionalista que permita compartir valores culturales, económicos

y políticos, relaciones de producción, en términos de Zavaleta.

Lo ocurrido entre 2019 y 2021 en el campo de la disputa de nociones políticas, permitió sentar las bases para el reconocimiento de la proyección de ciertos liderazgos indixs, la recomposición de una agenda política, el reconocimiento los recursos de poder que tiene el movimiento y las narrativas que se plantean. En ese proceso de reconquista, el 2020 y el 2021 fueron útiles para la *re-indianización del proceso de cambio*, bajo el liderazgo de Felipe Quispe Huanca, el Mallku, de jóvenes líderes y lideresas guaraníes, monkox, guarayos, mojeños, aymaras, quechuas, urbanos y rurales. Se abrió la caja de la reconducción de la agenda política en sus bases fundamentales e históricas, además de nuevos desafíos.

Durante este periodo crítico también se pudieron constatar los siguientes extremos: la existencia de recursos de poder del movimiento indix y popular, con capacidades acumuladas en la memoria de organización y actuación política comunitaria; la vigencia de un sistema de reciprocidad y de un sujeto político con acumulación de capital social y político mayor al del 2003 y 2010; la capacidad de resistencia al embate de la crisis económica y sanitaria con sistemas paraestatales de salud, provisión de alimentos, circulación de economías; el pragmatismo de sociedades como la alteña o moxeña que antepone sus concepciones y aspiraciones así como sus deseos de no retornar a situaciones de sometimiento.

Finalmente, un aspecto clave para apuntar es que probablemente estamos frente a un momento de reconfiguración del poder de los movimientos sociales, donde ya no hay supremacía por parte de la CSUTCB, el CONAMAQ y la CIDOB (de hecho, estos dos últimos están desmarcados de un discurso y un movimiento únicos por motivos conocidos públicamente). El movimiento social es ahora un conjunto más amalgamado, sin tantas jerarquías y con una nueva organicidad urbano-rural.

6. Se avizoran retos u oportunidades para la configuración plural política

En el escenario próximo, se avizoran retos urgentes para la consolidación del retorno de la democracia como base para la construcción de sistemas interculturales, a partir de los siguientes elementos:

1. Desestructuración de los sentidos coloniales subjetivos y objetivos para, consecuentemente, trabajar en la desracialización de las relaciones, ya sea por vía educativa o por la vía de la sanción.
2. La posibilidad de pluralizar los sistemas político-democráticos en igualdad de condiciones, en equivalencia, en un escenario postelectoral que permita construir bases de una cultural política plurinacional, transparente, justa, igualitaria y con equidad. Esto implica el trabajo con organizaciones de base para el control social, la participación activa en la gestión política y la cosa pública.
3. Desmontar discursos de odio emanados por actores políticos, objetivo para el que la institucionalidad democrática (OEP incluido) debe asumir rol protagónico.
4. Impulsar la democratización de la democracia de las organizaciones políticas partidarias y civiles.
5. Rediseñar la institucionalidad democrática con un sentido intercultural y no solo electoralista.
6. Desarrollar agendas de gestión política plurales entre el Gobierno central y los Gobiernos subnacionales, que quiebren la dicotomización de las narrativas políticas de Oriente-Occidente.

Bibliografía

- Ardaya, Rubén (1996). “Elecciones Municipales y la Participación Popular”. En: *Revista Análisis y Opinión*. La Paz: Fundemos.
- Bautista, Rafael (2014). *La descolonización de la política: introducción a una política comunitaria*. Cochabamba: AGRUCO.
- Bayón, Manuel y Nataly Torres (2019). “Geografía crítica para detener el despojo de los Territorios”. Quito: Colectivo Geografía Crítica Ecuador y Abya Yala.
- Camacho, Natalia (2002). *El movimiento campesino boliviano: entre la resistencia y la adaptación*. Buenos Aires: CLACSO.
- Castro-Klarén, Sara (1990). “Discurso y transformación de los dioses en los Andes. Del Taki Onkoy a ‘Rasu Ñiti’”. En: Millones, Luis, *El retorno de las huacas*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Sociedad Peruana de Psicoanálisis.
- Chávez, Omar *et al.* (2007). *La autonomía electoral: historia política e institucional del sistema electoral boliviano (1825-2006)*, La Paz: Konrad Adenauer Stiftung.
- Choque, Roberto (2016). “República de indios y república de blancos”. En: *Diálogo Andino. Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina*, núm. 49, Arica: Universidad de Tarapacá Arica.
- CEJIS (2020). “Separata Artículo Primero. Elecciones Generales 2020. Participación política de los pueblos indígenas en tierras bajas de Bolivia”. Santa Cruz: CEJIS.
- Condarco, Ramiro y John Murra (1987). *La teoría de la complementariedad vertical eco-simbiótica*. La Paz: Hisbol.
- Coronel, Minerva (2018). *1978: El indio a la hora del indianismo*. La Paz: UMSA (inédito).

- Cortez, Jorge (2011). “Una historia de marchas y esperanzas”. En: *Nueva Crónica y Buen Gobierno*, núm. 23. La Paz: Plural.
- Exeni, José Luis y Jan Souverein (2021). *Nuevo mapa de actores en Bolivia*. La Paz: FES.
- Garcés, Fernando (2010). *El Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una propuesta de Constitución Política del Estado*. La Paz: UNITAS.
- Guiteras, Ana (2010). “Estrategias indígenas ante la constitución de una sociedad de frontera en la Bolivia republicana. Los trinitarios y la construcción de un espacio de libertad en el Beni, 1880-1930”. En: *Revista Complutense de Historia de América*. Madrid.
- Huanca, Elizabeth (2017). “Los pueblos indígena originario campesinos y las organizaciones políticas en Bolivia. Miradas desde tierras altas y tierras bajas”. En: *Revista Andamios*, N.º 4, julio. La Paz: Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia.
- Hylton, Forrest y Sinclair Thomson (2011). “Ya es otro tiempo el presente”. En: *Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia indígena*. Bolivia: Muela del Diablo.
- Irurozqui, Marta (2000). *A bala, piedra y palo: La construcción de la ciudadanía política en Bolivia (1826-1952)*. Sevilla: Diputación de Sevilla.
- Macusaya, Carlos (2014). *Desde el sujeto racializado. Consideraciones sobre el pensamiento indianista de Fausto Reinaga*. La Paz: MINKA.
- Mamani, Pablo (2010). “Microgobiernos barriales”. La Paz: La mirada salvaje, Willka.
- Orellana, Lorgio (2020). *La caída de Evo Morales, la reacción mestiza y el ascenso de la gente bien al poder*. Cochabamba: UMSS y ASDI.

Órgano Electoral Plurinacional (2017). *Atlas Electoral de Bolivia*. Tomos I, II, III y IV. La Paz: OEP.

————— (2021). *Separata de Resultados de Elecciones Subnacionales*. La Paz: OEP.

Platt, Tristan (1987). “Entre *ch’awxa* y *muxsa*. Para una historia del pensamiento político aymara”. En: Thérèse Bouysse Cassagne *et al.* (eds.) *Tres reflexiones sobre el pensamiento andino*. La Paz: Hisbol.

————— (2018). *Defendiendo el techo fiscal. Curacas, ayllus y sindicatos en el Gran Ayllu de Macha, Norte de Potosí, Bolivia, 1930-1994*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Poweska, Radoslaw (2013). *Indigenous Movements and Building the Plurinational State in Bolivia Organisation and Identity in the Trajectory of the CSUTCB and CONAMAQ*. Varsovia: CESLA UW.

Quispe, Felipe (1990). *Tupak Katari vive y vuelve... carajo*. La Paz: Ofensiva Roja.

————— (1999). *El indio en escena*. La Paz: Pachakuti.

Ticona, Esteban; Gonzalo Rojas y Xavier Albó (1995). *Votos y Wiphalas: Campesinos y pueblos originarios en democracia*. La Paz: Fundación Milenio y CIPCA.

Ticona, Esteban (2003). *Pueblos indígenas y Estado boliviano. La larga historia de conflictos*. En: https://www.ugr.es/~pwlac/G19_10Esteban_Ticona_Alejo.html

Normativa

Autonomía Guaraní Charagua Iyambae (2014). *Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae*. La Paz: Fundación Rosa Luxemburg.

Autonomía Originaria de la Nación Uru Chipaya (2014). *Estatuto de la Autonomía Originaria de la Nación Uru Chipaya*. La Paz: Fundación Rosa Luxemburg.

Autonomía Originaria de Totora Marka (2015). Proyecto de Estatuto Autonómico Originario de Totora Marka. La Paz: TSE.

Central Regional Sindical Única de Campesinos Indígenas de Raqaypampa (CRSUCIR) (2018). Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Raqaypampa. Recuperado de: https://www.raqaypampa.gob.bo/wp-content/uploads/2018/07/cartilla_gaioc_raqaypampa.pdf

Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Constitución Política del Estado. La Paz: Gaceta Oficial.

————— (2010a). Ley 026 del Régimen Electoral. La Paz: Gaceta Oficial.

————— (2010b). Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional. La Paz: Gaceta Oficial.

————— (2010c). Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”. La Paz: Gaceta Oficial.

————— (2018) Ley de Organizaciones Política. La Paz: Gaceta Oficial.

República de Bolivia: Constitución Política de 1880, 28 de octubre de 1880.

República de Bolivia: Ley de 20 de noviembre de 1883.

República de Bolivia: Ley de 27 de octubre de 1890.

República de Bolivia: Ley de 31 de enero de 1924.

República de Bolivia: Estatuto Electoral de 1956.

Webinarios

<https://web.facebook.com/wilma.mendoza.543>

<https://web.facebook.com/democraciapluralbolivia/>

<https://www.oep.org.bo/>

<https://fuentedirecta.oep.org.bo/archivo-informacion-estadistica/>

<https://erbol.com.bo/el-%C3%A1nfora-1/polit%C3%B3logo-se%C3%B1ala-que-ya-no-es-viable-una-nueva-postergaci%C3%B3n-de-elecciones>

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4784/11.pdf>

<https://web.facebook.com/TSEBolivia/videos/313333050188134>

Entrevistas

Salomé Coila, lideresa de Santiago de Ojje.

Wilma Mendoza, lideresa nacional de tierras bajas.

Wilmer Machaca, miembro de equipo de comunicación de campaña de Eva Copa

Felipe Quispe (nombre ficticio a solicitud del entrevistado), coordinador de bloque de la campaña de Eva Copa.

María Condori (nombre ficticio a solicitud de la entrevistada), coordinadora de bloque de la campaña de Santos Quispe.

Ernesto Sánchez, exdirigente de CPEMB y CIDOB.

Video

REPEM (2020) Nicolasa Nosa-Mujer indígena y Mártir boliviana. En:

<https://www.youtube.com/watch?v=l99iBHcnCIA>

Sobre las y los autores

Armando Ortuño Yáñez

Economista e investigador social. Fue parte del equipo del Informe de Desarrollo Humano de Bolivia del PNUD (1999-2003) y asesor de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (2007-2013). Ha sido consultor y asesor en políticas públicas y análisis político prospectivo de Naciones Unidas, PNUD, Unicef, el Banco Mundial, Oxfam Internacional y varios otros organismos internacionales en distintos países de América Latina. Ha cumplido funciones públicas como viceministro de Planificación y embajador ante la Unión Europea entre 2003 y 2006.

Fernando Mayorga

Sociólogo y doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales y director del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Coordinador del Grupo de Trabajo “Ciudadanía, organizaciones populares y representación política” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Sus últimas publicaciones son *Mandato y contingencia. El estilo de gobierno de Evo Morales* (Fundación Friedrich Ebert, 2019) y *Antología de la ciencia política boliviana* (Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, 2019, ant.).

María Teresa Zegada Claire

Socióloga con Maestría en Ciencia Política (CESU-UMSS), doctora en Procesos Sociales y Políticos en América Latina en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (U-ARCIS), Chile.

Miembro del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). Docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSS, en la Carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB) y en el Programa de Postgrado de la Universidad Privada de Bolivia (UPB). Ha publicado numerosos libros y artículos sobre democracia, movimientos sociales y partidos políticos.

Marcelo Arequipa

Politólogo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Docente investigador de la UCB. Sus investigaciones académicas están relacionadas con cuestiones de teoría, cultura y partidos políticos. Periódicamente realiza análisis de coyuntura en medios de comunicación. Una de sus investigaciones más recientes es *La caja negra de la política: Forma y comportamiento del Legislativo en Bolivia* (CIS, 2017).

Manuel Canelas

Politólogo y periodista con Máster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y Marañón. Fue diputado (MAS) por La Paz entre 2015 y 2018. Ejerció como viceministro de Planificación y Coordinación (2018-2019) y ocupó la cartera del Ministerio de Comunicación en 2019. Actualmente, cursa un doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

Ricardo V. Paz Ballivián

Sociólogo graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado en reformas políticas y planificación estratégica. Fue diputado de Condepa, consultor del PNUD y del BID y coordinador nacional para la Asamblea Constituyente (2003-2005). Dirigió campañas electorales en varios países de la región. Participó, como asesor, en el proceso de Reforma Constitucional del Ecuador. Dirigió la campaña de Comunidad Ciudadana (CC) para las elecciones generales

de 2019 y 2020. Ejerce la docencia en varias universidades. Tiene una importante producción bibliográfica.

Manuel Suárez Ávila

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Consultor electoral y docente universitario en teoría política. Ejerció funciones diplomáticas como consejero de la Embajada de Bolivia en Madrid (1995) y en la representación boliviana en Naciones Unidas (Ginebra). Fue elegido diputado (MNR) por el Beni en 1997. Ejerció como viceministro de Relaciones Exteriores en 2020.

Rodrigo Ayala Bluske

Cineasta y ensayista. Tiene una extensa filmografía y ha publicado varias investigaciones sobre gobernabilidad, política y recursos naturales, así como diversos ensayos sobre la realidad tarijeña, entre los que destacan *La construcción del nuevo paisaje político tarijeño* (2011) y *Tarija: Escenario de tres batallas* (2012). Actualmente es director de Protección del Medio Ambiente Tarija (Tarija).

José De La Fuente Jeria

Estudió derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Fue consultor del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) para la Asamblea Constituyente (2006-2007). Participó del primer equipo proyectista de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Ha publicado artículos sobre el proceso constituyente, el campesinado y la democracia en varias revistas. Actualmente es asesor general del gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez.

Andrés De La Fuente Bernal

Sociólogo y maestrante en Teoría Crítica del Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES-UMSA.

Elizabeth Huanca Coila

Es doctorante en Estudios Culturales Latinoamericanos en la UASB-Sede Ecuador, máster en Gestión y Políticas Públicas. Trabaja e investiga sobre autogobierno indígena, pluriculturalidad, democracia intercultural, derechos de mujeres indígenas, feminismo y análisis político electoral. Actualmente es miembro de redes de mujeres andinas.

Alejandro Salazar Rodríguez

Pintor, dibujante e ilustrador. Ha trabajado haciendo ilustraciones y cartón editorial para varios medios impresos. Se han publicado varios libros con dibujos de su autoría y recibió varios premios por su obra. Actualmente es caricaturista del diario *La Razón*.

Esta edición se terminó de imprimir
en enero de 2022, en los talleres
de Plural editores,
La Paz, Bolivia.

¿Cómo se desarrolló el complejo ciclo electoral 2020-2021 en Bolivia en el marco de la crisis múltiple producida tras los fallidos comicios de 2019? ¿Cuál fue el desempeño y rendimiento de las organizaciones políticas y alianzas? ¿Qué lecturas de geografía y de comportamiento electoral pueden hacerse? ¿Qué ha cambiado en la representación política y en el sistema de partidos? ¿Cómo se analiza este proceso en y desde las regiones? ¿Qué implica para la participación de organizaciones y liderazgos indígena originario campesinos? ¿Cómo se ha reconfigurado, en fin, el campo político? Todas estas cuestiones, en clave de ensayos con análisis y datos, se abordan en este libro como insumos para la conversación pública en democracia.

**FRIEDRICH
EBERT 
STIFTUNG**

